

**Universidad Complutense
Facultad de Ciencias de la Información
Departamento de Periodismo III**

Tesis Doctoral

***LA PRIMERA PRESIDENCIA
COMUNITARIA DE ESPAÑA EN LA PRENSA
(1989)***

Deposito de la
Biblioteca de la
Facultad de Ciencias de la Información

Se recuerda al lector no hacer más
uso de esta obra que el que
permiten las disposiciones Vigentes
sobre los Derechos de Propiedad
Intelectual del autor. La Biblioteca
queda exenta de toda responsabilidad.

**Director: Dr. D. Ángel Benito Jaén. Catedrático
de Teoría General de la Información**

M^a Isabel Morante Grau

Madrid, 1998

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA INFORMACION
REGISTROS DE LIBROS
BIBLIOTECA GENERAL
TD 565

*A mis padres, por su apoyo
incondicional*

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Pág.

CAPÍTULO I	1
-------------------------	----------

El ‘reto europeo’: prioridades de la Presidencia española

Carácter atípico de la Presidencia española.- Una Presidencia “institucional, ambiciosa y profesional”.- Comentarios de la prensa extranjera.- Inauguración oficial de la Presidencia española.- La agenda comunitaria.- Discurso de Fernández Ordóñez en el Parlamento Europeo.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO II	14
--------------------------	-----------

Mercado Interior (I): Europa sin fronteras, Libre circulación de Profesionales y Derecho de Sociedades

2.1 Europa sin fronteras

Consecución del Acta Única.- Abolición física de las fronteras intracomunitarias.- Negociaciones de Schengen.- Grupo de Trevi: terrorismo transfronterizo.- Un paso más hacia la Europa de los Ciudadanos.- El Grupo de Rodas y la apertura de las fronteras comunitarias.- Reunión en Madrid del Grupo de Trevi.- El documento de Palma.- El “espacio judicial” europeo.-

2.2 Derecho de residencia, los Profesionales ante el Mercado Único y el Estatuto de la Sociedad Europea

Derecho de residencia.- Los profesionales ante el Mercado Único Europeo.- Libre circulación de los futbolistas.- El futuro de algunas profesiones liberales.- El Estatuto de la Sociedad Europea.- Sociedad unipersonal y la Agrupación Europea de Interés Económico.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO III 48

Mercado Interior (II): Armonización Fiscal

3.1 Armonización fiscal

La propuesta de Scrivener sobre retención fiscal.- Flexibilidad en la armonización del IVA.- Oposición alemana a la retención fiscal del 15%.- Encuentro en S'Agaró.

3.2 Rebelión fiscal en Canarias

La denuncia de la Comisión Europea.- El viaje de Borrell.- Una nueva alternativa de adhesión a la CE.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO IV 70

El 'espacio social' europeo

Relanzamiento del "espacio social" europeo.- El *Memorándum* de Manuel Marín.- IV Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Socialista.- Críticas de los sindicatos.- Debate sobre la Carta Social Europea.- Consejo Informal en Sevilla (7 de marzo).- La cohesión económica y social de la CE.- Consejo de Ministros de Asuntos Sociales (5 de abril): Salud y seguridad de los trabajadores.- Consejo Informal de Toledo: igualdad de oportunidades para la mujer.- Documento del Comité Permanente de Empleo.- Anteproyecto de la Carta Social de los Derechos Fundamentales.- Primer Informe del CES sobre la economía española.- El bloqueo de Londres a la Carta Social.- Declaración en Madrid sobre el espacio social.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO V 102

Medio Ambiente e Investigación y Desarrollo (I+D)

4.1 Medio Ambiente

El Acta Única y la política mediambiental.- Los programas de acción ambiental de la CE.- Primer Consejo de Medio Ambiente: reducción del CFC.- Negociaciones con la Asociación Española de Aerosoles.- Incertidumbre en la industria automovilística.- La Conferencia de Helsinki.- La Cumbre de Cáceres.- Acuerdo contra el efecto invernadero.- Conclusiones sobre el Medio Ambiente en el Consejo Europeo de Madrid.

4.2 Investigación y Desarrollo (I+D)

La política común en Investigación y Desarrollo.- El Programa Marco Europeo.- Nuevos presupuestos para I+D.- Informe sobre ciencia y tecnología en Europa y revisión del Programa Marco.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO VI 133

Política económica y Sistema Monetario Europeo

Hacia la unión económica y monetaria.- Integración de la peseta en el SME.- Previsiones de la política económica para 1989.- El calendario de Hannover.- Discusión sobre la moneda única.- Consejo Ecofín (13 de marzo) y Décimo Aniversario del SME.- El Informe Delors.- El “boom” económico de España.- Debate sobre el ingreso de la peseta en el SME.- Apoyo de la CE al Plan Brady.- La directiva *Insider Trading*.- La participación de la Banca en la CE y opiniones desde otros sectores.- Repercusión del Informe Delors.- El Proyecto Europartenariat’89 y las Pymes.- Cumbre de La Toja.- Consejo Informal de S’Agaró.- El futuro de la Unión Monetaria Europea.- Noveno Seminario hispano-francés y las Euroventanillas.- Ingreso de la peseta en el SME.- Valoración de la prensa extranjera.- Evaluación de la Cumbre de Madrid.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO VII 183

La política Audiovisual europea

7.1 El impulso de las telecomunicaciones

Liberalización de las telecomunicaciones.- El futuro campo de la política de Telecomunicaciones.- La LOT en el marco comunitario.

7.2 La Televisión de Alta Definición

Europa frente a EE.UU y Japón en TVAD.- Competir por un nuevo modelo de televisión.- Consejo de Telecomunicaciones (27 de abril): se impone el “modelo europeo”.- Promoción del nuevo sistema televisivo.

7.3 Televisión sin Fronteras

La televisión transfronteriza a debate.- Crítica alemana a las cuotas de programación y la reunión de Santiago de Compostela.- Protesta de los profesionales del cine.- Sin acuerdo en las cuotas de programación.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO VIII 208

La política agrícola y pesquera

8.1 Política agrícola de la CE

Política Agraria Comunitaria.- Primer Consejo de Agricultura: austeridad en los precios agrarios.- Debate sobre los precios agrarios (febrero).- La situación

agraria del campo español y las ayudas comunitarias.- El sector hortofrutícola español.- Debate sobre la reconversión agraria.- Consejo de Agricultura (20 de marzo): sin acuerdo sobre los precios agrícolas.- Indemnizaciones para las zonas desfavorecidas.- Luz verde al Acuerdo sobre precios agrarios 1989-90.- Negociaciones de la Ronda de Uruguay.- Industria láctea y la hormona somatotropina.- Movilización agraria en Salamanca.- Inversiones en explotaciones agrarias y medidas contra el fraude.- La peste porcina y el control sanitario.

8.2 Política pesquera comunitaria

Reforma del sector pesquero.- Conflicto en la negociación con la URSS y medidas para la pesca.- La *Merchnat Shipping Act*.- Consejo Informal de La Toja.- Ayudas para modernizar la flota pesquera.- Advertencia de la Comisión al Reino Unido.- Conclusiones del capítulo

CAPÍTULO IX 253

Transportes, Industria y Energía y Fondos Estructurales

9.1 Política de transportes

El sector energético e industrial ante el Mercado Único.- Prioridades de Van Miert.- Los ministros de Transporte en La Manga.- Armonización del transporte por carretera.- Consejo de Ministros de Transporte (5 de junio).- El tren de alta velocidad.- Liberalización del transporte aéreo.- Fusión para Iberia y el transporte aéreo regional.- Crisis en el sector naviero.- Un nuevo registro comunitario.

9.2 Industria y Energía

El sector energético e industrial ante el Mercado Único.- El gasoducto del Magreb.- La industria automovilística.- El programa *Sprint* y la reestructuración de la siderurgia.- Reunión en San Sebastián de los ministros de Industria.- Ayudas para las empresas MTM y ATEINSA.- Transparencia en los precios energéticos.- Plan Energético Nacional y el comercio transfronterizo de la electricidad.- Portugal denuncia irregularidades en el abastecimiento eléctrico.- Otras fuentes energéticas en el panorama comunitario.- Recorte a las subvenciones en la empresa ENASA.- Apoyo a las Pymes en el sector industrial.- Los Euroinfocentros y normativa sobre "Marcas".

9.3 Fondos estructurales comunitarios

Presupuesto de los Fondos Estructurales.- Los fondos FEDER y FSE.- El Plan de Desarrollo Regional de España y el Plan de Reconversión Regional.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO X	313
-------------------------	------------

La política exterior comunitaria

La dimensión exterior de la Comunidad.- Proceso de paz en Oriente Medio.- Consejo de Cooperación Política de la CE en Madrid.- “Guerra de las hormonas”: negociación con EE.UU.- Guerra diplomática entre Irán y la CE.- La Conferencia de San Pedro Sula.- Viaje de Fernández Ordóñez a Washington.- Ronda de Uruguay y las reformas agrícolas.- Convenio de Lomé y el Informe Poseidón.- El “Plan Brady” y la deuda del Tercer Mundo.- La EFTA y la CE: llamamiento a una cooperación reforzada.- Presión internacional contra Ceausescu.- Retorno de los embajadores a Teherán y el “caso” de Andorra.- Arafat es designado Presidente del Estado Palestino.- Declaración sobre Polonia.- Consejo Informal en Granada.- La amenaza comercial de EE.UU.- Garantía del proceso electoral en Panamá.- Acuerdo de Cooperación con la URSS.- La disposición comercial “*Super 301*”.- El Manifiesto de los Conservadores británicos.- La OCDE critica la política comercial de EE.UU.- La Asamblea de las Regiones de Europa.- Represión estudiantil en China.- La Convención de Lomé.- González prepara la Cumbre de Madrid.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO XI	363
--------------------------	------------

Elecciones al Parlamento Europeo (1989)

El Parlamento Europeo.- El voto de los residentes en la CE.- Doce coaliciones electorales.- Precampaña electoral.- El déficit democrático del Parlamento Europeo.- Comienza la Campaña.- Dos “europeísmos”.- Controversias sobre la integración del PP en el Grupo Popular Europeo.- Influencia de los sondeos durante la Campaña.- Papel resolutorio del Parlamento Europeo.- Críticas entre los adversarios políticos.- Una Campaña “aldeana”.- El mensaje de las encuestas.- Suspensión de los debates anunciados en RTVE.- Elecciones al Parlamento Europeo (15 de junio).- Previsiones electorales intracomunitarias.- Resultados electorales.- Financiación electoral.- Conclusiones del capítulo.

CAPÍTULO XII	403
---------------------------	------------

Balance de la primera Presidencia de España en la CE

Una Presidencia “honorable”.- La Europa fiscal y la liberalización del transporte.- Sistema Monetario Europeo y Política Social.- Mediación eficaz en la Política Exterior.- Política Agraria y otros asuntos comunitarios.- Los resultados de la Cumbre de Madrid (26 y 27 de junio).- Valoración de la Presidencia española por la prensa extranjera.- Conclusiones del capítulo

CONCLUSIONES FINALES	419
-----------------------------------	------------

ANEXOS 427

- I.** Balance global de la Presidencia española. Disposiciones, Informes y Debates
- II.** Número total de reuniones celebradas bajo la Presidencia española (1 de enero al 21 de junio, 1989).
- III.** Reuniones ministeriales formales durante la Presidencia española.
- IV.** Comparecencias ante el Parlamento español con motivo de la Presidencia española.
- V.** La nueva Comisión de la Comunidad Europea (1.1.89).
- VI.** Composición del Parlamento Europeo .

FUENTES Y BILIOGRAFÍA 454

Introducción

El análisis y la valoración informativa de la prensa sobre la primera Presidencia comunitaria de España es el objetivo central de esta tesis. El resultado de este pormenorizado estudio revela aspectos muy significativos del programa comunitario diseñado por España. Para dicho cometido he empleado varios años en la recopilación y el seguimiento de todas las informaciones y opiniones vertidas sobre la Presidencia.

Por primera vez España asumía el reto de dirigir la maquinaria europea en un momento de dilatada actividad por parte de la CE. El desafío de llevar a buen término el Acta Única inspiró el contenido de la agenda europea de nuestros políticos. La implantación del Mercado Único (1992) se avecinaba y quedaban por resolver importantes lagunas en el campo de la armonización fiscal, cohesión social y libre circulación de personas, servicios y mercancías. Otras políticas sectoriales resultaban al mismo tiempo controvertidas en el proceso de unidad europea. Por ejemplo, existía un consenso generalizado para dilucidar los problemas derivados de la unión monetaria, el impacto medioambiental y de la política común agraria. En cuanto a la proyección exterior de la Comunidad Europea, aumentó el interés por alcanzar una cooperación más estrecha con el resto del mundo. En esa búsqueda de concordia entre los países, lenta y difícil, las iniciativas políticas se extendieron a niveles extracomunitarios

España iniciaba el semestre con un programa de trabajo que tenía que convencer a sus socios europeos, por lo que la Administración española se preparó a fondo durante dos años para poder demostrar su eficacia. Sin embargo, la presidencia comunitaria llegaba en un difícil momento para el Gobierno socialista. La huelga general del 14-D provocó una grave crisis entre el Gobierno

y los sindicatos, que obligó a Felipe González a concentrar su atención en los problemas internos del país y a delegar algunas de sus funciones en Europa.

Cuando trabajé en la secretaria de Estado para las Comunidades Europeas, afortunadamente, tuve la ocasión de comprobar la gran expectación que el nuevo desafío comunitario suscitaba en la Administración socialista; por ejemplo, las partidas presupuestarias se incrementaron considerablemente con el fin de cubrir los gastos de organización.. En realidad empecé a interesarme por la elaboración de un futuro estudio sobre la reconstrucción de la primera Presidencia comunitaria de España, cuándo comprobé directamente el gran entusiasmo y dinamismo de nuestros funcionarios y el fuerte eco que tuvo en la prensa. Además, dado que no existían publicaciones sobre la Presidencia española bajo el prisma de los diarios, decidí iniciar esta investigación.

El presente análisis no pretende evaluar los logros políticos, ni registrar si se cumplieron o no las expectativas iniciales fuera del contexto de la prensa. Más bien, se orienta a clarificar la visión informativa de los diarios más influyentes en lo que supone la evolución de las distintas políticas debatidas en las instituciones comunitarias y en la sociedad. Era preciso, asimismo, determinar en qué asuntos la prensa adoptaba una actitud más comprometida, incluyendo en ese caso altos índices de opinión o, por el contrario, en qué otros manifestaba escaso interés.

Por otra parte, en Europa en un principio imperaba la duda sobre el cumplimiento de las expectativas fijadas por los políticos españoles, ya que se tenía una imagen de España de país “segundón”. El análisis de la prensa extranjera reflejó a lo largo del semestre el clima de opinión del resto de los Estados miembros.

De una forma genérica, los valores dominantes del discurso periodístico referido a la Presidencia española coinciden en los planteamientos más básicos sin que por ello ignoremos la influencia local de algunas noticias. Al mismo tiempo, y siempre considerando los postulados de la prensa, se muestra el liderazgo de Felipe González y la conducta política de su Gobierno y de la oposición.

En primer lugar, se anuncian los objetivos y las prioridades que la Presidencia tratará de cumplir. Seguidamente se suceden una serie de capítulos sobre el desarrollo del Mercado Interior y otras políticas sectoriales con gran peso en el ámbito comunitario. Luego, el estudio se centra en la descripción y valoración que los diarios hacen de la cooperación política europea y de los resultados de las Elecciones al Parlamento Europeo. Por primera vez, el PSOE acudía a las urnas sin el apoyo de UGT. Además estos Comicios, si bien resultaban ser un test para la gestión del Gobierno socialista, también contribuían a ampliar el poder decisorio del Parlamento en la toma de decisiones. Finalmente, se señalan los resultados de la Cumbre Europea y el balance final de

la presidencia española en aquellos asuntos que, por su importancia, merecieron especial atención.

Por último, quiero expresar mi agradecimiento sincero al director de esta tesis, D. Ángel Benito, por sus comentarios y sugerencias, y al Centro de Documentación de la antigua Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO I:

El 'reto' europeo: prioridades de la Presidencia española

1. Carácter atípico de la Presidencia española

Por encima de las disposiciones que regían en la Comunidad y de las prácticas establecidas, la Presidencia de España tuvo un valor simbólico, casi mitológico, como fruto del cambio profundo experimentado en nuestro estatuto internacional. La Presidencia española participó de un “protagonismo inédito” en el desarrollo de las relaciones europeas.

Asimismo, contribuye a justificar este carácter atípico de la Presidencia española la renovación de los Comisarios europeos y la celebración de las Elecciones al Parlamento Europeo. Los españoles arriesgábamos nuestro prestigio exterior si esta primera Presidencia adquiría tintes personalistas.

En el discurso que, en diciembre de 1988, pronunció Felipe González en Bruselas sobre este acontecimiento, figuró la idea de una Europa con una dimensión más amplia que superaba el concepto de la “Europa de los

Mercaderes”¹. Para Enrique Barón, por entonces vicepresidente del Parlamento Europeo, la Comunidad atravesaba en ese momento su segunda fase creativa, y el papel adoptado por España implicaba la ruptura del bloqueo comunitario.

En su discurso de Bruselas, el Presidente Felipe González habló de los tres pilares que iban a presidir los destinos de Europa: la unión económica y monetaria, la ciudadanía europea y la política económica y de seguridad común.

Pero si González se alineaba en esta ocasión con los que pretendían un mayor avance en Europa, algunos sectores denunciaron cierta falta de coherencia en la actuación del Ejecutivo² que, por un lado, quería impulsar una política social en Bruselas, y por otro, intentaba dar soluciones distintas a los sindicatos españoles.

España parecía estar preparada para responder positivamente a este ‘reto europeo’. Resultaba ser una operación delicada, en la que los españoles arriesgábamos nuestro prestigio exterior y nuestra credibilidad política global. Las mismas encuestas de principios de año traducían la enorme importancia que para el español medio tenía presidir la Comunidad Europea. En un plano más real, Calvo Sotelo opinaba, sin embargo, que la Presidencia comunitaria, con su carácter rotativo, arrojaba sobre el país de turno una pesada carga burocrática, con poco poder real.

En opinión de Enrique Barón, vicepresidente del Parlamento Europeo (*Abc*, 2.1.89): el proceso que España está viviendo se caracteriza por la ruptura del bloqueo comunitario. La Comunidad atravesaba su segunda fase creativa. Barón responsabiliza directamente a la Cumbre de Rodas del inicio de esta etapa de construcción europea.

¹ “España preside la CE”, *Abc*, 2.1.89.

² El presidente de la OCDE, José María Cuevas, exponía estas ideas en un artículo titulado “Presidir con el ejemplo”, del especial que *Abc* publicó el 2 de enero de 1989.

2. Una Presidencia “institucional, ambiciosa y profesional”

El objetivo prioritario para España consistía en avanzar en aquellas tareas pendientes de la unión europea. Quedaban serias discrepancias por resolver ligadas a la construcción política de Europa. Los resultados no iban a ser milagrosos, y la realidad y la profesionalidad formaban parte de los criterios a seguir.

El ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, declaró a los medios de información³ que la libre circulación de personas físicas, la eliminación de las barreras físicas, la unión monetaria, la armonización de impuestos o la dimensión social del mercado eran los asuntos más urgentes de la agenda presidencial española.

Algunos diarios reprodujeron ciertas declaraciones de Ordóñez en el periódico francés *Le Quotidien* en las que definía a la Presidencia española de “institucional, ambiciosa y profesional”⁴. De esta misma entrevista *Cinco Días*⁵ subrayaba dos aspectos importantes para el ministro de Exteriores: la Ronda de Uruguay (por lo que suponía en las relaciones económicas con los EEUU) y el “carácter institucional” de la Presidencia comunitaria, en consonancia con los intereses del Parlamento y la Comisión. En relación con América Latina, declaró a *Diario 16* (2.1.89) que resultaba ser una “paradoja” la desorientación de Europa respecto a Iberoamérica.

El vicepresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón, inmerso en los círculos comunitarios, anunciaba que el trabajo de nuestros representantes optaría por un enfoque de cara al progreso de la Europa social y a la armonización de la política fiscal. En relación con la política exterior, Barón concedió un

³ *Diario 16*, 2.1.89.

⁴ *Ya*, 3.1.89

⁵ *Cinco Días*, 3.1.89

protagonismo más entusiasta a las relaciones con EEUU y a la convocatoria de la Convención de Lomé⁶.

Para el entonces comisario europeo Abel Matutes, la unión monetaria y la armonización fiscal eran los dossiers con más alcance - y justificaba- "por su propia complejidad, por su propia transcendencia política" (...)⁷, porque ambos significaban renunciaciones de parte importante de la soberanía de los Estados miembros.

Por otra parte, en su calidad de comisario para las Relaciones con Latinoamérica, Matutes reconoce - en la revista *Tiempo*⁸- el nuevo enfoque de la política comunitaria en relación con ese área geográfica:

"El hecho de que se hayan incluido las palabras 'Relaciones con Latinoamérica' en el nombre de la cartera que detento yo ahora, es un indicativo porque esa cartera también se ocupa de las relaciones con otras partes del mundo, y no se citan".

Sumado a esto, Fernando Morán, ex-ministro de Asuntos Exteriores, y portavoz de la fracción socialista española en el Parlamento Europeo, opinaba que el éxito de la Presidencia iba a depender de "su contribución al avance en dirección a la integración y cohesión económica y social (...) España llega a la Presidencia en un momento caracterizado por la aproximación al reto de 1992"⁹.

Bajo el prisma del comisario Manuel Marín, los propósitos de abordar los grandes contenidos políticos y sociales no iban a poder conseguirse en la Cumbre de Madrid. Este comisario defendió el desarrollo de dos aspectos esenciales del programa comunitario: la armonización fiscal y el tema monetario.

⁶ *Abc*, 2.1.89

⁷ *Revista Tiempo*, 9 de enero de 1989.

⁸ *Idem*.

Lo cierto es que la Presidencia irrumpió el 1 de enero con la resaca de una huelga general y ante el temor de una negociación colectiva de las más conflictivas de los últimos años. Ya antes del verano, los comunistas amenazaron con aprovechar la Presidencia para “amargarle el juguete a Felipe González”¹⁰. La estrategia, calificada por miembros del Gobierno de “bastarda y como un búmeran para quien la practicase”, reprochaba al Gobierno de González su aislamiento en el terreno social a nivel nacional. Sin embargo, en el editorial de *Diario 16* (“Feliz año europeo”) se constataba que González estaba más pendiente de los sindicatos que de Bruselas. Pero también reconocía este editorial que la huelga del 14-D “deslucía” la inauguración (*Diario 16*, 2.1.89).

Sobre Felipe González, el periodista Carlos Dávila escribía¹¹ que “había accedido a tan trascendente cargo comunitario en el peor momento de su periplo como mandatario español”, y añade que para los socialistas resultaba más positivo “incidir en la general Presidencia española” y no en la “Presidencia de Felipe” (*Diario 16*, 2.1.89).

3. Comentarios de la prensa extranjera

El enfoque institucional anunciado por España agradó a Bruselas. Portugal, por su parte, esperaba que en la Presidencia del país vecino se afianzara la integración de los países mediterráneos. Al otro lado de los Pirineos, los franceses hablaban de “copresidencia hispano-francesa”; Francia y España compartían el mismo punto de mira en el desarrollo de los grandes programas del año. Por el contrario, Londres se negaba a compartir las pretensiones españolas contrarias a la línea defendida por Margaret Thatcher en Brujas.

⁹ *Abc*, (*Tribuna abierta*) 2.2.89.

¹⁰ Mar Díaz Varela escribe en su artículo “La coartada de la Presidencia” las razones de conflicto social que configuraban el inicio de la primera Presidencia española. (*El Nuevo Lunes*, 2.1.89)

¹¹ “España al frente de la CE”, (*Diario 16*, 2.1.89).

En cuanto a la visión italiana, el corresponsal de *Abc* Miguel Castellvi, resumía con estas declaraciones de Giulio Andreotti las expectativas sobre el trabajo de los representantes españoles en el reto europeo: “Espero que durante el semestre español se consiga dar algunos pasos adelante en la línea del programa de unión política europea, en especial en la cuestión de la Banca europea y el sistema monetario común” (*Abc*, 2.1.89).

Es importante reseñar que entre los Estados miembros más veteranos chocaba la desproporción que existía entre las pretensiones del Gobierno español, centradas en el desafío de 1992, y la infraestructura del país que, como constataba un comentarista de *Le Monde*¹², era uno de sus “talones de Aquiles”.

Abordando el tratamiento periodístico, a través de los resúmenes de la Oficina de Información Diplomática, hemos podido conocer la interpretación de la prensa europea sobre el nuevo evento comunitario de los españoles. En Italia, *Il Messagero* titulaba a tres columnas: “Europa hacia el Mercado Único- A España le corresponde el timón en la ruta hacia el 92” . Los pronósticos que el diario hizo para el semestre español se situaban en un contexto político anómalo: guerra comercial con EEUU e iniciativa del proceso de paz para Oriente Medio. Hacía referencia también a la duración efectiva del semestre, más corta de lo habitual, debido a las Elecciones al Parlamento Europeo y a la puesta en marcha de la nueva Comisión; razones éstas que, de alguna manera, sin duda influirían en la actividad comunitaria (*Il Messagero*, 2.1.89). *Il Messagero* subrayaba los tres enfoques de la Presidencia española:

- 1) Si hablamos de Mercado Interior, se debía insistir en la armonización fiscal y en la legislación relativa al mundo de las finanzas, de los seguros o del derecho societario.

2) El segundo de los desafíos importantes para España consistía en la integración monetaria, sin esperar resultados positivos a corto plazo por las dificultades “técnico-institucionales” -según el corresponsal- y por la postura contraria de Margaret Thatcher.

3) El último de los tres retos analizados se proyectaba en la identidad europea: Se trataba de la autoafirmación internacional de los Doce, según se acordó en la Cumbre de Rodas y que reforzaba las relaciones exteriores con EEUU, Japón, Europa del Este y los Países ACP.

La Oficina de Información Diplomática recoge, asimismo, la información lisboeta, que sacaba la noticia en todos los periódicos de la mañana a excepción de *O Diario*.

La cabecera de *O Seculo*¹³ se refiere al conflicto árabe-israelí: “España lidera proceso de paz en Oriente Medio”. Señalaba que España inició con energía su Presidencia en la Comunidad Europea, y aborda la política exterior resaltando las declaraciones del Ministro de Asuntos Exteriores español: “Vamos a comenzar a trabajar inmediatamente y marcaremos las visitas a estos siete países. Creemos que Israel reconsiderará su posición en la Conferencia Internacional de la Paz, y aceptará participar en esta iniciativa”.

El otro de los diarios portugueses de influencia rectora que informó del relevo de España, *El Diario de Noticias* (2.1.89), divulgaba : “Madrid quiere una presidencia institucional y ambiciosa”.

Vemos, por otra parte, que la casi totalidad de la prensa belga también destacaba en primeras páginas la noticia del nuevo liderazgo presidencial. *Le*

¹² Thierry Maliniak escribe sobre las infraestructuras españolas (“El año de los desafíos”) en el diario francés *Le Monde* (2.1.89)

¹³ *O Seculo*, 2.1.89.

*Soir*¹⁴ anunció que los avances previstos contaban solamente con cuatro meses y que los asuntos incluidos en los 42 Consejos de Ministros programados iban a estar relacionados con el Mercado Único de 1993.

Le Standard, en su edición del 2 de enero informó, en un tono de menor optimismo, sobre las dificultades que España iba a encontrar en su mandato (guerra de hormonas con EE.UU, cambios en las instituciones comunitarias ..).

Por último, es preciso reconocer que la prensa holandesa partía de una idea clave: el signo mediterráneo del año 1989 (España, Francia e Italia iban a estar al frente de las consecutivas presidencias). El *Het Parool* indicaba a sus lectores que las ambiciones españolas no se iban a limitar, únicamente, a cuidar los asuntos del flanco sur de la Comunidad. Además, este diario divulga ante la opinión pública una imagen muy positiva del presidente del Gobierno español; González era “realista, más o menos progresista, capaz de desempeñar su papel a nivel europeo”¹⁵.

4. Inauguración oficial de la Presidencia española

Los enfrentamientos sobre armonización fiscal, integración monetaria y eliminación de fronteras persistían al término de la Presidencia griega. Bajo este escenario, más bien pesimista, irrumpía el turno español que, huyendo de personalismos, dedicó todo su empeño en reducir las distancias entre los países socios. Sin embargo, el incidente de la huelga del 14-D centraría el interés del presidente Felipe González en la resolución de los problemas internos durante los primeros meses.

¹⁴ *Le Soir*, 2.1.89.

¹⁵ *Het Parool*, 2.1.89.

El 7 de enero se inauguró con un acto solemne la Presidencia española en los Jardines del Descubrimiento. Madrid recibió a diversas personalidades políticas y culturales de la CE, entre las que se encontraban Jacques Delors y los comisarios Manuel Marín, Henning Christophersen y Frans Adriessen. El “gran ausente” fue González. Sin embargo, sí se citó con Delors en el Palacio de la Moncloa con el fin de asistir al Consejo de Ministros restringido convocado para revisar los principales asuntos del mandato español¹⁶.

5. La “Agenda” comunitaria. Discurso de Ordóñez en el Parlamento Europeo

El apoyo institucional se tradujo en la preparación de un nutrido número de convocatorias en Bruselas y Luxemburgo. Los grupos de trabajo preparatorios de los Consejos de Ministros preveían celebrar unas 2000 reuniones y, de igual modo, se fijó un calendario para los 17 miembros de la Comisión. En suma, la maquinaria presidencial empezaba a funcionar y Felipe González anunciaba en rueda de prensa cuáles iban a ser los objetivos más prioritarios y el calendario de sus viajes a las capitales comunitarias.

Las decisiones del Presidente fueron tachadas de antisociales por algunos medios y, en contrapartida, reflejaron el éxito de González en su gestión europea. Él mismo llegó a decir “no es fácil regresar al país donde la crítica y los ataques son la moneda de uso corriente, después de haber gozado de una plena tranquilidad y hasta de un cierto éxito en un viaje oficial”¹⁷.

En cuanto al discurso que el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez pronunció en el Parlamento europeo, el 17 de enero, cabe añadir que fue poco innovador, carente de sorpresa, y la crítica apuntó su carácter

¹⁶ *Diario 16*, 5.1.89.

¹⁷ *Cinco Días*, 2.1.89.

ambiguo y poco concreto. La cooperación institucional y el cumplimiento del Acta Única serían las notas dominantes, “nuestra Presidencia va a ser institucional y realista, pero también ambiciosa y política” (*La Vanguardia*, 18.1.89).

Así, la oposición insistió en la vaguedad del discurso y en la marginación de los problemas nacionales. El debate que después se abrió en la Cámara lo protagonizaron los siguientes líderes de la oposición: Fernando Morán, del Grupo Socialista, Fernando Suárez, del Grupo Conservador, Carles Gasóliba, del Grupo Liberal y la eurodiputada Concepción Ferrer.

En la disertación de Ordóñez no existía discernimiento sobre lo que realmente era accesible y, para contentar a todos, se había asumido todo. La prensa, por otra parte, fue dura con el discurso pronunciado por Ordóñez y, en este sentido, leemos en un artículo de Ramón R. Lavín (“Mucho y nada”) que era un “compendio de las desideratas de todos los ministerios” (*Expansión*, 18.1.89).

Sin embargo, algunas voces apoyaron al ministro español calificando de prudentes su palabras. *La Vanguardia* alude al carácter comunitario del discurso. “Hablamos, desde ahora, no de prioridades españolas para la Presidencia comunitaria, sino de prioridades comunitarias para la Presidencia española”¹⁸.

Por otra parte, los periódicos extranjeros informaron ampliamente de la comparecencia de Ordóñez y del presidente de la Comisión, Jacques Delors. Para la prensa belga, España no quiere que se le reproche el haber querido abarcar demasiado. *La Libre Belgique* insiste, sobre todo, en la importancia de las relaciones de la CE con EEUU.

¹⁸ *La Vanguardia*, 18.1.89.

Desde la Embajada española en Bonn se enviaron a la Oficina de Información Diplomática dos crónicas muy significativas de la prensa alemana. El *Frankfurter Allgemeine Zeitung* analizaba dos de las cuestiones fundamentales que Fernández Ordóñez planteó. “Para el ministro español, el hecho de limitarse a las cuestiones económicas en el Acta Unica Europea, debido en ese momento a la neutralidad de Irlanda, debería ser revisado en un futuro próximo”. El segundo de los apartados que destaca este diario imprescindible para la realización del Mercado Interior- es la aceptación de una moneda única y la creación de un Banco Central. Eso sí, el *Frankfurter Allgemeine Zeitung* destaca en este último punto que utilizó términos más claros que el presidente de la Comisión (18.1.89.)

El segundo de los periódicos alemanes, el *Handelsblatt*, en su página 2 titula “España asume la Presidencia en el Consejo de Ministros de la CE - Programa para Europa” . En sus comentarios leemos que, pese al aire particular que Madrid quiere dar a la Primera Presidencia española, tanto ésta como la francesa tendrán como centro de gravedad, proseguir la realización del Mercado Interior previsto para 1992. El fenómeno era irreversible, aunque difícil de concluir, matiza.

En Lisboa, *El Diario de Noticias* (18.1.89) incluye una serie de opiniones provenientes de los eurodiputados portugueses en relación al discurso de Ordóñez. Para el diputado Rui Amaral, no fue innovador como se esperaba. Otro de los diputados, Fernando Gomes, opinaba que “quiso dejar el efecto político de las grandes declaraciones sobre la Presidencia española al presidente del Gobierno”.

El eurodiputado en el Parlamento Europeo, Joaquín Miranda, también criticó la ausencia de medidas concretas respecto a los problemas de la cohesión económica y social, considerado por él uno de los asuntos mas importantes de la Presidencia española.

Otro de los diarios portugueses, *O Dia*, destacaba en titulares la apuesta española por la unidad monetaria común y *El_Correio de Manha* (“Para presidir la CE, los españoles tienen un programa ambicioso, más realista”) entrevé esa mayor preocupación de los burócratas españoles para realizar lo definido en el Acta Única.

6. Conclusiones del capítulo

- En la información que analizamos al inicio de la Presidencia española se anuncian las actuaciones políticas, económicas y sociales que van a protagonizar la actualidad política del semestre.
- Desde las vertientes más variadas proliferaban los contenidos informativos relacionados con el proyecto europeo. La prensa se extiende en las informaciones que dan a conocer los distintos mecanismos institucionales de la CE. Por otra parte, los políticos españoles relacionados con el área comunitaria, aparecieron con mas asiduidad en entrevistas y en actos oficiales. Sus declaraciones se relacionan con los objetivos de la Presidencia española.
- La prensa no hace una distinción clara de las expectativas que se plantea el Gobierno respecto a la CE, y los asuntos internos de nuestro país. Cabe afirmar, sin embargo, que aumentan los vínculos de identidad europea.
- Toda la prensa extranjera destaca en titulares la nueva fase en política exterior que emprende España durante el primer semestre de 1989: avance en el Mercado Interior y en la política monetaria. Dos características definen el carácter de la Presidencia según los diarios extranjeros: es “ambiciosa”, pero a la vez , “realista”.

CAPÍTULO II:

Mercado Interior (I): Europa sin fronteras, Libre circulación de Profesionales y Derecho de Sociedades

2.1 Europa sin fronteras

2.1.1 Consecución del Acta Única

En los seis meses de Presidencia Española del Consejo de Ministros de la CE, el denominado Proyecto 92 relativo al Mercado Único Europeo registró indudablemente importantes avances. El Mercado Interior figuraba como una gran aspiración europea capaz de contribuir a la estabilidad del comercio mundial.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1989 se adoptaron casi un 10% de las medidas contempladas en el programa “Mercado Interior; al finalizar la Presidencia española se habían aprobado más del 50% del total. Durante este periodo, el Consejo de Mercado Interior celebró cuatro reuniones (27 de febrero, 13 de abril, 3 de mayo y 14 de junio) y en un recuento total, España conseguiría

aprobar 7 reglamentos, 46 directivas y 10 decisiones. Hubo, además, una reunión extraordinaria dedicada a la Televisión sin Fronteras, y que tuvo lugar el 13 de marzo.

En materia de eliminación de las barreras físicas, con normas aduaneras y controles fitosanitarios, la Presidencia española supo solventar las objeciones formuladas por los diversos Estados miembros. Estas barreras físicas estaban centradas en la imposición de distintos tipos de controles en la frontera a personas y mercancías.

Por otro lado, las barreras técnicas, siguiendo las legislaciones nacionales, dificultaban la libre prestación de servicios y el ejercicio de profesiones liberales. Estas fronteras impedían la apertura de los mercados públicos. Entonces, la Comisión adoptó medidas tendentes a evitar los obstáculos arancelarios a los intercambios dentro de la CE. El número de proyectos de reglamentos técnicos que habían sido notificados, aumentaron de forma considerable en relación con 1988.

Nuestros representantes desarrollaron un programa diseñado para armonizar los controles públicos sobre productos alimenticios. Se trataba de proteger, al mismo tiempo, los intereses del consumidor y para ello, se determinaron una serie de normas a las que debía ajustarse el etiquetado de los productos alimenticios¹⁹.

La Presidencia española también aprobó dos importantes directivas relativas al Derecho de Sociedades. Una de ellas, uniformaba los requisitos que habían de publicarse en el Registro Mercantil en el caso de sucursales para facilitar el establecimiento de estas sucursales sin ninguna traba. La segunda de las Directivas, era de gran importancia para las pequeñas y medianas empresas,

ya que con su implantación se limitaba la responsabilidad patrimonial de los empresarios.

También la Comisión proseguía sus trabajos para la liberalización y transparencia de la contratación pública. En relación con este punto, se avanzó en la modificación de la directiva 71/305, que se refería a las obras públicas cuyo importe mínimo era de 5 millones de ECUS. Se trabajó, pues, intensamente para determinar cuáles eran los derechos y obligaciones de las empresas contratistas y los poderes adjudicadores.

Por último, en cuanto a la libre circulación de las personas y siguiendo la decisión del Consejo Europeo de Rodas, fue nombrado Rafael Pastor Ridruejo, coordinador nacional al mando de un Grupo, integrado por representantes de todos los Estados miembros.

El Grupo dirigido por Rafael Pastor Ridruejo se reunió seis veces antes de tener lugar la reunión del Consejo Europeo de Madrid, y en Palma de Mallorca aprobó el decisivo “Documento de Palma” (3 y 4 de junio). En la Cumbre Madrid se asumieron las conclusiones de dicho Informe, cuyo contenido estaba inspirado en el Libro Blanco del Mercado Interior.

En este recuento, otro de los asuntos pendientes que retomó la Presidencia española fue el impulso de un espacio jurídico y policial común a los países europeos. Fundado en 1977, el denominado “Grupo de Trevi” actuaba como un organismo de cooperación policial. La estrategia del ministro de Interior, José Luís Corcuera, encaminada a luchar contra ETA, se apoyaría en las resoluciones del Grupo de Trevi.

¹⁹ La directiva 77/94 supone la determinación de medidas de protección al consumidor contra posibles fraudes.

En relación con la libre circulación de personas, el Consejo Europeo de Rodas subrayó oportunamente que la creación de un espacio sin fronteras internas estaba ligado a los progresos de la cooperación intergubernamental en la lucha contra el terrorismo, la criminalidad internacional, la droga y los tráficó ilícitos de cualquier naturaleza. Sobre este punto, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Julio Andreotti apoyó los postulados de Rodas y respaldó la línea política del Gobierno en cuanto a la liberalización de las fronteras: “España e Italia tienen valoraciones comunes también en este problema, por lo que miramos con interés las iniciativas que el Gobierno de Madrid pueda emprender en el semestre de Presidencia” (*Efe*, 26.1.89).

Dada la importancia creciente de la supresión fronteriza, el Parlamento Europeo solicitó la celebración de una Conferencia Internacional de ámbito comunitario para evaluar y coordinar la lucha contra las drogas. Los eurodiputados insistieron en la interacción entre el tráfico de drogas, la criminalidad y el terrorismo. Para ello, instaron a los Doce a que nombraran, cuanto antes, a los coordinadores encargados de estos asuntos (supresión de las fronteras interiores y libre circulación de personas para finales de 1992)²⁰.

2.1.2 Abolición física de las fronteras intracomunitarias

Como ya señalamos, el Secretario General para las Comunidades Europeas, Rafael Pastor Ridruejo, fue nombrado por el Gobierno español coordinador nacional para elaborar el contenido de la directiva encaminada a la abolición física de las fronteras intracomunitarias. Su aprobación se presentaba como uno de los objetivos claves del Gobierno felipista.

Aunque resultara utópico pensar que se iban a abolir totalmente las fronteras durante este semestre, sí se esperaba desbloquear un número de asuntos

²⁰ *Efe*, 18.1.89.

que permanecían hasta ahora estancados. Esta abolición física de las fronteras intracomunitarias²¹ implicaba a su vez, una política de fortalecimiento de las medidas de control en las fronteras extracomunitarias. Gran Bretaña, sin embargo, se opuso frontalmente a la eliminación total de los controles fronterizos por temor al libre tránsito de terroristas.

El diario catalán *La Vanguardia* explicaba el motivo de las “reservas británicas” a la apertura de las fronteras: “El Reino Unido recela de las facilidades de inmigración dadas a los sudamericanos” (*La Vanguardia*, 1.2.89). Tampoco el ministro francés de Interior, Pierre Joxe, compartía de forma total el entusiasmo europeísta de España. Para el titular galo de Interior, el año 1993 no debía acarrear necesariamente la supresión de todos los controles fronterizos.

El Gobierno español manifestó entonces, su deseo de adherirse al llamado Acuerdo Intergubernamental de Schengen entre cinco Estados miembros de la Comunidad Europea (RFA, Bélgica, Holanda, Francia y Luxemburgo). “La negociación para la ampliación del acuerdo empezará probablemente el mes próximo (...) “El acuerdo va incluso más allá, porque requiere antes de ponerlo en práctica llegar a una armonización en la concesión de visados” (*La Vanguardia*, 1.2.89)

Los cinco países que en junio de 1985 firmaron el pacto de Schengen, se comprometieron a acabar con los controles fronterizos en enero de 1990. En Gran Bretaña, el diario *The Guardian* atribuía el empeño de Schengen de avanzar rápidamente por la vía que conduce al desmantelamiento de controles en fronteras al deseo de presionar a Margaret Thatcher. España, por su parte, quería impulsar la creación de una oficina central europea en la reunión informal que el Grupo de Trevi celebraría en Sevilla, en los días 9 y 10 de mayo.

²¹ Esta abolición de las fronteras ya existía en algunos países miembros como los del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo).

El Reino Unido se reafirmaba en su oposición a abolir totalmente las fronteras internas de la CE, sobre todo, hasta que no culminara el endurecimiento de las legislaciones sobre visados y derecho de refugio y asilo. Consecuentemente, España por imperativo comunitario se vería obligada a solicitar visados a los ciudadanos de países sudamericanos y a endurecer su legislación sobre derecho de refugio y asilo, considerada en algunos medios como “muy persuasiva”

En la Cumbre de Sevilla, los jefes del Gobierno español y alemán, González y Kohl, formularon los problemas de seguridad derivados de la supresión de las fronteras físicas intracomunitarias. Se aceptó la propuesta alemana de crear una policía suprafronteriza encargada de combatir las nuevas formas de criminalidad. Entonces, González aseguraba que “la idea de un organismo supranacional o suprafronterizo serviría para mantener un equilibrio entre la libertad y la seguridad”²²

Retomando la labor del Grupo de coordinadores, el 22 de febrero los representantes españoles presentaban en Bruselas su esquema de trabajo sobre la libre circulación de personas y supresión de fronteras físicas a partir de 1992. En la primera reunión, presidida por Rafael Pastor, se pretendía dar un impulso político y negociar los diversos foros internacionales que se ocupaban habitualmente de materias relacionadas con la libre circulación de personas.

Sus miembros debían coordinar las políticas entre los diferentes ministerios afectados, como Interior y Justicia. A su vez, debían clasificar los trabajos realizados por el “Grupo Trevi” o el Consejo de Europa. Entre las medidas que este equipo elaboró figuraban: La creación de un equipo policial europeo que actuara como policía europea supranacional y, en segundo lugar, la armonización legal tendente a la creación de un visado europeo único.

Durante la reunión de Bruselas se estableció, de igual modo, que el comité se reuniera periódicamente cada tres semanas para mantener un último encuentro en Palma de Mallorca, poco antes de la celebración de la Cumbre en la capital madrileña. Como ya avanzamos anteriormente, estaba previsto que en Sevilla el Comité presentara un Informe con las principales medidas a adoptar, un programa de coordinación de decisiones para las entidades responsables y un calendario preciso de adopción de medidas.

2.1.3 Negociaciones del grupo Schengen

Con la supresión de los controles en aduanas y la creación del Mercado Único en 1992 era de esperar que los cauces en la política comunitaria avanzaran hacia el acercamiento de las legislaciones nacionales, así como a la colaboración de sus Administraciones y el reforzamiento de sus fronteras exteriores.

Las autoridades españolas propusieron, en su primer encuentro (20 de marzo) una serie de garantías que contemplaban la armonización de las normas sobre la entrada y estancia de ciudadanos no comunitarios en la CE: los visados, el derecho de asilo, el estatuto del refugiado y la política de inmigración.

España e Italia manifestaron su deseo de incorporarse al Acuerdo de Schengen. En el acuerdo se contemplaba la supresión de los controles fronterizos entre los países firmantes en enero de 1990, y esto iba a suponer adelantarse a la realización del Acta Única en materia de libre circulación y desaparición de las fronteras prevista para el 1 de enero de 1993.

Los diarios vascos, sobre todo, abordaron el problema del terrorismo, y así, publicaciones como *El Diario vasco*, advirtieron de las dificultades que ETA añadiría al proyecto comunitario: “ETA dificulta el proyecto de abolición de las

²² *Diario 16* encabeza el siguiente titular “González acepta la idea alemana de proponer la creación de una

fronteras interiores en la CE” (*El Diario Vasco*, 24.2.89). Fue el comisario europeo Martín Bangemann el primero en reconocer que ETA significaba un “problema específico” para la liberalización fronteriza de la CE, y según *Abc*, Bangemann criticó el escaso “pragmatismo” de las autoridades españolas en materia de seguridad²³.

El presidente español, Felipe González, centraría sus mayores discrepancias con M. Thatcher en las negociaciones sobre controles aduaneros después de 1992. Y si nos referimos a Francia, cuando se iniciaron las negociaciones (el 20 de marzo) para la adhesión de España a Shengen, podemos afirmar que fue la primera en eliminar sus barreras físicas con la Península. El director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Herminio Morales fue el elegido para llevar a cabo las conversaciones con Francia. Todos los medios publicaron la importancia de esta iniciativa hispanofrancesa.

2.1.4 Grupo Trevi: terrorismo transfronterizo

El ministro de Interior Javier Corcuera viajó a los EE.UU para intensificar los contactos en la lucha contra el narcotráfico. En representación de los Doce, Corcuera se trasladó, a Washington a primeros de marzo como presidente del Grupo Trevi. EE.UU, Canadá y Noruega tenían estatus de observadores en ese organismo policial. La reunión del Grupo Trevi captó el interés de los principales diarios nacionales, y los titulares anunciaban: “Corcuera viaja a los EEUU para intensificar contactos en la lucha contra el narcotráfico” (*La Vanguardia*, 2.3.89); “Corcuera habló en EE.UU sobre terrorismo y tráfico de drogas” (*El País*,

policía europea (7.2.89).

²³ *Abc*, 26.2.89.

2.3.89); “El Grupo de Trevi analizará el terrorismo transfronterizo” (*Abc*, 5.3.89)²⁴.

Ante la inminente Cumbre del *Grupo de Trevi* en Sevilla (9.3.89) solamente el diario *La Vanguardia* contemplaba en su editorial (“Inmigración ilegal”) el alto coste que se avecindaba en emigración de Terceros países. Abrir las fronteras obligaría a los Estados miembros a redoblar su vigilancia en las fronteras exteriores. La totalidad de la prensa diaria informó de la reunión de Sevilla y *El Periódico catalán* dedicaba un especial “Europa sin fronteras” a desvelar las discrepancias que sobre la apertura fronteriza se levantaban en la Comunidad. Existía un mensaje claro surgido de este debate: nuestro país estaba dispuesto a adelantarse y a abolir los controles fronterizos con otros 7 socios comunitarios en julio de 1990.

El ministro británico, Douglas Hurd, escribía un artículo (“En Sevilla, contra el terrorismo”) con motivo del citado encuentro. Pese a las reticencias británicas²⁵, Hurd abogaba por una estrecha colaboración frente al terrorismo y consideraba que el llamado *Grupo Trevi* era el más eficaz para la lucha antiterrorista en Europa²⁶.

La Comunidad experimentó un profundo debate en torno a este tema después de la reunión en la capital sevillana, y las razones de esta discusión podían concretarse en dos espacios diferentes: El primero, un espacio sin fronteras, formado por los 8 países de Schengen. El segundo bloque defendía los

²⁴ Esta edición informaba que Rafael Vera, por entonces secretario de Estado para la Seguridad, hizo alusión al contenido de un documento sobre euroterrorismo, aunque él prefería invocar el término: “terrorismo transfronterizo” (*Abc*, 5.3.89).

²⁵ Los representantes comunitarios consideraban “falaz” la tesis británica que aludía al carácter externo de sus fronteras, por tratarse de una Isla, y que en consecuencia, el Acta Única sólo obligaba a facilitar la libertad de paso.

²⁶ *Diario 16*, 9.3.89.

controles fronterizos y Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Grecia eran los países aliados a este bloque²⁷.

Los medios de información captaron distintos enfoques del resultado de la reunión. Así, *Diario 16* y *El Periódico* centraron su atención en el espacio policial europeo. *Diario 16* anunciaba el programa que presentó la Presidencia española sobre la policía. *El Periódico*, por su parte, reparó en el supuesto fracaso de nuestro ministro de Interior, en el momento en que otros Estados rechazaron su plan policial, porque suponía una “excesiva burocracia” (11.3.89).

Cinco Días aborda de manera más crítica los resultados de la Cumbre: “Sin avances en la reunión del Grupo Trevi”; y *El País* se refirió al compromiso que asumía el Gobierno en la vigilancia fronteriza con la desaparición de los controles (11.3.89). *La Vanguardia* va más allá, y hace una valoración del futuro documento que prepara la delegación española los posibles riesgos de la denominada “Europa sin fronteras”. En este sentido subrayó que los componentes de *Trevi* estudiaban la posibilidad de exigir visados a ciudadanos sudamericanos. También *Abc* señalaba al respecto: “España se opone a esta pretensión (...) por razones históricas que derivan para nuestro país en una serie de compromisos servidos, según las coyunturas históricas, con mayor o menor eficacia, pero sin abandono (...) Y por la futura conmemoración del V Centenario del Descubrimiento (14.3.89). Es así que parece contradictorio el hecho de exigir visados a los iberoamericanos cuando se han invertido numerosos intereses en la apertura que quiere significar dicha conmemoración.

El debate sobre la desaparición de las fronteras interiores y el auge de las trabas a la inmigración lo encontramos también en un artículo de sumo interés (“La Europa ‘bunker’”) firmado por Enrique G. de Herreros y César Díaz²⁸ (*El*

²⁷ (*El Periódico*, 11.3.89)

²⁸ Ambos autores son coordinadores de refugiados

País, 14.3.89) Aunque tradicionalmente la mayoría de los países de la CE han sido una tierra de asilo para los perseguidos políticos, y han reclamado mano de obra barata procedente de los países que “ahora se consideran no deseables”, la situación en Europa se había invertido durante los últimos años. Es decir, se consolidaba un discurso que hablaba de un “abuso del derecho de asilo político y de la inmigración económica”. La tendencia del momento restringía el acceso de extranjeros y la concesión de refugio a los casos mínimos. Los autores en su artículo la extensión de una opinión favorable a la exclusión de la protección de los derechos humanos a quienes no poseen carta de ciudadanía. Esta opinión viene a ser refutada por algunos políticos que observaron en esta limitación de los derechos humanos, “cierta rentabilidad electoral”. Finalmente se aconseja a la sociedad europea que no olvide la represión que otros sufren: “La Europa sin fronteras que surgirá de 1992 no puede volver la cara a los problemas de los débiles trashumantes en busca de amparo y lavarse la mala conciencia con la concesión de refugio a algunas personas mientras se impide a muchas otras escapar de la represión” (*El País* 14.3.89).

2.1.5 Un paso más hacia la Europa de los Ciudadanos

La iniciativa partió del Parlamento de Estrasburgo que recomendó que el derecho de voto se hiciera extensivo a los extranjeros súbditos de los países miembros de la CEE para las elecciones municipales. Esta iniciativa era un paso más hacia la “Europa de los Ciudadanos”. La Cámara comunitaria propuso que el plazo de residencia que abre el derecho al voto fuera fijado en cinco años. Así, los parlamentarios de Estrasburgo dieron prueba de un gran entusiasmo con este proyecto y el recuento de votos se repartió en la siguiente proporción: 244 votos en favor, 55 en contra y 13 abstenciones.

La prensa revelaba que los diputados luxemburgueses, sin embargo, se mostraron desde un principio hostiles a esta resolución. La oposición a la

recomendación de la Cámara la encabezaron el Frente nacional, los liberales, los cristianos-demócratas y RPR²⁹. El papel del Parlamento europeo era sólo consultivo y el proyecto tenía que aprobarse por unanimidad en el Consejo de Ministros de la Comunidad. *Le Monde*, por su parte, en su reflexión anticipa una idea clara: resulta contradictorio que, precisamente, cuando los “Doce” reconocen mutuamente a sus nacionales el derecho de instalarse y trabajar libremente en otro país comunitario, a éstos se les prive al mismo tiempo, de un derecho anterior, como es el de participar en la vida de la ciudad donde residen. Sobre este aspecto, no deja de ser significativo que -afirma *Le Monde*- en el último censo registrado hubiese más de un millón y medio de extranjeros en Francia (*Le Monde*, 17.3.89).

Diario 16 encabeza una crónica de su corresponsal Ander Landaburu en la que se anunciaba que el Parlamento Europeo abría el camino al voto de extranjeros en comicios locales”. Después de 5 años de residencia, los inmigrantes europeos “podrán votar”. El mismo portavoz de la propuesta, el parlamentario socialista alemán Heiz Oskar Vetter, afirmaba: “el derecho de voto en las municipales para los inmigrantes europeos es un enorme pilar de la Europa de los Ciudadanos” (*Diario 16*, 19.3.89).

No obstante, salió a la luz el “Informe Vetter” que establecía dos excepciones para este derecho de voto: la primera de estas excepciones advierte que si la proporción de inmigrantes europeos residentes en un Estado miembro pase del 20 por ciento del electorado (como el caso de Luxemburgo), el país en cuestión, no aplicará la directiva en las primeras elecciones. La segunda excepción, se refiere a la elegibilidad, al reservar funciones como las de alcalde o teniente de alcalde a los ciudadanos oriundos del país de que se trate.

²⁹ Invocando los gaullistas el art. 3 de la Constitución francesa que reservaba el derecho de voto a los ciudadanos de la nación, y que deberá ser revisado si el proyecto europeo llegaba a feliz término.

2.1.6 El “Grupo de Rodas” y la apertura de las fronteras comunitarias

La segunda reunión del “Grupo Rodas” puso de manifiesto profundas divergencias de interpretación del Acta Unica Europea: Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda formularon reservas casi totales al programa de eliminación de fronteras interiores, propuesto por la Presidencia española. Dichos países sostenían que, si bien el Acta Unica establecía la libre circulación de personas dentro de la Comunidad, no exigía sin embargo la eliminación física de los pueblos fronterizos ni de los controles sistemáticos.

El coordinador del Grupo, Pastor Ridruejo, intuía la necesidad de una ley europea contra el racismo y la xenofobia y manifestó, asimismo, su deseo de acortar distancias en este punto antes del Consejo Europeo de Madrid: “está claro -apuntaba- que tendremos que rebajar las aspiraciones y hacer una propuesta de compromiso” (*Abc*, 18.3.89).

En relación con la política de visados, las divergencias parecían menores. De entrada, Ridruejo quitó importancia a la exigencia de visados cuando aseguraba que no era una medida restrictiva sino de control. Por su parte, *El País* en el reportaje de Inmaculada de la Fuente (“La caza del extranjero”) quiso profundizar en los avatares que padece el ciudadano extranjero, especialmente el emigrante y refugiado. Con las nuevas restricciones económicas y la progresiva implantación de la frontera única europea todo emigrante, no suficientemente documentado, se convierte en un “candidato a la expulsión” (*El País*, 19.3.89).

En la misma línea de actuación del Grupo Rodas, surgía a finales de marzo el llamado Grupo Trevi 92. Existía la necesidad de establecer medidas compensatorias antiterroristas ante el déficit de seguridad que implicaba la abolición de fronteras. Además del control de las fronteras y pasaportes, la

obligatoriedad de los visados para los ciudadanos de determinados países constituyó en todo momento una exigencia prioritaria del Grupo Trevi 92.

Cobraba vigencia, de igual modo, la informatización del fichero policial comunitario, un proyecto que ya fue iniciado para permitir a las policías de cada uno de los países miembros acceder a los ficheros de otros Cuerpos de Seguridad en la lucha contra el narcotráfico mediante la informática.

Asimismo, el Grupo Trevi consideraba que los futuros eventos que iban a organizarse, como los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Exposición Universal de Sevilla y la designación de Madrid como Capital Cultural europea, potencialmente suponían un incremento del tráfico de estupefacientes.

Durante el semestre, la Presidencia española trabajó en torno a un catálogo de medidas sobre control fronterizo. En las negociaciones, sobre la creación de una lista común de países a cuyos ciudadanos se les iba a exigir el visado, se llegó a un principio de acuerdo respecto a 9 Estados: Marruecos, Argel, Túnez., Turquía, Cuba, Bulgaria, Yugoslavia, Tailandia y Haití.

Las medidas barajadas por nuestros representantes se regían por un calendario concreto³⁰:

- Finales de 1989. Elaboración de una lista común de países a los que se solicitará visado.
- Finales de 1989. Elaboración de una lista común de “indeseables”.
- 1991. Nuevo sistema de cooperación entre las policías.
- Finales de 1992. Reforma de los aeropuertos comunitarios que habrán de convertir sus actuales terminales nacionales en intracomunitarias.
- Finales de 1992. Visado europeo.

Pero, a su vez, España optó por impulsar una legislación contra la xenofobia que ya existía en el Reino Unido. Desde diversos sectores se solicitaba la supresión de la Ley de Extranjería, que -en opinión de muchos- fomentaba una actitud racista. La Orden que reclamaba determinadas condiciones económicas motivó esta protesta.

Desde el lado del Gobierno, Pastor Ridruejo declaraba: “No queremos ser gendarmes ni ciudadelas ...pero habrá que controlar la emigración ilegal para hacer posible la libre circulación” (*Abc*, 4.4.89). El diario *Ya* apoyaba con un editorial esta tesis del Ejecutivo presidido por González, ratificando la constitucionalidad de la normativa que exigía determinados requisitos económicos:

“El derecho de entrar y salir libremente del país, establecido en el art. 19 de la Constitución, se aplica exclusivamente a los españoles y, en cuanto a los extranjeros, el artículo 13, que regula sus libertades, se remite a los tratados y a la ley. La ley es la de Extranjería. En cuanto a los tratados, ahora corresponde aplicar las consecuencias de nuestra incorporación a la Comunidad Europea, que impone la obligación de atenerse a las normas de la Comunidad” (*YA*, 8.4.89).

La prensa también ofreció otros matices diferenciadores que no pueden ser obviados. Así, Francesc Santacana, decano en funciones del Col·legi de Economistes de Catalunya, escribía en *La Gaceta*: “Las fronteras, a pesar de su relativa pérdida de rigidez, siguen siendo un obstáculo, una barrera para la total comunicabilidad entre sus zonas próximas (...) la fuerza de atracción y de cohesión de las áreas limítrofes se verán alteradas al eliminarse una de sus barreras naturales: la frontera”. Santacana asegura en su artículo³¹ que la “macrorregión”, como organización territorial que supera las fronteras físicas,

³⁰ *Abc*, 4.4.89

³¹ *Europa y sus macrorregiones*. *La Gaceta*, 3.4.89.

supone la existencia de unas economías de escalas territoriales susceptibles de optimizar las relaciones económicas y sociales.

Estas reflexiones nos invocaban directamente a la Generalitat de Catalunya y la región francesa del Languedoc-Rousillon y Midi-Pirinéas, que ante la opinión pública ya habían afirmado su voluntad de convertirse en una macrorregión europea.

2.1.7 Reunión en Madrid del Grupo Trevi

Más de un centenar de efectivos policiales iban a encargarse de las medidas de protección ante la inminente reunión del *Grupo Trevi*, en la ciudad de Madrid. Integrado por los Departamentos de Interior y Justicia de los países comunitarios, este Organismo contaba con reforzadas medidas de seguridad en previsión de un atentado por parte de la organización terrorista ETA.

Teniendo como sede del encuentro el Palacio de Congresos y Exposiciones, el debate iba a girar en torno a la creación de una oficina central para la lucha contra el terrorismo y contra el tráfico de estupefacientes. Dicha oficina supondría el “embrión” de un organismo europeo coordinador de la lucha antiterrorista.

También se debatiría durante este encuentro, la creación de las futuras “Unidades Centrales de Inteligencia” y el impulso de una “policía comunitaria”. El primer contacto tuvo lugar en Sevilla, y como ya mencionamos, en ese encuentro informal se abordaron los aspectos más destacados de la Agenda de Madrid.

Los periódicos no pasaron por alto un hecho, de gran trascendencia diplomática con respecto a nuestro país vecino: El ministro francés fue

condecorado por su colaboración frente al terrorismo de ETA. Este punto de coincidencia entre España y Francia se advierte en la cabecera de los principales diarios: “Condecoración española para Pierre Joxe por la cooperación antiterrorista”. “El Grupo de Trevi estudia en Madrid el problema etarra ante 1992” (*Abc*, 12.5.89); “Joxe y Corcuera afianzan sus lazos en la lucha anti ETA” (*El Periódico*, 12.5.89).

Antes de este encuentro coincidieron los ministros europeos (en las numerosas reuniones preparatorias que mantuvieron) en aunar los criterios sobre medidas compensatorias de carácter policial ante la inminente supresión de los controles fronterizos prevista en el Acta Unica³².

Como ya apuntamos, uno de los aspectos más controvertidos que se abordaron fue el de la exigencia de visados para los extranjeros. España tenía que conseguir un equilibrio entre las exigencias comunitarias - de obligada aplicación para todos sus países miembros- y su política de flexibilidad hacia Latinoamérica.

Por otra parte, las esperanzas de la delegación española en el sentido de establecer las bases para la futura policía europea, chocaron con la actitud británica y francesa. No obstante, se aprobaron numerosos proyectos tendentes a combatir la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el terrorismo; igualmente se aprobaba el documento sobre la amenaza interior y exterior del terrorismo, que incluía la creación de un sistema de comunicación para mantener la confidencialidad de las informaciones entre los países para la cooperación transfronteriza sobre las actividades de grupos terroristas.

En cuanto al tráfico de drogas, se decidía la creación de unidades centrales de inteligencia como un paso definitivo para el establecimiento de la futura Unidad Europea de Inteligencia (*El Correo*, 13.5.89).

³² *La Vanguardia*, 12.5.89.

En todo caso, el ministro de Interior francés, Pierre Joxe, alegaba sobre el papel del Grupo de Trevi : “No hay supresión de fronteras sino supresión del control de las fronteras para los ciudadanos de la CE”. Era preferible para Francia fomentar la cooperación en la lucha contra la droga, antes establecer un ‘espacio policial europeo’ que careciese de un auténtico peso jurídico.

Cuando finalizó la reunión, fueron dos periódicos, *Abc* y *La Vanguardia*, los que informaron detalladamente sobre la figura del “corresponsal especialista” (13.5.89). Ya, encabezaba en titulares: “El Grupo de Trevi adopta nuevas medidas frente al terrorismo”, y *Cinco Días* resaltaba en sus páginas otra de las iniciativas del Grupo: “El Grupo de Trevi decide crear una unidad de inteligencia europea”(13.5.89).

En el caso de *Diario 16*, lo más destacado –informativamente hablando– pasaba por las medidas adoptadas contra los inmigrantes: “La CE endurece el control de inmigrantes dejando en un segundo plano los acuerdos que adoptaron los ministros para combatir el terrorismo y el tráfico de drogas” (13.5.89).

Asimismo *Abc*, por su parte, confirmaba a sus lectores la exigencia de visados para nuevos países: “La CE obligará a Cuba y otros países comunistas a obtener visado de entrada” (13.4.89). Al día siguiente, esta misma publicación mostraba el rechazo de nuestro Gobierno a las directrices comunitarias que pretendían establecer controles fronterizos a los ciudadanos iberoamericanos.

Alegando sus vínculos históricos con Iberoamérica y las tradicionales relaciones con el Norte de Africa, el Gobierno español trataba de evitar por todos los medios, que la exigencia de visados a países de estas áreas se adoptara bajo su Presidencia. Era preferible que la responsabilidad recayera en los turnos de Francia o de Irlanda.

El País presumiblemente concedía una gran importancia a la consolidación de *Trevi*, y entendía que había llegado el momento de “dotarle de una estructura administrativa” capaz de asumir el cuantioso volumen de trabajo documental (*El País* 13.5.89). *La Vanguardia* anota, sin embargo, que “España sólo logró “soluciones de compromiso” para hacer avanzar la Europa de los policías y los jueces. En su antetítulo informaba, asimismo, que los nacionalismos de los Estados dificultaron finalmente la creación de un ‘espacio policial europeo’ (*La Vanguardia*, 13.5.89).

En opinión del diario *Egin*, podemos apreciar que el Ministerio de Interior fue “demasiado lejos” en sus propuestas al *Grupo de Trevi*. Los ministros comunitarios echaron el freno “a sus ilusiones de una inmediata Policía Comunitaria y un supergrupo antiterrorista”. El diario vasco reconoce, no obstante, que el *Grupo de Trevi* había cobrado mayor importancia en sus últimas reuniones y que sus decisiones tenían cada vez mayor peso en la política policial de los gobiernos europeos (*Egin*, 15.5.89).

La corriente editorial de los diarios españoles advierte -en su mayoría- que los ministros europeos insistieron en cerrar a “cal y canto” las fronteras de Europa a los inmigrantes de otros países. Su interés por restringir la inmigración superaba, incluso, al interés de obstruir “los canales mortíferos de la droga”³³. Por lo demás, la tendencia generalizada de los medios mostraba objetivamente que los pasos que se habían configurado durante este periodo no habían sido decisivos ni en el área judicial ni en el policial.

Sentadas las bases sobre el rol que tradicionalmente venía desempeñando España con Iberoamérica, vemos que chocaba bruscamente con la imposición comunitaria de convertir a nuestro país en “gendarme principal”. Rodríguez Ugarte y López Garrido escriben sobre esta actitud contra los extranjeros (“La

³³ *Diario 16*, 15.5.89.

muralla europea” que publicaba *El País*, el 12 de mayo). Desde que la CE optó por “limpiar su suelo de estos extranjeros” se estaban adoptando duras medidas para impedir su entrada. El Ejecutivo trataba de justificar las disposiciones del ministerio del Interior, aduciendo motivos de lucha contra el paro y lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En respuesta a la nueva dinámica de las relaciones con América Latina, los autores antes citados propugnan para Europa una “cultura que haga de ella un contingente abierto a la libertad y al trabajo de las personas”.

La Vanguardia rescató –con más rigor- las desavenencias públicas entre Interior y Exteriores para establecer los requisitos de entrada. Las reuniones se sucedieron para hallar una solución de compromiso. Era preciso no deteriorar las relaciones con América Latina y, al mismo tiempo, había que seguir las directrices fijadas por el Grupo de Trevi en materia de visados, fronteras, asilo e inmigración ilegal³⁴.

A decir verdad, la Orden emitida por el ministerio de Interior (6 de marzo) que imponía un mínimo de 50.000 pesetas y billete nominativo, intransferible y cerrado a los extranjeros, despertó un profundo malestar en las representaciones diplomáticas latinoamericanas. Su protesta, dirigida al ministerio de Exteriores, fue enérgica por considerar que la medida se oponía al espíritu del V Centenario. Tras estos hechos, días después, Ordóñez declaró en Sevilla que el Gobierno estaba dispuesto a modificar la Orden.

En la sede de Interior, una nueva consigna excluía a los países de Iberoamérica en la acreditación económica, a excepción de Cuba y Nicaragua³⁵. Para paliar la inmigración ilegal, el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, difundía una circular interna donde se recordaba a los agentes de las

³⁴ *La Vanguardia*, 23.5.89.

³⁵ *El País*: “El Gobierno excluye a los latinoamericanos del requisito de demostrar recursos económicos para entrar en España” (27.5.89)

fuerzas de seguridad de aduanas que la normativa anterior sólo se exigiría a las personas “sospechosas” (*La Vanguardia*, 23.5.89).

Finalmente, el ministro de Interior Corcuera se pronunciaba a favor de lo consignado en Trevi, y cuando compareció en la comisión mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas, llegó a señalar que a pesar de nuestros lazos históricos, España “buscaba el acuerdo respecto a una política de visados común”³⁶.

Los periódicos también reflejaron en sus páginas el discurso del Gobierno frente a las exigencias comunitarias. Por ejemplo, *La Vanguardia* en el número publicado el 1 de junio resaltaba la siguiente declaración de Corcuera: “España aplicará la política europea sobre visados a los latinoamericanos en 1993”; *Abc* por su parte anunciaba: “Interior mantiene el pulso con Exteriores sobre visados para iberoamericanos-La relación se supeditará a la política común de la CE”; Mucho más explícito en sus titulares *YA* anticipa las medidas que Interior tenía previsto adoptar: “Corcuera asegura que no se pondrá dificultades al visado comunitario”. El mismo diario *YA*, en un editorial (8 de junio) no cuestionaba de forma alguna la constitucionalidad a la hora de exigir visados para entrar en España. Sin embargo, en el editorial sí se cuestiona la “solidaridad” con las naciones de nuestra lengua. Puede resultarnos incomprensible esta actitud de España si además la comparamos con la que mantiene Gran Bretaña respecto a los países de la Commonwealth.

Otra voz crítica, la del escritor Sánchez Dragó, denunciaba esta restricción de nuestros políticos. “Corcuera hincó, una vez más, las rodillas ante la Santa Inquisición Norpirenáica (...)para convertir en papel mojado las tranquilizadoras promesas formuladas al respecto y, en sentido contrario, por su colega ideológico Luis Yáñez” (*Diario 16*, 8.6.89). En consecuencia advertimos disonancias en el

³⁶ *El País*, 1.6.89.

gobierno cuando se habla de inmigrantes de Latinoamérica. El V Centenario que trataba de aunar el sentimiento hispanoamericano choca de lleno con los planteamientos de la CE cuando se habla de control fronterizo.

Esta era una batalla cuyos inicios se remontan a 1985, cuando la Comisión de forma reiterada preconiza que la eliminación de las fronteras era un elemento importante del Mercado Interior. Sobre este asunto el vicepresidente de la Comisión, Martin Bangemann opinaba que la dispersión de los trabajos había impedido durante mucho tiempo realizar progresos definitivos ³⁷.

Con la constitución del grupo de coordinadores, denominado de Rodas, los trabajos avanzaban a un buen ritmo y fue posible establecer un consenso político de principio sobre los criterios de determinación del Estado miembro competente para las demandas de asilo.

Bangemann, meses después de concluir nuestra Presidencia, identificó el criterio de la acción futura comunitaria con el *catálogo de medidas* presentadas en el Consejo de Madrid. Las fronteras no constituyen sólo (contrariamente a lo que a menudo se venía pretendiendo) una muralla contra el crimen. En opinión de Bangemann, una mejor cooperación de la policía y un reforzamiento de las fronteras exteriores de la CE son medios mucho más eficaces que los controles esporádicos en las fronteras interiores.

Simultáneamente, para la prensa europea los resultados de los trabajos de Trevi se concentraron en las alternativas viables a los controles fronterizos ³⁸. Los alemanes, por ejemplo, veían cómo franceses y británicos se mostraban contrarios a una organización policial europea. El diario alemán *Die Welt* señalaba a

³⁷ "Priorité à la suppression des frontières", en *Revue du Marché Commun*, n° 334, Février 1990.

³⁸ *Le Quotidien de Paris* titulaba: "Reunidos ayer y hoy en Madrid los ministros de Interior de los Doce que estudian los medios de reemplazar los controles fronterizos" (13.5.89).

propósito de los resultados del encuentro en Madrid “La policía europea sigue siendo un remoto deseo”.

2.1.8 El Documento de Palma

En Palma se elaboró el inventario de las decisiones adoptadas para la desaparición de los controles fronterizos en 1993. Las medidas propuestas por España bajo la supervisión del coordinador del Grupo encargado de eliminar las trabas fronterizas, Rafael Pastor Ridruejo, constituían sin duda un primer paso para consecución de la Frontera Única Europea.

Así, en 1990 estaba prevista la armonización de los criterios de concesión de asilo y refugio, formulario común de solicitud de visado y lista común de países a los que se exige.

En 1991, fijaba el calendario, la conveniencia de establecer un equipo de redes informáticas en puertos y aeropuertos de la Comunidad. Y para el año 1992, el Grupo de Palma impondría la creación de un visado europeo y de un espacio de inspección tributaria, para el control del dinero negro obtenido por el tráfico ilícito de drogas.

El Documento no llegaba a interpretaciones jurídicas del Acta Única. Resulta interesante reproducir un párrafo de este Documento que ponía de manifiesto la siguiente idea: los miembros mantenían opiniones divergentes por lo que el Informe tiene un alcance concreto, y sus medidas no prejuzgan cuestiones de orden jurídico y político.

Como muy bien afirma Angel Boixareu³⁹, se trataba de reducir las controversias para poder elevar el contenido del Documento de Palma al Consejo Europeo, y por este motivo nuestra Presidencia se vio obligada a rebajar las pretensiones de la propuesta inicial.

Tanto Ridrujeo como el comisario europeo Martin Bangemann se mostraron en todo momento convencidos de que se iba a aprobar su contenido. Bangemann, por su parte, quiso también elogiar la labor del mandatario español encargado de coordinar la política sobre fronteras y dijo sobre su actuación que no había visto jamás “una forma tan silenciosa y elegante de resolver las dificultades como la suya” (*Abc*, 5.6.89).

Las 73 medidas estaban englobadas en 9 apartados que, como sabemos, hacían referencia a los distintos ámbitos de actuación sobre la implantación de la Frontera Única Europea y la desaparición de los controles internos. Y para realizar las inspecciones selectivas necesarias, y fortalecer los controles exteriores, se planteó entonces la creación de un cuerpo especializado de inmigración y aduanas⁴⁰, compuesto por policías y guardias civiles que podrían iniciar sus tareas en 1991.

2.1.9 El “espacio judicial europeo”

El llamado “espacio judicial europeo” se debatió en San Sebastián en un momento en que la CE endurecía las leyes de inmigración y arbitraba la aplicación de métodos de urgencia absoluta para la expulsión de extranjeros ilegales. Existía un escaso reforzamiento del derecho derivado en relación con

³⁹ “La Europa de los Ciudadanos”. Angel Boixareu Carrera. Ed. Lex Nova. Universidad de Valladolid, 1993.

⁴⁰ *Abc* 6.6.89

este “espacio judicial” y, por tanto, la CE participaba fundamentalmente de una política policial⁴¹.

En su editorial *El País* manifiesta su criterio sobre un hecho evidente: el papel “anodino” de los jueces en el control de las relaciones estatales intracomunitarias que afectaban a la seguridad. Podía constatarse la que los Gobiernos se resistían a perder competencias en la seguridad ciudadana y en el orden público. Tampoco resultaba fácil avanzar en la armonización de las penas por acciones delictivas

Llegado a este punto, *El País* lanzaba la siguiente reflexión: el espacio policial había adquirido institucionalmente y en la práctica un desarrollo específico en la CE a través de “la constitución y del funcionamiento autónomo del *Grupo de Trevi*, formado por los ministros del Interior y Policía” (*El País*, 6.6.89). Pero, sin lugar a dudas, la constitución de un espacio judicial europeo era un proyecto realizable, aunque a muy largo plazo.

2.2 Derecho de residencia, los profesionales ante el Mercado Único y el Estatuto de la Sociedad Europea.

2.2.1 Derecho de residencia

El primer derecho del ciudadano europeo consiste en poder circular, trabajar y residir en la Comunidad. El Tratado de Roma conocía expresamente este derecho. En 1979 la Comisión presentaba una propuesta de directiva en vistas a ampliar el derecho de residencia al conjunto de los ciudadanos. Este asunto llevaba 10 años sobre la mesa de negociación, y la Presidencia española luchó por obtener un acuerdo para ampliar el derecho de residencia.

⁴¹ *El País*, 6.6.89

Pero el 3 de mayo, ante la falta de consenso entre los Doce, el comisario encargado del Mercado Interior, Martin Bangemann, retiró la propuesta inicial que afectaba a los ciudadanos no activos. El acuerdo político del Consejo sobre las directivas liberalizadoras llegaría ya en la Presidencia francesa (21 y 23 de diciembre). En el mes de junio de 1990 se dictaron las tres directivas sobre derecho de residencia a los estudiantes, jubilados y personas sin actividad alguna.

Cuando el vicepresidente Bangemann, junto con Delors y los comisarios Dondelinger y Vasso Papandreu se comprometieron a retirar la propuesta inicial, si no se alcanzaba el consenso político, Pedro Solbes señalaba –visiblemente enojado- que la decisión de Bangemann se efectuó “contra toda previsión”⁴².

La información de los medios españoles contemplaron este suceso –casi unánimemente- como un duro golpe para nuestra Presidencia. *El País* invocaba que la “frustrada” directiva destinada a consagrar la libertad de residencia para estudiantes y jubilados seguía en un “callejón sin salida”. Incluso Solbes abandonó su habitual cautela y refutó al comisario de Mercado Interior la conveniencia de consultar con “ellos” previamente su decisión. *Cinco Días* (4.5.89) hablaba del “traspiés” de Bruselas y acusaba a Dinamarca, Holanda y Grecia de ser los países que más reparos impusieron.

Ese mismo día, *La Economía* informa que fuentes británicas y de procedencia belga llegaron a manifestar su “contrariedad” por la inadecuada postura de la Comisión. Inmediatamente Bangemann se defendió alegando que la línea de negociación que se estaba discutiendo “no hubiera permitido ningún acuerdo”.

Un apunte más respecto a esta polémica. Algunas delegaciones manifestaron su preocupación por la influencia de esta decisión en las Elecciones

⁴² *Diario 16*, 4.5.89.

Europeas⁴³, ya que los candidatos se verían obligados a responder a preguntas esenciales relacionadas con la ciudadanía comunitaria.

2.2.2 Los profesionales ante el Mercado Único Europeo

Desde la entrada en vigor del Tratado de Roma en 1958, el legislador europeo quiso favorecer las disposiciones sobre libre prestación de servicios así como la libertad de establecimiento de las profesiones liberales.

El trabajo de aproximación de las disposiciones legislativas dio lugar al reconocimiento mutuo de algunos diplomas (médicos, enfermeras, veterinarios, etc.). Hay que añadir, además, que con la directiva 88/49/CE de 21 de diciembre (publicada en el Diario Oficial de la CE, 24 de enero de 1989) se generalizaba este reconocimiento de titulaciones de enseñanza superior.

Únicamente España y Portugal tuvieron que esperar dos años antes de poder aplicar esta normativa que, sin embargo, para el resto de los Estados miembros entraba en vigor a partir de 1990⁴⁴.

2.2.3 Libre circulación de los futbolistas

En un acalorado debate, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó el 11 de abril –por amplia mayoría– la propuesta sobre libre circulación de los futbolistas profesionales.

El eterno problema del traspaso de los jugadores se llegó a discutir en la eurocámara, a raíz de las declaraciones del democristiano holandés Van Raay. Éste calificaba el cobro del club por efectuar un traspaso de un jugador a otro equipo de

⁴³ *La Economía*, 6.5.89.

⁴⁴ FONTAINE, Pascual: “Diez lecciones sobre Europa”. Luxemburgo, 1992.

“una forma moderna del comercio de esclavos, una violación de la libertad de contrato y de la libertad de circulación garantizada por el Tratado de Roma”⁴⁵.

El Parlamento europeo pretendía desde su foro, la supresión del sistema de fichajes y traspasos que en esos momentos estaba vigente, y desde este foro se defendía que el control que existía de las federaciones nacionales de fútbol y de la UEFA se consideraba monopolístico y por lo tanto, tenía que desaparecer⁴⁶.

Pero en la Cámara también se escucharon voces opuestas a esta medida. El irlandés Sylvester Barret (según constata *Diario 16*) no entendía por qué el Parlamento se inmiscuía en ese deporte, y la diputada conservadora británica, Shelag Roberts, consideraba un poco “extravagante” definir a los futbolistas como “esclavos”.

2.2.4 El futuro de algunas profesiones liberales

Los veterinarios fueron los primeros profesionales que llevaron a cabo la transposición al régimen jurídico nacional de la directiva comunitaria. Con el Real Decreto de 6 de abril los veterinarios europeos iban a poder ejercer su profesión en todo el territorio comunitario. Los diplomas, certificados y otros títulos expedidos por los Estados miembros que cumplieran una serie de requisitos de formación, serían admitidos con los mismos efectos que el título oficial de Licenciado en Veterinaria⁴⁷.

Sin embargo, representantes del Consejo General del Colegio de Veterinarios no veían con optimismo la aplicación del citado Real Decreto porque, según manifestaciones de Orozco⁴⁸, integrante de dicho Consejo, iban a ser más, a

⁴⁵ *Abc*, 12.4.89.

⁴⁶ *Diario 16*, 12.4.89.

⁴⁷ El Real Decreto de 6 de abril trasladaba a nuestro Ordenamiento Jurídico las directivas comunitarias: 78/1026, 81/1057 y 78/1027.

⁴⁸ *YA*, 28.4.89.

corto plazo, los profesionales procedentes de la CE que los españoles que traspasaran la frontera.

Los farmaceúticos, por su parte, no veían al Mercado Único como algo preocupante para su profesión. Un miembro del Comité Consultivo para la Formación del Farmaceútico, Francisco Zaragoza, adelantaba que los requerimientos de información de los farmaceúticos españoles a sus colegios profesionales sobre la posibilidad de instalarse en otros países era “escasísima”⁴⁹.

Los psicólogos, en opinión del presidente de la Junta Rectora del Colegio de Psicólogos de Madrid, Manuel Berdullas, tampoco iban a tener mucha movilidad por Europa. Su plan de estudios era distinto al seguido por sus colegas comunitarios. Aunque desde hacía 8 años esperaban la aprobación de un marco legal que definiera su profesión.

En cuanto a los Colegios Profesionales, hasta entonces, la Comunidad no aceptaba los certificados expedidos por estas instituciones, y aunque deseaban alcanzar un estatus especial en la Europa comunitaria, el Gobierno socialista no se apresuraba en clarificar su situación de cara al 93⁵⁰.

La posición más delicada frente al 92 la protagonizaron los notarios, dado el carácter a la vez público y privado de estos profesionales. Se implantó para los notarios la llamada “red de corresponsales”. Como explicaba el delegado del Notariado para Asuntos Internacionales y secretario de la Conferencia Permanente de Notarios de la CE, Augusto Gómez Martinho Faerna: “Tenemos que ceñirnos a nuestra circunscripción territorial y no podemos ejercer los derechos de libertad de establecimiento ni de libre prestación de servicios”. Sin embargo, los notarios

⁴⁹ Ya, 27.4.89

⁵⁰ Ya, 7.5.89.

estaban autorizados a realizar asesoramientos privados en otros Estados con la colaboración de otros colegas⁵¹.

2.2.5 El Estatuto de la Sociedad Europea

La Comunidad Europea era consciente de que el proceso integrador que había iniciado no podía conseguirse sin la unión de las empresas. La propuesta sobre el Estatuto de la Sociedad Europea era un objetivo que desde la Comisión se quería encauzar para la creación de multinacionales en el ámbito europeo.

De acuerdo con esto, la necesidad de asociacionismo empresarial estaba condicionada por un hecho insólito: era más abundante la cooperación de empresas de la CE con otras extracomunitarias que la colaboración de empresas europeas entre sí.

A principios de enero, el diario *El País* nos informaba de la elaboración de un proyecto para la creación del Estatuto de Sociedad Europea. Pero su dificultad parecía estibar en las distintas legislaciones que obstaculizaban la creación de un proyecto global capaz de operar en la CE⁵².

La iniciativa quedó anteriormente congelada en 1982, por una falta de cohesión en el derecho comunitario y por la conflictividad que suponía la participación de los trabajadores en los órganos de control de la Sociedad.

Ramón Girbau Pedragosa aporta un valioso artículo que bajo el título “Estatuto de la Sociedad Europea” (I y II) trata de explicarnos la iniciativa comunitaria para la estructuración de las empresas. Surgen, así, diferencias por la diversidad de regímenes fiscales. Resulta un factor determinante que las actividades de un grupo estuvieran sujetas a regímenes impositivos diferentes que “a falta de

⁵¹ Ya, 22.5.89.

una base imponible única, impiden en la liquidación de los impuestos sobre la renta de las sociedades, la compensación transnacional de pérdidas” (*Expansión*, 9.2.89).

2.2.6 La sociedad unipersonal y la Agrupación Europea de Interés Económico

Una vez que la Presidencia española alcanzó una posición común respecto a la 11ª Directiva sobre Publicidad de las Sucursales en otros Estados miembros, se trató de obtener la aprobación de un estatuto especial para las “sociedades unipersonales”. El objetivo no era otro que el de fomentar la actividad de aquellos empresarios que, a menudo, arriesgaban su patrimonio en la marcha de la empresa. De aprobarse esta medida, el empresario vería limitada su responsabilidad al diseccionar su patrimonio personal de la financiación de su empresa⁵³.

En el Consejo de Ministros celebrado el 12 de junio, se aprobó por unanimidad la propuesta de la Comisión sobre Sociedades Unipersonales que, desde el principio, recibió un gran impulso del comisario para las PYMES, Abel Matutes. Desde ese momento cualquier empresa con un capital aportado por un solo socio podría beneficiarse de las normas más flexibles de funcionamiento que rigen a las sociedades anónimas. Para alivio de los pequeños empresarios, en caso de quiebra, sólo tendrían que responder con la parte de su patrimonio comprometida en el negocio.

En la prensa económica se registró este avance como un hecho beneficioso para los pequeños y medianos empresarios. *La Gaceta* habla de “imposición de Bruselas” para modificar la Ley de Sociedades (15.6.89).

Por otra parte, la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE) se constituyó en Barcelona con los bufetes de abogados de nueve países de la CE.

⁵² *El País*, 8.1.89.

Resultaba ser una nueva fórmula societaria integrada en un grupo transnacional de sociedades, impulsado por la Comisión.

La Vanguardia calificaba esta figura societaria de “embrión” de las futuras sociedades comunitarias y anunciaba que entraría en vigor el 1 de julio de 1989⁵⁴. Sin necesidad de aportar un capital mínimo, sólo era preciso realizar la inscripción en el registro correspondiente del Estado en que cada AEIE haya fijado su sede social⁵⁵.

⁵³ *Cinco Días*, 8.5.89.

⁵⁴ *La Vanguardia*, 16,6,89.

⁵⁵ Reglamento CEE nº 2137/85, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de la Agrupación Europea de Interés Económico (AEIE).

2.3 Conclusiones del capítulo

- La Presidencia española realizó un impulso coordinador de los Organismos Intergubernamentales comunitarios (Grupo de Trevi, Grupo de Rodas). Por lo que su estrategia, de acuerdo con el criterio establecido en Rodas (1985) estableció una línea de cooperación intergubernamental en la lucha contra el terrorismo, tráfico de drogas, etc.
- La Europa sin Fronteras encuentra un principal adversario en Gran Bretaña que, junto a Irlanda, Dinamarca y Grecia forman un bloque partidario de los controles fronterizos.
- En la reunión de Sevilla del Grupo de Trevi (9 de marzo) se genera un profundo debate entre los partidarios de eliminar las fronteras (Grupo de Schengen) y los que abogan por mantener los controles fronterizos. En definitiva, la prensa española contemplaba “escasos” resultados de la reunión.
- Los editoriales y artículos de opinión apuntan –sobre todo- al difícil compromiso de España respecto a la inmigración iberoamericana. A través de estas opiniones se consolida un discurso que restringe el acceso de los extranjeros y la concesión de refugio a los casos mínimos. Algunos políticos denuncian a la opinión pública que en esta limitación de los derechos humanos se esconde una “cierta rentabilidad electoral”.
- En la cobertura informativa que presentaban los diarios españoles analizados se refleja que en las negociaciones para el ingreso de España en “Schengen” estaba muy presente el terrorismo de ETA y también se refleja una pretensión más acentuada de aproximar las legislaciones nacionales para combatir el fenómeno terrorista.

- La reunión del Grupo de Trevi en Madrid incluía en su agenda dos temas puntuales: creación de la futura “policía de la CE” y endurecimiento de las medidas de control de la entrada de inmigrantes. Sobre todo, los diarios vascos aportaron una visión más radical sobre los resultados del encuentro.
- Gran despliegue informativo y de opinión derivado de las medidas restrictivas que desean imponer a los inmigrantes. El espacio policial adquiere importancia con los planteamientos que se discuten en el seno del Grupo de Trevi.
- El diario *Abc* detalla aspectos concretos del Documento de Palma elaborado por el grupo de coordinadores para la eliminación de las fronteras comunitarias.
- Escasa coordinación entre la Presidencia española y la Comisión en relación con la propuesta sobre el derecho de residencia de jubilados y estudiantes. Este es un tema que provoca abiertamente la “irritación” del secretario para las Comunidades Europeas, Pedro Solbes. Sin embargo, apenas existe un debate en la prensa sobre esta “directiva frustrada” de gran repercusión social.
- Amplia cobertura del diario *YA* en relación con las profesiones liberales de cara a 1992. Los futbolistas y clubes protagonizaron un caluroso debate en los medios por encima de otras profesiones.
- Es frecuente encontrar titulares donde se percibe una relación directa entre las medidas comunitarias y la legislación nacional en materia de sociedades. Los expertos en fiscalidad crean un clima de opinión favorable a la constitución de un Estatuto de la Sociedad Europea. Sin embargo, esta base legal comunitaria no es viable por el hecho de no existir la armonización fiscal necesaria entre los Estados miembros.

CAPÍTULO III:

Mercado Interior (II): Armonización Fiscal

3.1.1 La propuesta “Scrivener” sobre retención fiscal

Los países miembros contaban con una tributación muy dispar en materia de imposición en la fuente sobre las rentas de capital. En Luxemburgo, por ejemplo, la retención era nula; en otros, como la República Federal Alemana, esta retención oscilaba entre el 10% y en Gran Bretaña estaba en función del importe de la inversión. España, por su parte, establecía una retención del capital que oscilaba entre el 20% y el 35%.

Con el fin de lograr la mínima armonización para 1992, la Comunidad Europea elaboró el llamado “Libro Blanco” en el que se fijaba un calendario para la aprobación de directivas tributarias armonizadoras.

Con la liberalización de los movimientos de capitales, éstos iban a desviarse hacia aquellos países en que la retención practicada a los pagos por dividendos o por intereses fuese nula o inferior a la del país de origen. Las autoridades comunitarias no trataban de imponer un tipo uniforme de retención, sino que optaban por establecer un tipo mínimo del 15%.

Ya en su primera comparecencia la comisaria Cristiane Scrivener presentó dos proyectos de directiva comunitaria. El primero, estaba referido a la retención mínima sobre intereses de capital y el segundo, estaba relacionado con la cooperación entre administraciones fiscales (no significaba, en modo alguno, la supresión del secreto bancario, pero sí la colaboración en caso de sospecha de fraude).

La “explosiva” propuesta indicaba que los intereses percibidos por todos los residentes de la Comunidad Europea, sufrirían una retención del 15% en sus cuentas bancarias, acciones, obligaciones u otros valores mobiliarios. *La Vanguardia* describía la repercusión de esta medida: “lleva trazas de convertirse en la batalla más sangrienta de la Presidencia española” (*La Vanguardia*, 9.2.89).

Cabe señalar que, en su proyecto, la directiva autorizaba a los Estados miembros a excluir del tratamiento general a los pequeños ahorradores, los eurobonos, los residentes de países terceros no comunitarios, las transacciones entre empresas y los intereses pagados por particulares.

La firma de la propuesta no se presentaba fácil y el ministro Carlos Solchaga, junto a la comisaria Scrivener, iban a iniciar una seria negociación para que los ministros de Economía y Finanzas dieran su aprobación unánime antes del 30 de junio.

“Las medidas que proponemos apuntan a suprimir o atenuar los riesgos de distorsión, de evasión o de fraude fiscal derivados de la diversidad de regímenes nacionales”, aseguraban desde la Comisión (*La Vanguardia*, 9.2.89)

Cuando sólo faltaban dos años para la fecha mítica de 1992, la liberalización del mercado de capitales obligaba al Consejo de Europa a tomar

por unanimidad una decisión sobre armonización fiscal. La libertad de movimientos de capitales no podía ser efectiva si no se lograba la tributación única del ahorro.

Por otra parte, a la hora de desvelar el secreto bancario, la apuesta de Scrivener recomendaba la colaboración entre las distintas administraciones tributarias aunque se respetaba el secreto bancario por encima de la presunción de delito (*ver la revista Mercado/381*, 23.2.89). La directriz sobre el secreto bancario se creó en 1977 y los países que la mantenían eran Bélgica, Luxemburgo, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda y Alemania.

Pese a las dificultades en su elaboración, la propuesta de la Comisión sobre la fiscalidad del ahorro implantó tres claros objetivos:

- a) Combatir el fraude fiscal.
- b) Evitar movimientos artificiales de capital.
- c) Salvaguardar la competitividad financiera de la CE frente a paraísos fiscales europeos.

Era evidente que la Comisión se topaba con una serie de problemas ante la disparidad de situaciones fiscales: Con el futuro establecimiento de esta propuesta era más probable que el ahorro se desplazara hacia bancos e instituciones financieras de terceros países. Además, las medidas tendentes a combatir el fraude fiscal implicaban un alza sensible de las tasas de interés, con el encarecimiento del dinero para las empresas y los gobiernos europeos.

El debate quedaba abierto en el Consejo de Economía y Finanzas celebrado el 13 de febrero. En dicho Consejo, y desde un principio, Inglaterra y Luxemburgo se mostraron contrarios a la iniciativa propuesta por la Comisión sobre fiscalidad del ahorro. Cuando durante la anterior presidencia alemana se consiguió desbloquear la liberalización de los movimientos de capitales en la CE,

los partidarios de la llamada “Europa sin fronteras” ganaron una baza importante. Pero este avance se detuvo por la presión ejercida desde Gran Bretaña.

La Vanguardia resume estas dificultades en el artículo de Juan Hernández Puértolas: “Trabas en la libre circulación de capitales”. Sobre las trabas a la libre circulación de capitales, Puértolas lanza una reflexión sobre el alcance del control estatal: “El ex-ministro de economía Otto Lamsdorff ponía el dedo en la llaga cuando afirmaba: “no se puede crear una moneda por decreto sino que tiene que ganarse un sitio en el mercado”... “En definitiva, el proceso de integración europea –argumenta– no se libera de un “cierto tufillo intervencionista”⁵⁶ (*La Vanguardia*, 1.4.89)

En el Consejo de Economía y Finanzas surgieron las divergencias en materia fiscal. Luxemburgo acusaba a Francia de pretender encabezar una ofensiva junto con la Comisión⁵⁷. La opción de Scrivener fue defendida por el Secretario de Comercio, Pedro Pérez, y aunque al término el ministro Solchaga trató de suavizar el fracaso obtenido manifestando que “no se habían producido oposiciones totales al proyecto”, no se descartó la posibilidad de trasladar el tema al Consejo Europeo de Madrid⁵⁸.

El argumento de Luxemburgo para bloquear la directiva de Scrivener se apoyaba en la fuga masiva de los capitales después de la implantación de una retención en los impuestos. En su calidad de vicepresidente del Gobierno, Jacques Poos, declaraba que no veía posibilidad de alcanzar un consenso y que el “Gran Ducado” tenía la intención de seguir siendo un “paraíso fiscal” para los no residentes. Un decreto-ley reforzaba el secreto bancario al permitir que las

⁵⁶ El ex ministro de Economía y entonces presidente del Partido Liberal Alemán, Otto Lamsdorff, efectuó estas declaraciones en la reunión organizada en Barcelona por Euroforum.

⁵⁷ *Cinco Días*, 12.2.89.

⁵⁸ *El País*,

administraciones fiscales no contaran con autorización para exigir a las financieras información sobre sus clientes⁵⁹.

3.1. 2 Flexibilidad en la armonización del IVA

La imposibilidad de lograr un acuerdo sobre fiscalidad entre los Estados miembros estimuló la labor del Ejecutivo comunitario en el planteamiento de una estrategia de “globalidad” con cambios radicales en la imposición sobre el ahorro y el IVA.

La Presidencia española se concentraba en otra directiva pendiente: la de la coordinación de las administraciones fiscales. La complejidad de los dossiers del IVA y la de los impuestos indirectos por un lado, y la complejidad de la fiscalidad del ahorro por otro, no evidenciaba una solución inmediata al problema. En la reunión preparatoria del Consejo Europeo, Solchaga estudió la posibilidad de adoptar dos posiciones técnicas en relación con los bancos, con el IVA y con las medidas tendentes a alentar la cooperación entre las empresas por encima de las fronteras.

Leon Brittan alegaba a propósito del control comunitario: “La CE no busca limitar los accesos de su mercado financiero a los bancos de terceros países, más bien, por el contrario busca obtener una liberalización de los mercados financieros a nivel mundial” (*Diario 16,17.4.89*).

En la fiscalidad sobre el ahorro no hubo modificaciones en relación con la propuesta defendida por la Comisión. España, en el plano técnico, quería centrar las discusiones en la exoneración a favor de las euroobligaciones de los residentes de países terceros.

⁵⁹ *El País*, 2.4.89.

Quisiera hacer un inciso sobre el protagonismo de la Patronat Català Pro Europa en los círculos empresariales catalanes. Este organismo, en palabras de su Presidente, Carles Gasóliba, preparaba varias directrices enfocadas al logro de la armonización de los impuestos especiales, de las retenciones de la fiscalidad sobre el ahorro y del IVA⁶⁰.

Ahondando en este tema, hemos recogido también la opinión del Presidente del Comité Fiscal de la Confederación Fiscal Europea, Josep Santacana, que calificaba de “utópica” la uniformización de los impuestos. En su calidad de Presidente, cree sin embargo, que el verdadero problema radica en la diversidad de políticas económicas debido a la diferente adscripción de sus líderes. Por lo tanto, según sus reflexiones, únicamente era posible una unión fiscal si previamente existía una unión política. Con talante excéptico, Josep Santacana, ante la inminente llegada del Mercado Único de 1992, advirtió sobre imposibilidad de alcanzar los “hitos fijados” en materia fiscal para esa fecha⁶¹.

Pese a las dificultades sólo sería posible solucionar el bloqueo de las propuestas de la Comisión si los Doce aceptaban un tratamiento conjunto de la armonización de los impuestos directos e indirectos. En esta línea se manifestó el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, al término de una reunión de expertos. Este grupo de expertos iba a debatir la propuesta de Scrivener periódicamente. “Tenemos que elaborar un nuevo paquete global en el que las pérdidas que algunos países van a registrar con la aproximación indirecta, se compensen con ganancias con la imposición directa”, manifestaba José Borrell (*Cinco Días*, 12.5.89).

Así pues, días después, la Comisión presentó un tipo normal fijo del 15%, suprimiendo de este modo la horquilla establecida anteriormente. De inmediato,

⁶⁰ *La Vanguardia*, 19.4.89.

⁶¹ *La Vanguardia*, 19.4.89.

el ministro de Finanzas alemán expresó su oposición al aumento del IVA que por entonces se aplicaba en Alemania (14%).

Después de la reunión de los expertos en Finanzas, a falta de un acuerdo en la retención sobre el ahorro, la colaboración fiscal acaparó la atención de toda la prensa. Con optimismo evidente, Borrell consideraba posible lograr un acuerdo en relación con la Segunda Directiva de la CE sobre “coordinación en las administraciones fiscales”⁶². En este sentido, en opinión del secretario de Estado de Hacienda español, José Borrell, Luxemburgo no podía mantener una posición “numantina” hasta el final si once Estados miembros eran favorables a ella⁶³.

De ahí que la aproximación de los impuestos indirectos fue la medida comunitaria de más relieve según los diarios analizados en la edición del día 18 de mayo.

Abc: “Se flexibiliza la armonización del IVA para poder desbloquear el debate fiscal”.

Diario 16: “La CE deja libertad a los Doce para que se aproximen los impuestos indirectos”.

Expansión: “La Comisión Europea flexibiliza su propuesta sobre armonización de la fiscalidad indirecta”.

El Periódico: “La Comisión suaviza el plan de armonización fiscal”.

La Comisión planteó para eliminar las fronteras fiscales, en primer lugar, la puesta en marcha de un periodo transitorio, de acercamiento de los impuestos indirectos para enero de 1993. Además, el Ejecutivo comunitario también

⁶² *Abc*, 13.5.89.

proyectó un tratamiento más pragmático de la problemática derivada del IVA y una mayor flexibilidad en materia de derechos especiales sobre el alcohol, el tabaco y los productos derivados del Petróleo.

3.1.3 Oposición alemana a la retención fiscal del 15%

El 19 y 20 de abril se reunían en París el presidente francés Francois Mitterrand y el canciller federal alemán Helmut Kohl con el fin de discutir sus respectivos puntos de vista en torno a la unión monetaria y la armonización fiscal. El ministro alemán de Finanzas Theo Waigel advirtió, desde un principio, su manifiesta oposición a la retención en origen del 10% de las rentas del capital; y proponía su modificación o eliminación. En París se hablaba de “auténtica provocación” porque vulneraba la idea de armonización fiscal que defendía la CE.

La retención alemana (10%) fue un “duro golpe” para el ámbito comunitario. Evidentemente, el canciller Helmut Kohl “cedió ante la opinión pública de su país”, según *La Vanguardia* y *Abc* (28.4.89).

Por otra parte, Jacques Delors y Scrivenner confiaron rotundamente en el compromiso y apoyo de Kohl al proyecto de armonización fiscal. Declaraba Scrivenner al diario *Les Echos*: “Las posibilidades de un compromiso comunitario no son hoy inferiores a las que antes existían” (28.4.89). Con la certeza de alcanzar un compromiso fiscal, Scrivenner consideró que las divergencias podían solucionarse en el seno de un grupo de alto nivel constituido por el Consejo y apostó por encontrar el consenso en puntos técnicos tan importantes como los relativos a la exoneración de las euroobligaciones, al tratamiento fiscal de los trabajadores emigrantes y a la retroactividad en la aplicación de la retención.

⁶³ *Diario 16*, 14.5.89.

Sobre todo en Francia, el abandono alemán obtuvo numerosas críticas. Las páginas de los diarios franceses informan que la retención alemana podía “envenenar” el clima electoral que se avecinaba y también podía obstaculizar de alguna forma la liberalización de los movimientos de capitales.

También observamos que hubo cierto aislamiento de París en esta batalla. Cuando la estrategia era precisamente aislar a Margaret Thatcher, fue Francia quien se encontró sola frente a Gran Bretaña y Alemania⁶⁴.

Creo que conviene reflejar que en nuestro país algunos opinaban que la armonización más importante se debía aplicar a la tributación sobre la renta, en general, y sobre las plusvalías, en particular. Sánchez Bella Carswell publicó un artículo sobre este tema (“Armonización fiscal europea: mito o realidad”). En él manifiesta que España era el país que peor trataba fiscalmente a las plusvalías. Además, también contemplaba este artículo, en España “se contaba con los tipos marginales más elevados del Mercado Común” (*Expansión*, 22.2.89).

Otras voces críticas manifestaron que la Directiva sobre fiscalidad cobraba importancia también por los puntos que omitía. La Comisión no había afrontado el problema de la retención en fuente de los dividendos de acciones. Otro aspecto que no trató era el de la declaración bancaria obligatoria. Por su ataque directo al secreto bancario, el veto sería directo en países como Luxemburgo. Ricardo García Vicente cree que la directiva sobre fiscalidad acabaría poniendo en juego, además de la libre circulación de capitales, la capacidad de competencia de los sistemas bancarios y la potenciación de la Comunidad como centro financiero⁶⁵.

⁶⁴ *Le Tribune de L'Expansion*, 28.4.89.

3.1.4 Encuentro en S'Agaró

En S'Agaró la Presidencia pretendía allanar el debate de la Cumbre de Madrid sobre este capítulo. El establecimiento de una retención de la fuente del 15 por 100 se encontraba totalmente bloqueada .

Respecto al IVA se perfilaba que la propuesta original basada en el establecimiento de dos bandas (la reducida entre el 4% y el 9% y la normal entre el 14% y el 20%) podía dejar paso a otra nueva propuesta. En la nueva propuesta se conservaría la banda reducida y la banda superior estaría limitada por debajo, por una tasa mínima del 15%.

En S'Agaró también se debatiría la concesión a Gran Bretaña de una cláusula especial con la que mantendría el IVA cero sobre determinados productos. Esta exigencia británica complicaba, en parte, el proceso de armonización fiscal. El diario económico *Expansión* apunta que la armonización de la fiscalidad indirecta iba a crear a España “problemas adicionales” porque obligaría a subir en tres puntos el tipo normal (12%) que era el que se venía aplicando. En consecuencia, según este diario, la nueva propuesta acarrearía un efecto negativo en la lucha del Gobierno contra la inflación (*Expansión*, 22.5.89).

Al encuentro informal -presidido por Carlos Solchaga- asistieron el presidente de la Comisión Europea Jacques Delors, y los Comisarios de Fiscalidad, Christiane Scrivener y de Asuntos Financieros Henning Christophersen. Tampoco podemos pasar por alto que, antes del comienzo de la reunión, González acusó a Gran Bretaña de “olvidar” ciertos aspectos del Acta Única, y se mostró excéptico con los plazos previstos para la construcción del Mercado Único (*Cinco Días*, 19.5.89).

⁶⁵ “La armonización fiscal, un reto para la Presidencia española”. *El País*, 13.3.89.

La situación de bloqueo en S'Agaró permitía concentrar todos los esfuerzos en la cooperación entre las administraciones fiscales de los Estados miembros para perseguir el fraude. A la hora de aceptar dicha "cooperación", las posturas se situaban en once contra uno (*Cinco Días*, 22.5.89).

Algunos diarios difunden las tensiones surgidas en esta discusión. El diario *YA* no esconde en su titular el escaso optimismo frente a los resultados: "La cumbre de S'Agaró confirma el fracaso de la propuesta de la armonización fiscal" (*YA*, 22.5.89). El economista catalán, Alfons Almendros, opina en un artículo escrito para *La Gaceta* ("La resaca de S'Agaró") que la denominada "autoridad fiscal intervenida" había descendido en importancia. Parece que se ha avanzado un paso más en la concepción de "una Europa más abierta, liberal, de mínimos, frente a la concepción intervencionista, socialdemócrata". Otro aspecto interesante que añadía Almendros se centraba en las características estructurales de nuestro país: un nivel de déficit público difícilmente financiable a otros tipos de interés y un sistema bancario y financiero aún aislado del exterior (*La Gaceta*, 27 y 28. 5.89).

Los protagonistas que acudieron a S'Agaró adoptaron diversas estrategias. Como alternativa, el ministro alemán Theo Waigel ofrecía una mejora de las relaciones entre bancos. Giuliano Amato, ministro del Tesoro italiano, reclamaba que para ello era necesaria la supresión del secreto bancario. De los acontecimientos acaecidos en la RFA se dedujo que la intransigencia alemana había dividido en dos a Europa. Muchos países que hasta el momento se habían mostrado bastante favorables a la armonización de la retención plantearon sus dudas tras el caso alemán (que estableció una retención del 10% que, cuatro meses más tarde, se destruiría). A pesar de estas reticencias, el alto órgano ejecutivo de la CE decidió mantener su postura y solicitar soluciones alternativas.

Es significativo y válido, para entender la situación fiscal, el texto del editorial que publica *Il Sole 24 Ore* (23.5.89). Se advierte la falta de unanimidad en política fiscal: “La alergia -señala el diario de Milán- a la supranacionalidad en temas de política fiscal y monetaria de Gran Bretaña y Luxemburgo es muy conocida (...) las peleas de S’Agaró pueden considerarse como una transición en cierto sentido prevista”.

Desde este momento, la Cumbre de Madrid adquiriría una importancia determinante. Pero antes de lanzar predicciones, los comentaristas europeos coincidían en una advertencia: Había que esperar a conocer los resultados de los comicios europeos. Aunque, según manifestó el secretario general de la Confederación Europea de Asociaciones Económicas, Pierre Maillet, la clave en la construcción del Mercado Único iba a determinarse en el mes de diciembre, en la Cumbre de París.

En el Consejo Ecofín (19 de junio) se constituyó un grupo “ad hoc” para examinar las nuevas propuestas de la Comisión. La comisaria de política fiscal declaraba días antes “podemos prever la introducción de un sistema de declaración en el que se faculte para interrogar en cualquier momento sobre qué se hace con el dinero” (*Cinco Días*, 17.6.89). En estas declaraciones, Scrivenner admitía abiertamente el sistema de declaración americano a la hora de exportar capitales.

En Madrid, el Consejo Europeo constató su preocupación por el retraso en la búsqueda de soluciones al problema fiscal sobre el ahorro. A su vez, este Consejo dejó claro que con la liberalización de capitales había que evitar el fraude y la evasión fiscal y que el acuerdo tenía que alcanzarse antes del 1 de julio de 1990. El texto del comunicado señalaba:

“El Consejo Europeo expresa su preocupación por el retraso que existe en la búsqueda de una solución al problema de la fiscalidad sobre el ahorro y subrayar la necesidad de hacer todo lo posible para que la liberalización de los movimientos de capitales no facilite el fraude ni la evasión fiscal. Solicita al Consejo que intensifique sus esfuerzos por hallar una solución satisfactoria al problema de la fiscalidad al ahorro, de forma que se llegue a un acuerdo antes del 1 de julio de 1990.

“El Consejo Europeo ha tomado nota de que en la actualidad se está llevando a cabo un debate profundo en el ámbito de la fiscalidad europea, basado en las nuevas orientaciones propuestas por la Comisión teniendo en cuenta las sugerencias de los estados miembros, y de que se ha establecido un procedimiento para la continuación de dicho debate. El Consejo Europeo subraya la necesidad de llegar a un acuerdo antes de final de año sobre las grandes líneas para una solución en este ámbito, teniendo en cuenta todos los problemas que ello entraña, con el fin de garantizar el funcionamiento del mercado interior en el plazo previsto”.

3.2 Rebelión fiscal en Canarias

3.2.1 La denuncia de la Comisión europea

El archipiélago canario quedó fuera de la política comunitaria de agricultura y pesca en 1986. Además, las Islas quedaron excluidas de la Unión Aduanera. Por esta razón el Gobierno autonómico canario se negó a aplicar el 15% de rebaja en la tarifa del arbitrio y, en consecuencia, el Gobierno central no vio con buenos ojos esta medida porque al aplicarla se recaía en el incumplimiento de la normativa comunitaria.

En 1988 el Parlamento canario aprobó un memorándum donde se exigía mantener el “estatuto especial de la CE”. En este estatuto las Islas quedaban fuera de la reglamentación que imponía la Unión Aduanera y también de la aplicación del IVA.

Con estos antecedentes encima de la mesa, la solución que se barajaba en medios políticos dependía de la modificación del “Régimen Económico y Fiscal” que continuaba vigente desde 1972. Los gobernantes canarios se asesoraron detalladamente, dadas sus competencias en materia de gestión e inspección fiscal.

Sin pretender agotar todos los aspectos de esta cuestión, en el análisis que dedica el editorial de *Diario 16* publicado el 1 de febrero de 1989 se lanza una reflexión sobre la conveniencia de permanecer fuera del ámbito comunitario. Aunque, por otra parte, la solución esperada de Bruselas pasaba por la creación de una zona comunitaria de puerto franco, para que las Islas emprendieran una nueva etapa de revitalización de la economía⁶⁶.

La prensa fue unánime al resaltar que en el conflicto canario fue aplazado el procedimiento jurídico por incumplimiento del mandato comunitario. No obstante, la Comisión solicitó a Madrid una justificación detallada de la actitud fiscal de las Islas. Leemos algunos titulares que dicen:

“La CE aplaza el procedimiento de infracción sobre Canarias”, *Expansión* (2.2.89); en la misma línea, ese mismo día, informaba el diario *YA*: “Se retrasa el inicio del procedimiento de infracción por el asunto de Canarias”.

El Periódico catalán calificó en su editorial⁶⁷ de “sinrazón” la desobediencia de las autoridades canarias al Consejo de Ministros, cuando la Mesa del Consejo de Ministros solicitaba el cumplimiento de los compromisos internacionales firmados tras la adhesión. Si bien es cierto que la disposición adicional tercera de la Constitución garantizaba un régimen económico y fiscal específico, no por ello se justificaba ese justificar un “desafío institucional” con connotaciones internacionales.

Otra de las conclusiones importantes extraídas del citado editorial se refiere a la “urgente modernización” de un inadecuado sistema fiscal, con un IVA posiblemente más moderado que en la Península, y con la entrada en vigor de procedimientos más “claros y homologables” de cara a Europa.

Ahora bien, paralelamente, desde la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios se solicitaba a la Comisión “flexibilidad e imaginación” para reformar el Protocolo que regulaba la adhesión de Canarias a la CE⁶⁸. Asumiendo el problema, el presidente de la Cámara de Comercio, Angel

⁶⁶ “La rebelión canaria”. *Diario 16*, 1.2.89.

⁶⁷ *El Periódico*, 18.2.89.

⁶⁸ El Protocolo Segundo del Acta de Adhesión de España a la CE establecía que Canarias tenía que rebajar gradualmente (0,5%) el arbitrio insular en la entrada de mercancías procedentes de los Doce a partir de 1986.

Ferrara, trataba de evitar la “crispación” que daba argumentos a los nacionalistas radicales de izquierdas y de derechas.

Cesar Lumbreras en su artículo “El carnaval de Canarias” anuncia que el conflicto era una cuestión más de las ya suscitadas tras el ingreso de España en la CE, y estaba ligada a la nueva normativa en materia fiscal. Dado que en un lado se situaban los agricultores exportadores –más partidarios de la plena integración– y en el otro se encontraban los importadores que querían estar fuera de la Unión Europea. Se reabría así un nuevo debate en las Islas sobre el modelo de integración en la CE y en relación con la reforma del REF (*El Independiente*, 3.2.89)

La publicación *Cinco Días* (20.2.89) sintetizó en un análisis las dos corrientes lideradas por los grupos económicos y sociales de las Islas. En primer lugar, este diario pone de relieve la estrecha relación que existen entre el régimen económico y fiscal y la decisión sobre el modelo de integración en la Comunidad Europea. Mientras los empresarios (sobre todo los de la CEOE) eran partidarios de una revisión del Régimen Económico y Fiscal, y en sus planteamientos no querían ni oír hablar del IVA, el sector agrícola y ganadero apoyaba sin reservas la total integración.

El contenido del requerimiento al Gobierno canario sobre el desarme arancelario decía así:

“En el ejercicio de la competencia de gestión del arbitrio Insular de Entrada de Mercancías a las Islas Canarias que le corresponde, aplique, con efectos de 1 de enero de 1989, los derechos reducidos previstos en el art. 31 del Acta de Adhesión de España a la CE, según lo dispuesto en el art. 25 de Adhesión y en el art. 6 del Protocolo nº 2 (10.2.89)”.

En el supuesto de que la autonomía canaria desatendiera en el plazo de un mes este requerimiento, el Ejecutivo plantearía ante el Tribunal Constitucional un “conflicto de competencias negativo”⁶⁹.

El presidente Olarte, en declaraciones a los medios, señalaba: “Se nos pide algo insólito como es que ejecutemos un Tratado Internacional que no es de nuestra competencia...el arbitrio de entrada como el impuesto de lujo es de competencia estatal” (*La Vanguardia*, 11.2.89).

El líder canario atribuyó el comportamiento “rígido” adoptado por el Gobierno central a un hecho concreto: en Canarias había un Gobierno de coalición en el que no estaban los socialistas. En este sentido hay que añadir que los socialistas prometieron a las Agrupaciones Tinerfeñas Independientes (con el objeto de que no se unieran a la coalición) la negociación de una nueva Ley de Régimen Financiero y Fiscal para Canarias, en sustitución de la que hasta entonces permanecía vigente y que databa de 1972⁷⁰.

La repercusión en ámbitos políticos y sindicales de la crisis canaria llegó a provocar reacciones distintas entre los ciudadanos

El 12 de febrero, los periódicos registraban la propuesta del ministro de Exteriores que invocaba a la negociación con Adolfo Suárez, como mediador del conflicto.

El portavoz socialista en el Parlamento canario, por su parte, alegaba que era preciso discutir los temas de fondo, como el que afectaba al régimen fiscal. Pero este mismo parlamentario era consciente de la necesidad de un clima propicio para llevar a cabo las negociaciones con Bruselas⁷¹

⁶⁹ El Gobierno se amparaba en los artículos 71 y 72 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

⁷⁰ *Ya*, 11.2.89.

⁷¹ *Abc*, 12.2.89.

Para *Abc* un asunto muy significativo fue la ruptura entre UGT Y PSOE. El secretario de UGT en La Palmas, Miguel Hernández, dijo que González “había perdido una gran oportunidad de encauzar el diálogo al no acceder a entrevistarse con Olarte” (*Abc*, 12.2.89)

Pero los roces también eran evidentes respecto a la Administración Central. Un editorial del diario *Ya* llegó a argumentar (11 de febrero) que el Gobierno utilizó como arma política contra Canarias “el impago de la compensación que la Administración adeudaba a los canarios”. En mayor o menor medida el Gobierno canario también fomentó el radicalismo nacionalista.

3.2.2 El viaje de Borrell

Mientras tanto, el Secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, tenía la intención de viajar a Canarias (a pesar de que el presidente del Ejecutivo autónomo había anunciado que no le recibiría). En realidad, la causa de este desagravio venía de atrás. Unas declaraciones de Borrell en las que afirmaba que el Gobierno podría proponer al Senado la adopción de medidas para retirar competencias a Canarias fueron el detonante y provocaron un unánime rechazo entre las fuerzas políticas del archipiélago.

En su viaje a las Islas, Borrell no dudo en reconocer que Canarias merecía y necesitaba “un trato especial construido a través de la redefinición de su sistema económico y fiscal” (*Diario 16*, 17.2.89).

Los gobernantes canarios plantearon al secretario de Estado un proyecto de zona especial para Canarias; éste supondría la conversión del archipiélago en un “paraíso fiscal”. Por otra parte, si bien se había logrado un principio de

acuerdo para aplicar en las islas el desarme arancelario, faltaba todavía concretar la compensación que el Gobierno de Madrid daría a Canarias.

Tras la reunión, José Borrell adoptó una actitud negociadora y declaraba: “Nos hemos comprometido a que, en el plazo de 15 días, las dos administraciones superen el problema administrativo importante que es la existencia de dos estructuras arancelarias”⁷²

Como prueba de la rapidez con que se alcanzó el acuerdo, el consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, José Miguel González, señaló que el conflicto planteado se debía a “un problema de falta de información” y dijo expresamente, que en los 15 minutos que duró la reunión el contencioso, “estaba resuelto” (*Ya*, 17.2.89).

3.2.3 Una nueva alternativa de adhesión a la CE

El 23 de febrero se reunía en la capital tinerfeña la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento Europeo. A la misma asistieron los presidentes del Gobierno y del Parlamento de Canarias, Lorenzo Olarte y Victoriano Ríos, respectivamente. La importancia de este encuentro era destacada por el eurodiputado del Grupo Demócrata Europeo, Arturo Escuder, quien subrayó que se trataba de la primera reunión que la Comisión dedicaba, en exclusiva, a estudiar los problemas de una región europea.

El presidente autónomo decantó sus preferencias a favor de nueva alternativa de adhesión a la Comunidad Europea denominada “Opción Canarias”. La nueva proposición era capaz de mantener la tradicional libertad de comercio de las Islas y de garantizar el acceso de las producciones locales al mercado

⁷² Una estructura arancelaria sería la que utilizaba la Administración del Estado a través de las aduanas para controlar la entrada de mercancías, y la otra, la que adoptaba la comunidad autónoma a través de sus servicios para cobrar los arbitrios insulares de entrada.

comunitario⁷³. Como anunciábamos más arriba, el rechazo procedía de los empresarios agrícolas, firmes partidarios de la plena integración.

Ante la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores del Parlamento Europeo, su presidente Jacques Mallet declaró que Canarias debería imitar el ejemplo de los territorios franceses de ultramar. Estos gozaban de algunas especificidades. Se reabría, así, un duro debate sobre el “modelo de integración” antes de que el Grupo Interservicios de la CE iniciara sus trabajos sobre la adaptación del protocolo canario de adhesión (“Informe Atlántico”).

Por lo tanto, la rebelión fiscal provocó en Bruselas una reacción tan determinante que obligó al secretario de Estado de Hacienda, Josep Borrell, a efectuar un replanteamiento de las negociaciones. Para Borrell, esto se conseguía aplicando a la región las condiciones del Proyecto “Poseidón”.

En este sentido, el Comité Interservicios de la Comunidad Europea ya trabajaba sobre el citado Proyecto (impulsado por Francia) . Por este mismo motivo, el Comité tenía un papel determinante en la resolución del conflicto. Resultaba obvio pensar que la Administración central y los representantes instalados en Bruselas deseaban unas Islas Canarias totalmente comunitarias.

⁷³ La fórmula que debatía el Gobierno canario estaba inspirada en el Informe Griffiths y en el Informe Poseidón.

3.3 Conclusiones del capítulo

- El vaciado de los textos seleccionados en los principales diarios de ámbito nacional y en los de corte económico nos induce a pensar que la liberalización de los capitales era un tema puntual para la CE. La retención sobre el ahorro y la armonización sobre los impuestos directos e indirectos son temas que ocupan amplios espacios en la prensa, y además, reabren numerosos debates en los Estados miembros.
- La reunión informal celebrada en S'Agaró fue seguida con atención por todos los medios. La prensa considera que el encuentro constituye el preámbulo de la agenda que se iba a desarrollar en la Cumbre de Madrid. Se publican numerosos artículos en los que se constata un mínimo avance en la política de armonización fiscal.
- *La Vanguardia* es el diario que tiene un planteamiento más comprometido con la política de armonización fiscal. La cobertura informativa de este diario se amplía sensiblemente cuando Borrell preside el grupo de trabajo destinado a conseguir avances en el terreno de la armonización fiscal.
- Los asuntos sobre fiscalidad se recogen en secciones de economía, aunque advertimos cierta dispersión en los contenidos.
- La retención del 10% sobre el ahorro que adoptó Alemania fue duramente criticada en los medios franceses porque significaba un realineamiento de la RFA con Gran Bretaña y Luxemburgo. Claras divergencias entre los citados Estados y la Comisión.

- En el caso de Luxemburgo (conocido “paraíso fiscal” de la CE) existe una descoordinación entre su política y la del Ejecutivo comunitario. El secreto bancario es un tema de controversia según se deduce de las informaciones analizadas.
- Amplia cobertura en lo que respecta a la armonización de la fiscalidad. Consiste en uno de los retos principales de la Presidencia española. Sin embargo, a medida que avanza el semestre, el protagonismo de la fiscalidad se va volcando en Francia .
- El conflicto arancelario suscitado en las Islas Canarias tiene una amplia acogida en la prensa nacional. En relación con la opinión vertida al respecto, que las disputas entre la Administración central y la autonómica afectaron seriamente a las relaciones entre ambas administraciones.
- Asistimos a una réplica mediática entre los sectores económicos y políticos de Canarias sobre la conveniencia de la integración en la CE. El sector agrícola era firme partidario de la plena integración, y sus intereses era distintos de los que defendían los exportadores.
- El diario *Abc* destaca del conflicto la ruptura entre el sindicato de UGT y el Gobierno socialista. Era difícil negociar en Bruselas un acuerdo fiscal sobre las Islas si el panorama político de España no resultaba ser “muy propicio”.

CAPÍTULO IV:

Espacio social europeo

1. Relanzamiento del “espacio social” europeo

El llamado “espacio social” constituía uno de los apartados más importantes del programa presidencial. Fernández Ordóñez, en su discurso de presentación, dedicó un amplio apartado a este asunto.

El calendario fijaba para el debate social dos sesiones del Consejo de Ministros, los días 5 y 12 de junio, y dos reuniones informales que tendrían lugar en Sevilla y Toledo. Durante el discurso de presentación Ordóñez señaló la esencia de la política social que se iba a impulsar desde España: “En ningún caso, mi país desea una identificación sino más bien una armonización conceptual que, a medio y largo plazo, permita una convergencia de los distintos sistemas y un tratamiento equiparable de los aspectos sociales en los Estados”⁷⁴.

No todos los países partían de la misma situación teniendo en cuenta el acelerón económico previsto para 1992, y sobre todo, conseguir la

⁷⁴ Bol. CE, 1/1989

armonización de las condiciones sociales no parecía ser una tarea fácil para los Estados miembros.

Durante el mandato griego se paralizó, en cierta forma, el avance social. En aquella ocasión nada aconsejaba plantear formulaciones concretas al respecto. De hecho, solamente existían algunas directivas sobre temas laborales, y un reducido número de declaraciones de intenciones. Por lo que era preciso avanzar hacia una convergencia social con la búsqueda de soluciones urgentes en aspectos concretos.

El filósofo francés Alain Touraine reflejó la importancia de esta dimensión social, al admitir abiertamente que había que “dar prioridad a la construcción de una Europa política a través del concepto de la Europa social” (*Diario 16*, 14.1.89).

La idea de la cohesión económica y social fue introducida en la Conferencia Intergubernamental para la redacción del Acta Única a impulsos de los negociadores españoles. José Álvarez de Paz habló de ello en el Congreso (2 de febrero de 1989) y aludió al art. 130 del Acta Unica como máximo exponente de esta idea:

“La Comunidad desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social y los Estados miembros tendrán presente ese objetivo al conducir y coordinar su política económica y al desarrollar las políticas comunes y el mercado interior”⁷⁵.

Pero fue en el Consejo de Londres donde se reafirmó el liderazgo español y a propuesta de Felipe González se aprobó el siguiente texto:

“El Consejo Europeo toma nota de la importancia de la cohesión para la consecución del Mercado Interior y demás objetivos comunitarios”⁷⁶

También en Florencia (1987) la posición española defendía que “no era sólo la compensación que se da a los menos favorecidos” sino que la política de cohesión social tiene la “virtualidad de romper la política habitual e introducir la lógica comunitaria, haciendo comprensible el espacio común integral”⁷⁷.

Queda del todo claro que España insistía en que la cohesión era un objetivo inseparable de la creación de un espacio económico y un espacio de ámbito europeo. También es cierto que la concreción de esta política de cohesión rebasaba el ámbito de lo social para materializarse en otras políticas comunitarias (medio ambiente, educación, agricultura.), por lo que resultaba más difícil la integración europea si no se aplicaba un tratamiento sectorial y regional diferenciado para reducir las desigualdades entre los Estados miembros⁷⁸.

Sobre la importancia de los aspectos sociales, el político español Manuel Fraga Iribarne reflexionaba en un artículo (“El Espacio Social Europeo”) sobre la insuficiencia del marco jurídico de los tratados fundacionales y el reconocimiento de que no habrá relanzamiento económico si no se alcanza unos niveles de cohesión social suficientes. “Ello ha de ir acompañado de una plena libertad de circulación y establecimiento, de una plena convalidación de títulos, de un gran esfuerzo de educación y de la formación profesional (para romper las mayores rigideces del mercado) y de una serie de acciones, a través de los fondos estructurales, para lograr la cohesión económica y social a nivel europeo con especial referencia a la política regional (*Abc*, 2.1.89).

⁷⁵ “Los socialistas españoles y la Comunidad Europea. IV Jornadas Parlamentarias”. Grupo Parlamentario Socialista (1989).

⁷⁶ “Los socialistas españoles y la Comunidad Europea”. Grupo socialista, 1989.

⁷⁷ *Ibid.*

El concepto “espacio social europeo” se remonta al año 1981, coincidiendo con las elecciones presidenciales francesas. Fue el presidente Mitteran quien configuró las líneas maestras a seguir en la elaboración de la futura normativa.

En primer lugar, se proyectaba la armonización de las legislaciones sociales; en segundo lugar, el enfoque más preciso de la lucha contra el desempleo y, por último, el objetivo era conseguir una mayor participación de los trabajadores⁷⁹

Si bien, la importancia de la dimensión social se vio relanzada en los meses que precedieron a la Presidencia española, los resultados más rotundos y el alcance más significativo tuvieron lugar durante la Presidencia que en el segundo sementare de 1989 detentó Francia.

2 El Memorándum de Manuel Marín

Durante la cumbre de Hannover los Estados miembros adoptaron una declaración conjunta en la que se recogía textualmente:

“(…) El Mercado Interior debe llevarse a cabo de tal forma que beneficie a todos los ciudadanos de la Comunidad. Con este fin no sólo es necesario que mejoren las condiciones de trabajo y el nivel de vida de los trabajadores por cuenta ajena, sino también se garantice una mayor protección de la higiene y seguridad de los trabajadores en el lugar del trabajo”.⁸⁰

⁷⁸ Con el ingreso de España y Portugal se duplicó la población de las regiones cuyo PIB per cápita era inferior al 60% del PIB medio comunitario. Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).

⁷⁹ Boletín de las Comunidades Europeas. Suplemento 2/86. Comisión de las Comunidades Europeas.

⁸⁰ Revista *España Económica*, Enero 1989.

Esta preocupación por reducir las desigualdades sociales, se plasmaba igualmente en el art. 130 del Acta Unica Europea:

“A fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica y social”. Según dicho art., la Comunidad proponía: “reducir las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas”.⁸¹

Es cierto que el ingreso de España y Portugal acentuó las diferencias económicas y sociales existentes entre los *Doce*. Culminada la adhesión de estos dos Estados, la Comisión publicó en 1987 un Informe en el que se analizaban distintos indicadores socioeconómicos de la Península Ibérica.

Al finalizar estos estudios, se llegó a la conclusión de que la renta de este área geográfica se situaba por debajo de la media comunitaria y también se observaba un hecho indicativo: desde los años 70 se había reducido la cohesión social de estas regiones respecto a Europa.

En este contexto de preocupación por las desigualdades sociales tiene lugar la aparición del Documento presentado por Manuel Marín, cuando era vicepresidente de la Comisión Europea y máximo responsable de la política social en la CE. Bajo el título: “La Dimensión Social del Mercado Interior”, este Informe contribuyó de igual forma a impulsar los aspectos sociales en el ámbito comunitario. No obstante, las limitaciones del documento venían de la casi inexistente base jurídica para avanzar en lo social.

Pese a su contenido crítico, el “memorándum” de Marín no inquietaba al Gobierno español que no reconocía la existencia de “dumping social” y por otra

⁸¹ Revista *Actualidad Económica* 16 (22.1.89).

parte entendía que eran temores infundados. Dicho informe omitía, además, todo lo relacionado con el derecho de información y participación de los trabajadores.

Jacques Moreau, Secretario General del Consejo Económico y Social (CES), opinaba, ante un grupo de periodistas, que era difícil poner de acuerdo a empresarios y sindicatos en unos mínimos básicos capaces de garantizar los derechos de los trabajadores comunitarios. El CES, con el visto bueno de la Comisión, emitió un dictamen donde se constataba que los derechos básicos de los trabajadores estaban ya recogidos en la Carta Social del Consejo de Europa, en las declaraciones de la OIT, las Naciones Unidas y la OECD.

Teniendo en cuenta estas declaraciones de carácter general, lo que parecía mucho más laborioso era conseguir un compromiso al respecto de los doce gobiernos⁸².

3. IV Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Socialista

Durante las IV Jornadas Parlamentarias organizadas por el Grupo Socialista: “Los Socialistas Españoles y la Comunidad”, el ministro de Trabajo, Manuel Chaves reconoció la dificultad de un avance importante en la construcción de la dimensión social del Mercado Único.

⁸² *Revista España Económica, Enero 1989.*

Para el ministro el *chauvinismo* francés justificaba la dificultad de este avance social. La baza más importante en el área de lo social la iba a protagonizar la Presidencia francesa. También anunció que el Gobierno español establecería un calendario con una serie de criterios mínimos necesarios para la armonización de las instituciones laborales.

Chaves expuso la dificultad del consenso : “Hay Gobiernos que ni siquiera quieren oír hablar del espacio social” (*Abc*, 3.2.89). Por esta razón se podía optar entre el enfrentamiento ideológico con los gobiernos conservadores o bien, por el avance de esta política a medio y largo plazo para que este capítulo social no sea el vagón de cola del Mercado Interior.

También el presidente del Grupo Socialista en el PE, Rudi Arndt recalcó la importancia del desarrollo social y reivindicó –durante una rueda de prensa- que “la Europa Social que redunde en beneficio de los trabajadores”⁸³ no tendría éxito si no se acordaba también con los sindicatos.

El programa de la Unión de Partidos Socialistas para las Elecciones europeas contenía –junto con la protección del medio ambiente- los derechos de los trabajadores como objetivos prioritarios de su política. Por ejemplo, el punto 36 hacía referencia a la participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas y en la concertación y elaboración de los programas de desarrollo.

El Manifiesto de los socialistas comunitarios constaba de 78 puntos vinculados al “Estado del Bienestar”. Fue Enrique Barón quien dirigió la comisión que elaboró el texto.

⁸³ *La Vanguardia*, 10.1.89.

Sin duda, el Manifiesto reivindicaba más poder para el Parlamento Europeo con el claro objetivo de alcanzar la plena codecisión entre la Cámara y la Comisión

4 Críticas de los sindicatos

Pero si bien, la actitud del Gobierno estaba abocada al diálogo social en el proceso de construcción europea, surgieron las críticas internas por las tensas negociaciones con los sindicatos españoles.

Tras la cumbre hispano-alemana que tuvo lugar en Sevilla, González tuvo ocasión de responder a tales críticas insistiendo en la defensa del “diálogo social” en la CE.⁸⁴

Sin embargo, el descontento sindical dentro de nuestras fronteras iba en aumento. Comisiones Obreras sacaba un informe donde se denunciaba que España registró el mayor índice de siniestralidad laboral de Europa, con 14,5 accidentes mortales por cada 100.000 habitantes. Según fuentes del sindicato, la mayoría de los accidentes ocurrieron por el incumplimiento patronal de las normas de seguridad (*Diario 16*, 6.2.89).

Como es obvio, en el análisis de los medios de comunicación se estudiaron cuáles iban a ser las consecuencias sociales de la implantación del Mercado Único. Se evidencia inquietud por el futuro de la CE ya que durante siglos Europa ha vivido aisladamente los avatares sociales. Es la prensa alemana, quizá, la más insistente a la hora de hacer balance de la carencia de una normativa social mínima. Así se constataba, por ejemplo, en el *Süddeutsche Zeitung*, que en un

⁸⁴ *La Vanguardia*, 7.2.89.

artículo (“Hacia la tierra de nadie social”) denunciaba la insuficiencia de las legislaciones sobre seguros o sobre protección en el trabajo⁸⁵.

El *Die Zeit* advierte, ese mismo día, de la preocupación que en Londres se respiraba por el nuevo impulso social. Para Gran Bretaña, la Comisión de Bruselas -bajo el pretexto de una política anticártel común- podía entrometerse en la política nacional, por ejemplo, utilizando el control de fusiones. Sobra añadir que para los británicos una rápida armonización social podría dañar la competitividad más dura de los países comunitarios.

El *New York Times* destacaba en primera página el peligro en la desviación de los puestos de trabajo hacia el sur de Europa. El diario americano resalta la posición de Alemania: “La fuerza laboral de Alemania también teme que el flujo de capital, productos y gente en un mercado libre resulte lo que llaman “descarga social”, esto es, que se perderían puestos de trabajo a favor de España, Portugal y Grecia” (*The New York Times*, 8.3.89).

5 Debate sobre la Carta Social Europea

El ministro de Trabajo, Manuel Chaves, tenía intención de cerrar el debate sobre la Carta Social Europea en el semestre de Presidencia española para que posteriormente -en la presidencia francesa- se pasara a su aprobación. Dicho acuerdo quedó confirmado en una reunión anterior que mantuvo con su colega francés, en la ciudad de Auxerre.

⁸⁵ *Süddeutsche Zeitung*, 17.3.89.

El 7 de febrero el ministro de Trabajo español acordaba con el Director General de la Organización del Trabajo, Francis Blanchard, que los convenios de la OIT sirvieran de base para la futura “Carta Social”.

Ambos mandatarios coincidieron en reconocer -durante las discusiones que mantuvieron- la importancia de esta Carta, no sólo para el desarrollo del espacio social europeo, sino también, para las relaciones exteriores con otros países como EEUU y Japón⁸⁶

De esta forma, el primer paso para definir el marco legal del espacio social europeo surgió del dictamen que el Comité Económico y Social presentó tras ser aprobado por una mayoría sustancial de sus miembros.

El CES informó que no era necesario “inventar un nuevo instrumento”, pues el Tratado de Roma ya especificaba las normas legales aplicables en la Comunidad (*La Vanguardia* 24.2.89). El CES se alejaba, así, de los planteamientos de la Comisión, que respaldaba el manifiesto de Manuel Marín y que propugnaba la creación de una Carta Social.

Este hecho suponía un revés a las pretensiones de Manuel Chaves que esperaba debatir en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales el proyecto de constitución de la Carta Social. La Comisión era ahora la encargada de debatir qué marco legal era el más adecuado para legislar este espacio social europeo.

La prensa francesa vertía información sobre este acuerdo suscrito por el CES. Así el diario *Le Figaro* titulaba a cinco columnas: “Derechos Sociales, primer acuerdo para una Carta europea”. Con un recuento de 135 votos a favor, 22 en contra y 8 abstenciones, el CES -señalaba el diario- adoptaba un nuevo texto sobre derechos sociales. Según se informaba, el dictamen permitía a la

⁸⁶ *Cinco Días*, 8.2.89.

Comisión elaborar ese instrumento legal que diera contenido a los derechos sociales.

De cualquier modo las divergencias entre unos Gobiernos partidarios de la mínima regulación laboral y otros, más sensibles a la armonización de las legislaciones laborales se hicieron manifiestas.

La primera corriente, la lideraba Gran Bretaña. En la mente de la señora Thatcher sólo existían ciudadanos, consumidores y accionistas; para la primera dama británica Europa era sólo una gran zona de libre cambio. La segunda corriente es defendida por los países del sur de Europa. Dada la posibilidad de que los empresarios pudieran aprovechar los desequilibrios derivados de la integración, los sindicatos alertaron a los dirigentes comunitarios de las consecuencias negativas que el “dumping social” podía conllevar (*El País*, 9.3.789).

La Ministra de Asuntos Europeos en Francia, Edith Cresson, reconocía ante la opinión pública que era necesario abordar de un modo concreto los temas sociales. Sin embargo, para Cresson resultaba menos alentador el desenlace del proyecto de constitución de una Carta de Derechos Sociales.

6 Consejo Informal en Sevilla (7 de marzo)

El primer Consejo informal tuvo lugar el 7 de marzo en Sevilla, y en él Manuel Chaves sometió a debate un calendario de puntos a seguir en política social antes de 1992. El documento que presentó a sus colegas comunitarios constaba de siete folios de exposición genérica y algunas otras cuestiones a debatir.

A pesar del “compromiso de Rodas”, algunas administraciones comunitarias como la británica, sólo estaban dispuestas a un avance unilateral de las políticas sociales pero sin conexión con Bruselas.

Sin embargo, la Presidencia española decidió incrementar el número de Consejos de Asuntos Sociales habitual en una presidencia. El ministro ya había convocado para el 5 de abril y el 12 de junio los Consejos de carácter decisorio. Tras esta reunión, las delegaciones se mostraron de acuerdo con la necesidad de una Carta de derechos fundamentales.

Pese a esta actitud favorable de las delegaciones que acudieron, el ministro Chaves no logró un consenso vinculante al no alcanzarse unanimidad por el temor de la delegación británica ante de un exceso de reglamentación. La Comisión sería ahora la encargada de elaborar un texto borrador teniendo en cuenta los contenidos del reciente informe del CES.

Los doce ministros de Trabajo estuvieron de acuerdo en aplicar de inmediato cuestiones como la eliminación de barreras a la libre circulación de empleados, o la formación profesional continua. En la reunión se anunció que España tenía previsto aprobar antes de julio la directiva marco sobre higiene y seguridad en el trabajo.

En todo caso, lo que no se cerró en esta ocasión fue el calendario para la armonización de las normas sociales; pero al menos se logró el compromiso de que se elaboraría en un plazo breve para someterlo a sufragio de todos los gobiernos (*Cinco Días*, 8.3.89).

Si nos remitimos al discurso de presentación del programa español, Fernández Ordóñez expuso claramente que no se pretendía una identificación de los distintos sistemas jurídico-laborales de los Estados miembros, sino más bien “una armonización conceptual” que, a medio y a largo plazo pudiera permitir una

convergencia en los distintos sistemas y un tratamiento equiparable de los aspectos sociales en los Estados.

Las esperanzas, con expectativas de crecimiento de empleo, estaban puestas en el año 1992. La “contrapartida” de estas posibilidades podían ser las consecuencias sociales derivadas de la libertad de circulación de capitales y mercancías. Y esta era la razón del recelo suscitado entre los trabajadores.

Los representantes sindicales hablaban de la reestructuración de los empleos y de las concentraciones de empresas que se veían como inevitables. Por esta razón los sindicatos reclamaban que las medidas sociales tenían ser urgentes.

El representante sindical José María Zufiaur se planteaba el siguiente interrogante sobre los riesgos que podían sufrir los trabajadores: “¿Se establecerán límites sociales a la competencia o, por el contrario, estaremos condenados a una ignominiosa concurrencia entre trabajadores para rivalizar por la localización industrial o los precios relativos de nuestros productos?” (*El País*, 9.3.89).

7 La cohesión económica y social de la CE

En el Acta Unica se introducía por primera vez en la política comunitaria el concepto de cohesión económica y social, pero este hecho no era suficiente para corregir los desequilibrios existentes. Son muchas las resistencias surgidas en torno a las medidas de corte social.

En un tercio de siglo sólo tres directivas de política social habían sido adoptadas: igualdad hombres-mujeres, el derecho de los trabajadores en caso de insolvencia del empresario y la que se refiere a los despidos colectivos. Los

resultados eran ridículos si se comparaban con las 130 directivas del llamado Libro Blanco aprobadas en los tres últimos años.

Pero, ¿Qué argumentos son los que justificaban el escaso avance de la política social?. En primer lugar, el reconocimiento generalizado entre los dirigentes comunitarios de que no existía riesgo de “dumping social”; en segundo lugar, el convencimiento extendido de que no son necesarias reglas sociales comunitarias ya que éstas existían en el ámbito nacional y se entraría en el intervencionismo. La patronal tradicionalmente se había negado habitualmente a normalizar los acuerdos que salían del diálogo social. Se trataba, pues, de mantener una competencia leal entre las empresas y para eso se requería una normativa común.

Ningún sindicato planteaba la igualdad de los salarios y de las prestaciones sociales de los diferentes países miembros. Sólo reclamaban las reglas comunitarias mínimas, capaces de evitar la degradación del empleo, el chantaje sobre las condiciones laborales o la congelación y deterioro de las prestaciones sociales.

En Italia, el sindicalista Bruno Trentín se sumaba a los criterios del sindicalismo vigente. Reivindicaba unos derechos sociales comunes defensores del trabajador ante la inminente apertura de todos los mercados.

María Macciocchi (“Frontera y utopía española”) habla de una Europa social en “estado embrionario”. Para Macciocchi los sindicatos parece que en ocasiones olvidan coordinar sus esfuerzos a nivel comunitario. La Europa social –añade– “se estructurará gracias al diálogo, a la homogeneización de las reivindicaciones claves (salario y empleo) al diálogo de los sindicatos europeos por encima de las fronteras”(El País, 9.3.89).

La responsable de Asuntos Sociales, Vasso Papandreou, reconocía como uno de los pilares del nuevo modelo social toda negociación entre empresarios y trabajadores. En consecuencia, la CE adoptó dictámenes comunes para la estrategia de cooperación en materia de empleo y formación de los trabajadores. También se abordaron estrategias sobre la información, nuevas tecnologías y adaptabilidad del mercado de trabajo.

La reunión que celebraron (12 de enero) los representantes de la Comisión y los interlocutores sociales concluyó de forma exitosa.. ¿Cuál fue el método de trabajo elegido para acelerar el diálogo social?. Sin duda vemos que se trataba de reducir las diferencias regionales y sectoriales de la Comunidad mediante la ejecución de políticas estructurales.

En este sentido se proyectó la constitución de un grupo de dirección capaz de evaluar los dictámenes emitidos desde el diálogo social. El Grupo Interservicios de la CE" elaboró un informe⁸⁷ con la relación de temas que inspirarían el diálogo social, entre el Ejecutivo comunitario, el CES y la Confederación Europea de Sindicatos:

- Derecho del trabajador a estar incluido en un convenio colectivo o en un acuerdo profesional.
- Derecho a estar acogidos a un sistema de seguridad social.
- Derecho a estar informados de las transformaciones importantes de la empresa.
- Derecho a la normalización de los trabajos flexibles y atípicos.
- Derecho a la regulación permanente de los trabajadores.

Por otra parte, desde la organización empresarial europea, el secretario general de la UNICE, Zygmunt Tyszkiewicz, sugería dos soluciones al

⁸⁷ *El Periódico*, 19.3.89.

problema: la subsidiaridad y el diálogo tendente a conseguir el equilibrio entre las partes.

Para concluir este epígrafe, no podemos eludir el proyecto presentado por el responsable de la UNICE, y en el que supuestamente se engloban los cinco campos de actuación más prioritarios en el mundo empresarial: la seguridad y la higiene en el trabajo, la movilidad de los trabajadores, la educación y la formación, la igualdad de oportunidades y la cohesión económica y social mediante la inversión de los fondos estructurales a través de programas integrados.

8 Consejo de Ministros de Asuntos Sociales (5 de abril): La salud y la seguridad de los trabajadores

Los temas prioritarios previstos en el Consejo de Asuntos Sociales se centraron en la adopción de una posición común respecto a las directivas de salud y seguridad de los trabajadores, la aprobación de una resolución sobre formación profesional continua y el debate sobre el programa Renaval. Cabe aclarar que este Programa se elaboró después de los estudios efectuados en Alemania en relación con los accidentes laborales que cada año se producían (8 millones de accidentes laborales con aproximadamente 10.000 muertos).

En contra de lo previsto oficialmente la Comisaria Vasso Papandreu presentó las orientaciones de la Comisión sobre la futura Carta Europea de Derechos Sociales. Defendió que los textos del Consejo de Europa y la OIT eran insuficientes pues no abarcaban todo lo previsto por el Acta Única⁸⁸.

⁸⁸ *La Vanguardia*, 6.4.89

Sobre este punto, el ministro Chaves, días antes, manifestaba ante el Comité Económico y Social que esta Carta debía apoyarse en una “virtualidad jurídica inmediata”, por lo que su aplicación debería ser directa en todos los países comunitarios⁸⁹.

En esta reunión del CES emergieron otras opiniones como la de Marcelino Oreja, partidario de la ratificación de los Derechos Sociales del Consejo de Europa. El secretario General del Consejo de Europa tenía plena convicción sobre la dependencia de las normas sociales internacionales de las jurisdicciones nacionales y de las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia.

Volviendo a la reunión del Consejo, los representantes aprobaron por unanimidad las tres directivas sobre protección, seguridad y salud. Hay que añadir que en los locales nuevos las prescripciones mínimas de seguridad y salud iban a ser más severas. Las tres directivas fueron adoptadas en una primera lectura y entrarían en vigor a finales de 1992. Desde ahora se normalizaba todo aquello relacionado con la solidez y estabilidad de los edificios, así como la iluminación, aireación, sistema contra incendios y equipos sanitarios.

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, el Consejo establecía obligaciones mínimas en la utilización de máquinas y equipos de trabajo y también se interesó por mejorar la protección individual y colectiva de los trabajadores mediante equipos protectores.

El capítulo de Asuntos Sociales fue considerado por los expertos uno de los “puntos negros” de la gestión española al frente de la CE. El calendario Delors confirmaba que la Carta Social no podría ser adoptada bajo el semestre de la Presidencia regentada por España. De hecho, los escasos avances en este campo despertaron el interés general y suscitaron duras críticas de los sindicatos

⁸⁹ *Cinco Días*, 1.4.89.

y de la oposición⁹⁰. Fue el ministro Ordóñez⁹¹ quien responsabilizó a la Comisión del escaso avance social.

9 Consejo Informal de Toledo: Igualdad de oportunidades para la mujer

El 28 de abril se reunieron los mandatarios comunitarios en Toledo con dos propuestas a debatir en su agenda: un plan de seguridad social que garantizaba el reparto equitativo de las cargas familiares dentro del hogar, y el incremento del presupuesto estatal para estos fines. Matilde Fernández presidió la reunión y defendió un aumento presupuestario para conseguir una igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer.

Por lo que se refiere a la orientación de los *Doce*, también se apuntaba un reforzamiento del empleo de la mujer, especialmente en el sector agrícola y en el de servicios⁹²

“La Europa Social -afirmaba la ministra de Asuntos Sociales- es un elemento básico para la construcción de la Europa de los ciudadanos y su piedra angular ha de ser la Carta Social Europea, que debe ser reconocida como tal por todos los Estados miembros. La igualdad social y la no discriminación de la mujer debe integrar la Europa social por la que trabajamos”(La Vanguardia, 29.4.89).

En este Consejo informal se debatió igualmente todo lo relativo a las cuotas de participación de la mujer en el poder político. Por su parte, la titular griega de Asuntos Sociales, Vasso Papandreu, acordó transmitir al órgano

⁹⁰ *Abc*, 12.4.89.

⁹¹ *Abc*, 3.4.89.

⁹² *Abc*, 29.4.89.

ejecutivo comunitario estas orientaciones surgidas en la reunión. Otra de las metas perseguidas deseaba conseguir prestaciones sociales para las mujeres. Y según el diario *La Gaceta*, España tenía un bajo nivel de protección social traducido en 9 puntos por detrás de la media comunitaria⁹³

El punto de vista de Claude Vayssade, parlamentaria europea francesa, era más radical cuando afirmaba: “Debemos crear un grupo de presión de mujeres en la CE”. No dejó de insistir que las medidas referidas a la mujer debían ser directivas vinculantes y “no sólo resoluciones que no dejan de ser recomendaciones que no obligan”. En el mismo sentido la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Martínez Ten, defendió “la necesaria participación de las mujeres europeas como sujetos activos en la construcción de Europa de los 90” (*Ya*, 24.4.89).

10. Documento del Comité Permanente de Empleo (12 de mayo) y políticas para el desempleo

Existe una manifestación clara de intenciones de progreso social difíciles de materializar en legislaciones vinculantes para todos los miembros de la CE. El ministro de Exteriores hablaba de superar los *lobbies* nacionalistas en el Congreso Socialista de Cataluña, mediante la concertación de la política económica y social comunitaria.

Podemos afirmar que el Gobierno español criticó duramente el bloqueo a la Carta Social (la CE postergó su aprobación a la Presidencia francesa) y llegó a manifestar públicamente este hecho.

⁹³ *La Gaceta*, 29.4.89 (Datos extraídos de las Jornadas sobre Sistemas de Protección Social en España y países de la CE).

Ante la ausencia de medidas sociales, el Comité Permanente de Empleo aprobó (12 de mayo) una declaración de buenos propósitos⁹⁴. Un texto, difícil de rechazar por su contenido global, y del que se podían extraer conclusiones tan básicas como el hecho de que todo crecimiento económico debería estar acompañado de políticas coyunturales de apoyo al empleo ó que había que fomentar la estabilidad en el empleo.

En este documento cobraban un gran protagonismo los fondos estructurales comunitarios destinados a reducir las desigualdades regionales. Según Alonso Oléa⁹⁵, el proceso de adaptación de las normas españolas al derecho comunitario en materia laboral se produce lentamente y de esta forma, la incorporación de la CE permitía a España obtener ayudas del Fondo Social Europeo para formación profesional y apoyo a la contratación de trabajadores desempleados.

Por lo que respecta a la política de empleo de Manuel Chaves, se puede afirmar que contó -durante la Presidencia- con el casi total apoyo de sindicatos y empresarios europeos por lo que, consecuentemente, se facilitó la apertura de los cauces para la participación de los interlocutores sociales en lo relativo al desarrollo regional. Hasta entonces sólo la Administración tenía decisión en el desarrollo de esta política.

Así, con los nuevos interlocutores, el ministro de Trabajo informaba en *La Vanguardia* sobre el nuevo planteamiento en la financiación de los fondos estructurales de la CE:: “El Gobierno planteará la necesidad de establecer un cauce de participación para las organizaciones empresariales y sociales” (*La Vanguardia*, 14.5.94).

⁹⁴ *El Periódico*, 13.5.89.

⁹⁵ Alonso Olea, Manuel: “España y la Unión Europea: La Unión Europea y la política social”. Ed. Plaza & Janés Editores, 1992. P.72-73.

Quedaba también demostrado que los instrumentos de la CE no podían combatir de forma eficaz el problema del paro. Las estadísticas apuntaban que se registraba un índice de paro en España mayor que en el resto de los países comunitarios (18%) y, según indicaban las oficinas de desempleo de la CE, el total de parados se elevaba a más de 15 millones (*Ya*, 9.5.89).

No faltaron voces que aportaron soluciones a este problema. En este sentido, en la publicación semanal *El Independiente*, Enrique Curiel escribía que desde la izquierda se podía buscar el equilibrio entre el norte y el sur de la Comunidad, y para ello resultaba imprescindible una reforma político-institucional de la CE que superara los límites nacionales.

Para Curiel, este reto lo simbolizaba el comunismo italiano, con su líder Ochetto. Este comunista proponía a la Unión Europea de Partidos Socialistas como foro de encuentro y debate de las fuerzas de la izquierda. Pero la propuestas de la euroizquierda (PSD, Partido Socialista Francés, Partido Comunista de Italia) no fueron tenidas en cuenta con lo que –y no de forma gratuita– se temía un retroceso en el proyecto de unidad europea..

11. Anteproyecto de la Carta Social de los Derechos Fundamentales

El 17 de mayo la Comisión pedía el apoyo de los 16 comisarios para aprobar el proyecto de la Carta comunitaria de los derechos sociales. Se trataba de proteger a la población comunitaria de los efectos negativos de una supresión de las barreras nacionales.

Esta Carta carecía de la fuerza vinculante del tratado internacional, y en derecho comunitario, de los reglamentos y directivas. Pero sí debía servir como fuente indirecta o conjunto de criterios interpretativos de los pactos, éstos sí

vinculantes. Como manifiesta⁹⁶ Alonso Olea a la hora de exponer la finalidad de esta Carta Social “es dar a los aspectos sociales la misma importancia que los aspectos económicos”.

El documento señalaba como puntos fundamentales de su contenido, el derecho a la libre circulación de trabajadores bajo protección social. Respondieron afirmativamente a esta medida Francia, España, Grecia y Dinamarca. Otros miembros como Alemania, Países Bajos y Bélgica mostraban su preocupación ante el llamado “dumping social”.

Los periódicos también nos informan del viaje de Manuel Chaves, que para conseguir aliados y cerrar el debate suscitado en torno a este Proyecto de la Carta Social⁹⁷ . inició una gira europea para entrevistarse con el ministro holandés de Asuntos Sociales y Trabajo, Lean de Koning y con su homólogo danés, Henning Dyremose.

En el plano económico se proclamaba la existencia de un salario mínimo para los trabajadores excluidos del mercado de trabajo. Se defendía también en este documento el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva. De igual forma, en él estaban presentes aspectos como la formación profesional y la igualdad de hombres y mujeres. En cuanto a la salud, se defendía la protección de la salud de niños, adolescentes, tercera edad y minusválidos y la seguridad en los lugares de trabajo (*Ya*, 18.5.89).

Fueron varios los medios que indicaban que el Proyecto de Carta Social necesitaba de la plena participación de todos los grupos sociales: “Europa no puede construirse en contra de la opinión de los empresarios ni en contra de la de los trabajadores y de todos los ciudadanos” (*Diario 16*, 18.5.89). Por su parte *El*

⁹⁶ Alonso Olea, Manuel: España y la Unión Europea, p.87

País apostaba por un acercamiento real de los Estados miembros: “La CE intenta acercar las condiciones de vida y trabajo en los doce”.

Ciertamente, estaba previsto que los titulares de Trabajo en su próximo encuentro (12 de junio) iban a incluir en su agenda el estudio de este proyecto. A pesar de las convenciones de la OIT, la Comisión acabó viendo indispensable la constitución de una Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores. Además, muchos de los textos de la OIT estaban pendientes de ser ratificados .

12. Primer Informe del CES sobre la economía española

El Comité Económico y Social publicó a finales de mayo un estudio en el que se anunciaba que España era el país de la Comunidad con mayores desequilibrios regionales. El diario *El País* (23.5.89) resalta la necesidad de recuperar el diálogo social, y sin embargo, otros diarios, como *Cinco Días* lo que más destacan es el desequilibrio regional de nuestro país: “España es el país con más desequilibrios de la CE” (23.5.89).

Según el citado documento, el desequilibrio básico de la economía española consistía en que “un colectivo importante de la sociedad se ve abocado a la marginación, y otro colectivo, no menos importante y creciente, se enfrenta a empleos más precarios o no tiene grandes esperanzas de ver mejorar sus condiciones de vida” (*Cinco Días*, 23.5.89)

El contenido de este Informe coincidía con lo formulado por las centrales sindicales en los últimos años. En él se publicaba que no existía un reparto equitativo de los beneficios del crecimiento económico y sí, en cambio, un gran coste social por el ajuste económico.

Asimismo, los datos económicos de mayor interés del Informe venían a denunciar que la cuarta parte de la población ocupada disponía de un contrato temporal (proporción que triplica a la media comunitaria). También estos datos señalaban que era evidente el estancamiento de las partidas para prestaciones sociales.

Según el análisis elaborado por el CES, la tasa de paro no descendería del 15% en el año 1992, y en relación con la distribución de la renta, el modelo económico español estaba más próximo al representado por Grecia y Portugal.

El presidente del CES, Alberto Masprone, mostró su disconformidad con algunos apartados del Informe y criticó algunos puntos. Opinaba Masprone que el salario real no había bajado tanto.

Sin embargo, el autor de este anteproyecto, Crisanto Plaza⁹⁸, veía bastante lógica la reivindicación sindical que solicitaba una compensación por los ajustes de la Administración. Entre las indicaciones generales que el CES recomendó a nuestro Gobierno destacaremos en primer lugar, la de corregir los desequilibrios derivados de la crisis y de las políticas de ajuste y en segundo lugar, la de conseguir más competitividad en las empresas.

Algunos miembros del Comité mostraron su nerviosismo ante las “presiones intimidatorias” del Gobierno. Así lo denunciaron los líderes sindicales de CCOO y UGT, Agustín Moreno y Apolinar Rodríguez, que hablaban de la existencia de presiones políticas hacia el CES.

Pero, ¿Qué se cuestionaba en la línea editorial de los diarios de difusión nacional?. Por un lado, *El País* afirmaba la utilización electoral del Documento

del CES por el Gobierno socialista. Por otro lado, se cuestionaba la actuación política de los socialistas.

En este sentido, era poco comprensible que nuestro país, con uno de los índices de crecimiento más importantes de la CE, llegara a ocupar uno de los últimos puestos en bienestar social por un fuerte deterioro laboral, un déficit en las viviendas y –como ya afirmamos más arriba– por un estancamiento en las prestaciones sociales. *Abc* publicaba al respecto: “Sin menospreciar las grandes transformaciones realizadas por la economía española durante el último decenio y los evidentes éxitos conseguidos no pueden dejar de resaltarse los desajustes de un modelo de crecimiento que manifiesta tendencias hacia una polarización social con colectivos marginados en el reparto de los beneficios del crecimiento económico” (24.5.89).

Las descalificaciones del Informe, lógicamente, no gustaron al Gobierno y en ningún momento, éste se mostró proclive a recuperar el diálogo entre los distintos interlocutores sociales. El desinterés del Gobierno fue tan evidente que tuvo un amplio eco en los medios de comunicación la negativa de los socialistas a contestar la encuesta sindical europea elaborada por UGT.

El sindicalista José María Zufiaur criticó este desinterés del PSOE y también valoró positivamente los resultados de la encuesta: “existe unanimidad en los partidos de izquierda y algunas matizaciones del PP y CDS, especialmente en lo relativo a fondos de inversión, utilización de beneficios privados, control sindical, etc...” (*La Gaceta*, 7.6.89). *Abc* también criticaba el “profundo desprecio” del PSOE por el hecho sindical (*Abc*, 7.6.89).

En la primera jornada de reunión de la Ejecutiva del sindicato de UGT, que tuvo lugar en la localidad madrileña de Colmenar, se analizaron los objetivos

⁹⁸ Crisanto Plaza era el director de Estudios de la Telefónica y también fue exz director general de Política

de la Presidencia española. UGT postuló en estas Jornadas que el descontento social era consecuencia de la “falta de voluntad política del PSOE” para elaborar una estrategia capaz de favorecer a los trabajadores (*Abc*, 7.6.89)

Estas acusaciones del sindicato ugetistas dirigidas contra el Gobierno de González se difundieron de forma generalizada en la prensa nacional. Pese al reconocimiento explícito de la importancia capital del “espacio social” transmitido por el equipo de Gobierno, su Presidente fue acusado de apelar al bloqueo de Thatcher con el único fin de ocultar su impotencia en la CE⁹⁹.

La preocupación por el espacio social europeo se extendía fuera de nuestras fronteras. La Confederación Europea de Sindicatos confirmaba el pronóstico sobre la evolución del paro, que en su día recogió el Informe Cecchini.

Según su Presidente, Ernst Breit, en una entrevista publicada por *Le Monde* (7.6.89), los sindicatos tenían que trabajar en la redistribución de la cantidad de trabajo disponible. Se reclamaba desde el espectro sindical una directiva marco sobre el trabajo a tiempo parcial, de temporada, de duración determinada y una Carta de los derechos sociales fundamentales de todos los trabajadores.

Para los sindicatos no sólo bastaba que la Comisión presentara una Declaración de buenas intenciones. “Si Delors –manifestó el presidente de la Confederación de sindicatos- se pronuncia claramente a favor de una declaración solemne, esto significa que ha dicho exactamente lo contrario de lo que afirmó hace un año en Estocolmo”. En suma, la Carta no era sólo una formalidad, sino la base de las condiciones de vida y de trabajo en la CE.

Económica (*La Gaceta*, 24.5.89)

⁹⁹ *Cinco Días*, 7.6.89.

13. El bloqueo de Londres a la Carta (Consejo de Asuntos Sociales, 12 de junio)

El 2 de febrero de 1989 el ministro de Trabajo manifestó en el Congreso de los Diputados que era intención de su Gobierno relanzar el debate sobre la dimensión social en el foro de las instituciones europeas, aunque aseguró que uno de los obstáculos más preocupantes para conseguir este logro se concretaba en la insuficiencia de una base jurídica sobre la cual fundamentar la toma de decisiones en materia social.

En su comparecencia, Chaves recordó que para tomar un acuerdo que permita avanzar en el campo de la armonización de las distintas instituciones laborales nacionales se exigía que las decisiones en el seno del Consejo de Ministros se adoptaran por unanimidad. También informó que existía otra base jurídica (art. 118 Acta Única) que permitía tomar decisiones a través de la mayoría cualificada (condiciones de seguridad e higiene).

Cuando el 12 de junio se reunieron los ministros de Asuntos Sociales para examinar la propuesta española sobre la Carta, no hubo consenso por la oposición frontal de Londres.

El fracaso social queda reflejado en todos los diarios. Observamos que los titulares apenas abordan lo que afecta a la directiva sobre seguridad e higiene y sí, en cambio, se hacen eco del bloqueo de Londres al proyecto de Carta europea. Por otra parte, el diario *Abc* es el que atribuye a González el rechazo frontal a la Carta por parte de Inglaterra. *La Vanguardia*, sin embargo, destaca que fue Manuel Chaves el responsable más directo del bloqueo: “Fracaso de González con la Carta Social Europea” (*Abc*, 13.6.89); “Manuel Chaves no consigue consenso alguno sobre la Carta Social Europea” (*La Vanguardia*, 13.6.89).

El resto de los diarios culparon a Gran Bretaña de impedir la unanimidad necesaria para aprobar la Carta en el Consejo Europeo de Madrid: “El Reino Unido impide la declaración solemne de la Cumbre de Madrid” (*La Economía*, 13.6.89); “Londres mantiene su posición frontal y rotunda a la aprobación de la Carta Social y Europea” (*Diario 16*, 13.6.89); “La oposición de Londres no permitirá aprobar la Carta Social en la Cumbre de Madrid” (*Cinco Días*, 13.6.89).

Para constatar la unidad de criterio respecto a este punto, hemos seleccionado algunos titulares de periódicos extranjeros que también denunciaron el aislamiento británico: “El Reino Unido se queda solo en el tema de la Carta Social” (*Financial Times*, 13.6.89); “Gran Bretaña arroja un jarro de agua fría a la Cumbre” (*The Independent*, 13.6.89); “El Reino Unido, solo en rechazar la Carta Social Europea” (*The Daily Telegraph*, 13.6.89); “La Carta Social rechazada” (*The Times*, 13.6.89).

Por otra parte, algunas publicaciones, como *The Guardian* o *Le Monde* se atrevieron a anticipar que en la Cumbre de Madrid surgirían discrepancias inevitables. Así, el ministro británico Fowler anunció que la Cumbre de Madrid iba a ser polémica porque la CE no comparte el mismo criterio en política social.

Sin embargo, fuera de nuestras fronteras, el interés máximo se concentraba en obtener un calendario para la Unión Monetaria, y aunque la implantación de la Carta se presentó como uno de los objetivos más importantes de esta Presidencia, para muchos su implantación solo suponía “el fundamento teórico de unos logros sociales que existían ya en Europa”¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Ver editorial “*La Europa Social como bandera*” (*Diario 16*, 13.6.89).

14. Declaraciones en Madrid sobre el espacio social

Ya vimos que el ministro de Trabajo se propuso durante el primer trimestre acabar con el paquete del art. 118 a) del Acta Única, relativo a las directivas sobre seguridad e higiene en el trabajo. También, su Departamento trabajó para que se armonizaran las distintas instituciones laborales y se concretara un calendario sobre derechos fundamentales de los trabajadores.

Desde el Gobierno se apostó por un proyecto de Carta que, finalmente, no fue consensuado. Con el objetivo de adoptar las medidas necesarias para realizar la dimensión social del Mercado Único, el Consejo Europeo de Madrid hizo un pronunciamiento sobre el anteproyecto de Carta comunitaria que, a su vez, recogiera el dictamen emitido por el Comité Económico y Social (22, feb., 1989) y la Resolución del Parlamento Europeo (15 de marzo de 1989) .

En este sentido, el Consejo declaró que el “espacio social europeo” incluiría un conjunto de derechos “suficientemente concretos y jurídicamente vinculantes, respetando el principio de subsidiaridad y promoviendo el diálogo social”¹⁰¹. Con este planteamiento sólo puede obtenerse un consenso básico sobre los derechos fundamentales recogidos en el anteproyecto.

15. Conclusiones del capítulo

- La CE incorpora la negociación entre empresarios y trabajadores como uno de los pilares más importantes del nuevo modelo social europeo (Grupo Interservicios de la Comisión Europea). De hecho, se aprobaron dictámenes sobre creación de empleo, formación de los trabajadores y adaptabilidad del mercado de trabajo.
- En el ecuador del semestre regentado por España, interviene el ministro de Trabajo español, Manuel Chaves, para informar del primer balance de la Presidencia española. El gran apartado de la agenda presidencial se centra en el Proyecto de la Carta Social Europea (en la determinación de los derechos fundamentales y en su vinculación jurídica).
- Difícil consenso para aprobar el texto definitivo de la Carta. Algunos Estados analizan los efectos negativos derivados de la supresión de las barreras nacionales.
- En Toledo se debaten propuestas relacionadas con un plan de seguridad social para garantizar el reparto equitativo de las cargas familiares dentro del hogar, y también con el incremento del presupuesto estatal para dichos fines.
- Existe una voluntad de establecer normas de progreso social, difíciles de materializar en legislaciones vinculantes para todos los Estados miembros de la CE. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, habló de superar los lobbies nacionalistas mediante la concertación de la política económica y social de la CE. Sin profundizar demasiado, el gobierno de González criticó al Ejecutivocomunitario por no incluir su

¹⁰¹ Informe titulado: "Un Balance de la Presidencia española del Consejo de las CC.EE. Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Enero/Junio 1989).

propuesta de Carta Social entre las prioridades más importantes de su mandato.

- Según se extrae de la lectura de los diarios analizados, el Documento presentado por Marín (“La Dimensión Social del mercado Interior”), aunque significó un impulso decisivo de los aspectos sociales, contó con una base jurídica de lo social muy precaria.
- El Grupo Socialista del Parlamento Europeo centra su debate en los temas sociales que preocupan a nivel comunitario. El Presidente del Grupo Socialista, Rudi Arndl, invocó la necesidad de un consenso con los representantes sindicales en las decisiones de las empresas y en la concertación y elaboración de los programas de desarrollo.
- En cuanto a la política de desarrollo regional, *La Vanguardia* es el diario que aborda mejor los asuntos relacionados con la política de empleo del ministro de Trabajo. Esta política laboral contó con el apoyo de los sindicatos y empresarios europeos. Uno de los temas puntuales se centra en la distribución de los fondos estructurales de la CE.
- El informe del Comité Económico y Social publicado en el mes de mayo, en el que se anunciaba que España era el país de la Comunidad con mayores desequilibrios regionales, cuestionó la actuación política del Gobierno, y vino a coincidir con lo formulado por las centrales sindicales en los últimos años. Las indicaciones del CES no gustaron al equipo de González que, a pesar de todo, no se mostró proclive a recuperar el diálogo entre los distintos interlocutores sociales. Durante el mes de junio, Felipe González, intentó obtener resultados concretos para la Cumbre en materia social e inició una gira por varios países europeos.

- La prensa a su vez, y de forma paralela, refleja el descontento sindical por el desinterés socialista hacia el cuestionario de la Confederación Europea de Sindicatos (confeccionado para conocer la opinión sobre algunas cuestiones laborales). UGT acusó al PSOE de falta de voluntad política en la elaboración de un proyecto social para los trabajadores. Desde algunos medios periodísticos se denuncia la “impotencia” de Felipe González ante las prioridades de la CE en el area social.
- Tras el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales (12 de junio) la prensa fue unanime a la hora de destacar el “fracaso” de Felipe González respecto a la Carta Social. Asimismo, todos los periódicos detallaron la oposición frontal de Londres.
- Para algunos expertos el capítulo de “Asuntos Sociales” se considera uno de los “puntos negros” de la gestión española al frente de la CE. Sus escasos avances motivaron duras críticas de la oposición y de los sindicatos.

CAPÍTULO V:

Medio Ambiente e Investigación y Desarrollo (I + D)

5.1 Medio Ambiente

5.1.1 El Acta Única y la política ambiental.

El Tratado constitutivo de la CE no contemplaba la protección del medio ambiente. Ya con el Acta Única , y el artículo 130R se recogen las líneas básicas de esta política , con un objetivo triple: Conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, contribuir a la protección y salud de las personas y garantizar una utilización prudente y racional de los recursos naturales.

Así pues, con el Acta Única se institucionaliza el principio de “quien contamina paga”. Pero lo que sí es evidente es que la concienciación comunitaria sobre los problemas del medio ambiente no era sólo institucional sino que estaba también en la opinión pública. En el Parlamento Europeo existía un gran “lobby” ecologista.

Como muy bien señaló Eusebio Cano en unas Jornadas Parlamentarias del Grupo Socialista¹⁰², aunque la protección del medio ambiente era un objetivo prioritario de la Europa de hoy, esta preocupación no aparece reflejada adecuadamente en el Presupuesto comunitario. Los gastos totales para medio ambiente ascendieron en 1986 a 90 millones de ecus, es decir el 0,25% del presupuesto.

En el periodo que estamos analizando, las acciones comunitarias en medio ambiente eran de tres clases:

- Proyectos dirigidos al desarrollo de tecnologías limpias.
- Proyectos de puesta a punto de nuevas técnicas y métodos de medición y vigilancia de la calidad del medio ambiente natural.
- Proyectos de carácter promotor tendentes a mantener o restablecer biotipos gravemente amenazados.

5.1.2 Los programas de acción ambiental de la CE.

La aplicación de los programas, normativas y medidas de protección ambiental desarrollados por la CE han tenido una gran repercusión en las actividades económicas de los países miembros.

Al principio, la política ambiental de las Comunidades Europeas estaba destinada a reducir la degradación ambiental, pero sus acciones eran aisladas. Posteriormente, tras evidenciar distorsiones en los mercados, las cuestiones ambientales cobraron una dimensión mundial e interdependiente.

¹⁰² CANO, Eusebio: "La política del medio ambiente, salud y consumo", en IV Jornadas Parlamentarias "Los socialistas españoles y la Comunidad Europea".Madrid, 1989.

Como indicaban los informes de la OCDE en 1989 sobre el Estado del Medio Ambiente, el progresivo deterioro de la contaminación atmosférica, motivó la incorporación de la protección del medio ambiente al Acta Única.

A través de los flujos informativos, es posible apreciar cómo las instituciones europeas realizaron un seguimiento eficaz de la política medioambiental con el desarrollo de los programas plurianuales existentes y con la observación rigurosa de los numerosos actos jurídicos de la CE.

Un 30% de los debates realizados al más alto nivel giraron en torno a los problemas de conservación y restauración del medio ambiental. La revista MOPU resumía en su edición de enero/89 los grandes programas de acción cuatrienal de la CE en política de Medio Ambiente.

En el momento de gestionar España su primera Presidencia, esta política medioambiental se caracterizaba por su arranque relativamente reciente¹⁰³. La entrada en vigor plena del Acta Única Europea para 1993 suponía un verdadero reto para la industria española.

Los actos comunitarios en esta materia eran numerosos ya que superaban el centenar de disposiciones sobre la protección atmosférica y de las aguas, control y gestión de los residuos sólidos y de las sustancias tóxicas o reducción de las molestias ocasionadas por el ruido.

Existían además cuatro Programas de acción comunitaria que exigían una mejor gestión de los recursos naturales, con una incidencia directa en la economía (sobre todo en España, donde el déficit ambiental era bastante elevado).

¹⁰³ Su primera declaración programática data de 1973. La crisis energética y económica de los últimos años y las dificultades consiguientes para mantener la competitividad industrial frenaron bastante su alcance.

De este modo, y según una publicación de la revista *MOPU*, desde el año 1973, y durante los primeros ocho años, se inició en el control de la contaminación. Las principales directrices estaban basadas “en la previsión y prevención de las fuentes contaminantes, el uso racional de los recursos, la introducción del análisis ambiental, el establecimiento de niveles de acción, desarrollo de los programas de investigación en materia de previsión ambiental y colaboración con otros países y organismos internacionales”.

El tercer Programa 82-86, de carácter continuísta, marcó como objetivos principales: la protección de la salud humana, asegurar la disponibilidad de los recursos naturales y la conservación de la flora y fauna amenazadas. Entre las líneas de actuación incluidas en el 3º programa, apuntamos el desarrollo de un método de estudio para el impacto ambiental de nuevos proyectos. Se analizaron en la misma dirección los problemas de contaminación sonora y atmosférica transfronteriza. También el programa desarrollaba la eliminación de los residuos tóxicos y peligrosos y el desarrollo de tecnologías limpias.

El último de los Programas cuatrienales, en vigor desde 1987-92, pretendía incidir con mayor fuerza en las actuaciones preventivas. Destacan las referidas a “la protección del Mediterráneo y mar del Norte, los problemas derivados de los fluorocarbonados en relación a la capa de ozono, la mejora de la calidad de vida en el medio urbano, la prevención de accidentes con consecuencias contaminantes para el medio marino, el control de los riesgos derivados de la biotecnología y la manipulación genética y la reducción de contaminantes por emisiones de vehículos”.

Durante este semestre el MOPU asumía gran parte de la responsabilidad ejecutiva de esta política medioambiental. Los objetivos trazados para este período preveían la mejora de la calidad ambiental en el espacio comunitario y la paralización del deterioro de la atmósfera y la capa de ozono.

Con regularidad la Comisión elevaba informes al Consejo respecto a cuestiones diversas relacionadas con el medio ambiente. “Sobre la mesa esperan aún el necesario consenso más de 30 propuestas remitidas por la Comisión ...dos nuevas directivas de residuos, algunas nuevas sustancias que afectan al medio acuático comunitario, la propuesta de protección de hábitats naturales y seminaturales o iniciativas para aportar soluciones al cambio climático” (*Revista MOPU, Enero 89*).

No obstante, conviene subrayar que los diarios destacaron especialmente entre las propuestas del programa español, las actuaciones para la protección del medio ambiente en el área mediterránea de la Comunidad Europea

5.1.3 Primer Consejo de Medio Ambiente: Reducción del CFC

La contaminación atmosférica era uno de los principales problemas ambientales de los países industrializados y la CE. Por su incidencia en el equilibrio del ecosistema, la alteración del clima por la creciente presencia de CO₂ en la atmósfera (efecto invernadero), la alteración de la capa de ozono o las radiaciones ionizantes fueron fuente de preocupación para los responsables de medio ambiente.

El primer Consejo de Ministros del Medio Ambiente (2 de marzo) bajo Presidencia española acordó disminuir en un 85% la fabricación del clorofluoruro carbonado (CFC). España era uno de los países más afectados por dicha medida: la multinacional francesa Atochem (en Vizcaya) y la alemana Kali-Chemie Ibérica (Torrelavega) eran las únicas empresas en España que producían ese gas. El ministro de Obras Públicas y Urbanismo, Javier Sáenz Cosculluela, artífice de la propuesta aprobada, negoció con las multinacionales la reorientación de sus mercados a largo plazo.

Abc publicó un editorial sobre el agujero de ozono. En el Consejo de Ministros de Medio Ambiente celebrado el 2 de marzo se aceptaron las propuestas de las delegaciones de Francia y Holanda para renegociar el protocolo de Montreal (firmado por 34 naciones en 1987). Según el editorial, los productos causantes de la destrucción de la capa de ozono “deberían dejar de fabricarse”. Sin embargo, esta tarea no iba a ser de fácil realización ya que la industria de los CFC representaba cerca de 1.600.000 empleos y los costes de reconversión eran muy elevados (*Abc*, 7.3.89)

Hubo otras voces que se levantaron contra esta teoría, como la del ex secretario de Estado francés de Medio Ambiente y experto científico y vulcanólogo, Haron Tazieff. En su opinión, resultaba muy precipitado condenar al CFC de la disminución de la capa de ozono, y entre los interrogantes que se planteaba se encontraba el siguiente: “¿Por qué el agujero en la capa de ozono se encuentra sobre el Polo Sur cuando 9 de cada 10 emisiones de este gas se producen en el Hemisferio Norte?” (*Tribuna*, 6.3.89).

En marzo (del 5 al 7 de marzo), la Conferencia de Londres concretó dos tendencias: la de los países industrializados cuyo objetivo final era prohibir totalmente la producción y uso de los gases CFC y la de los países en vías de desarrollo.

Los diarios nacionales cuando hablan del resultado de la reunión anunciaron que “no hubo acuerdo” (*El País*, 8.3.89) o, que los participantes concluyeron el debate con “sensación de decepción” (*El Independiente*, 10.3.89).

Lo acordado se concretó, finalmente, en un total de diez apartados de actuación política medioambiental, presentados por el ministro inglés Nicholas Ridley. Por su implicación directa en los intereses económicos de los Estados

miembros destacaban: la creciente preocupación de los gobiernos para salvaguardar la capa de ozono; la total eliminación de la producción y del consumo de los CFSs; las soluciones técnicas para resolver los problemas humanos del Tercer Mundo y, en definitiva, una acción concertada de todos los países para salvaguardar la capa de ozono.

Nunca hasta ese momento los gobiernos europeos habían lanzado una ofensiva semejante ante los efectos del clorofluoruro. Sin duda, la solución del problema trascendía el ámbito local o nacional ¹⁰⁴.

La producción de los CFCs estaba básicamente asentada en cuatro sectores industriales (aerosoles, industrias de refrigeración doméstica e industrial, producción de espumas flexibles e industria electrónica). Si nos remitimos a España se utilizaron, en 1988, unas 12.100 toneladas en la fabricación de sprays; 6.280 en la industria de los refrigerantes; 3.080 en la de las espumas y 440 en el sector de la electrónica, lo que hace un total de 22.000 toneladas ¹⁰⁵.

En Londres, el ministro español Sáenz de Cosculluela anunció los propósitos del Gobierno, fundados en el deseo de alcanzar un consenso internacional con el fin de reforzar las disposiciones de Montreal (desfasadas para muchos científicos). Quiso, igualmente, aprovechar esta ocasión para solicitar a la CE un régimen de ayudas, necesario para la transferencia de tecnología a los países subdesarrollados.

También hemos de hacer mención a otra de las conferencias decisivas en el desarrollo de la política ambiental: la Conferencia de La Haya. Felipe González apuntó un hecho muy decisivo para la industria energética, y este hecho

¹⁰⁴ Fue necesario el consenso de un grupo de países que se materializó con la firma del Protocolo de Montreal en 1987, del que España y la CE fueron partes firmantes junto con otros 27 países. Fuente: *Cinco Días*, 26.5.89.

¹⁰⁵ Según datos extraídos de lo publicado por *Cinco Días* (26.5.89).

no fue otro que la incorporación de las variables ambientales a la discusión del plan energético.

Cada vez eran más importantes los efectos contaminantes en las instalaciones energéticas. El equipamiento de las centrales térmicas era muy caro, su valor ascendía aproximadamente a unos 270.000 millones de pesetas. Esto podía dar una idea de la gran importancia que adquirirían los condicionantes medioambientales.

En La Haya, se planteó a nivel internacional que los problemas de la atmósfera necesitaban de instrumentos de control. Para el director general de Medio Ambiente, Fernando Martínez Salcedo, “la conciencia sobre estos problemas se había internacionalizado. Los problemas de soberanía –en opinión de Martínez Salcedo– lo son menos cuando hablamos de medio ambiente” (*El Nuevo Lunes, 10 al 16 de abril, 1989*).

5.1.4 Negociación con la Asociación Española de Aerosoles.

La prensa española dedicó amplios espacios para informar sobre el convenio suscrito entre el MOPU y la Asociación Española de Aerosoles. En dicho acuerdo se pretendía reducir en un 90%, para el año 1990, la producción de los gases clorofluorocarbonos en el sector de los aerosoles.

El ministerio de Obras Públicas programó una campaña para el verano de 1989, en la que todos los medios de comunicación se verían implicados en la información a los ciudadanos sobre el debido uso y los peligros del CFC.

El ministro de Industria, Sáez de Cosculluela informó de ese asunto en el Congreso. En su comparecencia para resumir los resultados de la Conferencia de Londres, expuso el desarrollo de las negociaciones que se estaban llevando a

cabo sobre las condiciones necesarias para establecer medidas normativas reguladoras de la producción de CFCs.

En este sentido, el ministro subrayaba que mientras era fácil la reducción de estos productos en aerosoles, sector de refrigeración y espumas, en el sector de la electrónica de precisión era más complicado encontrar productos alternativos. A su vez, eligió esa ocasión para enumerar algunas de las medidas y disposiciones normativas que se iban a implantar en España: etiquetado obligatorio de los envases de aerosoles que contengan CFCs, instalación de los sistemas de recuperación y reciclaje en todos los procesos que impliquen emisión a la atmósfera, información al público para que se conciencie del problema...etc.

El País informó ampliamente sobre el acuerdo firmado el día 5 de junio entre Sáenz Cosculluela y el presidente de la Asociación Española de Aerosoles, Raimundo Pardos. Con la firma de ese acuerdo se trataba de reducir al 90% el uso de los gases CFC en los envases de aerosoles. El acuerdo no afectaba a los grandes usuarios y productores. No tendría tampoco aplicación en los usos farmacéuticos de estos gases, en la industria electrónica y en otras industrias especializadas.

Según las declaraciones del presidente de la Asociación Española de Aerosoles, Raimundo Pardos, recogidas en el diario *El País* (6.6.89), la producción de CFC destinada a aerosoles suponía entonces el 20% de la producción total de estos gases. También aseguró que el 70% de los aerosoles que había en el mercado español no contenían clorofluorocarbonos.

Asimismo, el resto de los diarios reproducían estos mismos datos sobre la reducción de los gases contaminantes, e informaron que las empresas españolas hacía 15 años que habían iniciado la sustitución progresiva de estos gases por propelentes alternativos.

5.1.5 Incertidumbre en la industria automovilística

A primeros de abril, la Comisión desestimó un laborioso acuerdo sobre la reducción de la contaminación originada por los automóviles, firmado en el mes de noviembre de 1988. El comisario responsable de Medio Ambiente, Carlo Ripa di Meana, no entendía por qué en los países comunitarios no se podían imponer las reglas anticontaminantes de EE.UU, Japón y de la Asociación Europea de Libre Cambio.

La Comisión propuso aplicar a partir del 1 de enero de 1991 (con uno o dos años de antelación de la fecha prevista) las normas pactadas en noviembre sobre reducción en un 53% de las emanaciones tóxicas de los automóviles con una cilindrada inferior a 1.400 centímetros cúbicos¹⁰⁶.

La nueva medida pretendía endurecer las normas anticontaminantes a partir del 1 de enero de 1993. El comisario Di Meana, justificando a la Comisión alegaba que los gobiernos “comprenderían este paso” por la fuerte presión ejercida desde la opinión pública.

Entre los países comunitarios la nueva alternativa no gustó a Francia, España, Inglaterra e Italia. Otros países, como Alemania, Dinamarca, Grecia y Holanda, sí expresaron su total acuerdo.

Sobre esta adaptación de la industria automovilística a las normas anticontaminantes de EE.UU y Japón, el británico Leon Brittan declaraba que los industriales se habían preparado para esta innovación del automóvil. Su opinión, sin embargo, no era compartida por el secretario del Comité de enlace de los fabricantes de automóviles, el cual estimaba que el sector necesitaba más de 4

¹⁰⁶ *El País*, 10.4.89.

años para adaptarse, y que la utilización de un catalizador iba a encarecer el precio de los vehículos entre un 10% y un 16%, según su cilindrada.

Las empresas alemanas occidentales, como Volkswagen, podían instalar con celeridad los catalizadores, pero las italianas, o las francesas asentadas en España, Peugeot y Renault, habían prescindido de los catalizadores en sus investigaciones de fabricación.

Sobre el impacto ambiental en la opinión pública, se registró un dato significativo: el número de coches nuevos de gasóleo era de 382.000, y en 1986, fueron 780.000 los automóviles de gasóleo que salieron al mercado.

La Comisión confirmaba con una declaración oficial a primeros de mayo la petición que hizo al Parlamento un mes antes: obligar a los productores de vehículos a instalar catalizadores de tres vías (cilindrada inferior a 1.400 cm³) a partir del 1 de enero de 1993.

Esta propuesta sería presentada en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales que estaba programado para el día 8 de junio.

La prensa reproduce el seguimiento que llevó a cabo la Comisión sobre emisiones contaminantes de los automóviles. También los diarios reflejaron la situación por la que atravesaban los fabricantes europeos. Estaban divididos e inseguros ante la variación de las reglas. Los fabricantes anunciaron que era muy previsible un incremento de los precios en el sector.

El 2 de junio *Cinco Días* lanzaba un titular sobre esta previsible subida de los precios, "Los coches no contaminantes serán un 10% más caros". El ministerio de Industria español advertía que a partir del 1 de enero de 1993, los coches de menor cilindrada tendrían que estar equipados con catalizadores de

tres vías, para reducir sus emisiones contaminantes. Esta normativa afectaría al 70% del parque automovilístico español.

El objetivo de la Presidencia española encabezada por Javier Sáenz de Cosculluela era conseguir un acuerdo unánime o mayoritario para el coche limpio, pero las dificultades para llegar a ese acuerdo final se centraban en la estrategia a seguir durante el periodo transitorio hasta el año 1993.

La controversia suscitada en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales (8 de junio) en torno a la nueva directiva para reducir la contaminación provocada por los coches pequeños, se relega a un segundo lugar en algunos medios periodísticos (“La CE se compromete a actuar contra el “efecto invernadero”, titula *El País*, 9.6.89). Otros diarios, por el contrario, resaltan en primer término las dificultades para consensuar una directiva sobre el “coche limpio” (“Las normas comunes de emisión para coches pequeños presentan dificultades”, *La Economía*, 9.6.89).

Al detenernos en este punto, el Gobierno de Bonn boicoteó el proyecto que defendía la severa normativa estadounidense (para el 1 de enero de 1993) y puso como condición necesaria, el adelanto de las medidas anticontaminantes al 1 de octubre de 1991. Por su parte, los países productores de la gama baja de los automóviles (Francia, Italia, Reino Unido y España) se mostraron disconformes con esta solicitud, porque reclamaban el criterio de unidad de mercado. También avisaron del despifarro que para las empresas del automóvil significaba tener que modificar las cadenas de montaje. Solamente pretendían ganar tiempo.

La lucha contra la contaminación atmosférica y las nuevas normas europeas antipolución en materia de construcción de automóviles abrió una guerra entre constructores de automóviles y la CEE. Por ejemplo, el diario *Abc*

¹⁰⁷ trasladaba el criterio de la empresa automovilística Peugeot-Citroën, que en boca de Jacques Calvet, denunciaba el riesgo de caer en el “reino del absurdo”. A su juicio, la CEE había caído en un error inadmisible responsabilizando a fabricantes, cuando estaba probado que eran los vehículos de gran consumo de gasolina los que más contribuían a emitir residuos tóxicos.

La batalla no había hecho más que comenzar. Todos los grandes constructores europeos tenían una implantación multinacional y tras el enfrentamiento verbal, se asistía a la primera fase de una batalla de posiciones administrativas. Según el diario *Abc*, Peugeot-Citroën lanzaba un llamamiento a la opinión internacional para subrayar el “alcance de los problemas en juego” (18.6.89).

5.1.5 La Conferencia de Helsinki

En esta Conferencia se apostó por la eliminación, en el año 2000, de los gases nocivos que venían dañando la capa de ozono. La prensa diaria de ámbito nacional informaba ampliamente de la reunión. Ochenta países firmantes del Protocolo de Montreal parecían estar de acuerdo en acabar con la producción de los gases CFC¹⁰⁸.

El otro punto importante de la reunión tenía como fin la creación de una fundación que ayudara a los países del Tercer Mundo a desarrollar sustancias químicas inocuas sustitutivas de los CFC. Ello implicaba una demanda fuerte de recursos aplicados a la investigación, a la obtención de nuevas y tecnologías y a

¹⁰⁷ *Abc*, 18.6.89.

¹⁰⁸ Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono. Montreal, 16.8.87. La Comunidad Europea es parte contratante de los convenios y acuerdos firmados sobre Medio Ambiente, y España quedó obligada a aceptarlos con la adhesión a la CEE. SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA. “Implicaciones Económicas de la Protección Ambiental de la CEE: Repercusiones en España”. Ed. Instituto de Estudios de Prospectiva, Madrid, 1991.

la reconversión de industrias. Estas medidas, sin lugar a dudas, estaban lejos de ser alcanzadas por los países pobres.

Por este motivo, resume *El País*, el presidente de Finlandia, Muno Koivisto, analizaba la situación de Occidente: “Los países industrializados deben estar dispuestos a invertir mucho más que antes en el desarrollo de nuevas tecnologías, y también deben estar dispuestos a aportar esos conocimientos a los países subdesarrollados” (*El País*, 3.5.89).

El promotor de la Conferencia, el director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Mostafá K. Tolba, apuntó asimismo que los conocimientos acumulados sobre los procesos destructivos de la capa de ozono desde la firma del Protocolo de Montreal hasta la fecha, indicaban que las metas propuestas entonces tenían que ser ajustadas. “La eliminación total de los CFCs para finales de este siglo –dijo- debe ser la meta sustitutiva de la del 50% que se había planteado inicialmente”.

El País, ese mismo día, recogía unas declaraciones del ministro de Obras Públicas, Javier Sáenz de Cosculluela, en las que pedía un acuerdo más universal de los compromisos asumidos por la CE (reducción del 85% de los CFC en el menor tiempo posible, y eliminación total para el año 2000). En este sentido, el ministro vaticinaba: “Una vez adoptadas y establecidas nuevas tecnologías, se producirá una situación irreversible que hará imposible el regreso de estos productos (CFCS)”.

En definitiva, en la Conferencia de Helsinki se discutió sobre la forma de ayudar a los países del Tercer Mundo para que sufragaron todos los costes derivados de una política ecológica. En consecuencia, surgieron algunos interrogantes sobre este punto, como ¿Qué precio estaban dispuestos los países

ricos a pagar para salvar la capa de ozono?, ¿Cuál era, a su vez, el temor de los más pobres? Ó ¿Podría establecerse un nuevo colonialismo industrial?...

5.1.6 La Cumbre de Cáceres

Los Doce reunidos en Cáceres decidieron combinar los esfuerzos de protección a la naturaleza con la política agraria, según indicaba la prensa. La medida más importante fue anunciada por el comisario Carlo Ripa di Meana. La CE invertiría más de 75 millones de ecus en el programa MEDSPA, con el que iba a hacer frente al grave problema de la degradación de los suelos en el área mediterránea.

Sin embargo, los acuerdos adoptados en la reunión no eran vinculantes. Los congregados, en cambio, sí coincidieron en la ampliación de los instrumentos comunitarios que iban a ser necesarios para atajar la desertización. Y esto implicaba la revisión y coordinación de los instrumentos existentes, dentro de una política global del medio ambiente.

También se estudió la creación de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Los objetivos de este futuro organismo serían explicados por el comisario Di Meana. El asunto prioritario consistía en ayudar a los países de la CE y a los terceros países a proteger el medio natural mediante indicaciones autónomas, libres de cualquier presión política o industrial. Pero, como ya venía siendo habitual entre los Doce, Gran Bretaña expuso sus reservas sobre la recogida de datos científicos que pretendía la citada Agencia¹⁰⁹.

Al mismo tiempo, el ministro español y el comisario de Medio Ambiente coincidieron en determinar que existía un nuevo frente de la CE con la incorporación de los países ibéricos. La protección de la cubierta vegetal frente a

¹⁰⁹ *Abc*, 7.5.89

la desertización era un asunto que nunca había sido planteado en los Consejos de Medio Ambiente.

La mayor parte de lo diarios resaltan las duras críticas dirigidas al ministro español procedentes de ciertas asociaciones. El Consejo Ibérico para la Conservación de la Naturaleza y la Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Extremadura (ADENEX) le acusan de haber incumplido su compromiso de crear una agencia de medio ambiente en España. El ministro, por otra parte, calificó estas acusaciones de “oportunistas”.

En *Diario 16* (8.5.89) se refleja la crítica que dirige al ministro el presidente de ADENEX, Santiago Hernández: “Es chocante que el ministro proponga la creación de una agencia europea de medio ambiente, cuando no la tenemos ni en España, ni en Extremadura, a pesar de que la Administración adquirió el compromiso de crearla en la conferencia sectorial de ecología del PSOE celebrada en julio de 1987, en Trujillo”.

También para el presidente del Consejo Ibérico, Francisco Blanco, resultaban falsas las medidas proclamadas por Cosculluela. Igualmente, denunció la inexistencia de una Agencia del Medio Ambiente aquí, en España, porque en casi todos los países de Europa existe la agencia. El Consejo Ibérico, (que aglutinaba un número de organizaciones ecologistas de gran prestigio) solicitó entonces la creación de un ministerio o de una secretaría de Estado para el medio ambiente: “España necesita una política ambiental adecuada, pues es el país que más destroza –afirmaba Francisco Blanco- ...es el que más denuncias recibe de Bruselas por incumplimiento de la legislación medioambiental”.

5.1.6 Acuerdo contra el efecto invernadero

El ministro Sáenz de Cosculluela se despedía de la Presidencia de la CE con un acuerdo unánime sobre el “efecto invernadero”. Esta resolución trascendía los límites de la CE, si bien las acciones a emprender quedaban condicionadas al Informe que la Comisión Europea debía elaborar.

En *El País* se describen algunos aspectos esenciales del acuerdo firmado : “La CE adquiere el compromiso político de proteger la selva tropical y cuidar su cubierta vegetal propia, evitar las emisiones de dióxido de carbono y corregir sus políticas energéticas con el doble objetivo de ahorro en el consumo y desarrollo de fuentes de generación de energía limpia” (6.6.89).

Según indica *El País*, la dimensión global del “efecto invernadero” era motivo suficiente para llegar a un acuerdo internacional. En la resolución final, los responsables de Medio Ambiente recordaron las conclusiones del Consejo de Ministros del pasado mes de marzo (reducción de la producción de los gases clorofluorocarbonos), y alentaban a los países miembros a tomar medidas sobre otras sustancias implicadas en el “efecto invernadero”.

A partir de ese momento la Comisión tendría que examinar las políticas de la CEE para combatir el “efecto invernadero”. Por último, en la resolución aprobada en el último Consejo de Medio Ambiente (8 de junio) también se incluían algunas medidas para la reforestación de los bosques, con el fin de contribuir “a los esfuerzos internacionales para terminar la destrucción del bosque tropical y el proceso de desertización” (*El País*, 9.6.89)

5.1.6 Conclusiones sobre Medio Ambiente en el Consejo Europeo de Madrid

El Consejo Europeo en su informe final puso de relieve la marcada actividad del Consejo de Medio Ambiente durante la Presidencia española. El informe reseñaba, sobre todo, lo concerniente a las medidas que adoptaron los países comunitarios en la protección de la capa de ozono, el efecto invernadero, las emisiones contaminantes de automóviles de pequeña cilindrada y la política forestal.

Asimismo, el Consejo reclamó de la Comisión un programa de protección del medio Ambiente en las regiones de la Comunidad afectadas por la desertización, la erosión y la deforestación. A modo de síntesis, el texto final dice: "Consciente de sus responsabilidades ante los riesgos que se plantean a escala planetaria (cambios climáticos, deforestación, desertización, etc) considera que la Comunidad tiene una función esencial que desempeñar en el ámbito de la protección del Medio Ambiente, tanto mediante su legislación interna como mediante su activa contribución a las iniciativas que se tomen a nivel internacional"¹¹⁰.

¹¹⁰ Fuente: Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. 1989.

5.2 Investigación y Desarrollo (I+D)

5.2.1 La política común en Investigación y Desarrollo.

El Acta Única Europea sentó las bases de una nueva política común en Investigación y Desarrollo. La política de I+D, que carecía antes de una base jurídica concreta, iba a poder desarrollarse de manera más sistemática.

El art. 130 F del Tratado constitutivo de la CEE establecía que el objetivo de la Comunidad era fortalecer las bases científicas y tecnológicas de la industria europea y estimularla para que fuera más competitiva a nivel internacional. El apartado 3 de este artículo subraya la importancia de la relación entre el esfuerzo común en I+D, la creación del mercado interior y la aplicación de políticas comunes.

La innovación en las industrias comunitarias y en los servicios pasaba obligatoriamente por la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Los esfuerzos llevados a cabo para el desarrollo del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico debían aunarse con el contenido del programa Marco I+D de la CEE y otros Programas europeos, como el Eureka.

A pesar de que Europa gastaba relativamente menos en I+D que EE.UU y Japón, las cifras absolutas eran muy importantes. Sin embargo, la dispersión de los esfuerzos, la duplicación de actividades y la falta de mecanismos institucionales flexibles para la colaboración hacían que los resultados en I+D fueran mucho menores que lo que cabría esperar.

Hemos de reconsiderar, por otra parte, que la política de I+D se rige básicamente por unos principios o directrices, centrados en la cohesión económica, en el carácter precompetitivo, en la normalización y reglamentación y en la subsidiariedad. La cohesión económica debía estar orientada a reducir las disparidades entre las distintas regiones de la Comunidad y el retraso tecnológico de las menos favorecidas.

Resultaba, a su vez, muy necesario el apoyo a los proyectos de investigación orientada. Un mejor conocimiento de la diversidad de los procesos productivos vigentes facilitaba la elaboración de reglamentos para su obligado cumplimiento. Además, la Comunidad actúa siempre bajo el principio de subsidiariedad porque la colaboración entre países proporciona un beneficio muy superior al individual.

Cabe señalar que la política de I+D, teniendo en cuenta estos principios que acabamos de enumerar, debe estar informada en su concepción y desarrollo por la cohesión económica y social. El instrumento central de control para llevar a buen término el desarrollo tecnológico reside en el Programa Marco. Éste se llevará a cabo a través de programas específicos aprobados por el Consejo de Ministros (donde se detallan las particularidades sobre el contenido científico y técnico y el periodo de acción)¹¹¹.

5.2.2 El Programa Marco y su desarrollo

El ministro de Educación, Javier Solana, declaraba que el éxito de la gestión de una Presidencia se medía, entre otras cosas “por el número de

¹¹¹ SECRETARIA de Estado de Economía . Ministerio de Economía Y Hacienda: “ Implicaciones económicas de la protección ambiental de la CEE: repercusiones en España” Informes del Instituto de Estudios de Prospectiva. Madrid, 1991.

programas” sobre los que pudieran adoptarse posiciones comunes ¹¹² En el desarrollo de los programas de investigación se exigía una coordinación de las sucesivas presidencias comunitarias. Precisamente por este motivo fueron muy frecuentes los contactos con los representantes franceses comunitarios.

El Programa Marco Comunitario de Investigación y Desarrollo, durante este periodo, contaba con un presupuesto de 5.396 millones de ecus (1987-1991). Este programa, fijaba a su vez, la creación de una Europa de los Investigadores, en línea con la Europa de 1993 y el Acta Única Europea.

Las líneas principales que contenía el Programa Marco englobaban aspectos tan variados como la calidad de vida, la construcción de un mercado europeo, la modernización de los sectores industriales, recursos biológicos, problemas energéticos, ciencia y tecnología para el desarrollo, recursos marinos y cooperación europea en ciencia y tecnología.

Nuestra Presidencia, según las informaciones extraídas al respecto, tenía que abordar tres retos de suma importancia para el futuro de Europa: cohesión económica y social en I+D, confrontación de políticas nacionales de I+D y evaluación y revisión del Programa Marco. Según las estimaciones que se barajaban, hasta ese momento se habían aprobado programas por un importe correspondiente al 74% del Presupuesto total destinado al Programa Marco.

Eran varios los programas comunitarios pendientes de aprobación (el programa *Mast*, de recursos marinos, el programa *Telemar* relativo al desarrollo de equipos nucleares, el programa *Flair*, sobre aplicaciones de la biotecnología y sobre alimentación). Por otra parte, cerraban su convocatoria en este semestre el programa *Brite-Euram* y el *Eclair*.

¹¹² Diario 16, 18.1.89.

Se cumplían, pues, dos fechas importantes para la investigación en Europa: por un lado el Plan Nacional de Investigación había cubierto su primera etapa (0,8% del PIB dedicado a I+D) y por otro, el Programa Marco Europeo iniciaba, en su segunda, etapa una revisión de sus objetivos y orientaciones.

Javier Solana, en el Parlamento Europeo, habló de la estrategia que la Presidencia española iba a adoptar durante su mandato comunitario: “España quería abrir una etapa de intensa reflexión europea sobre la investigación”. Tenía, pues, que intentarlo ahondando en la cohesión económica y social, en línea con las directrices que marcaba el Acta Única Europea (*Cinco Días*, 20.2.89).

5.2. 2. Nuevos presupuestos para I+D

Para finales 1989, el gasto español en I+D estaba previsto que superara el 0,9% del PIB (las cifras totales de gasto presupuestadas para 1989 excedían los 300.000 millones de pesetas para 1988). Esta es la cifra que anunciaba el ministro Javier Solana en una entrevista concedida al diario económico *Cinco Días*¹¹³. En dicha entrevista, el ministro también aprovechó para denunciar públicamente cierta “actitud negativa” de la sociedad española frente a la ciencia y la tecnología.

Durante el transcurso del “Seminario Internacional de Investigación y Desarrollo en la Industria Gráfica” se llegó a la conclusión de que los objetivos comerciales tenían que estar basados en el potencial de la tecnología. También en el Seminario se dijo que las estrategias tecnológicas debían estar fundamentadas en los fines comerciales y de mercado. Para ello, era preciso que las PYMES diseñaran una investigación aplicada que permitiera llegar a prototipos de desarrollo en serie, industrialización y comercialización¹¹⁴

¹¹³ *Cinco Días*, 20.2.89.

Abc informaba (20 de febrero) que el ministerio de Industria y Energía español, Claudio Aranzadi, estaba preparando una convocatoria para subvencionar algunos proyectos ligados a I+D. Sobre este punto hay que matizar que, junto a los objetivos específicos de cada programa, existía el propósito general de incrementar el porcentaje de inversiones en I+D sobre el PIB (que en ese instante era del 0'7%).

El diario americano *The Wall Street Journal*, por su parte, publicó una crónica acerca del presupuesto para I+D, en la que se afirmaba que los funcionarios de la CE reclaman más dinero para la investigación: "Tras la última subvención de 885 millones de dólares concedidos este mes, los ministerios de investigación de la CE están reexaminando la dirección hacia la que debe encaminarse en el futuro la política tecnológica" (*"Wall Street Journal"*, 20.3.89).

A su vez, *La Economía* informa en un reportaje publicado el día 12 de abril ("El negocio de la investigación en Europa") acerca de cuales iban a ser las expectativas que quería alcanzar la CE en materia presupuestaria. La Comunidad deseaba poder alcanzar un presupuesto anual de 250.000 millones de pesetas en proyectos de I+D a partir de 1992. El programa *Sprit* (relacionado con el desarrollo de las tecnologías de la información) costaba unas 120.000 pesetas por minuto. Esta cantidad, resultaba irrisoria si se comparaba con la NASA, cuyo gasto era 20 veces superior en I+D.

Los últimos millones destinados a investigación obligaban a los ministros europeos del sector a replantearse la dirección que en el futuro iba a seguir la política tecnológica europea. En España, tradicionalmente, los gastos habían sido siempre muy limitados. Nuestro crecimiento económico se basó durante muchos

¹¹⁴ *Abc*, 20.2.89.

años en la tecnología incorporada de los bienes de equipos importados¹¹⁵, y ahora se producía una redistribución de los gastos en favor del sector empresarial y en detrimento de las universidades y otras instituciones públicas.

Las investigaciones del CSIC y de la Universidad Autónoma de Barcelona abordaron el impacto de los programas comunitarios de I+D. Del estudio se extrajo, como principal conclusión, la nueva conciencia que estaban adquiriendo las empresas españolas: La investigación las hacía más competitivas, especialmente con vistas al horizonte 1992. Por otra parte, la existencia de programas públicos de investigación, opinaba Carmen Matutes¹¹⁶, no constituía “un simple subsidio”, sino que generaba esfuerzos adicionales en I+D.

5.2.3 Informe sobre ciencia y tecnología en Europa. Revisión del Programa Marco.

Un documento elaborado a finales de 1988 por la Comisión Europea, denunciaba los contrastes y la dispersión de esfuerzos en la CE en materia tecnológica.

Las diferencias en este campo reflejan que las tres cuartas partes del gasto de Europa en I+D recaen en Alemania, Francia y Gran Bretaña. El informe de la Comisión también revela que las zonas más desaventajadas tecnológicamente eran Portugal, Grecia, España, Irlanda y el sur de Italia¹¹⁷. Por entonces, Alemania era la única nación comunitaria que podía competir con Estados Unidos en cuanto a porcentaje del PIB destinado a la investigación. Los daneses, según el Informe, tenían un gran interés en la rápida difusión de las nuevas tecnologías.

¹¹⁵ Un artículo firmado por Carmen Matutes (*La Economía*, 24.4.89), nos recuerda que en 1983 España sólo llegó a emplear un 0'4% del PIB en actividades de I+D. Y en 1984 y 1985 se gastó el 0,5% y el 0,57% del PIB, respectivamente.

¹¹⁶ *La Economía*, 27.4.89.

¹¹⁷ El contenido del Informe elaborado por la Comisión Europea se publicó en la revista *España Económica*, abril 1989

El documento en sí contenía un gran número de advertencias. Existía un “excesivo proteccionismo tecnológico” entre los países de la CE y el daño ocasionado por la fuga de cerebros era motivo de preocupación. También se hablaba de la amenaza de Japón y de nuevos competidores como los soviéticos y los países en vías de industrialización (Brasil y Corea del Sur).

La Comisión Europea, a su vez, anunciaba a primeros de mayo la revisión a fondo del actual Programa Marco Comunitario de I+D. La iniciativa se justificaba, según el órgano Ejecutivo de la Comunidad, -informa *Expansión*- por la deficiente preparación de los países europeos para hacer frente a la “competencia exacerbada” procedente no sólo de Estados Unidos y Japón, sino también de las nuevas naciones industrializadas (*Expansión*, 8.5.89).

EE.UU y Japón se encontraban en mejores condiciones que la propia Comunidad “para enfrentarse al shock de 1992”. Por esta razón, el comisario de Ciencia e Investigación, Filippo Maria Pandolfi, anunciaba que en el próximo Consejo de Ministros de Investigación se iba a plantear la necesidad de elaborar una nueva estrategia comunitaria en el campo de la innovación (con un carácter más selectivo, y concentrándose en sectores claves). Se trataba de evitar la dispersión y superposición de las actuaciones nacionales.

La nueva estrategia daba prioridad a las tecnologías de tratamiento de información, telecomunicaciones, audiovisual y genética. España era uno de los países comunitarios con gastos económicos más bajos en I+D, según se detallaba en el Índice del Programa Marco de Investigación y Tecnología de la CE. En este Índice se incluían 40 programas sobre I+D que hablaban de la participación de empresas, centros de investigación y gestores españoles. Por ejemplo, hay que resaltar la labor desempeñada por las empresas vascas, que trataron de

sensibilizar al resto de las PYMES españolas acerca de la importancia que tenía su acceso a los programas de investigación.

También resultaba ser muy ventajoso para el sector empresarial una cooperación estrecha entre las empresas de la CE. La fórmula anterior fue adoptada por la Diputación Foral de Vizcaya que tenía como principal objetivo el incremento de la competitividad del empresariado vizcaíno de cara a la creación del Mercado Único europeo de 1992.

La Gaceta recuerda la asistencia del ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, a la VII Conferencia Ministerial del Programa *Eureka*. Un total de 210 proyectos, por valor de 4.000 millones de ecus, se habían aprobado en los cuatro años de existencia del programa *Eureka*. Según el ministerio de Industria, la participación española en la Conferencia de Viena, con 29 proyectos, resultaba ser “excepcionalmente elevada”, y revelaba el gran “eco” que este Programa tenía entre las empresas españolas” (16.6.89).

En aquel momento la política del Gobierno trataba de promocionar la financiación privada de investigación y desarrollo con una serie de medidas de apoyo, y trabajó para la confección del nuevo Programa Marco (1990-1994).

Finalmente, el Consejo de Madrid concluye que la revisión del Programa Marco va a justificar el nuevo impulso a las acciones comunitarias en el campo I+D. Al tiempo, según se desprende de los resultados obtenidos en la Cumbre de Madrid, los Estados perseguirán en un futuro el fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas del conjunto de la industria europea para el aumento de su competitividad en el entorno internacional.

5.3 Conclusiones del capítulo

- La protección del medio ambiente cobra un protagonismo central en el programa de la Presidencia. Sin embargo, no se refleja en los presupuestos de la CE.
- Los programas medioambientales y las medidas de protección del Medio Ambiente inciden directamente en las economías de los países miembros. De lo anterior se deduce que las cuestiones medioambientales cobran una dimensión mundial e interdependiente.
- Las informaciones revelan que las instituciones europeas realizan un seguimiento eficaz de la política de Medio Ambiente, bien desarrollando programas plurianuales o a través de la observación rigurosa de los actos jurídicos comunitarios.
- Un amplio reportaje en torno a la política del MOPU anuncia que un 30% de los debates realizados, al más alto nivel, versaron sobre temas de conservación y restauración del medio ambiental.
- Las actuaciones de los gobiernos se encaminaron a proporcionar ayuda financiera al sector químico para el apoyo de proyectos de investigación y desarrollo de los productos capaces de sustituir a los gases CFCS que alteraban la capa de ozono.
- Fueron escasos los artículos y editoriales sobre temas medioambientales. La información se cubre con reportajes monográficos, crónicas de corresponsables sobre los resultados inmediatos de algunas reuniones y notas procedentes de agencias.

- El primer Consejo de Medio Ambiente celebrado el día 2 de marzo acuerda la reducción en un 85% de la fabricación de clorofluoruro carbonado. España pasaba a ser uno de los países más afectados por la aplicación de esta medida. *Abc (editorial)* recomienda que los productos causantes de la destrucción de la capa de ozono no deberían fabricarse.
- Los diarios nacionales, cuando informan de las conclusiones obtenidas en la Conferencia de Londres (del 5 al 7 de marzo), resaltan que no hubo acuerdo. *El Independiente* por ejemplo, señala que los participantes concluyeron el debate con “sensación de decepción”.
- En la conferencia de La Haya, Felipe González incorpora las variables ambientales a la discusión del Plan energético. También la Conferencia plantea que los problemas de la atmósfera necesitan de instrumentos de control.
- Nunca hasta entonces, los gobiernos europeos habían lanzado una ofensiva semejante ante los efectos del clorofluoruro. La solución del problema trasciende el ámbito local o nacional.
- Los diarios dedican amplios espacios al acuerdo entre el MOPU y la Asociación Española de Aerosoles (5 de junio). Con su firma se pretende reducir un 90% el uso de los gases CFCs en los envases de aerosoles, aunque la Asociación señala que sólo se destinan a aerosoles un 20% de gases CFCs.
- La Presidencia española negocia un acuerdo sobre el “coche limpio”. No obstante, fue muy polémica la adaptación de la industria automovilística a las normas anticontaminantes de EEUU u Japón. La Comisión abogó por la instalación de catalizadores de tres vías a los coches de menos de 1400 cm³ a partir del 1 de enero de 1993. Del mismo modo, la prensa refleja la situación

de los fabricantes de coches con la nueva reglamentación: se abre una guerra entre constructores de automóviles y la CE.

- Los ministros comunitarios discuten en Cáceres la creación de una futura Agencia Europea del Medio Ambiente; también analizan los instrumentos necesarios para atajar la desertización. Con la incorporación de los países ibéricos se planteó por primera vez la protección de la cubierta vegetal. El ministro Cosculluela recibió duras críticas de algunas asociaciones que le acusaron de incumplir el compromiso de crear una Agencia de Medio Ambiente en España.
- A punto de finalizar la Presidencia española los diarios optan informar ampliamente sobre el deterioro ambiental denominado “efecto invernadero”. Sin embargo, apenas extraemos artículos de opinión sobre este problema medioambiental.
- De la Cumbre de Madrid en materia de Medio Ambiente podemos destacar que se reclamó, por primera vez a la Comisión, un programa de protección de medio ambiente en aquellas regiones de la CE afectadas por la desertización, la erosión y la deforestación. Por otra parte, nuestros representantes sólo consiguieron proponer la creación de una Agencia de Medio Ambiente, en beneficio de la Presidencia francesa que vería culminada esta labor durante su mandato.
- Los temas relacionados con el medio ambiente sirven de “enganche electoral” a los gobiernos comunitarios, que a su vez, están preisionados por la opinión pública. Se advierte una instrumentalización política del ecologismo.

- Los tres retos de la Presidencia española que se detallan en la prensa sobre I+D son: cohesión económica y social en I+D, confrontación de políticas nacionales de I+D y evaluación y revisión del Programa Marco.
- De la información seleccionada sobre I+D observamos que su enfoque no es homogéneo. Lo publicado sobre I+D no aparece bajo una denominación específica de sección periodística, sino que encontramos la información en secciones tan distintas como: Ciencia, Coyuntura, Sociedad, La Vida, Innovación, Diario de Economía, Política Científica, CEE, etc.)
- El Programa Marco de Investigación y Desarrollo del periodo 1987-1991, contó con un presupuesto de 5.396 millones de ecus y fija la creación de la llamada “Europa de los Investigadores”, en línea con lo que será la Europa de 1993. Engloba aspectos tan variados como la calidad de vida, la construcción de un mercado europeo, la modernización de los sectores industriales, recursos biológicos, problemas energéticos y cooperación europea en ciencia y tecnología, entre los más importantes.
- Según recogemos de las informaciones aparecidas en los principales medios, el Plan Nacional de Investigación atravesaba su primer momento y el Programa Marco Europeo iniciaba, en su segunda etapa, una revisión de sus objetivos y orientaciones.
- Por otra parte, de este estudio también deducimos que la revisión a fondo del Programa Marco se justifica por la incapacidad de los países europeos para hacer frente a la competencia exarcebada procedente de EE.UU y Japón. La prensa desvela, de igual modo, que el despunte tecnológico del Tercer Mundo constituye una amenaza para la CE.

- Javier Solana denuncia ante los medios “cierta actitud negativa” de la sociedad española frente a la ciencia y la tecnología. Su actuación política estará encaminada al desarrollo de la investigación y a establecer una serie de objetivos comerciales basados en el potencial de la tecnología. Las PYMES cobran protagonismo en esta nueva estrategia empresarial.
- Los funcionarios reclaman mayores asignaciones económicas para la investigación. Nace una nueva concepción empresarial, porque los empresarios son conscientes de que el avance tecnológico aumenta la competitividad.
- Las inversiones realizadas en I+D varían según el país destinatario: las $\frac{3}{4}$ partes del gasto de Europa en I+D recae en Alemania, Francia y Gran Bretaña. Serán, fundamentalmente, los periódicos de difusión económica quienes contemplen con mayor rigor la dispersión de los esfuerzos comunitarios en materia tecnológica, así como su excesivo proteccionismo. Se trata de combatir la dispersión y superposición de las actuaciones nacionales. En I+D cobran más importancia las tecnologías de tratamiento de información, telecomunicaciones, audiovisual y genética.
- España era uno de los países comunitarios con menor presupuesto destinado a gastos I+D. Sin embargo, un diario, *La Gaceta* destaca la participación española en la VII Conferencia Ministerial del Programa Eureka. Se intensifican las medidas de apoyo que ejecuta el Gobierno socialista destinadas a la financiación privada de I+D.
- El Consejo de Madrid garantiza que los Estados perseguirán en un futuro el fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas del sector industrial, con el objeto de incrementar su competitividad en el entorno internacional.

CAPÍTULO VI:

Política económica y Sistema Monetario Europeo

1. Hacia la Unión Económica y Monetaria

El Comité de expertos fundado en Hannover (junio de 1988) debía organizar en etapas concretas el proceso hacia la Unión Monetaria. Durante la Presidencia española tuvo lugar la presentación a los Estados miembros del Informe elaborado por el Comité Delors. El proceso hacia la Unión Económica y Monetaria había sufrido muchos altibajos en sus 30 años de existencia; sus momentos más importantes fueron: la resolución de la Cumbre de París (1972) donde se reafirmó la realización de esta UEM, y el Consejo de Bremen (1978) en el que se configuró decisivamente el esquema de lo que iba a ser el Sistema Monetario Europeo (SME), y que entraría en vigor el 13 de marzo de 1979.

Los Estados quedaban obligados a efectuar una coordinación de sus respectivas políticas, orientadas según las líneas marcadas por la CE, y también a evitar el déficit presupuestario excesivo. Una eventual crisis financiera de un

Estado miembro podía acarrear consecuencias negativas al resto¹¹⁸.

La adhesión al SME sería facultativa para los Estados miembros, y su eje se apoyaba en el ECU. Su finalidad consistía en ajustar las políticas de las distintas autoridades monetarias. El éxito del Sistema Monetario Europeo, creado en Bremen, daría paso a una zona de estabilidad monetaria en Europa muy propicia para el crecimiento y la inversión.

La eficacia del SME se basaba en el mantenimiento de cierta paridad entre las monedas y la convergencia económica en el progreso. Como ya avanzábamos más arriba, los tres elementos claves del SME eran el ecu, los mecanismos de cambio y de intervención y los mecanismos de crédito¹¹⁹. El ecu se convertía, así, en el elemento central del sistema y, aunque todavía no era una moneda de curso corriente, esta “unidad” ya estaba en marcha.

La resolución del Consejo de Bruselas, posterior al de Bremen, precisaría la definición del “ecu”, su papel en los mecanismos de cambio y de intervención, las modalidades de crédito y las medidas para reforzar las economías de los Estados miembros más débiles.

Esta moneda comunitaria sería la base sobre la que se establecería un indicador de divergencias, y por supuesto, el medio de pago entre las autoridades monetarias de la CEE. La perspectiva del ecu exigía, igualmente, que cada moneda tuviera un tipo de cambio central con respecto al ecu, con márgenes autorizados de fluctuación, con respecto a los tipos de cambio bilaterales, del 2,25% (pudiendo llegar hasta el 6%)..

¹¹⁸ “Europa, una sola voz”: 29 Congreso Asociación de Periodistas Europeos. Madrid, 1991, pág.43.

¹¹⁹ FONTAINE, Pascal: “Diez lecciones sobre Europa”. Luxemburgo, 1992.

Sin embargo, varios Estados miembros no se adhirieron al mecanismo de cambio, o participaban en él con unos márgenes de fluctuación más amplios. El ecu tan sólo había desarrollado un papel limitado en los mecanismos del SME.

2. Integración de la peseta al SME

En coherencia con la política monetaria comunitaria, y días antes de celebrarse la Cumbre Europea en Madrid, nuestro Gobierno había tomado la decisión de integrar la peseta en el mecanismo de cambios del SME.

En Junio de 1989, el Consejo Europeo de Madrid establece, como principios generales, el objetivo de una moneda única, con un proceso en varias etapas: la 1ª comenzaría el 1 de julio de 1990. En la segunda fase los Estados se comprometerían a presentar programas de ‘convergencia’ para hacer posible la adopción de paridades fijas entre sus monedas.

En esta línea de integración, y para el buen funcionamiento de la unión monetaria, el gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, propuso la creación de unas instituciones comunitarias con elementos de supranacionalidad que albergaran el diseño de esa estrategia común en el área comunitaria. El gobernador del Banco de España se refería a un banco central, con características similares a la reserva federal de los Estados Unidos.

El paso a la tercera fase¹²⁰ podía significar el nacimiento de una Europa “a dos velocidades”. Se tenían que cumplir diversos objetivos económicos para acceder a esa fase. Las tres condiciones básicas que se impusieron fueron las siguientes: no coerción, no veto y no exclusión arbitraria, de modo que ningún Estado que no deseara pasar a la etapa final se viera obligado a ello. Es decir,

¹²⁰ “Tratado de la Unión Europea”(Firmado en Maastricht, 7 de febrero de 1992). Editado bajo el patrocinio de BEX y Argentaria. Madrid, 1992.

ningún país podía impedir la decisión al respecto de otros Estados miembros. Por último, y si las condiciones objetivas necesarias para entrar en esta fase se cumplían, todo Estado miembro tendría pleno derecho a su incorporación al sistema.

3. Previsiones de la política económica para 1989.

Según las previsiones en el plano económico, 1989 no parecía un mal año. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron que la desaceleración del crecimiento económico en los países industrializados alcanzaba el 3% , por lo que no era previsible el riesgo de una posible recesión.

Las expectativas para España seguían la misma tónica: un crecimiento en torno al 4%, agudizándose los desequilibrios regionales, la inflación y el déficit exterior. La fuerte inversión de estos últimos años no podía mantenerse: diversas razones apuntaban, por ejemplo, a la disminución de la demanda interior (que no podía sobrepasar el 6%) para no romper el equilibrio económico del momento.

En un artículo de José Luis Leal publicado en el diario *El País*, el principal problema, respecto a la política económica, consistía en crear las condiciones de un crecimiento equilibrado “incluso si ello implica sacrificar a corto plazo una cierta dosis de expansión” (*El País*, 8.1.89).

Sin embargo, la anunciada política presupuestaria del momento “innecesariamente expansiva” y la difícil concertación entre los sindicatos y las organizaciones empresariales hacían difícil el crecimiento equilibrado de la economía.

Para José Luis Leal, emplear la política monetaria para corregir estas tensiones no era muy convincente. Podía ocasionarse un deterioro de la competitividad, por lo que las mejores armas del Estado se traducían en el diálogo social y la política presupuestaria.

La CE, en realidad, temía que la competitividad salarial española perjudicara al resto de los países comunitarios. La inflación había disminuido por la gradual estabilización de nuestra economía. Desde Europa se elogiaba al Gobierno de Felipe González por los estrictos controles presupuestarios que ejercía, y por el incremento de los ingresos fiscales. En el diario *Cinco Días* leíamos, sobre este asunto, que en los últimos años el Ejecutivo socialista había llevado una “política de consolidación presupuestaria casi ejemplar” (14.2.89).

Por su parte, el comisario de Asuntos Económicos Henning Christophersen declaraba, días después, que la CE no consideraba preocupantes los déficit presupuestarios de España y Portugal, porque, a su vez, se acompañaban de fuertes inversiones financiadas por la entrada de capitales privados y de los instrumentos financieros comunitarios.

El mismo informe de la Comisión manifestaba que las divergencias se habían agrandado entre las balanzas exteriores de los países que formaban parte del SME y de los que estaban fuera (*Cinco Días*, 23.2.89).

Sobre desempleo, la prensa recogió de forma unánime datos sobre las últimas tasas de paro registrado en la Comunidad Europea. Los diarios *El País* y *Abc* titulaban, respectivamente: “Desciende el paro en la CEE por primera vez desde 1983” y “Nuevo descenso del paro en la CE, que se sitúa en los índices del verano de 1983” (14.2.89). También *La Vanguardia* aportaba nuevos datos sobre el descenso del paro: “El paro en la CE bajó hasta el 10% el pasado año, el nivel más bajo desde el verano de 1983”(14.2.89).

4. El calendario de Hannover

Jacques Delors adelantaba en Bruselas que en la próxima Cumbre de Madrid se hablaría del Banco Central Europeo. Delors reiteraba el calendario fijado en Hannover, después de escuchar algunas objeciones en boca del mandatario Helmut Kohl¹²¹.

El 26 de enero Delors confirmó el proyecto de la UEM ante el Parlamento, Surgió de inmediato el debate político sobre la conveniencia de empezar por la integración política, por la económica o por la monetaria.

No sólo los burócratas que seguían la corriente de Delors eran favorables a la moneda europea. En este mes de febrero, los representantes de unas 150 empresas de nueve países de la CE (Asociación para la Unidad Monetaria Europea) se concentraron en Italia para hacer un llamamiento público en apoyo de una moneda única.

Giovanni Agnelli, presidente de la FIAT, proponía la constitución gradual de un sistema federal de bancos centrales para el “gobierno coordinado de las monedas nacionales y del ECU” (*El Sole 24 Ore*, 22.2.89).

Por otra parte, durante la Primera Presidencia española se debatía en política económica una serie de decisiones capaces de configurar el futuro económico de España en la CE.¹²² Con acertada clarividencia, el editorial que *Cinco Días* publicó el 7 de marzo (“La encrucijada económica”), describía la situación macroeconómica del país.

¹²¹ *Il Sole 24 Ore*, 23.2.89.

¹²² Los propios técnicos de la OCDE en su visita a España en el mes de enero, estimaron la urgencia de solucionar los grandes problemas estructurales de la economía española.

Los éxitos derivados de los sacrificios sociales podían dilapidarse si persistía, por otra parte, el descontrol en los precios por el incremento inflacionista.

Con la ruptura del diálogo social, la posición del Gobierno fue ambigua por la incoherencia de algunas de sus medidas. El equipo de Solchaga diseñó unos presupuestos de corte expansivo que no consiguieron satisfacer las demandas sociales.

Si *Cinco Días* (7.3.89) hablaba de “fracaso de la concertación social”, *Diario 16*, ese mismo día, informaba sobre el considerable aumento del gasto público con la implantación de una política presupuestaria socialista, totalmente favorable a los llamados “ministerios gastadores”.

Por este motivo la prensa lanzaba ante la opinión pública una dura reflexión sobre la actuación de los responsables económicos del PSOE y sobre el impacto derivado por el incremento de las recaudaciones. Si el Gobierno había sido firme ante los sindicatos, también tenía que ser exigente con los empresarios. Robert Flanagan defiende¹²³ que en toda sociedad democrática –compleja y dinámica- las instituciones privadas deben aprender a practicar la moderación.

5. Discusión sobre la moneda única

En el ecuador de la Presidencia española continua la discusión sobre la futura “moneda europea”. Estaba previsto que el comité de expertos concluyera su Informe en abril, para ser examinado en mayo por los ministros financieros y, en junio, por los jefes de Gobierno de los Estados miembros.

¹²³ FLANAGAN, Robert J.: “Sindicalismo, estabilización económica y política de rentas: la experiencia europea”. Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1985. Pág. 765.

Teniendo en cuenta este calendario, Delors se reunió con los copresidentes del Comité para la Unión Europea, Giscard D'Estaing y Helmut Schmidt. Ambos ex-mandatarios habían sido los padres del SME y, según informó el diario italiano *Corriere della Sera* (1.3.89), Giscard y Schmidt coincidían en que los cambios del SME debían “reducir los márgenes de oscilación de las monedas para llevar los cambios a una paridad fija”.

Desde Londres, *The Journal of Commerce* publicaba un artículo sobre los problemas que planteaba la consecución de la unión monetaria de la CE. Según este diario, algunos economistas creían que Inglaterra, apoyada por Alemania, tenía intención de “suavizar” la propuesta del Comité Delors sobre la moneda única y el banco central europeo.

Para David Fritz, comentarista de la agencia francesa *Reuter*, la estabilidad económica se quedaba en una mera ilusión. Se preguntaba si el sistema se encontraba en condiciones de afrontar la libre circulación de capitales (1990) y el Mercado Único anunciado para 1992. (*Abc*, 9.3.89. “Los diez años del SME - Panorama Internacional”).

Sobre este mismo tema los periódicos informaron de la intervención del secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, en unas jornadas sobre ‘La integración de España en el Sistema Monetario Europeo y la utilización del ECU por la empresa española’.

El secretario de Economía partió de la base de que no podía haber una verdadera integración económica si no se alcanzaba el objetivo de la unión monetaria. Precisó entonces en su intervención que para conseguir esa unión económica y monetaria debían cumplirse tres requisitos básicos como la libre

circulación de bienes, de servicios y de capitales. Estos podrían quedar garantizados en 1992 por el cumplimiento del Mercado Único.

En segundo lugar, el proceso más complejo estaría en conseguir tipos de cambio fijos o en poner en circulación una moneda única. El secretario de Estado insistió en la necesidad de que el escudo y la peseta formaran parte de la cesta de monedas del ecu. La aportación española consistiría en la reactivación del sistema ¹²⁴.

La Unión Monetaria era, entre los objetivos que la Presidencia española se había marcado, uno de los que planteaba más equívocos. La coincidencia entre Ciriaco de Mita y González fue manifiesta en la concepción del ecu como moneda única que chocaba con la propia normativa del Acta Única.

Esta unión monetaria europea exigiría, así, la modificación de los Tratados vigentes en la CE o, bien, la redacción de un nuevo tratado. Sin embargo, los británicos se oponían a la redacción de un nuevo tratado y la actitud de Alemania y Francia no facilitaba los problemas que ello planteaba.

En la rueda de prensa ofrecida por Ciriaco de Mita y Felipe González se puso de relieve que para avanzar en la coordinación de las políticas monetarias era necesario crear nuevas instituciones, no previstas en el Acta Única.¹²⁵ En este sentido, De Mita asignaba a la Conferencia de Madrid, en junio, la tarea de adoptar una decisión firme en el avance monetario para que no pudiera llegar a repetirse la ambigüedad demostrada en Hannover.

¹²⁴ Los datos estadísticos demuestran que es creciente la utilización privada de la unidad de cuenta europea. El 5% de las emisiones del euromercado se realizan en ecus (*Efe* 3.3.89).

¹²⁵ *Cinco Dias* publicaba un editorial titulado "*Barreras a la moneda única*" que reflexiona sobre este aspecto (marzo, 1989).

En esta rueda de prensa, González también aprovechó para anunciar la futura integración de la peseta en el ecu, en el mes de septiembre o en octubre (*La Vanguardia*, 8.3.89). Fue una ocasión para defender las ventajas derivadas del SME, pese a la obligatoria disciplina económica del sistema. Tanto González como De Mita coincidían en considerar “irreversible” el proceso hacia el espacio común europeo.

6. Consejo Ecofin (13 de marzo) y Décimo aniversario del SME

Los diarios informaron ampliamente de la reunión mantenida por los ministros de Economía, aunque el enfoque de sus titulares no fue tan unilateral. Así, mientras *Diario 16*(14.3.89) y *Cinco Días*(14.3.89) resaltaban en titulares el acuerdo sobre la deuda del Tercer Mundo, el diario *El País*(14.3.89) daba más relevancia a la incorporación de España al SME.

En este Consejo, que coincidió con el Décimo Aniversario de la creación del SME, los ministros de Economía firmaron un comunicado de apoyo al Plan de la Administración norteamericana sobre la deuda del Tercer Mundo, el conocido Plan Brady. Sus reglas favorecían las exportaciones de los países más endeudados. El FMI y el Banco Mundial tenían que utilizar sus recursos para apoyar reducciones voluntarias de deuda planteadas por los bancos comerciales. Sin embargo, de esta reunión (plantada más como una “reflexión”) no salió ninguna decisión formal.

En otro orden, los ministros también abordaron la lucha contra los fraudes presupuestarios en la CE. Este fue un tema que suscitó una encendida polémica entre Inglaterra e Italia. La denuncia fue lanzada por un eurodiputado británico, quien llegó a estimar que el fraude alcanzaba el 10% del presupuesto comunitario de agricultura.

Como respuesta a esta denuncia, la Comisión dictaminó que la responsabilidad en el control del fraude, debía ser asumida por los propios Estados de la CE. Paralelamente, la Cámara de los Lores emitió un Informe, en el que se aseguraba que prácticamente ninguna operación financiera de la CE estaba libre de fraude¹²⁶.

A raíz de estos acontecimientos, Jacques Delors llegó a acusar a Gran Bretaña de “desestabilizar a la CE, multiplicando sus ataques en relación a estos fraudes presupuestarios”, según *Diario 16* (14.3.89). La protesta parecía venir justificada por el hecho de que, tras presentar varios proyectos para luchar contra el fraude, éstos habían sido rechazados por el Gobierno de Londres. La lucha de los británicos contra el informe Delors había provocado la dura respuesta del presidente de la Comisión.

7. El Informe Delors

El comité Delors celebraba su penúltima reunión en Basilea, y para el mes de abril se esperaba la última versión del Informe elaborado por el citado comité. Según el texto del proyecto, tras la entrada de España, Reino Unido y Portugal en el SME, vendría la liberalización de los movimientos de capital, el aumento de la cooperación monetaria y del apoyo a las regiones menos desarrolladas.

Para la ocasión, el órgano Ejecutivo comunitario analizaba las tres fases del SME. Desde la fundación del SME en 1979, y hasta 1983, las principales preocupaciones económicas se centraban en la inflación, que marcaba diferencias sustanciales entre los Estados miembros. Entre 1984 y 1987 se habían llevado a cabo las primeras reformas del sistema. A partir de 1987 entraba en vigor el

¹²⁶ *Cinco Días*, 14.3.89.

acuerdo Basilea- Nyborg, y los tipos de cambio constataban una estabilidad firme.

Asimismo, el documento de la Comisión mostraba un balance de los objetivos monetarios y en él se constataba que el SME todavía no había sido desarrollado en todos sus cometidos: continuaban existiendo desequilibrios en el marco de las políticas presupuestarias. Los expertos consideraban que los objetivos del SME estaban todavía pendientes de ser definidos con claridad. Además de la estabilidad monetaria, se planteaba el impulso de una estrategia de crecimiento progresivo y consecución de pleno empleo¹²⁷.

Si con ocasión del décimo aniversario del SME, Jacques Delors reconocía que este sistema había contribuido a la convergencia de las economías con la consolidación del valor de la moneda.¹²⁸, al poco tiempo, en declaraciones a *The Financial Times* (17.3.89) Delors afirmaba que el actual SME era insuficiente porque estaba basado en el marco alemán y en la política económica y monetaria de la RFA.

Sólo una reforma del sistema –diría Delors– conseguiría el equilibrio necesario en la CEE; un tratado común ‘dotado de instrumentos institucionales que permitan su puesta en marcha progresiva, sin plazos estrictos’. Era evidente, por tanto, que habiendo tenido éxito el SME al limitar estos últimos años las fluctuaciones de los tipos de cambio entre Alemania Federal, Francia, los países del Benelux, Dinamarca, Irlanda e Italia, el SME entraba en su segunda década, ensombrecido por otros proyectos mucho más atractivos.

Tras la última reunión del Comité en Basilea, Delors admitió que existían dificultades no sólo de la parte británica, sino que también por parte de Otto

¹²⁷ *El Independiente*, 13.3.89.

¹²⁸ Artículo publicado por Jacques Delors en el diario italiano *La Repubblica*, 14.3.89.

Pöhl, presidente del Banco Nacional Alemán que había exigido algunas modificaciones del Informe.

El diario germano *Handelsblatt* titulaba: “Controversias en el círculo de Delors. Deliberaciones del Comité de la Unión Monetaria Europea” (17.3.89). Alemania era partidaria de cooperar política y monetariamente en Europa si se respetaba un calendario razonable y se cumplían determinadas condiciones económicas, institucionales y políticas. El citado artículo interpretó que el núcleo de la controversia era de naturaleza política y, leemos, “esto aparecerá a más tardar en Madrid”.

Con motivo del décimo cumpleaños de la moneda europea, el “ecu” seguía suscitando distintas opiniones. Era el marco alemán el que decidía la suerte de la moneda europea. Por un lado, prevalecía la opinión de quienes concedían al ecu escasas posibilidades de desmarcarse de la moneda alemana, frente a los que opinaban que algún día el ecu sería la moneda única de Europa.

En su intervención en el 29 Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos¹²⁹, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga reafirmó el sentido real de la política monetaria que perseguían las instituciones comunitarias: “La Unión Monetaria, sin embargo, a diferencia de la Unión Económica, sí implica el nacimiento de una auténtica política monetaria común, que se fundará en el ecu como moneda única, y será definida y ejecutada a nivel comunitario por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, con un principal objetivo: El mantenimiento de la estabilidad de precios”.

8. El “boom” económico de España.

¹²⁹ “Una sola voz para Europa”: 29 Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos. Acción Institucional’ 93, Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas y Asociación de Periodistas Europeos, 1991.

Durante la primera Presidencia española se hablaba del 'bloque europeo' y de la 'fortaleza comercial'. Potencias como EEUU y Japón estudiaban nuevas estrategias de aproximación a la futura competencia europea. Los japoneses entraban en Europa con el claro objetivo de fusionarse a cualquier multinacional europea. De forma paralela, la informática, los proyectos de telecomunicaciones y la electrónica que patrocinaba Giovanni Agnelli luchaban por competir con los asiáticos.

Las pequeñas y medianas empresas reaccionaron frente al 92 encarando la gran batalla comercial. Un número importante de sectores empresariales iniciaron su reconversión, empezaban a promocionar nuevos sistemas de marketing y de ventas.

España se había situado en el segundo lugar del ranking de crecimiento económico de la CE. Con un PIB que había aumentado al ritmo del 5% y con ventajosas condiciones de inversión. Nuestro país resultaba atractivo para las empresas extranjeras.

Sin embargo, este "boom" económico podía verse amenazado por unos niveles de inflación superiores al 6%; además, la gente consumía más de lo que producía y los sindicatos, por su parte, reclamaban participar en este "repentino bienestar"¹³⁰. Los representantes sindicales europeos temían, por su parte, que la flexibilidad de la legislación laboral española era la causa del llamado "dumping social". En efecto, había quien opinaba que estábamos "vendiendo el país". Otros, mucho más optimistas, consideraron que la apertura a las multinacionales extranjeras serviría de trampolín para llegar a ser más competitivos¹³¹

¹³⁰Corriere della Sera "Detrás del boom de España" (21.3.89).

¹³¹El profesor de doctrinas económicas, Pedro Schwartz, es de los que avalan la teoría que defiende la apertura a las inversiones extranjeras.

El diario alemán *Frankfurter Allgemeine Zeitung*¹³² publicaba un artículo de Walter Haubrich sobre el ministro español Carlos Solchaga, bajo el título “Tenaz”. Para el autor, Solchaga había contribuido al auge de la economía española en los últimos tres años. En Europa al ministro español le atribuían grandes éxitos. También es cierto que el ámbito nacional su gestión ministerial era, precisamente, de las más criticadas.

9. Debate sobre el ingreso de la peseta en el SME

El Presidente González habló de aprovechar la revisión bianual de las paridades del ecu para incorporar la peseta a la cesta de esta unidad. Esto significaba el paso previo a la entrada de España en el SME y, aunque la devaluación podía suponer una “aberración”, también lo era el mantenimiento de tipos de interés que contribuían al aumento de la tasa de inflación.

Desde el ámbito de la banca, el financiero Carlos March advertía que antes de septiembre la peseta iba a registrar una devaluación¹³³, por el fuerte déficit comercial.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Rafael Termes, afirmaba que la banca española era la más rentable de la CE. En la presentación del Informe anual sobre el sector, Termes criticó al Gobierno por la falta de independencia en la constitución de la Comisión Nacional de Valores y de su Comité Consultivo: “Todos los miembros -declaraba- son designados a dedo por el Gobierno. Ni siquiera hay un agente de verdad en ese Comité” (*La Gaceta*, 1-2.4.89).

¹³² *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 23.3.89.

¹³³ Carlos March era miembro del Consejo de la Asociación para la Unión Monetaria de Europa. *Cinco Días*, 20.3.89.

Cuando presentó la memoria elaborada por la AEB expresó, asimismo, sus dudas sobre la “efectividad de la política monetaria para frenar la inflación” del Gobierno socialista, y señaló que, en 1988, los 900.000 millones de pesetas recaudados de más sobre los presupuestados podían haberse invertido para financiar el déficit de la balanza exterior. Para el presidente de la AEB ese nivel de insolvencia se derivaba de la “política conservadora impuesta por el Banco de España” (*Abc*, 1.4.89).

El 3 de abril los diarios publican el anuncio del presidente del Gobierno, Felipe González, sobre el ingreso de la peseta en el SME: España “ingresará pronto en el Sistema Monetario Europeo (SME).

El presidente hasta entonces se había limitado a prometer algún anuncio relacionado con la incorporación de la peseta a la cesta de divisas que permitiría calcular el valor del ecu. En el ambiente se respiraba una duda: se trataba de averiguar si la economía española podía devaluar su divisa “sin especiales tensiones” (*Cinco Días*, 3.4.89). En el desarrollo de la política económica y en la evolución de los tipos de cambio, el Presidente y sus asesores monetarios (el ministro Carlos Solchaga, Mariano Rubio y Luis Angel Rojo) se decantaban por el ingreso de España en el SME en el último trimestre de 1989 (*Cinco Días*, 3.4.89).

Aunque Felipe González tenía la última palabra, parecía existir el consenso de que en los Presupuestos para 1990, la peseta iba a formar parte del sistema de cambios estables del SME. Sin embargo, un día después, *La Gaceta* (5.4.89) recogía las siguientes declaraciones del ministro de Economía, desde Washington: “No creo que el ingreso convenga a la nación”. *La Economía* (5.4.89), con una crítica mucho más vehemente, denunció la total “incoherencia” en la actitud de las autoridades monetarias españolas respecto al ingreso de la peseta.

Por su parte, Claudio Boada, presidente del Banco Hispano Americano, manifestaba en Roma estar “absolutamente convencido” de que la peseta estaba madura para ingresar en el Sistema Monetario Europeo, y que tras su ingreso debería procederse a una devaluación de la peseta. En declaraciones durante una rueda de prensa, recogidas por *La Vanguardia*, Boada manifestaba: “Estoy tan convencido de que, si yo mandara, el ingreso lo hubiera hecho efectivo ya el año pasado”. Claudio Boada, reconocía, además, que “sería oportuno” aprovechar el ingreso en el SME para devaluar la peseta. Los expertos, por su parte, opinaban que a los exportadores no les favorecía el valor en alza de la moneda española. (7.4.89).

El Instituto de Economía de Mercado inició en la provincia de Avila un debate sobre la conveniencia o no de la futura unión de la peseta al mecanismo de tipos de cambio en la próxima revisión del ecu. Carlos Rodríguez Braun publicaba en el diario *Abc* un artículo en el que expresaba: “Los entusiastas de la integración arguyen que un país como España, amenazado con el peligro de la inflación, tiene mucho que ganar de un sistema que ha funcionado bien hasta hoy, y que no le permitiría más libertad, sino que encorsetaría su política económica (...). Los liberales, recelosos de la integración, alegan que hay que integrar mercados y no políticas”. Rodríguez Braun criticó, no obstante, la escasa atención de la prensa económica a la reunión convocada por el Instituto de Economía de Mercado (8.4.89).

El Independiente, por su parte, reivindicaba la importancia de estas Jornadas en Avila sobre el futuro del SME. y se hacía eco de las siguientes declaraciones de Miguel Boyer: “Es difícil que España cumpla su programa de mercado único, sin estar en un sistema de unidad monetaria”. Convencido de que la Europa comunitaria caminaba hacia un sistema europeo de bancos centrales, el ex-ministro señalaba la tendencia “a una estructura de cambios fijos”.

En el citado marco abulense, Boyer resaltó también la conveniencia de negociar “un nuevo anexo al Tratado de Roma que autorice las cesiones de soberanía que implica un sistema europeo de Bancos Centrales”. Para Boyer, si no se avanzaba en esta institución, no se cumplirían los compromisos de liberalizar el movimiento de capitales” (7.4.89).

La Economía alertaba de la presión que desde distintos círculos empresariales se ejercía, para que el Gobierno socialista ejecutara una ligera depreciación de la peseta. Carlos March manifestó la necesidad de proceder a una ligera devaluación de la peseta, para reducir los efectos negativos que, a corto plazo, produciría para la economía de España el ingreso en el SME (10.4.89).¹³⁴. Los presidentes de las compañías Repsol e Iberduero también lanzaron su voz a favor de la integración.

Una entrevista al eurodiputado de CiU, Carlos Gasóliba, publicada en *La Gaceta*, demostraba la creciente implicación de Alemania en el Informe sobre la unión monetaria. El país germano había apoyado desde el principio la constitución de un Banco Central Europeo, siempre y cuando se cumpliesen las previsiones del Bundesbank. En este sentido Gasóliba habló de la necesidad de reformar el Tratado de Roma. El Mercado Único era, precisamente, la “única alternativa” para que la Europa comunitaria pudiera hacer frente a sus dos grandes competidores, EEUU y Japón.(20.4.89).¹³⁵

Lo cierto es que la divisa de nuestro país no paraba de apreciarse, y España para no perder soberanía, podía decidir entrar en el “ecu” y no en el SME.

¹³⁴ Carlos March, representante español de la Asociación para la Unión Aduanera

¹³⁵ Entrevista a Carles Gasóliba realizada por Alberto Elordi, y que en titulares recoge las declaraciones del eurodiputado de CiU: “Habrá que reformar el Tratado de Roma para la unión monetaria”.

La otra opción, defendía la idea de entrar también en el SME, con un margen de fluctuación similar al italiano (6%).

La “guerra de declaraciones” sobre la conveniencia de España de ingresar en el SME había alcanzado a Carlos Solchaga, quien no incluía la posibilidad de hacer unos presupuestos distintos a los que se habían efectuado en los dos últimos años, de carácter claramente expansivos. Rubio, sin embargo, abogaba por una mejor articulación entre las políticas presupuestarias y monetarias. “Aunque tanto Mariano Rubio como Carlos Solchaga son partidarios de la entrada de España en el SME discrepan sobre las condiciones monetarias adecuadas para el ingreso” (*Abc*, 15.5.89).

El diario *Expansión* afrontaba los interrogantes que presentaba la entrada en el acuerdo cambiario. En la clausura de un seminario sobre el SME, el Secretario de Estado de Economía, Pedro Pérez, matizó que los países del Sur no alcanzaban el 50% de la media del PIB por habitante de la CEE. Sus desequilibrios macroeconómicos eran más profundos, y, su economía, más vulnerable a la apertura de un mercado único. El secretario de Estado aportó un dato más sobre la actitud del Gobierno: las reservas de éste sobre la entrada de la peseta en el SME se verían más despejadas en caso de aprobarse en Madrid el Informe Delors (15.5.89).

10. El apoyo de la CE al Plan Brady

El grupo de los Siete, en Washington, había aceptado por primera vez la reducción de la deuda externa acumulada por los países en vías de desarrollo. La CE apoyó las propuestas del secretario del Tesoro de los EE.UU, Nicholas Brady. En el acuerdo alcanzado se buscaba una “receta mixta” donde el FMI y el Banco Mundial fueran los garantes de los nuevos préstamos.

Según el ministro español de Economía, Carlos Solchaga, para Europa esta concesión era de dudosa aplicación. No obstante, los países de la CE defendieron el incremento de cuotas del FMI para asegurar que las instituciones económicas internacionales pudieran continuar cumpliendo sus funciones (YA, 4.4.89).

Abc publicaba la crónica de José María Carrascal, desde Nueva York: “Incertidumbre ante la aceptación del plan Brady por el FMI y el Banco Mundial”. Si el plan trataba de disminuir la deuda del Tercer Mundo, también era cierto que ningún país comunitario estaba seguro de que dicho plan salvara “la magnitud del problema” o que incluso llegara a ponerse en práctica (*Abc*, 6.4.89).

Otra tema de interés para la prensa fue la tendencia que adoptó la Banca, definida por la Federación de Banqueros de la Comunidad Económica Europea. Esta Federación se mostró partidaria de consolidar de cara a 1992 un mercado bancario abierto capaz de reportar beneficios “tanto a las instituciones de crédito comunitarias como a las de países terceros” (*El Independiente*, 7.4.89).

La Federación de Banqueros insistía en la aplicación de la llamada “cláusula de reciprocidad”. Los países no comunitarios se verían forzados a iniciar un proceso de apertura al establecimiento de bancos extranjeros y, de este modo, respondían con las mismas ventajas y facilidades que ofrecía la Comunidad. Cuando los bancos europeos dirigieron una carta al vicepresidente de la Comisión Europea, el británico Leon Brittan, en ésta manifestaron que este “principio de reciprocidad” debería ser estudiado caso por caso sin constreñirse a normas rígidas.

Esta era una de las cuestiones pendientes para la próxima reunión del Consejo de Mercado Interior del 13 de abril. Leon Brittan tenía previsto presentar

el proyecto modificado de reglamento sobre el control previo de concentraciones y fusiones de empresas consideradas con dimensión europea.

11. Informe del Comité de Expertos.

El Comité Delors se reunía en Bruselas (18.4.89) para impulsar definitivamente el documento que, sobre la Unión Monetaria Europea, iba a discutirse en mayo en el Ecofim. La sede del Banco Internacional de Pagos de Basilea volvía a ser el lugar de encuentro entre dos posturas enfrentadas: la de Gran Bretaña y Alemania, que no querían comprometerse a “un proceso acelerado hacia la unión monetaria”; y la postura de España, Francia e Italia, partidarias de obtener un documento de compromiso para materializar la unidad monetaria.

En un punto, sin embargo, sí se mostraban de acuerdo: la reforma legal de la normativa de la CE. La pérdida de soberanía de los países miembros no estaba contemplada en las normas de la CE. Desde la esfera española, dos de los representantes españoles, Miguel Boyer y Mariano Rubio estaban intentando que el documento fuera lo más comprometido posible.

La Cumbre de Hannover (1988) había fijado la fecha de celebración del Consejo de Madrid como límite para presentar el citado proyecto (*Cinco Días*, 10.4.95).

En el artículo “Las sorpresas del Informe del ‘Comité Delors’ que publica *El País*, Fernando Schwartz opina que el Informe contribuye a deshacer “el concepto maniqueo de que no hay más malos que los que se oponen al Banco Central Europeo...ni más buenos que los que lo propugnan”. Schwartz añade que la soberanía monetaria “con que sueña Delors” aún estaba lejos, debido a que son

muchos los mecanismos de armonización y la renuncia a la soberanía resulta “aberrante para todos los miembros comunitarios” (17.4.89).

Para la primera fase, el Informe recomendaba la generalización del actual Sistema Monetario Europeo (SME); el segundo paso consistía en la necesidad de dar un mayor protagonismo al Comité de Gobernadores de Bancos Centrales. Algunos de los miembros del Comité Delors se mostraban favorables a la creación de un Fondo Europeo de Reservas que podría disponer de una parte de las reservas de divisas de los Estados miembros y que permitiría al Sistema Europeo de Bancos Centrales intervenir en los mercados (*La Economía*, 17.4.89)

Una de las reacciones más críticas vino de Dinamarca, donde su ministro, Niels Helveg Petersen, calificó el Informe Delors de “poco realista”, añadiendo que el momento no era adecuado para ese tipo de propuestas. Para el ministro danés tampoco era una buena idea la propuesta de un fondo económico de reserva como punto de partida hacia un futuro Banco Central Europeo.

Por su parte, las autoridades británicas insistieron en calificar de “inaceptables actualmente” los objetivos propuestos en el Informe. Sin embargo, el ministro alemán de Finanzas reconocía que el Banco Central Europeo iba a ser “la coronación de la unión monetaria”. Esta unión monetaria iba a desembocar en una creciente convergencia de las políticas económicas de cada país (*La Gaceta*, 19.4.89).

Al día siguiente de hacerse público el Informe Delors, los comentarios y editoriales aumentaron notablemente el espacio dedicado en la prensa al SME. En este frente, *La Gaceta* incluía el artículo de opinión (“La otra cara”) cuyo autor, Juan G. Madariaga, reflexiona ante la implicación que el proyecto aprobado tenía en la realidad comunitaria. “El disfraz para este desacuerdo -escribía Madariaga- consiste en aplazar las decisiones básicas”; también subrayaba que lo extraño

del Informe estriba en que había sido aprobado por unanimidad, cuando parecía imposible la construcción de un futuro monetario y financiero siempre que Inglaterra siga su relación especial con los EEUU (19.4.89).

A su vez, el resto de los medios, como *El País*, *Diario 16*, *Abc*, *Ya*, *Cinco Días*, *Expansión*, *La Gaceta* y *La Economía* se hicieron eco de la aprobación unánime del documento. Un documento que, en definitiva, proponía un proceso en tres fases condicionado a la decisión política de los Jefes de Estado y de Gobierno de los “Doce”, y que fue calificado de “realista” por Delors y el Ministerio Español de Economía y Hacienda.

La aprobación por unanimidad del Informe sobre la unión monetaria para el *Frankfurter Allgemeine* (19.4.89) fue posible, entre otras cosas, gracias a la capacidad de persuasión y la autoridad de la Presidencia de Delors, quien desde el principio renunció a los sobrevuelos teóricos. Por el contrario, llegó a simpatizar en seguida con las “concepciones pragmáticas de Pöhl y Thygesen”. La línea de ambos políticos iba dirigida a la ampliación del actual Consejo de los directores de los bancos emisores en la CE, de tal modo que, algún día, pudiera constituirse un Sistema Europeo de Bancos Centrales con responsabilidad conjunta sobre la política monetaria de los Doce.

Otro el rotativo alemán, el *Die Welt* publicaba el artículo titulado “Nada de un Estado Europa” sobre la posición antieuropea de Margaret Thatcher: “Lo que molesta a los conservadores británicos es que el Consejo Europeo de ministros y el PE determinen las directrices de la política”. El *Handelsblatt* manifiesta, por su parte, que “se trata más de una descripción de las condiciones para la Unión Monetaria que de unas recomendaciones políticas concretas” (19.4.89).

12. La directiva ‘Insider Trading’

Durante este período, la actividad periodística se centró en la directiva comunitaria sobre el llamado “Insider Trading” (tráfico con información privilegiada).

La directiva recomendaba la “persecución de las prácticas de insider trading” con la conformidad de todos los Estados de la CE. Este tipo de prácticas comerciales ilegales -tal y como recogía el diario *Cinco Días*- seguían estando justificadas en nuestro país (11.4.89). El mismo diario económico publicaba un día después un editorial “Acabar con el “insider Trading”, en el que se apoyaba la nueva normativa y se defendía el avance en la lucha “contra la información privilegiada en el negocio bursátil”. Este delito había enriquecido a muchos inversores españoles sin que la justicia pudiera actuar. Obviamente, el pequeño accionista era el que se acercaba a la Bolsa en clara desventaja (*Cinco Días*, 12.4.89).

13. La participación de la Banca en la CE y opiniones desde otros sectores

La función del ecu en la Comunidad, como instrumento necesario para que el Banco Europeo realizara sus operaciones, era muy importante. La Asociación Bancaria del Ecu (ABE), constituida por 100 bancos europeos, americanos y japoneses tenía como objetivo asesorar sobre la forma de adquirir o realizar las transacciones con la moneda única.

La ABE consideraba que el Informe Delors tenía un planteamiento muy macroeconómico, olvidándose, en cierto modo, de la función que puede desempeñar el ecu en las empresas comunitarias (*La Gaceta*, 20.4.89). También *Cinco Días* denuncia el escaso papel que el Informe concede a la moneda europea: “La Asociación Bancaria critica el informe Delors por olvidar al ecu” (20.4.95).

Coincide en el mismo planteamiento el diario *La Economía* (20.4.89) cuyo titular desvela: “La banca mundial pide a los gobiernos mayor apoyo al ecu”; e igualmente subrayaba que el Informe Delors “no dedica a la moneda la importancia que merece.”

España se opuso a la limitación que la CE iba a imponer a las participaciones de la banca. Francisco Poveda, director general adjunto del Banco de España y miembro del grupo de trabajo europeo que trataba sobre la futura directiva comunitaria¹³⁶, analizó durante las “Jornadas Intermoney” en Roma, el conjunto de implicaciones que para las entidades financieras españolas tendría la aplicación de la normativa comunitaria.

Para Poveda, esta normativa suponía una muy seria restricción “al modelo bancario participado (...) para países como España, en los que la financiación del desarrollo requiere el concurso de las entidades de crédito, la limitación propuesta será muy perjudicial” (*Abc*, 5.5.89). *Cinco Días* que recogía la misma opinión, se refería, además, a la idoneidad de las personas para gestionar adecuadamente una entidad de crédito. La directiva precisa “una autorización previa” para la adquisición del 10% de la sociedad. (“España se opone a la limitación que la CE impondrá a las participaciones de la Banca” (*Cinco Días*, 5.5.89).

¹³⁶ Esta directiva comunitaria incluye los límites en las participaciones de las entidades de crédito en sociedades no financieras.

En los distintos artículos de opinión publicados sobre el SME, la prensa responde a la incertidumbre, en el ámbito económico y social, que suponía la integración de la peseta. Por ejemplo, Juan G. de Madariaga señala que el Banco Central Europeo “se perfila como uno de los principales elementos que en un futuro habrán de corregir los desequilibrios comerciales”. Para Madariaga estaba en juego “la creación de un modelo de coordinación monetaria” (*La Gaceta*, 1.5.89).

Desde Copenhague, el presidente del Parlamento Europeo, Lord Plumb, solicitó la entrada de la peseta y la libra esterlina en el SME. En su viaje se había entrevistado con el primer ministro danés, el conservador Paul Schelter, quien ratificó que todas las divisas europeas debían integrarse en el SME. Desde su nacimiento, el 15 de marzo de 1979, este sistema monetario era reconocido como el principal exponente de la política de cooperación comunitaria.

Fue muy importante también la oposición que mostraba la primera ministra británica. El desmantelamiento del poder de los sindicatos y las privatizaciones eran las líneas de acción características del thatcherismo. Resultaba difícil para las autoridades británicas defender técnicamente esa autonomía formal respecto al SME.

La Economía en su sección “Tribuna” publica a toda página el artículo “España, el SME y la unión monetaria”(I y II). Miguel Sebastián, de la Universidad de Minnesota, observa el escaso debate que iba a producirse en nuestra sociedad sobre la incorporación de la peseta. La coordinación de las políticas monetaria y fiscal era una condición necesaria para el cumplimiento de la última fase, la de la sustitución plena de la moneda nacional por la moneda común (*La Economía*, 4.5.89).

El futuro incierto que planteaba la unión monetaria europea también fue un tema de debate para el diario *Ya*. Los inconvenientes en la aplicación de esta unión eran numerosos. “La aplicación de una política monetaria común para toda la CE no sería viable si las decisiones económicas reservadas a los Gobiernos nacionales no se coordinan ni se someten a procedimientos y normas vinculantes”. En todo caso, parecía necesario consensuar una política general para la Comunidad e imponer límites en la financiación de los presupuestos (4.5.89).

Otros observadores como *Jürgen B. Donges*¹³⁷, encuentran el problema en la escasa disposición de los Gobiernos a transigir en la soberanía nacional sobre objetivos macroeconómicos y políticos. (“El Plan Delors, portador de nuevas esperanzas”. *El País*, 12.5.89). Para Donges, una unión monetaria no resulta imprescindible para implantar el mercado único, pero sí lo es suprimir todo tipo de barreras a los movimientos de capitales. En definitiva, el autor recomienda la disciplina monetaria para aumentar la credibilidad antiinflacionista.

En el período de análisis que nos ocupa, y cuando el debate del ingreso de la peseta en el SME estaba más candente, el Presidente del Banco Central Alemán, Karl Otto Pohl, señala en una entrevista que la política económica alemana era buena para la CE (*La Economía* 10.5.89).

El SME se había beneficiado de la política económica orientada a la estabilidad que habían venido practicando distintos países en Europa. El presidente habló de la fortaleza del marco alemán, y dijo que actuaba como “moneda ancla”.

¹³⁷ Jürgen B. Donges es vicepresidente del Instituto para la Economía Mundial de Kiel y asesor del Instituto de Estudios Económicos.

A su vez, el ingreso de España en el SME se había convertido en un foco de discrepancias entre los responsables de Economía y el Banco de España. (*Abc* 15.5.89). El ministro Carlos Solchaga no descartaba, para ese mismo año, la entrada de España en el Sistema, mientras Mariano Rubio, como veíamos, opinaba que nuestra incorporación podía ser perjudicial con los presupuestos expansivos del momento, con el riesgo de que aumentara la inflación.

Por otra parte, Solchaga no proyectaba modificaciones sustanciales en la actual política presupuestaria, ya que un ajuste presupuestario a la baja enfrentaría aún más al Gobierno con los sectores sindicales y empresariales.

El 16 de mayo, en relación con este asunto, los periódicos italianos reflejaron el mensaje del ministro del Tesoro, Giuliano Amato, tras su intervención en Venecia en un Congreso sobre "European Banking".¹³⁸ Amato, que compartía con Alemania las normas imperantes en política fiscal, defendía un SME que incluyera a la peseta y a la esterlina "en bandas de fluctuación más anchas que las actuales".

Según informaba *Il Sole 24 Ore*, el ministro del Tesoro italiano habló de la propuesta de una "ulterior armonización de las políticas monetarias a través de la uniformidad de los regímenes de fluctuación del SME"; propuesta que tuvo, sin duda, buena acogida en España y en Gran Bretaña.

La intervención en la Conferencia de Roma del gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, sobre la entrada de la peseta en el SME, se tradujo como "un alegato -informaba *Cinco Días*- a favor de que el Gobierno de Felipe González se decida a dar el paso en breves meses" (*Cinco Días*, 6.5.89).

¹³⁸ El Congreso "European Banking" lo organizaron el Financial Times y La Stampa.

Cinco Días: “Es imposible interpretar las palabras del gobernador como una posición personal para presionar en dirección a la rápida entrada”. Se estaba a favor de la entrada en el sistema con una banda de excepción, como la italiana. Según este diario económico, era preciso elaborar un presupuesto disciplinado mucho más restrictivo que los conocidos hasta ahora, y concluía afirmando que la Conferencia de Roma era el punto de partida.

También respecto a las declaraciones de Mariano Rubio en Roma, el diario *El País* (6.5.89) se pronunciaba sobre la necesidad de “una distribución adecuada entre la política presupuestaria y la monetaria, porque, de lo contrario, sería un foco de problemas”.

Sobre la intervención de Rubio, *Abc* destacaba que “un presupuesto expansivo perjudicaría a la peseta en el SME”. Por su parte, el diario *Ya* habló, igualmente, del apoyo de Rubio a la integración de la peseta en el SME (6.5.89).

14. Repercusión del Informe Delors

Cuando el 8 de abril el presidente del Ejecutivo comunitario presentó el Informe Delors durante la reunión de ministros de Economía y Finanzas (Luxemburgo), la expectación había disminuído según *La Vanguardia*. El diario catalán desplegó una amplia cobertura informativa sobre la reunión.

Sólo unas horas más tarde, y tras darse a conocer el contenido del Informe, el ministro de Finanzas británico Nigel Lawson manifestaba: “El Reino Unido no puede aceptar la transferencia de soberanía que implica el Informe”, afirmando, además, que “en la agenda británica no figura la aprobación de la unión económica y monetaria” (“Eurotramontana en S’Agaró”. *La Vanguardia*, 13.5.89).

En la prensa extranjera se debatía su protagonismo. Para el *Suddeutsche Zeitung* la repercusión del Informe Delors tenía sólo una lectura: la unión monetaria ya había adoptado sus perfiles (9.5.89) Alfred Herrhause, portavoz de la Presidencia del Deutsche Bank, no podía imaginar un verdadero mercado interior sin una unión monetaria, tal y como llegó a afirmar durante una Conferencia sobre “La culminación del Sistema Monetario Europeo”, auspiciada por la Fundación Bertelsmann (*Suddeutsche Zeitung*, 9.5.89).

En Alemania, el ministro de Asuntos Exteriores Hans Dietrich Genscher, destacaba que lo más espectacular del Informe Delors era su viabilidad. Ya, el 1 de febrero de 1988, el ministro entregó un memorándum sobre la comunidad europea monetaria. El diario alemán *Suddeutsche Zeitung* concluía que, incluso, los más escépticos reconocían que el Informe Delors plasmaba las ideas y deseos alemanes.

Para Francia, sin embargo, no era tan fácil aceptar muchos de los principios introducidos por el poder económico de la RFA, como el de “la prioridad de la estabilidad y la autonomía de un banco central europeo frente a directrices políticas”.

A mediados de mayo, el Reino Unido y la RFA -incorporada a última hora- levantaron las expectativas de un Consejo Informal de Ministros de Economía que parecía sentenciado. S’Agaró, una pequeña localidad de la Costa Brava, fue el lugar elegido para acoger esta reunión informal de los ministros de Economía para debatir el Informe sobre la unión monetaria.

Para Joaquín Muns, miembro de la Comisión Económica del PE, el Informe Delors era vulnerable por su modelo centralizado: “Además de unificar la política monetaria, el informe preconiza una fuerte centralización de la política presupuestaria y cambiaria”, para Muns, sin embargo, este documento era “muy

representativo” de lo que significaba una unión económica y monetaria (*La Vanguardia*, 16.5.89).

15. El Proyecto Europartenariat’89 y las PYMES

Un total de 221 empresas andaluzas participaron en el Proyecto Europartenariat’89, que consistía en un encuentro entre empresarios de una zona comunitaria desfavorecida y el resto de los países de la CE para poder negociar algunos acuerdos de cooperación y subcontratación. El encuentro tuvo lugar en Torremolinos (Málaga) durante el mes de junio. El Programa contaba con un presupuesto de 750.000 ecus (unos 97 millones de pesetas), del cual, 2/3 partes iban a ser financiadas por la Comisión, y el resto por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa.

Se trataba de promover la subcontratación, no sólo con Europa, sino también en el país, donde la pequeña y mediana industria empezaba a moverse en regiones cercanas y a abrir canales dentro de la geografía española¹³⁹.

Además, el Informe *Cedefop*, elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional aseguraba que las grandes decisiones de la política económica española continuaban “obviando” con demasiada frecuencia a las pequeñas y medianas empresas, aunque estas representaban el 99,9% del total de las empresas del país (*La Economía*, 17.5.89).

¹³⁹ *Cinco Días*, 13.5.89

Por encima de todo, los empresarios advirtieron que ante la creciente interdependencia de los miembros comunitarios, una actitud pasiva de esperar y ver respecto a la unión monetaria podría “comprometer las ventajas de la convergencia económica ya en curso”¹⁴⁰.

16. Cumbre de La Toja

El presidente español Felipe González participó en la reunión anual del llamado Grupo de Bilderberg. Esta “Cumbre” celebrada en La Toja, a puerta cerrada, agrupó a importantes políticos, empresarios y financieros afines al Gobierno socialista.

Junto a Felipe González acudieron Miguel Boyer, Mariano Rubio, el ex secretario de Estado de Economía y Finanzas y luego vicepresidente del Banco Pastor, Guillermo de la Dehesa, Oscar Fanjul, presidente de Repsol, los financieros Carlos March y Emilio de Ybarra; así como el presidente de Prisa, Jesús Polanco y su consejero delegado Juan Luis Cebrián.

Durante el encuentro se debatieron las perspectivas de la ‘perestroika’ soviética, el futuro de la CE y el de la OTAN. Según publicaba el semanario *El Independiente*, los principales temas debatidos durante las distintas sesiones fueron las relaciones Este-Oeste y las perspectivas de la CE: “Nada ha trascendido sobre las intervenciones españolas, salvo una muy esperada de Miguel Boyer, sobre la unión monetaria europea.”¹⁴¹ (*El Independiente*, 19.5.89)

Pese al marcado carácter secreto de los debates del Grupo, Felipe González fue el único participante que se atrevió a hacer declaraciones sobre los

¹⁴⁰ *La Economía*, 11.5.89.

¹⁴¹ La intervención de Felipe González, fuera de programa, sobre la situación en Panamá, fue también una de las intervenciones más esperadas del grupo Bilderberg.

temas tratados en esta reunión, “rompiendo, de esta manera, el secretismo y el silencio que rodeó durante cuatro días la isla de La Toja”¹⁴². González valoró este encuentro como “un ámbito de reflexión muy útil, por ser muy libre y estar poco agobiado por intereses políticos inmediatos y, mucho menos, por presiones de otro signo”.

17. Consejo Informal en S'Agaró.

El eje central de la reunión en S'Agaró vino marcado por el debate sobre el documento del Comité Delors. Se esperaba que los ministros asistentes elaboraran un informe que sirviera de pauta para la Cumbre de Madrid¹⁴³. *El País* hablaba, sobre todo, de la oposición británica. En sus páginas, *El Independiente* señala que todos los ministros europeos de Economía conocían las dificultades del encuentro: “Los puntos de la agenda del Consejo Informal - comenta- son prácticamente inabarcables en una reunión de dos días cuya razón de ser no es otra que la de allanar el camino a las discusiones al más alto nivel que se celebrarán durante la Cumbre de Madrid”.

El día 20 de abril, día de la reunión, los ministros de Economía y Finanzas hablaron de la futura armonización fiscal y monetaria. Antes de la Cumbre de Madrid, la reunión de S'Agaró era el último Consejo Informal. El Ministerio de Economía confiaba en que esta reunión pudiera servir para aclarar las posturas sobre el Informe Delors en torno a la unidad monetaria, aunque en este punto tampoco cabía esperar grandes avances, dada la frontal oposición de Gran Bretaña (20.5.89).

Concluido el Consejo Informal, la prensa centró su atención en los resultados derivados del encuentro, y destacó finalmente, que los doce ministros sólo consiguieron llegar al acuerdo mínimo de empezar a trabajar para poner en

¹⁴² *El Independiente*, 19.5.89

¹⁴³ *Abc*, 18.5.89

marcha la primera fase prevista en el Informe. Al respecto, *Cinco Días* subrayaba: “Puede afirmarse tras la reunión que las cosas siguen como están (...) ya que se comprueba la enorme dificultad que comporta el movimiento en el seno de la CE” (22.5.89).

La Vanguardia, por su parte, de forma objetiva se hacía eco del importante papel que adquiriría la Unión Monetaria, “que va más allá de un mero acuerdo económico”. En su editorial del 22 de mayo (“La cita de S’Agaró”) destaca la prudencia que habían mostrado los ministros de Economía y Hacienda comunitarios: “El mínimo acuerdo al que han llegado ha sido trabajar para la aplicación de la primera fase, que se inicia en 1990, con la liberalización de los movimientos de capital”.

Todos los diarios coinciden en señalar las fuertes discrepancias suscitadas en S’Agaró. Apenas 24 horas después de finalizado el Consejo de Ministros de Economía de la CE, Pierre Bérégovoy manifestaba que ésta se podría hacer “a once, si algunos siguen poniendo cortapisas a su realización”, en referencia a la resistencia de Gran Bretaña.

El País (22.5.89) resaltaba en su editorial que se trataba de saber si los países que formaban la CE estaban dispuestos a ceder soberanía fiscal y monetaria. También habla de la resistencia del Reino Unido, que acusaba a la Comisión Europea de “burocratismo” y de afán controlador, discutiendo con dureza cada nuevo paso, y denuncia que hasta en las discusiones técnicas “se evidencia que no existe otro horizonte útil que el de la unidad política”.

En el extranjero, el periódico italiano, *Il Sole 24 Ore* (22.5.89) constató que la reunión no terminó de un “modo exaltante”. *La Stampa* (22.5.89) señalaba la “frialidad” de Bonn. Para los medios de comunicación italianos, Alemania no rechazaba a Europa pero deseaba “dominarla y doblegarla a su voluntad”.

La prensa inglesa, después de la reunión, advierte un cambio de conducta de su Gobierno. Adopta una postura mucho más flexible. El *Financial Times*, por ejemplo, señaló que Lawson no había luchado contra la opinión de consenso expresada por el ministro de Economía español, Carlos Solchaga, cuando éste afirmaba que en la Cumbre de Madrid “se debería considerar la convocatoria de una Conferencia integubernamental” (22.5.89). *The Guardian* también anuncia que Gran Bretaña suaviza su postura (22.5.89)

La Libre Belgique, con tono crítico denunció que los Doce se atascaron en la Europa fiscal, dieron un tímido paso en dirección a la Unión Monetaria y progresaron en la armonización de la fiscalidad indirecta. (22.5.89). Sin embargo, *Le Figaro* aportaba unos datos más esperanzadores sobre los resultados del Consejo: “el balance de la reunión informal de los Ministros de Finanzas de los Doce en SÁgaró había sido mucho menos negativo de lo que se esperaba (22.5.89). Finalmente, según *Le Monde*(22.5.89) el debate entre los Doce se encontraba en una fase de espera.

18. El futuro de la Unión Monetaria Europea

Existían razones económicas y políticas para pronosticar que, finalmente, se obtendría un acuerdo y podrían llegar a superarse las posiciones divergentes de los británicos (mantener la libertad de movimientos de capitales pero con tipos de cambios flexibles), alemanes y holandeses (mantener la disciplina en los tipos de cambio siguiendo las directrices del Bundesbank) y las posiciones de los españoles, franceses e italianos, que propugnaban la adhesión al SME de todos los Estados y el establecimiento de un sistema europeo de bancos centrales al estilo del que sigue la Reserva Federal norteamericana.

La unidad monetaria propuesta sólo se conseguiría después de un largo proceso de completa liberalización de movimientos de capitales y de un diseño de políticas presupuestarias comunes con pagos de fondos compensadores.

Juan Pérez Campanero confirmaba que el éxito de marketing de la campaña a favor de la integración económica no tenía precedentes inmediatos en Europa. “A impulsos de este éxito y del renovado entusiasmo europeísta que apareció en la fase alcista del ciclo en Europa en estos años, se lanzó un nuevo paso aún más atrevido: la consecución de una verdadera unión económica y monetaria a ser alcanzada en tres fases¹⁴⁴”.

Pérez Campanero evoca sobre la estabilidad del SME y su implicación en la economía de algunos países (Italia, España y Portugal) que estos países han visto cómo sus monedas se mantenían en el límite de apreciación debido al incentivo creado por los altos tipos de interés, para después contemplar que el marco alemán se ha visto sujeto a los avatares impuestos por los desequilibrios creados por la reunificación alemana.

La revista *España Económica* reflejaba las opciones que se debatían entre los expertos sobre economía comunitaria: “Si Boyer y el alemán Hoskins habían puesto el peso en tratar la necesidad de una unión monetaria europea, y los profesores White y Salin habían sembrado dudas sobre las posibles formas que podía tomar esa unión monetaria, José Viñals, del Servicio de Estudios del Banco de España, intentaba racionalizar la necesidad, oportunidad y bondad de la entrada de España en el SME” (*España Económica*, Junio 1989)

¹⁴⁴ PÉREZ CAMPANERO, Juan: “Un exámen del proceso de integración europea” (En “España y la Unión Europea”). Plaza&Janés. Barcelona, 1992.

Entre los beneficios políticos y económicos que aportaba el ingreso de España en el SME, Viñals señaló como más importante el de la reducción de la volatilidad de los tipos de cambio, los shocks de la economía y los costes de ajustes de la política económica.

Al mismo tiempo, los expertos del Comité de Acción para Europa y del Centro de Promoción e Investigación para la Moneda Europea 'Ceprem', recomendaron a los Gobiernos de los países comunitarios que se pusieran en marcha los objetivos del Informe Delors. Este Comité, reunido en Francfort, en sus conclusiones, hizo un llamamiento al Consejo Europeo de Madrid para que se esforzara en progresar hacia la unión económica e iniciara de forma inmediata los trabajos preparatorios con el fin de negociar las enmiendas necesarias al Tratado de Roma. Se instaba a los jefes de Gobierno a que celebrasen una conferencia integubernamental que estudiara el sistema europeo de bancos centrales, la creación del Banco Central Europeo y la implantación de la moneda única, antes de finalizar 1989 (*La Economía*, 2.6.89).

Es preciso analizar cierta preocupación de la prensa alemana ante la evidente pérdida de la soberanía nacional si prosperaba de forma rápida la unión monetaria. Según el *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (5.6.89) "la rápida construcción de la unión monetaria europea puede llevar a profundas pérdidas de competencia por parte de los Parlamentos nacionales". Los industriales alemanes se preguntaban si los políticos de verdad estaban dispuestos a ceder las competencias de la configuración monetaria a instituciones europeas que todavía no estaban definidas en el sentido político y jurídico¹⁴⁵.

¹⁴⁵ El Presidente de la Federación Federal de la Industria Alemana, Siegfried Mann, propuso un calendario de integración, que iba de la convergencia de la política a la construcción de instituciones europeas (*Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 5.6.89).

Otros diarios extranjeros valoraron las repercusiones de la posible entrada de España y Portugal en el cesto del ecu. *Il Mondo* (“Si llega la peseta”) subraya el probable “cambio del valor del ecu” si en el cesto entraban monedas débiles como la peseta y el escudo portugués (5.6.89)

Ante el clima confuso que despertaba nuestra integración en el SME, el Gobernador del Banco de España, Mariano Rubio declaró que la decisión de una incorporación inmediata dependía de los avances que, en materia de Mercado Único, realizaran los presidentes de la CE en la Cumbre de Madrid. .

Cabe destacar, por otra parte, que existía un divorcio entre los progresos realizados en el terreno económico y la lentitud registrada en la construcción política. Así, el diario *El País* en un editorial reafirmaba esta tesis¹⁴⁶: “Esta ralentización es sensible en el caso de la unidad monetaria”.

19. Noveno Seminario hispano-francés. Las Euroventanillas.

En París, el 4 de junio, finalizaba el noveno seminario hispano-francés, con la asistencia de una docena de ministros y varios secretarios de Estado de ambos gobiernos. España y Francia trataron de unificar criterios para parecer alineados - antes del relevo en la Presidencia- en las tres cuestiones claves de la construcción europea: Unión Monetaria, Dimensión Social y Cooperación Política.

Sobre este Seminario, los diarios económicos rectores más influyentes destacaron la voluntad común “de darle un impulso real” al proceso de Unión monetaria, en el sentido de considerar el Informe Delors “como un todo y no como algo que pueda ser contemplado por etapas desconectadas” (*La Gaceta*, 5.6.89).

¹⁴⁶ “La Unión Monetaria y la Soberanía”. *El País*, 4.6.89.

Por su parte, *Cinco Días*, en concreto, aseguraba que el ministro de Asuntos Exteriores francés, Roland Dumas, consideraba que el informe Delors formaba “un todo” en el que los elementos figuraban como “indisociables” (5.6.89)

El segundo apartado del epígrafe se refiere al reconocimiento de las nuevas oficinas de información denominadas Euroventanillas. En este periodo ya existían 148 y nuestro país contaba con 25¹⁴⁷. El objetivo esencial de estas euroventanillas consistía en poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas toda la información relativa a la reglamentación de la Comunidad Europea que afectara a las empresas.

20. Ingreso de la peseta en el SME

Ante un auditorio formado por banqueros y líderes financieros de todo el mundo, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga anunciaba a primeros de junio: “La peseta se integrará en el SME antes del 1 de julio de 1990” (...) “España está ya preparada para que se cubra con éxito la primera etapa de la Unión Monetaria Europea”¹⁴⁸. Solchaga pedía la misma banda de fluctuación para la peseta que para la lira, con un margen del 6% (*La Economía*, 7.6.89).

Otro diario económico, *La Gaceta*, el mismo día reproducía a cuatro columnas el anuncio del ministro de Economía. Expresaba en una reunión convocada por la Conferencia Monetaria Internacional: “Entiendo que la libra,

¹⁴⁷ Las 20 nuevas euroventanillas han sido concedidas a las asociaciones regionales de empresarios de Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón y La Rioja; a la Asociación de la Industria de Navarra; las Cámaras de Comercio de Madrid, Barcelona, Toledo y Valencia; al Banco Popular Español de Alicante y Banco de Crédito Industrial de Barcelona; a la Consejería de Economía y Comercio de Las Palmas de Gran Canaria; a Sodiex, en Cáceres; a IMADE en Madrid; al proyecto Europa SA de Málaga; a los institutos de Fomento de Murcia y Asturias; al Consorci-Centre de Documentació Europea de les illes Balears; al Centro de Estudios Europeos Confebask de San Sebastián, y a Sodical en Valladolid.

¹⁴⁸ En esta primera etapa, todas las monedas europeas deben estar presentes en el SME

siendo una moneda más fuerte que la peseta, entrará antes que nosotros”. Algunos banqueros interpretaron las palabras del ministro como un intento de forzar la posición británica, después de que en el consejo de S’Agaró, el representante de Gran Bretaña, Nigel Lawson, se opusiera frontalmente a la integración de la libra. Para *Cinco Días* el anuncio no era sorprendente, ya que las discrepancias se referían más “al ritmo” de la integración que a la entrada propiamente dicha. (Ver editorial “La integración necesaria”, 7.6.89).

La prensa no económica también anunció el ingreso para julio de 1990 y, sobre todo, destacó que existía un fuerte riesgo de no poder mantener las tasas de desarrollo adecuadas¹⁴⁹.

En clara oposición al planteamiento del Gobierno y corroborando la opinión de un amplio grupo de expertos, el secretario general de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, José Díaz Clavero, opinaba que era aconsejable plantearse la posibilidad de prorrogar, hasta el año 1993, la integración de la peseta en el SME¹⁵⁰. Clavero justificaba los beneficios que aportaría la prórroga de nuestra integración: “Durante ese periodo de tiempo, la política económica podría corregir los desequilibrios exteriores y el de los precios, así como lograr un tipo de cambio de la peseta más realista.”.

Sobre este mismo punto *Abc* pone énfasis en la intencionalidad política del anuncio por parte del Gobierno español. Para *Abc* se imponía negociar fríamente la incorporación, ya que no debían aceptarse injustificados sacrificios por razones electoralistas. “La decisión, que corresponde al Consejo de Ministros, habrá de ser adoptada, por tanto, antes de la convocatoria de elecciones generales” (*Abc*, 8.6.89).

¹⁴⁹ *El País, La Vanguardia* (7.6.89).

¹⁵⁰ *Expansión*, 7.6.89.

En su editorial del día 8, *La Economía* confirmaba “el espaldarazo” del gobernador del Banco de España a la propuesta de integración de la peseta en el SME. Mariano Rubio declaraba: “Hay quien fruñe el ceño ante el eventual establecimiento del Sistema de Bancos Centrales Europeos. No el Banco de España, ciertamente” (8.6.89)

El día anterior, la prensa británica informaba ampliamente de la decisión adoptada por el Gobierno español de vincular la peseta al SME. Los diarios británicos subrayaban que con esta decisión de Madrid se presionaba indirectamente a Gran Bretaña para que se integrara en el SME.¹⁵¹ Por ejemplo, *Financial Times* titulaba: “España se unirá al SME el próximo año”. Según este periódico, Solchaga declaraba, en una frase claramente dirigida a Gran Bretaña: “nosotros firmemente creemos que todos los miembros de la CEE deben integrarse en los mecanismos de cambio del SME”.(7.6.89).

En *The Guardian* leemos: “España presiona a la libra esterlina”. El autor del texto, John Palmer, escribe que con el acceso de España al sistema de cambio europeo, sólo quedaban fuera Gran Bretaña, Grecia y Portugal; y anotaba como observación: éstos dos últimos países eran los más pobres de la CEE. (7.6.89).

David Usborne, en *The Independent* también captaba el mensaje de Solchaga como un claro reto de Gran Bretaña frente al resto de los países miembros: “Gran Bretaña se dirige hacia un enfrentamiento en la cumbre comunitaria”. “La agenda prevista por el Gobierno español para la Cumbre Europea este mes en Madrid -señalaba el citado rotativo- parece seguro que provocará enfrentamientos entre Gran Bretaña, la Comisión Europea y otros países miembros” (8.6.89).

¹⁵¹ Esta conclusión parecen extraerla un núcleo del sector bancario ante unas declaraciones efectuadas por Carlos Solchaga en relación con el ingreso de la libra en el SME.

Una vez más, se explicaba la distinta visión que sobre, la vinculación de la peseta al SME, habían mantenido el Ministerio de Economía español y el Banco de España (artículo titulado “Una peseta caliente”, *The Economist* 9.6.89).

En Francia, la visión de *Le Monde* (“Una devaluación inevitable”) se resumía en el siguiente párrafo: “El éxito de la entrada de la peseta en el sistema europeo es igualmente primordial para la buena marcha de los préstamos en ECU en los mercados internacionales de capitales, que se inquietan ya ante las consecuencias de la introducción de la divisa española..” (8.6.89).

Tras la euforia que despertó en otros medios el anuncio sobre la futura integración de la peseta en el SME, el día 9, *El País* calificaba de “precipitado” el anuncio oficial de Solchaga. No se ha entrado en el análisis de las ventajas e inconvenientes de la adhesión; simplemente se ha declarado que los beneficios a largo plazo superan a los inconvenientes a corto”. Por lo tanto, la medida implicaba una regulación conyuntural de la economía, con un papel preponderante de los tipos de interés. Se cuestiona la necesidad o no de soportar las consecuencias nefastas de una medida precipitada, ya que los inconvenientes a corto plazo son mucho más evidentes “cuando se considera la sobrevaloración de la peseta y la fuerte presión de la demanda interior” (9.6.89).

Inesperadamente, el 16 de junio, el Consejo de Ministros decidió la entrada de la peseta en el SME. Todos los periódicos informaron que la decisión del Gobierno fue tomada “por sorpresa”. Parecía que el tipo de cambio central sobre el que fluctuaría la peseta frente al marco era de 65 pesetas, con una banda del 6%.

El Comité Monetario de Bruselas -incluida la representación del Reino Unido- apoyaba de forma unánime esta decisión; una decisión que el ministro

Carlos Solchaga calificó como “una de las más trascendentes que ha tomado el Gobierno” (*El País*, 17.6.89).

Según el Banco de España, la integración se había realizado por sorpresa porque, una vez tomada la decisión política, “era la mejor forma de cortar cualquier especulación” y, de plano rechazó la idea de acometer previamente una devaluación de la moneda española.

Lógicamente, en el seno de los partidos políticos, el responsable de economía del PSOE, Fernández Marugán consideraba que el anuncio no había sido precipitado porque “en política monetaria no se puede actuar con avisos previos”. Pero José Antonio Segurado, responsable de Economía del Partido Popular, señalaba que la decisión fue “muy precipitada”.

Otros, como José Ramón Caso, dirigente del CDS, se extrañaron de la rapidez del ingreso cuando hace sólo unas semanas el presidente del Gobierno anunció la entrada para julio del próximo año. El dirigente centrista declaró “creemos que este tipo de anuncio con aglomeración de noticias puede vaticinar una convocatoria anticipada de elecciones” (*El País*, 17.6.89).

Desde el sindicato de UGT, Apolinar Rodríguez creía que la entrada de la peseta en el SME requería otras políticas compensatorias de tipo fiscal y presupuestario. El sindicato de CC.OO opinaba, asimismo, que la disciplina del SME obligaría a España a adoptar políticas restrictivas para controlar el diferencial de inflación.

Todos los diarios coincidían en que la decisión se había tomado “por sorpresa” para evitar la especulación. *Abc* en su editorial (“La peseta ya está en Europa”) destaca que “las hábiles gestiones del gobernador del Banco de España con los demás gobernadores de los Bancos centrales europeos han hecho posible

esta aceleración de una de las decisiones más trascendentes de los últimos tiempos en materia de política económica” (*Abc*, 17.6.89).

El País señala en el segundo párrafo de su editorial (“Otro paso hacia Europa”): “Se trata, sin duda, de la decisión política-económica más significativa desde el ingreso de nuestro país en la Comunidad Europea, el 1 de enero de 1986, lo que hubiera hecho imprescindible un gran debate sobre las ventajas e inconvenientes que originará, que no ha existido” (*El País* 17.6.1989).

A su vez, *La Vanguardia* calificaba de “histórica” la decisión del Gobierno. No duda en afirmar que es “muy positiva” para la economía española, y preconiza un desarrollo acorde con el resto de los países comunitarios, sin olvidar que la disciplina monetaria y fiscal en la que España entra “no siempre es fácil ni cómoda para cualquier Gobierno, y en especial para un Gobierno socialista”.

La Vanguardia, no obstante, garantizaba importantes mejoras: “Un crecimiento económico seguro y sostenido -excepto en caso de crisis económica internacional- y un nivel de vida cada vez más cercano al europeo deberán ser las consecuencias que España notará en los próximos años. Todo ello implica la pertenencia plena a una zona económica-política del mundo que es, junto a los Estados Unidos, la única que dispone de libertades políticas estables y de un alto nivel de prosperidad.” (*La Vanguardia*, 17.6.89).

Las tres razones que impulsaron al Ejecutivo a tomar esta decisión eran las siguientes: Primero, la ventaja de dar a nuestro tipo de cambio una mayor estabilidad, evitando la especulación contra nuestra moneda y permitiendo, además, a exportadores e importadores, realizar mejor sus cálculos de rentabilidad en sus operaciones con el exterior; la necesidad de mantener una política económica y monetaria rigurosa, lo que significa una apuesta a largo

plazo por la competitividad, e impulsar a través de esta mayor competitividad la plena integración política en Europa. A partir de ese momento el Gobierno reclamaría con más urgencia la concertación social. (*La Vanguardia*, 18.6.89).

Otro de los diarios más influyentes, *Diario 16*, en su editorial que titula: “La Europeseta”, aseguraba que la decisión del Gobierno español había sido “valiente” y “oportuna”, pero advertía a los dirigentes españoles que era imprescindible el rigor presupuestario (*Diario 16*, 18.6.89).

21. Valoración de la prensa extranjera

Los periódicos ingleses consideran que España está haciendo los ajustes más profundos y más rápidos a las nuevas realidades. Desde el *Financial Times* se lanzan recomendaciones al Gobierno británico para que deje a un lado las objeciones al Informe Delors y “se vincule al mecanismo de cambio pronto” (*Financial Times*, 19.6.89).

La fecha escogida para la integración no carece de intencionalidad política para *Le Monde*: “España pretende terminar su Presidencia comunitaria elegantemente: en diez días se reunirá en Madrid un consejo europeo dominado por la unión económica y monetaria (...) esta decisión pone entre la espada y la pared a Gran Bretaña” (*Le Monde*, 20.6.89).

Se advierte, por otra parte, cierta desconfianza en algunos medios alemanes. De “listos” califica a los españoles el *Suddeutsche Zeitung*. El diario plantea estos interrogantes ¿Qué es lo que empuja a los españoles a la integración? ¿O esperan más bien con frío egoísmo que los fuertes de Frankfurt contribuyan a la estabilidad de su moneda? (19.6.89).

22. Evaluación de la Cumbre

Dedicamos un espacio, dentro de este epígrafe, a evaluar los resultados derivados de la Cumbre Comunitaria que se celebró en Madrid los días 26 y 27 de junio. Por esta razón, y para transmitir una visión generalizada de la prensa española y europea, hemos seleccionado las informaciones que parecen sintetizar lo más significativo de la Cumbre

La prensa madrileña, en concreto, acoge ampliamente y con expectación la celebración de la Cumbre española bajo un denominador común: el éxito o el fracaso dependen de la posición de la primera ministra británica ante la Unión Monetaria y la Carta Social Europea.

Felipe González en esta ocasión pretendía evitar una ruptura entre la primera ministra británica y el resto de sus huéspedes europeos. González examinó el día antes, propuestas de consenso en torno a la aceptación de la primera fase de la unión monetaria, y al logro de algún tipo de compromiso en las etapas ulteriores.

España abordó prioritariamente el reto monetario, como continuidad de lo pactado en Basilea (1979) para activar el funcionamiento del SME. Como señalaba acertadamente Luis Ángel Rojo¹⁵² “los beneficios generales que cabe esperar de la creación de la unión monetaria han sido convenientemente aireados durante los últimos años: la adopción de una moneda común reduce los costes de transacciones y elimina los riesgos cambiarios, y favorece, por tanto las corrientes comerciales y financieras entre los países miembros de la Unión (...) la creación de la unión monetaria adquiere su verdadera justificación como pieza relevante en el proceso de integración económica y política de Europa”

¹⁵² ROJO, Luis Ángel: “La Unión Monetaria en los Acuerdos de Maastricht” (“España y la Unión Europea”. Plaza & Janés. Barcelona, 1992.

Los periódicos europeos comentaban al mismo tiempo el alcance de la Cumbre en Madrid. *The Independent* titula un artículo “González fija un tono firme para la Cumbre”. El Presidente español envió una carta a Thatcher y a otros líderes donde solicitaba decisiones firmes en lo económico para la próxima Cumbre. *Financial Times* informa que González parece indicar a la sra. Thatcher que había mucho tiempo para negociar. El alemán *Der Zeit*, en artículo de Helmut Schmit (“Una divisa para Europa. La República Federal Alemana tiene que presionar a sus socios para que actúen”) pone en tela de juicio la “seriedad de este tercer impulso hacia la Unión Monetaria Europea” (23.6.89).

Desde una óptica bilateral, los dos ministros, el alemán, Genscher y el francés, Dumas reforzaron el deseo de que la unión económica y monetaria recibiera en Madrid “un impulso político decisivo”. El Presidente del Banco Federal alemán, según el *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, hablaba de confianza en los mercados respecto a la unión monetaria: “La experiencia enseña que hay que confiar más en los mercados que en la sabiduría de los políticos” (23.6.89).

La Repubblica señala que el ministro de Exteriores británico Sir Geoffrey y el ministro de Hacienda Nigel Lawson anunciaban el temor de un aislamiento de Inglaterra y que consecuentemente, el resto de los países asumieran el calendario Delors (23.6.89). Pero finalmente Inglaterra aceptó con múltiples condiciones el objetivo de la Unión Monetaria, aunque sin concretar pasos definitivos. No obstante, Margaret Thatcher puso como condición para el ingreso de la libra, que existiera un espacio financiero común y que se redujera la inflación a las cotas medias comunitarias.

Después de la Conferencia de Madrid, la unión monetaria acapara los espacios más representativos de la prensa. Sin embargo, es preciso matizar que, de acuerdo con los perfiles estudiados, las diferencias sobre la Unión Monetaria

no acaron de limarse después la Cumbre: si bien Margaret Thatcher había moderado su intervención, nunca se mostró de acuerdo con la totalidad del Informe Delors.

23. Conclusiones del capítulo

- Los textos de opinión discuten el orden de importancia de la Europa monetaria y económica y de la unión política. En los contenidos informativos analizados se advierte una escasa coherencia intracomunitaria en el recuento de las medidas económicas ya adoptadas.
- En España, son los diarios económicos los que más inciden en el carácter expansivo de los presupuestos elaborados por el ministro Solchaga, y en la repercusión de sus efectos en el proceso de la unión monetaria europea.
- Amplia difusión informativa y opinión de los expertos en asuntos económicos sobre la propuesta del Comité Delors en torno a la moneda única.
- La coordinación de las políticas monetarias plantea un serio debate sobre la creación de nuevas instituciones, no previstas en el Acta Única.
- Un comunicado del Parlamento británico denunciando que había fraude en las operaciones financieras de la CE, despertó fuertes reacciones de la Comisión hacia Gran Bretaña.
- Atento seguimiento de los diarios españoles y extranjeros en relación con el trabajo desarrollado por los 17 miembros del Comité Delors.
- Considerable número de reportajes e informaciones de carácter monográfico sobre las óptimas condiciones que España tiene para las inversiones extranjeras. La prensa alemana, por ejemplo, destacaba la

figura del ministro Solchaga y lo definía como el gran artífice del “boom” económico en nuestro país.

- Cuando el Presidente González anuncia la inminente entrada de España en el SME, numerosos editoriales y artículos de opinión analizaron las repercusiones que conllevaba este ingreso.
- Ante las soluciones planteadas por el plan Brady para rebajar la deuda del Tercer Mundo se registra un escepticismo general en los medios periodísticos.
- Con ocasión del décimo aniversario del SME se advierte un amplio despliegue informativo a nivel comunitario. El propio Delors reconoce entonces la dependencia de la política monetaria europea respecto al marco alemán.
- Tal vez el punto más controvertido del Informe Delors se centre en la creación de un fondo económico de reserva. Toda la prensa publica la incidencia del Documento.
- Serán los diarios económicos los que enfoquen más directamente la actitud crítica de la Asociación Bancaria del Ecu (ABE) hacia el Informe Delors. Desde la banca mundial se solicitaba a los gobiernos comunitarios que participaran más activamente en la implantación del ecu.
- Se abre un amplio abanico de opiniones ante la incorporación de la peseta en el SME. Paralelamente, los diarios destacan la controversia surgida entre el ministro Solchaga y el gobernador del Banco de España basada, fundamentalmente, en las condiciones monetarias para el ingreso.

CAPÍTULO VII:

La política audiovisual europea

7.1. El impulso de las telecomunicaciones.

7.1.1 Liberalización de las Telecomunicaciones

En su discurso ante el Parlamento Europeo el 17 de enero, el ministro Francisco Fernández Ordóñez anunciaba el nuevo impulso de los servicios basados en nuevas tecnologías con especial incidencia en el acervo cultural y económico europeo (*Boletín CE*, 1/1989). En abril de 1987 irrumpía en el ámbito comunitario la publicación del primer manual que se refiere a este campo: “El Libro Verde para el desarrollo de un Mercado común para los equipos y servicios de telecomunicaciones”.

En cumplimiento de las conclusiones adoptadas en las últimas reuniones del Consejo Europeo, y según lo acordado en Rodas, la Presidencia española iba a prestar un especial interés en el afianzamiento y el avance de la capacidad audiovisual de Europa.

Lo más importante de este semestre se adoptó en el Consejo de Telecomunicaciones celebrado el 27 de abril en el que además de aprobar la decisión sobre la Televisión de Alta Definición (TVAD), se examinaron materias como la normalización en el sector de las telecomunicaciones o la coordinación en la introducción de la red digital de servicios integrados en la Comunidad de aquí a 1992. En nuestro estudio destacaremos también los debates orientativos en torno a la liberalización de los servicios en este sector

Aunque ningún país de la CE acaparaba individualmente más del 6% del mercado mundial de telecomunicaciones, la CE representaba en el periodo que nos ocupa el 20 % del mercado mundial. Sin embargo, en el entorno económico y social la demanda de los servicios crecía con un ritmo vertiginoso¹

España resultaba ser un país atractivo para el mercado de las telecomunicaciones. En nuestro país la futura celebración de dos eventos tan importantes como la Exposición Universal de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona justificaron las fuertes inversiones de Telefónica en tecnología para cubrir la infraestructura de estos proyectos. Por ejemplo, el programa *Star* de la CE destinó hasta entonces unos 150 millones de dólares para nuestro país. En ese momento, el gasto de Telefónica en la expansión de servicios móviles osciló entre los 70 millones de dólares.

Otros proyectos aunaron los esfuerzos por el avance en el sector de las Telecomunicaciones. En cuanto a la participación española en 19 proyectos del programa *Eureka*, Alcatel Standart Eléctrica lideraba 3 de los 58 proyectos aprobados, 2 de ellos relativos a los terminales telefónicos con funciones de habla, señal e 'interface'. El tercero, estudiaba el desarrollo de motores inteligentes para electrodomésticos

¹ Se estima que en el plazo de dos décadas las inversiones públicas y privadas se situarán entre los 500.000 millones y el billón de ecus.

Además, con el programa “*Esprit*” nuestro país anunciaba su participación en el proyecto “*Smart*” con vistas a crear un modelo telemático para sistemas de seguridad (*Cinco Días*, 3.4.89).

En el Programa *Olympus* -el mayor satélite de telecomunicaciones construido hasta el momento- participaron España, Italia, Gran Bretaña, Holanda, Austria, Bélgica, Dinamarca y Canadá. El 19 de abril *Diario 16* publicaba el reportaje “*Olympus: El nuevo ‘gigante’ de la telecomunicación es europeo*”. Las posibilidades del satélite *Olympus* eran superiores a las que tenían otros satélites del espacio .

El programa *Olympus* había sido presentado en abril en Viena por la Agencia Espacial Europea (ESA) y significó un desafío innovador en la utilización de las nuevas tecnologías espaciales.

7.1.2 El futuro campo de las Telecomunicaciones

La falta de una normativa internacional de telecomunicaciones retrasaba la aparición de un mercado europeo de equipos y terminales. Así, surgió el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación con el fin de establecer las normas reguladoras de la futura red de comunicaciones digitales.

En 1986 la CE elaboró una recomendación para la introducción coordinada de la ‘red digital de los servicios integrados’ -RDSI-. En tres fases, se desarrollaría esta red digital, con un carácter operativo hasta 1988, un servicio de 5 años y otros servicios más avanzados sin fecha concreta de actuación.

El interés de Europa por defender su política comercial se debía al déficit que mantenía en sus intercambios con los Estados Unidos y con Japón. Los

EEUU esperaban obtener un acceso al mercado para sus firmas comerciales en la primera fase de negociación con la CE. En 1961, la Administración americana concluyó un acuerdo de limitación sobre los equipos y servicios de telecomunicaciones con Japón. Ahora había lanzado sus dardos contra el protegido mercado comunitario.

En 1987, cuando la Comisión propuso la liberalización de los monopolios nacionales, los Doce rechazaron esta determinación debido a sus prerrogativas nacionales y a razones de tipo metodológico. Sindicatos y fabricantes de equipos también fueron contrarios a la liberalización².

Aunque no todos compartían este proteccionismo hacia los monopolios estatales. Algunos empresarios, como los que formaban parte de La Unión de Industrias de la CE (UNICE) eran partidarios de la desregulación.

La Comisión inició los trabajos sobre la directiva que liberalizaba los servicios de Telecomunicación. Según el comisario de la Competencia, Leon Brittan, la citada directiva apuntaba hacia la eliminación de los 'derechos exclusivos' sobre servicios de Telecomunicación, con la excepción de las comunicaciones de voz.

La propuesta comunitaria consistía en mantener el monopolio estatal sobre el teléfono, con la liberalización del resto de los servicios: transmisión de imágenes, correo electrónico, etc. Anteriormente, en el mes de diciembre, se abrieron a la competencia los monopolios de difusión sobre el videotexto, telefax y la mensajería electrónica. Ya, únicamente quedaban por liberalizar los servicios de transmisión de datos y comunicación entre los ordenadores.

² Diario 16, 20.4.89.

El 27 de abril, los ministros de Telecomunicaciones frenaron las pretensiones de la Comisión que quería aprobar unilateralmente una directiva que abriera a la empresa privada los monopolios de transmisión de datos en 1992. Fue eco general en la prensa europea este bloqueo del Consejo y el debate se abrió con el recurso del art. 90.a del Tratado de Roma. El argumento de los ministros utilizado para detener el proceso de liberalización constata que, con la directiva de la Comisión, se rebasaban las competencias previstas en el artículo 90.a del Tratado de Roma (“El Consejo de la CE frena la apertura del mercado de telecomunicaciones”, *Cinco Días*, 28.4.89; “Los ministros de Transportes de la CE frenan la liberalización de las telecomunicaciones” *El País*, 28.4.89).

7.1.3 La LOT en el marco comunitario.

La Administración española contactó con la Comisión Europea para determinar las condiciones de aprobación de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), después de que el órgano Ejecutivo comunitario elevara una serie de objeciones al proyecto español.

A finales de mayo, este duro golpe se reflejó en el plano informativo. Desde el Ejecutivo comunitario se consideraba que se incumplía el art. 30 si no se modificaban algunos puntos de la Ley. Así, desde las páginas de opinión del diario económico *La Economía* se cuestiona si la protección del sector impuesta por el ministro José Barrionuevo puede llegar a ser beneficiosa para la competitividad de esta industria.³

El ministro de Transportes esperaba la respuesta de la Comisión a la propuesta de reglamentos de esta Ley. Sobre este aspecto, Javier Nadal, director general de Telecomunicaciones declaraba: “Si lo que ellos desean es la liberalización de un mercado, el cumplimiento de este plazo perjudica a todos, y a ellos en primer lugar” (*La economía*, 27.5.89). Según la legislación europea, el

Estado no aprobará la norma hasta pasados 6 meses, una vez conocida la respuesta de la Comisión.

En términos generales, el mercado de las Telecomunicaciones en la Europa comunitaria permanecía dividido. Cada Estado se comprometía a no interferir en los monopolios del resto y el proteccionismo de estos países se fomentaba con el encarecimiento de los costes. Por ejemplo, los equipos de telecomunicaciones de la CE costaban un 80% más que los de EE.UU (*Expansión*, 12.5.89).

³ "La LOT de los despropósitos". *La Economía*, 31.5.89.

7.2 La Televisión de Alta Definición.

7.2.1 Europa frente a EE.UU y Japón en TVAD.

Las nuevas realidades tecnológicas, los avances en las telecomunicaciones imponían la necesidad de una cohesión cultural europea. Desde la Declaración de Delfos, expertos del sector concedieron un protagonismo relevante a la televisión de Alta Definición.

Doscientas cincuenta personalidades de las artes, las letras y las ciencias se reunieron en la isla griega de Delfos. Fueron convocadas por la Comunidad Europea (CE) los días 25, 26 y 27 de septiembre de 1988. El documento que salió a la luz es conocido como Declaración de Delfos y Carta del Audiovisual Europeo. En el Documento se vertebraban las futuras medidas prácticas para el espacio audiovisual europeo y se formulaba un conjunto de principios esenciales para la futura reforma global del marco jurídico y administrativo del sector.

El proyecto europeo de identificación cultural audiovisual contaba con dos fuertes competidores: Japón y EEUU⁴. Del consumo total de los productos audiovisuales, sólo el 10% satisfacía a la oferta europea. Además, en Europa había pocas emisoras cuyos servicios rebasaran las fronteras.

Para el comisario europeo Jean Dondelinger, era primordial la pronta unificación de las diferentes normas de emisión de programas de los distintos países. La Comisión, animada por los jefes de Estado europeos en la Cumbre de Rodas, se había propuesto desempeñar aquí un papel de pionero. Parecía

⁴ La televisión pública Nippon Hoso Kyokai (NHK), transmitió los Juegos Olímpicos de Seul - con la ayuda de Sony y Toshiba- en su sistema de 1.125 líneas.

necesario llenar el espacio audiovisual comunitario con contenidos europeos, independientemente de la fórmula jurídica y tecnológica que se adoptara.

7.2.2 Competir por un nuevo modelo de televisión

En 1989 los japoneses llevaban doce años investigando la alta definición, con un gasto aproximado de 80.000 millones de pesetas. Pero la implantación de su sistema -incompatible con los televisores clásicos- implicaba la sustitución de unos 700 millones de aparatos receptores.

Europa no tardó en reaccionar, incorporando el sistema “europeo”; las 1.250 líneas del televisor, que resultaba compatible con los receptores del mercado.

En la reunión mundial del Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicación (CCIR), en Dubrovnic, los japoneses estuvieron a punto de alcanzar la supremacía. Sin embargo, los representantes europeos consiguieron un periodo de “gracia” que impidió que el modelo asiático sepultara al receptor convencional.

El 23 de septiembre de 1988 los europeos presetaban en Brighton un sistema de alta definición. En noviembre, la Comisión promovió la alta definición con los colores y las estrellas de los Doce. Se esperaba que la Sociedad Europea de Investigación y Promoción de la televisión de alta definición fuera una realidad el 1 de julio. En este reto, la Presidencia española desempeñaba un papel decisivo.

El responsable del área de ciencia, investigación y telecomunicaciones de la CE, el comisario Pandolfi, anunció entonces que la demostración del sistema

européo de TVAD estaba prevista para la Cumbre comunitaria de junio en Madrid⁵.

Por su parte, y al otro lado del Atlántico, Estados Unidos decidió desde la Comisión Federal de Comunicaciones que la alta definición tenía que ser compatible con los televisores norteamericanos. Concretamente, el proyecto compatible de Zenith Electronics aunó a todas aquellas firmas que podían instalar el sistema americano.

Todo apuntaba a una gran batalla industrial y comercial a nivel planetario en el campo de la alta definición. Quizá valga la pena recordar que el interés de este sistema no sólo interesaba al sector audiovisual; en el Ejército, en las artes gráficas y en la medicina resultaba de gran utilidad (Por ejemplo, para la detección de enfermedades o la selección y ampliación de la parte diagnosticada).

La Presidencia española contemplaba en su agenda de trabajo un espacio dedicado a la aprobación de la normativa sobre la TVAD. Así lo manifestó el comisario europeo Filippo María Pandolfi al Presidente del Consejo de Investigación y Desarrollo, Javier Solana⁶.

Así, el 6 de marzo se aprobaron algunas conclusiones derivadas de la introducción de la TVAD en la industria y el comercio. El Consejo de Ministros de Industria subrayaba la importancia de los acontecimientos de alcance mundial para las demostraciones de los servicios de TVAD.

El Consejo de Telecomunicaciones (anunciado para el 27 de abril) tenía que ratificar esta iniciativa de carácter político. Se respaldaba a las grandes empresas

⁵ El programa audiovisual Eureka fue el Primer Plan de Trabajo presentado por Francia en innovación tecnológica. Con una dotación de 250 millones de dólares, el programa EU-95 fue acogido por las firmas Philips, Thomson, Bosch y Thorn Emi ("Japón y Europa compiten por la televisión perfecta", *Cambio* 16, 30.1.89)

⁶ *La Vanguardia*, 20.2.89.

européas electrónicas para que invirtieran en este proyecto. De esta forma, la Comisión Europea al defender una normativa que desbancaba el empuje japonés, estaba abriendo camino a inversiones millonarias para el desarrollo de esta tecnología.

EEUU vivía por estas fechas un intenso debate donde se implicaban empresas, científicos y políticos preocupados por el inminente cambio económico que iba a traer la implantación de la HDTV. Hasta entonces EEUU no había despegado en este campo. En enero de 1989, la American Electronic Association anunció que 17 empresas se habían unido para crear un proyecto conjunto de HDTV, con un fondo de inversión de 3.450 millones de pesetas (*Diario 16*, 15.3.89).

Desde Europa se esperaba que la condición acordada por la Comisión Federal de Comunicación fomentara la convergencia del modelo estadounidense con el suyo. En esta dirección trabajaban los laboratorios de Philips. En 1990 el Comité Internacional de Radiocomunicaciones tenía que determinar qué sistema iba a implantarse en el mercado. Mientras, en España, este interés por participar en los proyectos de investigación, propició la firma de un convenio entre RTVE, Telettra Española y la Universidad Politécnica de Madrid.

7.2.3 Se impone el modelo europeo (Consejo de Telecomunicaciones del 27 de abril).

En el Consejo de Ministros de Telecomunicaciones celebrado en Luxemburgo el 27 de abril bajo la Presidencia del ministro español de Transportes, José Barrionuevo, se aprobó la decisión del Consejo sobre la norma europea de Televisión de Alta Definición.

Era el principio de una guerra comercial entre la TVAD europea y la japonesa y americana, y era de esperar que los japoneses utilizaran todos sus avances tecnológicos para hacerse con el control de lo que iba a ser la televisión de Alta Definición.

Este Consejo acaparó el interés de toda la prensa. En él se decidía la promoción del sistema europeo de Alta Definición. Los ministros de Telecomunicaciones tenían que adoptar un tipo de estrategia capaz de establecer en el mundo entero el modelo europeo como norma única para la producción e intercambio de programas de Alta Definición⁷.

Una vez aprobado el acuerdo se destaca el interés competitivo de la CE en el comercio internacional de la Alta Definición y despunta la idea de que los EEUU parecen decantarse más por el sistema comunitario. En la reunión de Luxemburgo se fijó el objetivo de introducir la TVAD a partir de 1992, y el grupo de interés económico creado para promocionar este sistema europeo contaría con más de 50 millones de dólares⁸. El anuncio de este propósito es unánime también en toda la prensa económica.

⁷ *El País*, 27.4.89.

⁸ *La Economía*, 28.4.89.

7.2.4 Promoción del nuevo sistema televisivo

Se esperaba que el año 1990 fuera la fecha clave para el funcionamiento de la TVAD. El Comité Consultivo Internacional de Radiocomunicaciones tenía que fijar el tipo estándar televisivo. La ratificación de los Doce al sistema europeo se interpretó como el impulso definitivo para que la CE adoptara las medidas recogidas en el programa *Eureka 95*.

Esta era una ocasión en la que la industria europea luchaba unida, para poder salvaguardar su supervivencia. Era evidente la compatibilidad del programa "Eureka 95" con las normas europeas MAD/Packet -para la difusión directa de televisión por satélite- y con televisores actuales.

El calendario de promoción del nuevo sistema televisivo tuvo una amplia repercusión informativa: grabación de imágenes de la Cumbre europea de junio en la capital madrileña, experimentación del sistema durante los Mundiales de Fútbol en Italia (1990) y en los Juegos Olímpicos de 1992.

Por último, los 5 objetivos de la CE en el sector audiovisual se resumen en los siguientes apartados. En primer lugar, era necesario que la industria europea desarrollara, con la suficiente antelación, toda la tecnología necesaria para la creación de los servicios de la TVAD. El segundo frente de actuación incluía promover la norma europea como norma mundial. En tercer lugar, había que incentivar la utilización del sistema europeo en todo el mundo y además promover la inmediata introducción de los servicios de TVAD en Europa, así como conseguir la competitividad de los productores de programas en el mercado mundial de TVAD. Era de gran interés para los países comunitarios contribuir directamente en la programación⁹.

⁹ *El Independiente*, 13.5.89

7.3 Televisión sin fronteras

7.3.1 La Televisión transfronteriza a debate

En el ámbito audiovisual las iniciativas de la CE se centran, sobre todo, en la liberalización de las barreras técnicas y jurídicas en el sector. Pendiente estaba la aprobación de una Directiva relacionada con el ejercicio de las actividades de radiodifusión televisiva.

A partir del análisis efectuado se puede establecer que el avance fue manifiesto después de la celebración de los distintos Consejos de Mercado Interior durante el primer semestre. Así, en el Consejo celebrado el 13 de abril se determinó la posición común de los Doce sobre la Televisión sin fronteras. Sin embargo, el 14 de junio, en la discusión que mantuvieron los ministros del ramo, la adopción definitiva quedó bloqueada.

El estudio ha permitido alcanzar algunas conclusiones que reflejan el deseo comunitario de establecer una programación televisiva con una mayor cuota de producción europea. Se trataba de comprobar el grado de compromiso sobre la cuota de programación de los países miembros. Entre enunciados ‘críticos’ y ‘conciliadores’ se debatían en la prensa nacional los resultados de los encuentros presididos por el que fue inductor de esta televisión, el secretario de Estado para la CE, Pedro Solbes.

7.3.2 Consejo de Mercado Interior (13 y 14 de marzo). Fomento de la producción europea.

Las observaciones que se hacen después de celebrarse la reunión de marzo señalan, predominantemente, el intento español desde su liderazgo por alcanzar

un acuerdo político sobre el fomento a la producción europea. Un hecho era evidente: con la armonización de las reglamentaciones se favorecía la libre circulación de programas en Europa.

Algunas corrientes de opinión reflejadas en los medios, reflexionan sobre el futuro de la frontera audiovisual una vez consolidada la televisión por satélite (“Espacio para la televisión privada” Editorial, YA, 15.3.89). En el caso de *El País*, una de las consecuencias más importantes del acuerdo estriba en la limitación publicitaria de la programación global de las televisiones europeas - reducción del 15% (*El País*, 15.3.89).

El acuerdo sobre “TV sin Fronteras” se había suscrito por mayoría cualificada, con la oposición de la RFA . Las divergencias radicaban en belgas y daneses, que no reconocían los poderes de control de la Comisión.

Romano Ferrari, en *El Periódico*, refleja el alcance del consenso alcanzados por la CE y concede a la Comisión la capacidad de decisión sobre la normativa que rige la programación y la publicidad. *La Vanguardia*, da relevancia al establecimiento de las cuotas de producción. Según su visión, se trata del preámbulo de un consenso más amplio entre los 22 países que forman el Consejo de Europa. Lo que sí es cierto -como se desprende de los contenidos informativos del diario catalán- es que existe un evidente interés comunitario de cara a la protección de los telespectadores.

Entre los límites impuestos en el Informe emitido en este Consejo de Interior señalamos lo siguiente: “Las directivas contendrán un capítulo sobre la protección de los menores. Los estados miembros podrán, bajo ciertas condiciones, suspender provisionalmente la retransmisión de emisiones televisadas en caso de perjuicio para los menores” (*La Vanguardia*, 15.3.89)

Abc se refiere también a los aspectos publicitarios (especialmente alcohol y tabaco) por su repercusión en la industria y en la sociedad. Para *Cinco Días*, lo más importante es el establecimiento de la llamada “cláusula de no retroceso” en la producción propia. Esta cláusula señalaba que los Estados miembros están obligados a remitir cada dos años un informe a la Comisión Europea.

La vinculación de la prensa con la realidad europea respecto a la TV sin fronteras traduce el gran esfuerzo negociador necesario para cerrar el marco legal de esta modalidad televisiva. En el editorial que publicó *Diario 16* (18.3.89) se especifica que las disposiciones en estudio deben constituir un marco legal que necesita de una mayor concreción y que exigirá un arduo esfuerzo negociador”.¹⁰

No se equivocaba el responsable de Cultura, Jean Dondelinger, en la valoración de los resultados, después de la reunión, cuando afirmaba: “El acuerdo de hoy es un paso muy importante hacia la creación de un auténtico espacio audiovisual europeo, con legislaciones similares sobre publicidad y programas, de un extremo al otro de Europa” (*La Vanguardia*, 15.3.89).

7.3.3 Alemania critica las nuevas cuotas de programación.

Reunión informal en Santiago de Compostela.

Dentro del contexto de la prensa europea y en un incisivo editorial, el *Fra Frankfurter Allgemeine Zeitung* se interrogaba sobre la necesidad de poner semejante “corsé” a la TV europea. El proyecto TV sin Fronteras no había suscitado entusiasmo alguno en el sector alemán publicitario. En el editorial se denuncia que imponer minutos a la publicidad “es un caso típico de arrogancia de los políticos”. Resultaba más lógico, según este diario, delegar en las empresas publicitarias la determinación de la cuota.

¹⁰ “Televisión europea sin fronteras”, en *Diario 16*, (18.3.89)

Por otra parte, la Oficina de Información Diplomática recoge la repercusión en los medios alemanes del acuerdo sobre “TV sin Fronteras”. En un Informe de la OID se constata como aspecto más relevante lo prescrito a la cuota de producción europea. El compromiso de alcanzar el 50% en la programación rebajaba en 10 puntos la pretensión inicial de Francia y las reservas de Bonn se justificaban en los siguientes puntos:

1. Las cuotas de producción atentan contra la aspiración de máxima competencia del mercado de servicios, sobre todo en el caso de las televisiones privadas.
2. “La consideración de europeos no debería limitarse a los programas de los Doce”.
3. “La competencia de los Estados federados en materia de radio-televisión deberá ser tomada en consideración”¹¹.

En Santiago de Compostela tuvo lugar un Consejo de Ministros de Cultura de carácter Informal para tratar los temas relacionados con el impulso de una política audiovisual europea capaz de responder al reto norteamericano y japonés.

Aunque la reunión tenía cometidos más amplios, *El País* y *La Vanguardia* resaltaban el debate del futuro audiovisual en el seno de la CE como eje principal interés en el Consejo: “Ministros de la CE debaten la política audiovisual” (*El País*, 31.3.89); “Los ministros de Cultura de la CE debaten en Santiago el futuro audiovisual europeo” (*La Vanguardia*, 31.3.89).

Aunque la reunión no tenía facultades resolutorias, en Santiago de Compostela se siguió la línea marcada en Rodas (diciembre del 88) con tres

¹¹ Existe una legislación específica en los Estados federados que obliga en el futuro a una importante revisión de las normas.

puntos específicos a tener en cuenta: libre circulación de programas, promoción de la norma europea de alta definición y producción de programas.

En esta ocasión, el ministro español de Cultura, Jorge Semprún manifestó que nuestro país tenía especial interés en la producción de programas audiovisuales europeos y anunció, desde este foro, el simposio que iba a celebrarse con representantes del sector público y privado para lanzar el proyecto Eureka audiovisual en materia de producción de programas.

7.3.4. La protesta de los profesionales del cine

Cobraron un total protagonismo por estos días las protestas de los organizadores profesionales del cine y la televisión francesa que pedían más protección para la cultura europea. Antes de comenzar la reunión de ministros europeos en Luxemburgo para debatir la normativa sobre la televisión europea, cuatro países plantearon sus reservas. Francia exigía una cuota mínima del 60% de producciones europeas en las emisiones de esta televisión transfronteriza. Los franceses habían criticado a su ministra Edith Cresson por haber aceptado un principio de acuerdo en el pasado Consejo celebrado en marzo.

A las protestas de los profesionales europeos se sumaron las del cine español. El Comité Unitario Interprofesional del cine español calificaba el futuro audiovisual de “gravísimo”. El comunicado del Comité coincidía con el emitido por la Federación Europea de Realizadores de lo Audiovisual (FERA): “Los actuales acuerdos sobre la Directiva “Televisión sin Fronteras” demuestran que la CE continúa tomando decisiones bajo la única presión del mejor postor, y que estos acuerdos facilitarán todavía más la desventaja del mercado europeo de lo audiovisual en relación con las industrias de programas americanos y japoneses que ya predominan de forma escandalosa” (*Diario 16*, 8.4.89).

En este Consejo de Ministros la Presidencia española se jugaba un importante reto porque anunció que la aprobación de estas directrices constituía una de sus bazas más importantes. El texto ultimado bajo la Presidencia de Pedro Solbes no incluía el apartado que se refería a los derechos de autor, a pesar de que esta materia estaba considerada como muy importante por algunas delegaciones. Aparece como decisivo el voto final de los franceses, que habían criticado a su ministra Edith Cresson por haber aceptado un principio de acuerdo en el pasado Consejo para una normativa que consideran “descafeinada”.

Concluido el Consejo de Ministros del Mercado Interior de la CE (13.4.89), y tras un tenso debate, quedaba aprobado el acuerdo de compromiso sobre la directiva de “Televisión sin Fronteras”. Aunque, la nueva Directiva tenía que ser votada en segunda lectura por el Parlamento Europeo. A partir de 1992, con los votos en contra de Alemania, Bélgica y Dinamarca, esta directiva con una cuota de producción europea del 51% entraría en vigor por una mayoría cualificada.

Así, el diario *Abc* destacaba que las últimas deliberaciones del Consejo acumularon dramatismo por la presencia en Luxemburgo de cineastas de casi toda Europa que criticaban la exigua cuota de pantalla.

En su crónica Félix Monteiro (*El País*, 14.4.89) considera que esta directiva resulta restringida porque afecta esencialmente a la protección de las producciones europeas de películas y seriales de televisión.

Por otra parte, *Diario 16* revelaba a sus lectores que en el artículo 4º de la directiva se afirmaba que los Estados miembros velarán, siempre que sea posible y con los medios adecuados, para que los organismos televisivos reserven para las obras europeas una proporción mayoritaria de su tiempo de difusión, con exclusión del tiempo dedicado a las informaciones deportivas, a juegos, a la

publicidad o a servicios de teletexto” (*Diario 16*, 14.4.89)¹². La ambigüedad de la recomendación y la ausencia de una cuota obligatoria, indicaba *Diario 16*, constituían la base de las protestas al contenido de esta directiva.

Más sensible a la respuesta de la Comisión, el diario económico *Expansión* subrayaba que la TV sin Fronteras es el asunto que acapara mayor atención en los medios periodísticos. Asimismo, formula que el empeño de la Presidencia española para lograr una posición común sobre el tema, no impidió la adopción de una directiva “descafeinada porque se ignoran aspectos esenciales de la propuesta inicial” (*Expansión*, 20.4.89).

7.3.5. Sin acuerdo en las cuotas de programación

El Parlamento Europeo necesitaba una mayoría de 260 votos para rechazar la propuesta presentada en caso de que la Comisión Europea no aceptara las enmiendas. En conferencia de prensa, Roberto Barzanti matizó que la enmienda al artículo 4 de la directiva pide que cada emisora de televisión reserve, en función de su situación, y de forma progresiva, una parte mayoritaria de su programación a las obras europeas, en lugar de fijar una cuota rígida del 60 por ciento.

Según la presidenta de la Comisión parlamentaria, Lady Elles, las enmiendas del Parlamento insistían en “el reparto de cuotas de programación” (*Efe*, 23.5.89). Si la Comisión rechazaba todas las enmiendas del Parlamento, esta Cámara podía, por mayoría absoluta, bloquear la posición común. Esta circunstancia podía significar el retraso del proyecto de directiva durante bastante tiempo. Si, por el contrario, la Comisión decidía adoptar las

¹² El programa audiovisual *Eureka* fue el primer Plan de Trabajo presentado por Francia en innovación tecnológica. Con una dotación de 250 millones de dólares, el programa *EU-95* fue acogido por las firmas Philips, Thomson, Bosch y Thorn Emi (*Cambio 16*, 30.1.89).

enmiendas del Parlamento, el Consejo de Mercado Interior -por mayoría cualificada- iría a la segunda lectura de la proposición reexaminada.

En lo que se refiere a este Consejo de Mercado Interior. Sólo seis países dieron su apoyo al contenido de la directiva, con lo que se rompió el equilibrio que había permitido adoptar una posición común en el pasado mes de abril.

Entonces se opusieron Alemania, Bélgica y Dinamarca, a los que ahora se sumaban Luxemburgo, Holanda, Francia y Grecia. Aunque eran muy variadas las razones que han llevado a los seis Estados miembros a impedir la aprobación de la citada directiva: éstas van desde los problemas electorales de Holanda hasta el cuestionamiento de las competencias de la CE en esta materia, como es el caso de Alemania o Dinamarca.

La prensa extranjera se ocupa extensamente de la determinación que el Parlamento iba a adoptar el día 24 de mayo ante el proyecto de TVsf, objeto de 16 enmiendas. *Le Monde* (26-5-89) titulaba al respecto: “Le Parlement européen amende le texte du conseil des ministres mais n'impose pas de quotas chiffrés”. También, el mismo día, *Le Monde* destaca en titulares: “Les Américains menacent les Européens de représailles”. En el antetítulo leemos: “La directive sur l'audiovisuel examinée au Parlement de Strasbourg”. Dos días antes, *Le Figaro* elegía el siguiente encabezamiento “Les amendements de Strasbourg” (24-5-89).

Por su parte, *Financial Times* advierte en esta ocasión del malestar de EE.UU por las limitaciones de la directiva TV sin Fronteras: “US warning on EC television proposals” (25.5.89). En Nueva York, *The Wall Street Journal* informaba que Carla Hills, representante comercial norteamericana, envió una carta a Lord Plumb, presidente del Parlamento Europeo, para expresar su objeción a esta medida: “La puesta en práctica de esta medida es injustificable y,

casi con toda seguridad, tendrá un efecto desastroso en los beneficios de la industria norteamericana que procede de Europa (...) Cualquiera que sean los beneficios que esta normativa puede proporcionar a Europa, sin duda serán superados por el extraordinario efecto negativo en nuestras relaciones comerciales" (*The Wall Street Journal*, 25.5.89). La estadounidense, Carla Hills advirtió, a su vez, que si los Doce aplicaban esta directiva "Washington iba a preparar una respuesta en el marco del super 301"¹³. Concluye la carta de Carla Hills: "La aplicación de la Directiva sería un mensaje para los americanos de que la Europa de 1992 será utilizada, de hecho, como una excusa para construir una fortaleza proteccionista europea" (*Expansión* 26.5.89).

Expansión, con información de la agencia AFP, confirma esta preocupación de EEUU por el freno impuesto a la producción americana, y aumentan las presiones al Parlamento de los responsables americanos. Los EEUU habían enviado una delegación comercial al más alto nivel a la Cámara de Estrasburgo para disuadir a los eurodiputados del contenido de la directiva "Televisión sin Fronteras".

Para el diario económico *Cinco Días* fue decisiva la presión diplomática de EE.UU "cuyas grandes productoras ven con enorme preocupación que se impongan unos mínimos de producción propia a las televisiones comunitarias".¹⁴

La interpretación sobre el bloqueo a la directiva de Joan Perea, en *La Gaceta*, era otra muy distinta: atribuía a las Elecciones Europeas que iban a celebrarse en Junio la no aprobación de la directiva sobre TV sin Fronteras. Los expertos señalaban que, de aprobarse, podía influir negativamente en las grandes

¹³ El super 301 era el artículo de la nueva Ley de Comercio americana que preveía la elaboración de una lista de países. La inclusión en tal lista supone que el país puede ser objeto de represalias comerciales si se resiste a abrir su mercado.

¹⁴ Las principales compañías norteamericanas (Paramount, Fox, Columbia, Universal...) vendieron dos terceras partes de su producción en 1988 a las cadenas europeas ("La Comunidad no aprobó el plan de TV sin fronteras", en *CINCO DIAS*, 15.6.89).

empresas multinacionales del sector asentadas en Holanda y Alemania Federal(15.6.89).

En *Abc*, José M. Carrascal aportaba su versión sobre el impacto que en EE.UU tuvo el bloqueo comunitario en el impulso de la directiva. Encuentra un mensaje de “indisimulada” satisfacción del fracaso comunitario en este país” (16.6.89). Y el diario *YA* formula otra hipótesis, basada en que EE.UU podría no comprar la tecnología europea para el desarrollo de la TV de Alta Definición (*Ya*, 16.6.89).

7.4 Conclusiones del capítulo

- En el Consejo de Telecomunicaciones (27 de abril) las cabeceras nacionales y los diarios económicos, sobre todo, informan sobre el desarrollo de los debates que giran en torno a la liberalización del sector audiovisual.
- La situación de los Programas comunitarios que afectan al sector de las Telecomunicaciones se detalla mejor en los diarios de información económica
- La ausencia de una normativa internacional de telecomunicaciones, retrasa la aparición de un mercado europeo sobre esta materia. La Comisión trabaja por la eliminación de los derechos exclusivos sobre servicios de telecomunicación.
- La Administración española realizó contactos con la Comisión para clarificar las condiciones de aprobación de la Ley de la Ordenación de las Telecomunicaciones. La prensa realiza un seguimiento de estas negociaciones, una vez que se conocieron las objeciones de la Comisión impuestas al proyecto español.
- Los ministros aprueban la norma europea de Televisión de Alta Definición en el Consejo de Ministros celebrado en Luxemburgo (27 de abril). La prensa dedica más atención a la TVAD que a las propuestas liberalizadoras de la Comisión en el sector de las telecomunicaciones.
- La presencia en los medios periodísticos de la política audiovisual forma parte del proceso unificador europeo. El proyecto cultural de la CE cuenta con dos grandes competidores: Japón y EE.UU. Las informaciones analizadas insisten en la rivalidad mercantil entre la CE y las dos potencias.

-
- La prensa aborda los objetivos de la acción comunitaria en el sector audiovisual. Estos objetivos se basan en el impulso a la industria europea para que, con antelación, desarrolle los servicios y la tecnología de la TVAD, promueva el sistema europeo televisivo, adopte la norma europea como mundial, etc.
 - El diario regional *La Vanguardia* analiza la importancia del consenso político en la industria que rodea a la TVAD. La CE respalda incondicionalmente a las grandes empresas electrónicas europeas para que estas aumenten sus inversiones en investigación.
 - Es muy amplia la cobertura informativa en torno a la directiva sobre la “TV sin Fronteras”. El secretario de Estado para las Comunidades Europeas fue el encargado de negociar la nueva directiva sobre cuotas de programación y límites a la publicidad. La prensa describe la gran expectación que produjo entre nuestros dirigentes un primer acuerdo de directiva sobre este modelo televisivo. Las mayores divergencias se suscitan en torno a los poderes de control de la Comisión en relación con las cuotas de programación.
 - Se establece un debate sobre la Televisión sin Fronteras que gira en torno a la supresión de las restricciones jurídicas y técnicas (*Diario 16*) y a la liberalización de los servicios de radiodifusión de los Estados miembros comunitarios.
 - La prensa alemana (*Frankfurter Allgemeine Zeitung*) denuncia a los políticos por su afán mediador a la hora de poner limitaciones en la emisión de publicidad. Resulta más lógico delegar en las empresas publicitarias la determinación de la cuota.

- Es unánime la confirmación en todos los diarios nacionales y extranjeros del malestar que produce en los EEUU la restricción que la Comisión impone a la programación americana. La prensa denuncia las presiones en el Parlamento europeo de los americanos para frenar las limitaciones impuestas a su mercado.
- Los problemas comerciales aplazaron el “sí” a la directiva TV sin Fronteras. Todos los diarios hacen sus observaciones al respecto y atribuyen que la paralización de esta medida se ha producido por causas exclusivamente comerciales. Para algunos diarios, el fracaso español se debe a la influencia decisiva de los Estados Unidos (*Abc* y *Ya*); para otros, sin embargo, fueron las grandes multinacionales alemanas y holandesas las que presionaron sobre el aplazamiento de la directiva (*La Vanguardia*).

CAPÍTULO VIII:

Política Agrícola y Pesquera

8.1. Política agrícola de la CE

8.1.1 Importancia de la política agraria comunitaria

La aprobación del nuevo paquete de precios para la Campaña agrícola de 1989 vino a ser la prioridad más importante de la Presidencia española. Por lo general, la Comunidad Europea trató de hacer abstracción de los elementos puramente coyunturales para continuar con una política restrictiva iniciada ya hace algunos años.

Dentro de la política agraria comunitaria resultaba inaceptable la existencia de desequilibrios sociales y regionales. El incremento de la competitividad de las empresas agrarias determinaba la incorporación de medidas de carácter estructural (ayudas directas destinadas, por ejemplo, a los agricultores inscritos en la dinámica general de la reforma de la PAC¹⁵)

Durante esta Presidencia, los ministros de Agricultura se reunieron en siete ocasiones: los días 23 y 24 de enero, 13 y 14 de febrero, 6 y 7 y 20 y 21 de marzo,

¹⁵ Política Agraria Común

17, 18, 19, 20 y 21 de abril, 29 y 30 de mayo y por último, 19 y 20 de junio. En Salamanca tuvo lugar una reunión informal los días 15 y 16 de mayo.

8.1.2. Primer Consejo de Agricultura. Austeridad en los precios agrarios

El 23 de enero el ministro de Agricultura Carlos Romero presidía el primer Consejo de Agricultura en el que se presentaba la propuesta de precios para 1989, aprobada por la Comisión una semana antes.

Según la propuesta (18 de enero) que anunció la Comisión Europea para el conjunto de la Comunidad los precios iban a aumentar un 0,7 % en monedas nacionales. De mantenerse esta propuesta, el vino y el aceite serían los productos que mayor subida registrarían durante la próxima campaña. Entre los indicadores de la Comisión vemos que el precio de intervención de la cebada subiría un 1,75%; el del centeno un 1,42%, y el del arroz un 1,23%.

En cuanto a las oleaginosas, el aumento de la colza sería del 0,49% y el 1,35% para la soja. Concretamente el precio del aceite de oliva subiría el 1,85%, aunque con un aumento de la ayuda a la producción. También, el precio del vino subiría (un 2,46%). Sin embargo, bajarían los precios de la carne vacuna, lácteos, azúcar y mantequilla ²

La propuesta que el Comisario de Agricultura Ray Macsharry presentó tras la reunión del Colegio de Comisarios, y que él mismo calificó de “equilibrada”, ya que continuaba la línea de austeridad presupuestaria de su antecesor en el cargo, Frans Andriessen, suponía una congelación de precios para la mayoría de los productos.

² *El Periódico*, 20.1.89.

Las reacciones no se hicieron esperar, y el ministro de Agricultura alemán, Ignaz Kiechlf, anunció una feroz resistencia a las propuestas de congelación de los precios de garantía comunitarios. El representante alemán adelantó entonces que se produciría una discusión "muy seria" en el seno del próximo Consejo¹⁷.

Al mismo tiempo, el debut del ministro español de Agricultura, Carlos Romero, -al frente del Consejo de Ministros en Bruselas- tenía como fin liquidar el paquete de cuestiones pendientes para la reforma de la PAC. En diciembre no pudo llegarse a un acuerdo por las posiciones tan alejadas de los diferentes Estados miembros.

Se daba, pues, prioridad absoluta desde el Ministerio de Agricultura al desarrollo de la normativa de estructuras agrarias. Esta iba a ser la única vía para que los agricultores españoles pudieran acceder a las subvenciones oficiales.

El Reglamento comunitario 797 (1985) para la mejora de las estructuras agrarias sería desarrollado por España a través del Real Decreto 808, de 19 de junio de 1987¹⁸.

El 23 de enero, el ministro español Carlos Romero dirigía en Bruselas su primer Consejo de Agricultura. En esta reunión debatiría la propuesta de precios aprobada por la Comisión. El comisario de Agricultura, Ray MacSarry presentó una lista de precios que continuaba la línea de austeridad iniciada por su antecesor en el cargo, Frans Andriessen. La propuesta suponía la congelación de¹⁹ precios para la mayoría de los productos. Los plazos para la entrada en vigor de los nuevos precios se barajaban a partir del 1 de julio, y la medida afectaba a 12 millones de agricultores comunitarios²⁰.

¹⁷ *Efe*, 18.1.89.

¹⁸ El Decreto 808 de 19 de junio de 1987 se completó con la Orden ministerial aparecida en el B.O.E. del 5 de junio de 1988.

¹⁹ *El Periódico*, 20.1.89.

²⁰ *El Periódico*, 20.1.89.

Los diarios españoles presentaban a Carlos Romero como un personaje “crecido” tras el éxito que obtuvo en diciembre tras su “inesperada” amenaza de plante del Consejo celebrado el 14 de ese mes. “En aquella ocasión, libró a dos tercios del territorio español del veto comunitario a la exportación de carne porcina”.⁷

En aquel momento, España pretendía liquidar las cuestiones pendientes del sector que no fueron resueltas en los 6 meses de Presidencia griega, aunque las posiciones entre los miembros estaban muy alejadas como para llegar a un compromiso para todo el paquete⁸

El 24 de enero este Consejo alcanzó en Bruselas un acuerdo por el que completaba la reforma agrícola iniciada el pasado año. El éxito se debió a las propuestas de compromiso elaboradas por la Comisión y que permitieron la convergencia de posturas tan extremas como las de Alemania y Francia. También, los ministros acordaron una serie de medidas para reducir la producción de carne de vacuno y reestructurar las cuotas lácteas. Sin olvidar, por último, que los ministros del sector agrícola dieron luz verde a las ayudas a la renta para los agricultores más desfavorecidos⁹. Las ayudas a la renta para los trabajadores del campo no podrían, sin embargo, sobrepasar los 2.500 ecus por hectárea en ningún Estado miembro¹⁰.

Para el diario catalán *La Vanguardia*, la buena noticia procedente de Bruselas radicaba en que los productores de frutos secos se iban a beneficiar de unas subvenciones hasta ahora inexistentes en la zona de mayor producción de frutos secos, Cataluña. “Por primera vez, se acuerdan ayudas para los frutos

⁷ *Expansión*, 23.1.89.

⁸ *El País*, 23.1.89.

⁹ *Cinco Días*, 25.1.89.

¹⁰ *Ya*, 25.1.89.

secos”, titula el diario catalán (25.1.89). Estas ayudas se estimaban entre los 3000 y 8000 millones de pesetas.

Si analizamos la prensa (25.1.89) observamos que existe un optimismo generalizado por los resultados del primer Consejo. Así, leemos el contenido de algunos titulares: “Acuerdo sobre la reforma de la política agraria común” (*Abc*); *La Vanguardia* pone especial énfasis en las ayudas para frutos secos: “Importante avance de los Doce en la reforma de la Europa verde”. “Consenso sobre ayudas a la renta y cuotas lecheras” (*YA*). Entre los diarios económicos destacan los siguientes encabezados que subrayan la normativa común que se aplicaría en el comercio agroalimentario: “Acuerdo para la reforma agrícola” (*Cinco Días*); “Aprobada la reforma de la Política Agraria” (*Expansión*).

En la prensa extranjera los resultados obtenidos en la reunión son evidentes. La reforma de los precios de garantía del vacuno coincidía con acuerdos anteriores en otros sectores de la producción agrícola. Los diarios alemanes *Die Welt* y *Stuttgarter Zeitung* calificaron positivamente la enérgica actuación de Carlos Romero, sobre todo en el sector vacuno²⁵.

La Política Agraria Comunitaria era la más importante de la CE, al absorber dos tercios de los más de 6 billones de pesetas de su Presupuesto. La mayoría de estos recursos estaban dirigidos a subvenciones de determinados productos (leche, carne bovina, azúcar, cereales) que favorecían a los agricultores de los países del norte de la Comunidad. También se dirigían a productores del aceite de oliva o vino. Sin embargo, nuestras producciones no obtuvieron tantos beneficios debido al periodo transitorio vigente.

²⁵ El *Stuttgarter Zeitung* analiza las limitaciones del sistema de garantía para la carne de vaca, aunque con ciertos umbrales de seguridad (25.1.89).

El 31 de enero finalizaba el plazo para los productores de ovino que solicitaron a la CE un incremento en la cuantía de las primas de ovino y caprino, por la importante renta perdida durante la crisis de 1988 (*Cinco Días*, 28.1.89).

Los presupuestos dedicados a la política agraria obligaban a reclamar la continuación en la reorientación de los esquemas básicos tradicionales europeos y de las condiciones con las que se acordó la integración comunitaria¹².

8.1.3 Debate sobre los precios agrarios en febrero

Antes de la reunión de ministros de Agricultura, los diarios nacionales informaron del debate que se avecinaba sobre los precios agrícolas. La Comisión proponía una congelación de los precios -con una reducción del 5% para el azúcar, un 3,5% para algunos vinos de mesa, un 2% para la mantequilla y un 15% para las naranjas-. Los cereales también debían sufrir una rebaja del 3% en su precio de intervención, según establecía la Comisión Europea (*Abc*, 12.2.89).

Por su parte, España y Francia, en sus negociaciones, presionaban con el fin de revisar el MCI (Mecanismo Complementario de Intercambios) de frutas y hortalizas. En total, sólo 9 frutas y hortalizas españolas quedarían sometidas a la aplicación de ese control, si prosperaba el acuerdo al que habían llegado las delegaciones de España y Francia.

La congelación de precios no fue aceptada entre los agricultores, los cuales se movilizaron en protesta por esta política agraria.

Cuando se celebró el Consejo de Ministros de Agricultura, en febrero, después de dos días de debate, sólo se acordó que los precios agrarios se iban a aprobar el próximo mes de abril. Aunque sin detalles, la primera ronda de

¹² Carlos Gasóliba escribe un artículo en el diario *La Vanguardia* ("Nuevos acuerdos en la política agraria") que estudia la nueva orientación presupuestaria de la CE.

intervenciones acabó con la aceptación general de la propuesta de congelación de precios presentada por el comisario europeo Ryan MacSarry. Alemania consideró inaceptable dicho paquete, por el descenso que implicaba en las rentas de sus agricultores.

Los titulares destacaban la falta de acuerdo en el calendario de los precios agrícolas: “Ningún avance en el debate de los precios agrícolas” (*Expansión*, 14.2.89); “Sin acuerdo en la CE sobre precios agrícolas” (*Diario 16*, 15.2.89). Los dos diarios informaron que las delegaciones no contaron con tiempo para estudiar la propuesta de la Comisión en el Comité Especial de Agricultura²⁷ y que las mayores discrepancias se centraron en el precio del azúcar y la reducción de las ayudas para los productores cerealistas. Puede afirmarse que toda la prensa coincide en calificar a la reunión de “primer tanteo” sobre precios.

El interés de los ministros de Agricultura también se centró en la inmediata puesta en práctica de las medidas propuestas por la Comisión para combatir el fraude agrícola. El representante inglés MacGregor consideraba inadmisibles las cifras de fraude desveladas por el Tribunal de Cuentas. Cada año se malversaban entre 4000 y 6000 millones de ecus del Presupuesto comunitario.

La reunión sirvió además para que los titulares de Agricultura británico y francés se reunieran en un intento de solucionar el conflicto creado por las declaraciones de un representante del Ministerio de Sanidad inglés en las que denunciaba el riesgo para la salud que suponía la consumición de los quesos franceses “Brie” y “Camembert”.

²⁶ Carlos Gasóliba escribe un artículo en el diario *La Vanguardia* (“Nuevos acuerdos en la política agraria”) que estudia la nueva orientación presupuestaria de la CE.

²⁷ El CSA es el órgano encargado de analizar el contenido técnico de las ofertas.

Sin embargo, ante su homólogo francés declaró que el riesgo era “mínimo” y que entraba dentro de la normalidad informar a la opinión pública.

A pesar de ello, el Gobierno galo no ocultó su malestar por no haberse respetado el acuerdo de 1987, en el que se preveía que cualquier país comunitario que detectara la presencia de listeria en el queso, debía informar de inmediato al país exportador afectado antes de realizar cualquier acción o declaración oficial (*Cinco Días*, 14, 2, 89).

8.1.4 La situación agraria del campo español y las ayudas comunitarias

Aun cuando los medios informativos seleccionados para el presente análisis cubren un amplio espectro de la realidad agraria, se observa cierta distorsión informativa a la hora de reflejar la situación del campo español.

El balance del año agrario presentado por Carlos Romero subrayaba que la renta de los agricultores en 1988 creció un 10,7% respecto al año anterior. Estos resultados positivos se atribuyeron al importante saneamiento de la economía, a la apertura de sectores como los fertilizantes y al abaratamiento de ciertos componentes como la alimentación ganadera.

Algunos comentaristas como Celedonio Sanz, critican esta declaración del ministro porque suponía un “cubrirse de razón, darse mayor autobombo, justo en el momento en que menos lo necesitaba”, afirma este autor.¹⁴

Los datos indicaban que durante 1988, según informa el diario *Abc*, la Comunidad había llegado a aprobar la concesión de ayudas para 266 proyectos de

¹⁴ (“Más allá de la boina”, *Cinco Días*, 13.2.89)

Los datos indicaban que durante 1988, según informa el diario *Abc*, la Comunidad había llegado a aprobar la concesión de ayudas para 266 proyectos de inversión en industrias agroalimentarias españolas, con subvenciones próximas a los 7.100 millones de pesetas (*Abc*, 26.2.89).

Fuentes ministeriales insistían sobre los beneficios de la política agrícola, como la concesión de los contratos homologados por el Ministerio de Agricultura. Estos contratos suscritos entre agricultores y empresas de transformación y comercialización se triplicaron en 1988, respecto al año anterior, hasta alcanzar una cifra cercana a los 80.000 (*Abc, Diario de Economía*, 26.2.89).

Tras publicarse las últimas estadísticas, la prensa económica se hizo eco de las ayudas oficiales que las asociaciones agrarias habían recibido durante el ejercicio 1988. En torno a esas ayudas publicaba *Cinco Días*: "Las asociaciones agrarias recibieron 659 millones". Jesús López Sánchez Cantalejo, director general del Instituto de Relaciones Agrarias, aclaraba que estas cantidades se repartían a través del Ministerio de Agricultura, del INEM y de la CE.²⁹ (*Cinco Días*, 17.3.89).

8.1.5 El sector hortofrutícola español

No se esperaban resoluciones decisivas de la reunión que los ministros iban a mantener el 20 de marzo. La Presidencia española no logró una mínima aproximación entre las delegaciones, ni consiguió convencer a la Comisión de la dureza de su documento inicial.

²⁹ De los 659 millones, "155 millones se concedieron a sindicatos obreros, cooperativas y asociaciones industriales. Las organizaciones sectoriales recibieron 234,5 millones y las de ámbito regional, 1,9 millones. El resto fue para las organizaciones profesionales agrarias", según información del diario económico *Cinco Días* (17.3.89).

europeo. Una propuesta que, por otra parte, y como señala el diario *Cinco Días*, pretendía llenar el vacío legal existente sobre protección forestal dentro de la Comunidad (20.3.89).

Al día siguiente (21 de marzo) resaltan un logro para nuestra política agraria: Las subvenciones de la CEE al sector de frutos secos. Los titulares publicados incluían, además, la aprobación de la lista definitiva de los productos hortofrutícolas sometidos al MCI.

Los diarios catalanes dieron prioridad a la aprobación del reglamento de apoyo a los frutos secos. Así, *La Vanguardia* titulaba: “La CE aprueba el reglamento de ayudas para los frutos secos”; por su parte, *El Periódico* también reseña este logro: “Aprobadas las ayudas de la CEE al sector de frutos secos”. Era la primera vez que el citado sector - de especial importancia para Cataluña - se beneficiaba del apoyo de la política agrícola común.

Tras el acuerdo del Comité de Gestión de Frutas y Hortalizas -por el que se aligeran las trabas para la exportación de frutas y hortalizas- la nueva forma de los MCI habría de ser ratificada antes del final del año por el Consejo de Ministros de Agricultura.

El acuerdo reduce los MCI a un “seguimiento estadístico de los intercambios”. Este nuevo mecanismo sustituía al previsto inicialmente, que incluía la necesidad de solicitar certificados y de depositar fianzas previas para poder exportar (*La Vanguardia*, 22.3.89).

En relación con esta política intervencionista de la CE y sobre el control que los MCI iban a ejercer sobre los productos españoles, el diario *El País* anunciaba: “La CE controlará las exportaciones de 10 productos hortofrutícolas”. Dichos productos serían las lechugas, escarolas, zanahorias, albaricoques, melocotones,

En relación con esta política intervencionista de la CE y sobre el control que los MCI iban a ejercer sobre los productos españoles, el diario *El País* anunciaba: “La CE controlará las exportaciones de 10 productos hortofrutícolas”. Dichos productos serían las lechugas, escarolas, zanahorias, albaricoques, melocotones, tomates, melones, alcachofas, fresas y uvas de mesa. La misma publicación señalaba: “De los diez, nueve han entrado en esta lista a instancias de Francia y sólo uno, las lechugas, ante las presiones del Reino Unido”. Se había conseguido, así, soslayar las peticiones de Italia y Grecia que querían incluir los cítricos en estos mecanismos de control (*El País*, 21.3.89).

El acuerdo con Bruselas no era el peor compromiso, aunque este sector hortofrutícola se lamentaba de la limitación impuesta a nuestro comercio por las instituciones comunitarias.

Las dificultades de este sector hortofrutícola tras nuestro ingreso en la Comunidad eran manifiestas. Los responsables de la FEPEX (Federación de Asociaciones de Exportadores de Frutas y Hortalizas Frescas) daban la voz de alarma porque las hortalizas españolas, que suponían en 1985, el 17% del conjunto de las importaciones comunitarias, en 1988 alcanzan solamente el 15%. La venta de frutas se había estabilizado, salvo los cítricos (*El País*, 26.2.89).

En abril cuando España solicitó anticipar en 3 años la plena incorporación en la CE del sector hortofrutícola en los grupos de trabajo y en las reuniones bilaterales celebradas durante los últimos meses en Bruselas.

Francia e Italia fueron los países que con mayores reticencias respondieron a las negociaciones de Bruselas. De hecho, este adelanto suponía importantes ventajas para los productores españoles, que verían desaparecer los mecanismos de control de las exportaciones y los precios de oferta.

aunque calificó de “difícil” el dossier de precios agrícolas. Sí coindían, sin embargo, en que al comienzo de la primavera podría llegarse a un acuerdo. (*Cinco Días* 22.2.89).

8.1.6 El debate sobre la reconversión agraria .

Alemanes y británicos de nuevo iban a protagonizar las negociaciones sobre los precios agrarios. Unos, intentando frenar el descenso que registraban las rentas de sus agricultores, y los británicos limitando las ayudas para contener los gastos y tratando de fomentar la lucha contra el fraude.

Tras el primer día de reunión, *El País* (7.3.89) titula: “Los ministros comunitarios debaten los principios de reconversión agraria”. Dicha reconversión estaba dirigida a sustituir producciones excedentarias -como cereales y leche-, por otras con mercado suficiente, como las oleoginosas y los frutos secos. En principio, las ayudas a los agricultores que aceptaran reconvertir sus cultivos oscilarían entre 400 y 600 ECU. Por otra parte, y en lo que se refería a las instalaciones ganaderas se pondría en marcha una subvención equivalente.

Tim Dicksom, del *Financial Times* (7 de marzo), achacaba al ministro español la dificultad del acuerdo. Los diplomáticos comunitarios descartaban un próximo acuerdo sobre el paquete de precios agrícolas porque la labor del comisario de agricultura MacSarry no estaba siendo facilitada por “la aparente falta de experiencia del Sr. Carlos Romero”.

El periodista británico no dejó de reconocer los méritos de Romero en las negociaciones de enero (por las reformas sobre la carne y el paquete de ayudas), pero también opinaba que “sus tácticas en la negociación de precios” se habían “entorpecido, por no decir frustrado”.

pero también opinaba que “sus tácticas en la negociación de precios” se habían “entorpecido, por no decir frustrado”.

La Comisión todavía mantuvo la totalidad de sus propuestas sobre los precios agrícolas de la campaña 1989-90. Mientras tanto, la rebaja de los agrios provocó la convocatoria de una manifestación de productores de cítricos valencianos, que regalaron más de 20.000 kilos de mandarinas en las puertas del Consejo de Ministros. (*Cinco Días*, 8.3.89).

Por otra parte, los ministros de Agricultura fracasaron en su intento de aprobar las medidas para incentivar la reconversión de las producciones excedentarias. Los Países Bajos y Bélgica impidieron cualquier acuerdo sobre la lista de productos incentivados. En los últimos años estos países habían realizado costosas inversiones para desarrollar la industria de flores y plantas, que podía verse amenazada por la competencia de otros países.

Durante la segunda jornada del Consejo, los ministros de Agricultura también examinaron las acciones que iban a adoptarse en el sector forestal. Ante las delegaciones comunitarias, Carlos Romero presentó una propuesta de reflexión sobre política forestal comunitaria en su vertiente productiva que hacía referencia a la conservación del medio ambiente y del espacio rural.

8.1.7 Consejo de Agricultura (20 de marzo): Sin acuerdo sobre los precios agrícolas

Una vez más, según informaron los diarios, no hubo acuerdo en los precios agrarios en el Consejo de Agricultura celebrado el 20 de marzo.

El País formula que son escasos los cambios que, en la oferta de precios agrarios, planteaba la Comisión. Hay que añadir que Carlos Romero manifestó

Consideraba que hasta ese momento sólo se podía hablar de “una primera propuesta de la Comisión rechazada por la mayoría de los Estados miembros”. Se esperaba la elaboración de un futuro documento intermedio de aproximación (15.3.89).

Como explicación de los resultados obtenidos en dicho encuentro, el diario catalán *La Vanguardia* habla de la “velada amenaza” de 12 millones de campesinos, que podrían castigar con su voto en las elecciones de junio a los gobiernos que implantaran una reducción de sus rentas; un aviso que había retraído a Romero y sus colegas.

En el Consejo se observa entonces que subsisten aún importantes diferencias y que, en cualquier caso, conviene esperar a los resultados del dictamen del Parlamento Europeo que será anunciado en su sesión de abril” (*La Vanguardia*, 23.3.89).

La imposibilidad de lograr la aceptación por todos los Estados miembros de la CE para que asumieran la propuesta sobre precios agrícolas determinó que el Gobierno español tomara la iniciativa de consultar con sus socios las bases para la fórmula de una propuesta de compromiso asumible por los Doce.

8.1.8 Indemnizaciones para las zonas desfavorecidas.

Más de 200.000 agricultores iban a recibir ayudas compensatorias por trabajar en áreas de montaña o zonas desfavorecidas con problemas de despoblamiento¹⁶. Esta actuación se enmarcaba en el programa social del Gobierno en el sector agrario. Hubo críticas como la que efectuó Ramón Tamames, del Centro Democrático Social. Tamames afirmaba que se trataba de “una respuesta de parcheo electoralista que camufla la necesidad de establecer una seria política agraria de estructuras” (*El País*, 2.4.89).

Al margen de estas negociaciones de la política comunitaria española, la prensa se preocupó por el desarrollo de los acontecimientos que impedían acordar los precios agrícolas. Este era un conflicto que venía enmarcado en un periodo de larga disputa agrícola. El ministro de agricultura de nuestro país era consciente de que las Elecciones al Parlamento europeo obligaban a acelerar las negociaciones y que, por tanto, la fecha del 17 de abril en que se reuniría el Consejo de Ministros de Agricultura era clave para conseguir el consenso.

Algunos expertos opinaban que a la incompetencia demostrada por el ministro español, se añadía también la del nuevo comisario de Agricultura, MacSarry. El siguiente comentario extraído de *Abc* así lo manifestaba: “no parecía haber aterrizado con buen pie en Bruselas” (*Abc*, 9.4.89).

En Luxemburgo, España presentó una primera fórmula de compromiso para los precios agrarios que suavizaba, en un principio la propuesta de la Comisión con fuertes rebajas para determinados productos.

En el primer día de reunión se hablaba de un menor recorte del periodo de intervención y del mantenimiento de las primas mensuales para los cereales y el arroz.

La mayor incertidumbre estaba en la acogida que el órgano Ejecutivo comunitario daría a tal iniciativa. MacSarry no daba su brazo a torcer ante las mejoras introducidas por Romero. Los ministros, por otra parte, se negaron a pedir más sacrificios después de las severas reformas sufridas por los trabajadores del campo desde hacía 2 años. La Comisión, no obstante, tenía la última palabra.

³⁰ Ya; *El País* (2.4.89)

El mundo agrario entraba en una fase de ajuste con la reducción de las subvenciones oficiales. Era imprescindible un recorte de los gastos para combatir el desequilibrio presupuestario.

8.1.9 Luz verde al acuerdo sobre precios agrarios 1989-90

Puede afirmarse que la satisfacción es la nota predominante en las capitales europeas tras la firma de un acuerdo sobre los precios agrarios, en la madrugada del sábado, después de 5 días y 2 noches de negociación. Lo primero que sorprendió a los observadores fue la inusitada celeridad con que concluyó la negociación. En los últimos años sólo fue posible llegar a un acuerdo a finales de mayo o primeros de junio.

De la negociación, el ministro alemán de Agricultura, Ignaz Kiechle, declaró que se había “negociado bien”. Resaltó, especialmente, el acuerdo mediante el que se suprimía la tasa de corresponsabilidad para la leche en las regiones desfavorecidas. Por su parte, el ministro italiano declaraba también que el aumento de los precios (2,5%) beneficiaba a los agricultores de su país.

Abc destaca que el incremento de los precios agrarios en España iba a ser muy bajo (24.4.89), y el editorial del diario *La Economía* (29.4.89) subraya que el acuerdo puede calificarse de “aceptable éxito”, ya que no era corriente - interpreta el editorial- “que en materia tan delicada como esta, se produzca una convergencia tan rápida en el tiempo”.

Jovellanos escribía sobre el ministro Carlos Romero en *Abc* (3.4.89): “Cuando al iniciar su mandato anunció que el paquete de precios y medidas complementarias para la campaña 1989-90 estaría listo en el mes de abril, pocos fueron los que lo creyeron”.

El Ministerio de Agricultura mantuvo “secuestrados” los resultados de este acuerdo para los agricultores y ganaderos españoles. En medios agrarios este gesto se interpretaba como “una operación para ganar tiempo y maquillar convenientemente estos logros y fracasos de la negociación” (*Abc*, 25.4.89).

Para la agrupación CNAG-Jóvenes Agricultores el acuerdo resultaba negativo. Los representantes de los trabajadores se lamentaban de que todo el éxito se concentrara en concluir las negociaciones de la campaña de precios dos meses antes que en los dos últimos años.

Los efectos sobre las rentas del sector agrario, según estas fuentes, producirían unas pérdidas a los productores españoles de 500.000 millones de pesetas. Para los productores el acuerdo sólo constituye un “éxito burocrático”, porque va a costar a los agricultores y ganaderos un descenso cercano al 2% en sus rentas

Las organizaciones criticaron, sobre todo, la desinformación en el proceso de negociación. En un artículo publicado en el diario económico *Cinco Días* leemos este comentario: “Carlos Romero haría muy mal en sacar a relucir de nuevo el falso optimismo de ocasiones anteriores” (*Cinco Días*, 25.4.89).

La Confederación creía que el Consejo de Ministros de Agricultura había caído en la trampa de la estrategia montada por el comisario del ramo, MacSharry (*YA*, 25.4.89).

Otros comentarios sobre estos resultados confirman el descontento general de los agricultores españoles. Por ejemplo, *Expansión* titula: “Los precios aprobados no satisfacen a los productores”. Para la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, el mal resultado conseguido es fruto de una negociación con prisas.

Un portavoz se “asombraba” de que nuestro ministro aceptara las propuestas de la Comisión referentes a cítricos. La Coordinadora afirmaba, así, que: “el precio del récord en el plazo de aprobación va a caer, una vez más, sobre la espalda de los agricultores” (25.4.89).

El presidente del Comité de Organizaciones Profesionales (COPA), Joseph Yverneau manifestaba la insatisfacción por las decisiones de los ministros comunitarios ya que la baja en los precios pagados a los agricultores iba a tener graves repercusiones para sus rentas.

Para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la Confederación de Organizaciones de la Explotación Familiar (CODEF) lo más importante era la ausencia de una política social agraria. Un portavoz de CODEF informaba a *La Gaceta*: “los precios que se consensuan en Bruselas no reflejan la realidad del mercado y no afectan de igual manera a los grandes que a los pequeños productores” (25.4.89).

Por lo demás, todos los grupos parlamentarios, a excepción del socialista, calificaron negativamente el acuerdo sobre precios agrarios. IU llegó a afirmar que se trataba del primer fracaso de la Presidencia española en la CE.

Las declaraciones del ministro Carlos Romero no coincidían con el descontento reinante. En el Congreso el ministro insiste en que los resultados son “razonablemente positivos” y los trabajadores podrán planificar sus campañas con el marco de referencia de estos precios agrarios y sus medidas conexas.

Asimismo, otro de los logros conseguidos por los ministros de Agricultura fue la aprobación de un Reglamento que iba a favorecer las inversiones en las pequeñas explotaciones de ganado porcino. Para que las pequeñas explotaciones

de Grecia, España y Portugal accedieran a la financiación comunitaria era necesaria una base territorial de una hectárea para unas cien cabezas de ganado para engorde, sometidas a programas de lucha contra la peste porcina³¹.

El reglamento iba a tener especial incidencia en aquella parte del territorio español aislado sanitariamente a causa de la peste porcina africana.³²

8.1.10 Negociaciones de la Ronda de Uruguay

Europa tenía un papel importante en el marco de las relaciones comerciales y económicas del mundo. En política comercial exterior la solución no era técnica, sino más bien política.³³ El problema más significativo se centró en las subvenciones que se dan en la Comunidad para exportar excedentes de producción agraria. Todo dependía de la capacidad de la CE para reformar su política agraria. Un tema decisivo, pero extremadamente complejo y difícil.

Sin embargo, como reconocía el empresario español Carlos Ferrer Salat³⁴ en EEUU “se subvenciona también muchísimo la agricultura”. Había que solucionar con urgencia este decisivo tema.

La Comunidad Europea negoció con los americanos el modo de exportar e importar los productos agrícolas. Con motivo de las entrevistas -10 y 11 de marzo en Bruselas- entre Frans Andriessen, Ray MacSharry, la representante del presidente Bush, Clara Hills y el Secretario de Agricultura Clayton Yeutter, se dio un paso hacia adelante sobre un asunto hasta entonces tabú. Entre los americanos se cuestionaban las ayudas comunitarias. Los tres puntos que MacSharry planteó ante un posible acuerdo se resumen a continuación:

³¹ *Cinco Días*, 20.4.89

³² El censo de ganado porcino en la CE cayó un 2,4% en 1988 (*Cinco Días*, 18.4.89)

³³ Carlos Ferrer Salat defendió esta tesis durante el XXIX Congreso de la Asociación de Periodistas Europeos, celebrada en Madrid bajo el lema “Europa, una sola voz” (1991).

³⁴ 29 CONGRESO: Europa, una sola voz. Asociación de Periodistas Europeos. Madrid-Sevilla, p. 79.

1) Los asociados del GATT tendrán que tener en cuenta los esfuerzos realizados por la CEE desde el principio de la reforma de la política agrícola; 2) Deseo de la CE de reequilibrar su protección exterior, y 3) La CE no quería renunciar a la concesión “de restituciones a la exportación” (una subvención que compense el desfase entre el precio comunitario y el precio mundial) y de las “deducciones a la importación, con un impuesto que equilibre las diferencias entre el precio comunitario y el precio mundial (*Le Monde* 15.3.89).

La CE y los Estados Unidos afrontaron la reunión del GATT que se iniciaba en Ginebra el 5 de abril, con una firme disposición a lograr un acuerdo para las subvenciones agrícolas. Al parecer existía un consenso sobre los objetivos a largo plazo de las políticas agrícolas y sobre la eventual congelación de las ayudas.

Así, antes de celebrarse la reunión los analistas opinaban que la primera batalla se centraba en detener la escalada de subsidios para negociar después un programa de instrumentos de control a largo plazo. La política agrícola condicionaba los demás acuerdos. Se supeditaba cualquier avance en la reunión de Ginebra a “un compromiso sobre las subvenciones al campo” (*Cinco Días*, 5.4.89).

Las sesiones de trabajo comenzaron con un objetivo básico: desbloquear los cuatro apartados pendientes de aprobación desde la cumbre celebrada en Canadá el mes de diciembre. Los cuatro bloques a tratar eran: agricultura, textiles y vestido, salvaguardia y derechos de propiedad intelectual.

Desde la óptica de las partes en litigio (EEUU, CE y Grupo Cairns) se calificaba el capítulo agrícola de “duro y difícil”²¹. La CE intentaría, en

²¹ El Grupo Cairns lo componían un total de trece países exportadores librecambistas.

definitiva, salvaguardar mejor los intereses de sus miembros. Estados Unidos, por su parte, consideraba que tenía que endurecer su postura porque ya había cedido “suficiente”. Y finalmente, los miembros del llamado Grupo Cairns acusaban al resto de “haber sido ignorado”.

Con anterioridad, en su viaje a Madrid, el Secretario de Agricultura norteamericano, Clayton Yeutter, defendió en la Cámara de Comercio de Madrid, el recorte progresivo de las subvenciones agrícolas. Él mismo manifestó en la capital española que no les gustaban los subsidios. Para Yeutter, el mayor esfuerzo en la reducción de los excedentes cerealistas lo había realizado su país a través de diferentes programas.

El secretario de Agricultura americano sabía que en la CE, con la excepción de los tres últimos años, se venía observando una escalada en el volumen de producción (*El País*, 7.4.89). Pese a todo, Yeutter llegó a admitir que EEUU también ayudaba a sus agricultores, (*Expansión*, 7.4.89).

Para el entonces director general de Agricultura de la CE, Guy Legras, la eliminación total de las subvenciones agrícolas no era realista y era inaceptable para la CE (*Abc*, 8.4.89).

Los diarios informan del resultado de las conversaciones; por ejemplo, *Diario 16* nos recuerda el éxito del acuerdo al lograr un “texto de compromiso” sobre las modalidades de apoyo a la agricultura, equilibrio en las ayudas y en las limitaciones de producción (*Diario 16*, 8.4.89).

Abc resalta, de igual modo, este logro del GATT: “La CEE, eufórica tras haber impuesto sus tesis agrícolas en la negociación del GATT”. Frente al intento de Washington de concentrar la eliminación de subsidios en las restituciones a la exportación, Bruselas consiguió que el desmantelamiento afectara a todo tipo de

subsidios agrarios: mantenimiento de precios, ayudas a la comercialización, etc.(11.4.89).

El encargado de las relaciones exteriores, Frans Andriesen, aseguraba que el acuerdo firmado constituía una sólida base de discusión para encarar el futuro.

Sin duda, la Presidencia española coincidió con algunas de las fases más notables de la Ronda de Uruguay. En opinión de Diez Mier²² (cuando ocupaba el puesto de Subdirector general adjunto de Política Comercial Multilateral) a la vista de los resultados conseguidos y de las opiniones recogidas, la experiencia de la Presidencia española en el ámbito del GATT ha sido sobradamente positiva.

Aunque tampoco debemos olvidar, el escaso conocimiento que, salvo situaciones especiales, tiene la opinión pública de las tareas que se llevan a cabo en las instituciones internacionales y, en este sentido el GATT no era una excepción.

8.1.11 La industria láctea. La hormona somatropina

Nuestras importaciones en el sector lácteo se incrementaron desde nuestro ingreso en la CE. De igual forma podemos afirmar que también aumentaron las exportaciones, y en especial las de leche en polvo, mantequilla y queso²³

Sin embargo, la competitividad de la industria se encontraba amenazada por los altos precios de la leche. Aunque el sector lácteo en nuestro país contaba con un nivel tecnológico comparable al resto de la CE, después de nuestra adhesión no podemos hablar de una línea permanente de actuación en la industria alimentaria.

²² "La Presidencia española en el GATT", Miguel Angel Diez Mier. Boletín ICE, semana del 31 de julio al 6 de agosto de 1989.

Jovellanos escribe en el diario *Abc* (26.3.89): "La producción especializada de la industria española de transformación y preparación de alimentos es una industria volcada a la demanda de la gran masa". Los productores demandaban un ajuste de los precios de la leche para poder competir en el mercado. Se pedía una cuota mayor de producción para España, capaz de amortiguar el desfase entre oferta y demanda.

Otro asunto de interés periodístico fue la prohibición del consumo de carne vacuna tratada con hormonas. EEUU, sin embargo, no quería renunciar a los beneficios obtenidos por el tratamiento hormonal del ganado.

El presidente de la Federación Europea de Empresas de Sanidad Animal (FEDESA), Michael Gung, señaló que esta prohibición de hormonas en territorio comunitario, sólo respondía a planteamientos de política económica, y no a razones de seguridad para la salud (argumento de fondo de los países comunitarios).

El conflicto se inicia cuando aparecen dos hormonas (BST y PSP) no sujetas a reglamentación alguna. La CE parece reticente y el ministerio de Agricultura francés muestra sus "reservas" en estos tratamientos hormonales. Se habla de que priman los motivos económicos sobre la sanidad: un incremento del 20% en la producción láctea de cada vaca hormonada implicaría un nuevo ajuste y resultaría ser muy costoso (*Abc*, 2.4.89).

La repercusión de este tratamiento hormonal llega a España, y la Unión de Consumidores de España (UCE) hizo las comprobaciones oportunas. Desde esta Asociación se empezó a revisar qué laboratorios y establecimientos vendían hormonas de engorde sin etiquetar y sin ningún tipo de control.

³⁷ Los consumos que más habían crecido en nuestro país eran los de quesos y productos lácteos frescos

8.1.13 Movilización agraria en Salamanca

La reunión informal del Consejo de Ministros de Agricultura de la CE (14 de mayo) centró su interés en la calidad de las producciones agrícolas y el desarrollo del medio rural.

Las organizaciones agrarias anunciaron que se manifestarían en protesta por la política agraria de Castilla y León, que consideraban la más perjudicada. Tanto las asociaciones agrícolas COAG y Jóvenes Agricultores CNAG valoraban negativamente los nuevos precios agrarios²⁴.

La Presidencia española elaboró un documento sobre calidad alimentaria en el contexto del Mercado Único. Los aspectos propuestos se referían al etiquetado de calidad y las denominaciones de origen.

Pero ante el anuncio de las protestas, el ministro de Agricultura lanzó la siguiente amenaza: “Si hay manifestaciones, Salamanca no será sede del Consejo de Agricultura Europeo.....Quieren convertir el Consejo de Ministros en un foro público de sus problemas pasados, presentes, reales o imaginarios” (*Abc*, 9.5.89).

En *El Independiente* (10.5.89), Cesar Lumbreras denuncia la actitud del ministro de Agricultura por sus contundentes amenazas a celebrar la reunión en otro lugar. Por otra parte, las protestas anunciadas llevaron al alcalde de la ciudad a publicar un bando en el que se pedía que no se realizaran actos reivindicativos durante la reunión informal.

El día del encuentro de los ministros de Agricultura los periódicos informaron del impacto que provocó la concentración de agricultores: “Miles de

(*YA*, 26.3.89).

²⁴ Ponían como ejemplo la disminución en un 3% en los cereales, un 5,5% en trigo duro y un 4% en productos lácteos y derivados (*El País*, 8.5.89).

agricultores protestaron en Salamanca contra la política de Romero” (*Abc*, 17.5.89); “Miles de agricultores se manifiestan en Salamanca para pedir mejoras de los precios” (*Ya*, 17.5.89); los diarios económicos titularon: “Los agricultores españoles denuncian la reconversión encubierta del campo” (*Cinco Días*, 17.5.89); “Diez mil agricultores se manifestaron ante los ministros europeos” (*Expansión*, 17.5.89).

La prensa informa sobre la repercusión de las movilizaciones y los sindicatos agrarios hablan de una reconversión con escasas alternativas y que no ha sido negociada con nadie³⁹. El impacto de la congelación de precios de intervención todavía no es sentido con toda plenitud. Pero algunos de nuestros diputados advierten que el paquete de precios propuesto por la Comisión es ante todo un error político⁴⁰.

Sin embargo, a pesar de la corriente crítica que despiertan las medidas agrarias recientemente aprobadas, *El País* publica un editorial bajo el título: “Precios a tiempo” en el que se valora positivamente en España la pequeña subida que experimentan nuestros precios (1,3%), cuando la tónica general es de descenso en los precios de intervención. El editorial dice: “este efecto positivo se debe a las ayudas para ciertos sectores y a una negociación defensiva que ha evitado recortes en los cítricos y garantizado subidas en porcino, aceite de oliva, girasol y vino” (*El País*, 3.5.89).

De este Consejo Informal no saldrán acuerdos, pero sí consensos. La prensa interpreta que la manifestación de los agricultores es la nota de contraste, porque saca a la luz del descontento del campo español, con una reconversión que no aclara su futuro nada claro. También podemos destacar que los periódicos

³⁹ La idea procede de informaciones extraídas de los diarios *El País* y *Cinco Días*, con fecha 17 de mayo.

⁴⁰ Esta tesis es defendida por el eurodiputado del CDS Cervera Cardona, que aseguraba que estos mecanismos de ajuste sólo pueden justificarse “desde el refugio de Berlaymont” (*Cinco Días*, 3.5.89).

reflejaron la imagen de un ministro de Agricultura “crispado” por los acontecimientos.

8.1.14 Inversiones en explotaciones agrarias y medidas contra el fraude

En la CE , casi 30.000 millones de ecus (un 65% del Presupuesto de gastos comunitario) se dedicaron durante 1989 a la PAC. En España, existía una regulación que emanaba de la comunitaria, por la que se establecía un sistema de ayudas para mejora de la eficacia de las estructuras agrarias.

En lo que se refiere a la ayuda recibida por los jóvenes dentro del programa de apoyo rural de la Administración, ésta superaba los 74.000 millones repartidos entre préstamos y subvenciones.

En la relación de ayudas comunitarias, también se reciben ayudas para las inversiones en planes de interés. . A este respecto, *Cinco Días* publicaba un artículo de Ana María Vázquez Losada, donde se detecta la escasa planificación del agricultor a la hora de efectuar un balance de las explotaciones agrarias. Para muchos, la salida más práctica se encuentra en la vía del cooperativismo y asociacionismo, frente a las situaciones individuales a través de los cauces informativos necesarios.

A mediados de abril saltó a las páginas de los periódicos un hecho con gran expectación social. El famoso “fraude de la mantequilla”. Fue el eurodiputado socialista holandés Pie Dankert, quien denunció ante el PE la existencia de un fraude basado en la producción de la mantequilla.

Un procedimiento especial de elaboración de mantequilla conocido como “nizo” permitió que algunos productores obtuvieran miles de millones de ecus entre 1982 y 1987.

En *La Vanguardia* se publica un artículo de Castell Borrás sobre este tipo de irregularidades. En el artículo leemos que las subvenciones a las empresas agrícolas es el medio más utilizado para desviar fondos comunitarios de forma ilegal. El autor, con buen criterio, explicaba que eran varios los factores que motivaban este desvío de fondos: la complejidad de los mecanismos de la PAC, las deficiencias del sistema descentralizado de recaudación de los ingresos y el reparto de los gastos.

Desde el Tribunal de Cuentas⁴¹ y desde el Parlamento Europeo se vinieron denunciando numerosos fraudes que suponían pérdidas importantes para el presupuesto comunitario. El 17 de abril, el Consejo aceptó una de las propuestas del Parlamento que hacía referencia a la autonomía de control de la Comisión para vigilar la recaudación de los ingresos comunitarios y poder realizar investigaciones en los organismos nacionales por propia iniciativa. Hasta ese momento, la CE no podía controlar por sí sola sus ingresos.

Para solucionar el problema del fraude, la Comunidad, consciente de la necesidad de mejorar el sistema de control, creó -bajo la supervisión de Jacques Delors- la Unidad de Coordinación de la Lucha Antifraudes (UCLAD).

Además, hay que añadir que el Consejo Europeo de Madrid (26 y 27 de junio) subrayó la necesidad de emprender una acción rigurosa para hacer frente al problema de los fraudes en detrimento del presupuesto comunitario.. En sus

⁴¹ El tratado de la Unión Europea eleva el Tribunal de Cuentas al rango de Institución comunitaria, concediéndole poderes acrecentados para un control completo y sistemático de la legalidad y la conformidad de todos los gastos comunitarios y del sistema financiero de la Unión. WESTENDORP, Carlos: “El Tratado de la Unión Europea”. Cuadernos de Europa, nº 3. Diputación de Zaragoza (Comisión de Europa).

conclusiones, este Consejo solicitaba al Consejo de Ministros “que se pronunciara cuanto antes sobre las diferentes propuestas normativas, relativas a la lucha contra los fraudes” que en su día presentó la Comisión.

8.1.15 La peste porcina y el control sanitario

El 15 de mayo entra en vigor el acuerdo comunitario que declara exenta de peste porcina la mayor parte de España. El origen del conflicto se remonta al año 1988, cuando se almacenaron en nuestro país más de 14.000 toneladas de carne de cerdo que esperaba su salida al mercado. Fue un año negro para el sector. Los precios bajaron hasta²⁸ cotas históricas. La Comisión se vio obligada a intervenir para frenar el aumento de las importaciones. Sólo unas ochenta empresas -de las 2.500 que existían en el sector- podían competir en el mercado europeo.

La prensa, por lo general, coincide en señalar que la “aventura europea” no iba a ser fácil,²⁹ a pesar de levantarse el veto. Sin esperar grandes cambios, resumía Josep Miró Ardévol en *La Economía*: “No creo que se vaya a producir un fuerte aumento de las exportaciones, porque el sector no tiene una red comercial establecida en Europa, tras muchos años de mantener las fronteras cerradas” (15.5.89).

La primera batalla que iban a librar los exportadores del cerdo se centraba en los formularios sanitarios. Los empresarios del sector trasladaron al ministerio de Agricultura su preocupación por la falta de certificados necesarios para exportar.

No faltaron las recomendaciones del secretario general de la Federación de Industria de la Carne de Cataluña cuando aconsejaba a los criadores que antes de exportar se informaran sobre la legislación del país. Pese a la ausencia de

²⁹ *La Economía*, 15.5.89

problemas sanitarios y de barreras arancelarias, las industrias cárnicas españolas iniciaron un duro proceso de homologación con los estándares de calidad que existían en la CE.

En lo referente a la política de calidad en las explotaciones agrarias, el diario económico *La Economía* (15.5.89) informó de la política que desarrolló el ministerio de Agricultura, tendente a abordar aspectos relacionados con la protección a los consumidores y la exigencia de éstos a la hora de obtener una información veraz sobre las características de los alimentos. En defensa de una calidad alimentaria por arriba⁴⁴.

8.2 Política pesquera comunitaria

8.2.1 Reforma del sector pesquero

Este sector quería modificar su estructura, de acuerdo con las exigencias del mercado internacional. España apoyó incondicionalmente el proyecto del comisario de Pesca, Manuel Marín. Los planteamientos del citado proyecto pasaban por la constitución de un Fondo Europeo de Garantía (FEOGA) capaz de incrementar los fondos destinados al sector. Sin embargo, desde algunos medios se denunció la falta de recursos comunitarios para llevar a cabo la reforma del sector.

Hasta entonces, el desarrollo de la política común de Pesca se había realizado en tres campos: los mercados, las estructuras y la conservación de recursos. La clave de esta política era la preocupación comunitaria por la conservación de los recursos pesqueros dentro de un proceso en el que todos los países ribereños crearon zonas exclusivas para la pesca de 200 millas.³¹

Cada año la Comisión fijaba el total anual de capturas por especies. Estas capturas anuales se distribuían en cuotas entre los países miembros teniendo en cuenta la actividad tradicional de cada Estado. Dichas limitaciones a las capturas precisaba, a su vez, de un sistema interno de control: inspección a bordo de los pesqueros, control de pesca desembarcada, etc ...).

En opinión del entonces director general de Pesca del ministerio, Rafael Jaén, la Comunidad debía duplicar los fondos destinados a la reforma de las

³⁰ *El País*, 15.5.89

³¹ La economía, 12.4.89.

estructuras en el sector. Era evidente que, con los presupuestos que por entonces se manejaban, era del todo imposible atender las peticiones de todos los países en materia de construcción y modernización de barcos, acuicultura y arrecifes.

Según los datos aportados por la Administración española, el sector pesquero había tenido una excelente respuesta a la hora de presentar sus proyectos de acuerdo con la normativa comunitaria. El problema radicaba en que una buena parte de estos fondos permanecía bloqueado “ante la falta de recursos de Bruselas” (*El País*, 3.2.89).

Para la mejora de las estructuras, el sector pesquero de nuestro país había invertido en los dos últimos años más de 34.000 millones de pesetas, con un apoyo comunitario de 10.000 millones. Si bien, hay que añadir que en los últimos dos años, los pescadores españoles habían recibido aproximadamente el 33% de las subvenciones comunitarias, frente al 16% de Italia y el 12% de Francia

8.2. 2 Conflicto en la negociación con la URSS y medidas para la pesca

Las primeras divisiones que surgieron entre los Doce en materia de pesca surgieron en la negociación pesquera con la URSS, por la búsqueda de nuevos caladeros. La Presidencia española se esforzó por lograr un acuerdo entre los socios comunitarios para iniciar negociaciones con la Unión Soviética y obtener, de este modo, estos nuevos caladeros para la flota comunitaria.

En el seno de la Comunidad, existían, así, dos grupos enfrentados en la negociación. Por un lado, se encontraba el bloque de Alemania y Dinamarca, que defendía un libre cambio entre las flotas comunitarias y la soviética. En el lado opuesto, se situaban el resto de los Estados miembros, partidarios de una zona de aplicación del acuerdo, lo mas estricta posible, delimitada al mar Báltico. Este último bloque se oponía, a su vez, a la firma de un acuerdo de libre acceso, con el

que se otorgaba la libre entrada de la flota soviética en sus puertos (*Expansión*, 2.2.89).

La prensa nacional no ofreció demasiada cobertura informativa a este apartado pesquero relacionado con la URSS, una vez concluido el Primer Consejo de los ministros de Pesca de la CE, celebrado el 23 de febrero. En esta reunión se acordó, por unanimidad, el inicio inmediato de las negociaciones pesqueras con la Unión Soviética (*Diario 16*, 25.2.89).

Reunidos en la capital belga, bajo la presidencia del titular español Carlos Romero, los ministros de Pesca de la CE aprobaron un paquete de medidas que afectaban directamente a la flota comunitaria. Entre los acuerdos adoptados, destacaba el relativo a los nuevos contingentes de importación de productos pesqueros para 1989, con una reducción del 26 % respecto al año anterior.

Tras la reducción adoptada, los volúmenes de contingentación aprobados pasaban “de 226.000 toneladas en 1988 a 176.000 toneladas para 1989”, según difundía *Diario 16*, el 25 de febrero. Se sabe que el mayor volumen de contingentaciones había recaído sobre el bacalao verde.

Además, en este Consejo, reunido para tratar asuntos de pesca, se adoptaron una serie de medidas que tenían que ver el acceso de barcos japoneses a aguas de Portugal, y con la prórroga del convenio establecido entre EEUU y la CE por dos años más.

8.2.3 La Merchant Shipping Act

La discriminación contra los armadores españoles de pesqueros con bandera británica acaparó la atención de los medios informativos de forma unánime. El conflicto con Gran Bretaña se trasladó a Bruselas y el interés de la noticia se extendió a toda la Comunidad.

El Gobierno de Londres consideraba meros “depredadores de las cuotas de pesca que asigna anualmente la CEE” a los barcos pesqueros, propiedad de armadores españoles, que navegaban bajo pabellón británico.

La llamada Merchant Shipping Act de 1988 era una ley proteccionista que discriminaba cualquier inversión con capital extranjero. Los expertos coincidían en señalar que tal proteccionismo era “injustificable” en el marco de la Comunidad Europea. En los últimos diez años, los armadores españoles habían invertido unos diez mil millones en buques e instalaciones.

La reacción de los armadores españoles fue muy ágil contra el intento británico de “nacionalización” de sus barcos. Plantearon la batalla no sólo ante el Tribunal de Justicia Europeo sino también ante los Tribunales británicos. El último día de marzo expiraba el plazo dado por la Ley Merchant Shipping Act a los armadores españoles para reducir su participación al 25 % del capital. Bruselas reaccionó y la Comisión anunció el envío de una carta de emplazamiento al Reino Unido por dichas restricciones. Los ingleses disponían de un mes para dar una respuesta satisfactoria o enmendar la ley.

La decisión de la CE suponía “la intervención comunitaria en un largo conflicto larvado desde hace más de un año”, según destacó el diario *El País*. El mismo periódico informaba que, para dar una salida al contencioso con las autoridades británicas, los armadores españoles de empresas conjuntas celebraron en Madrid una reunión junto con sus abogados del Reino Unido para plantear una estrategia capaz de actuar en defensa de sus intereses (21.3.89).

Pese a la iniciativa que adoptó la Comisión, las esperanzas para los armadores españoles eran escasas y éstos veían como muy posible, el hecho de

tener que amarrar la flota para, posteriormente, vender sus participaciones accionariales en un plazo de seis meses.

Sin embargo, y como indicaba el diario económico *Cinco Días*, la verdadera batalla jurídica se había ya entablado en los tribunales ingleses. La situación no podía ser más desesperanzadora. Tras una primera resolución favorable a los intereses de los armadores españoles, dichos tribunales habían dado la razón al Gobierno británico en el momento de aceptar su apelación.

Un juez dio la razón a los armadores españoles y mandó suspender la aplicación de la Ley, provocando una fuerte polémica, de amplia repercusión social. Asimismo, muchos parlamentarios británicos se pronunciaron en contra de este juez, por atreverse a paralizar una Ley aprobada en el Parlamento.

Días antes de intervenir el Ejecutivo comunitario, la revista *The Times* subrayaba la solicitud a las instituciones comunitarias del Ministerio de Agricultura británico para obtener “poderes adicionales” que hicieran cumplir a los Estados miembros lo acordado en 1983: “la Comisión Europea,(...) con un apetito insaciable en invadir la soberanía nacional, ha estado poco dispuesta a hacer esto”. Consecuentemente, según esta publicación, a Gran Bretaña no le quedaba otra opción que tomar el asunto por su cuenta. (3.3.89).

Financial Times, por su parte, titulaba el 13 de marzo “Un Tribunal suspende la Ley de Pesca en una decisión constitucional”. El diario londinense reconoce que esta disputa amenaza “con minar los fundamentos de la política de pesca de la CEE”. Ese mismo día, *The Guardian* (“Los jueces bloquean la ley sobre pesca”) reseñaba que era la primera vez que un Tribunal británico interfería una Ley del Parlamento “de ese modo” (En alusión al dictamen judicial que decretó que esta ley restrictiva no debe aplicarse a los propietarios y a las compañías hasta que el Tribunal europeo de Justicia decidiera sobre el tema).

En ese momento, tras la advertencia formal de la Comisión, la prensa británica se hizo eco de la “amenaza” comunitaria. La postura del Gobierno británico denunció que los pescadores extranjeros se estaban aprovechando del viejo Registro pesquero que del viejo Registro pesquero, para acceder de forma injusta a las cuotas pesqueras concedidas por Gran Bretaña a la CEE.

El diario *The Independent*, por su parte, responsabilizaba al comisario español Manuel Marín por “proceder contra la Ley británica”. Es esta ocasión, el *Financial Times* (21.3.89) aseguraba a los lectores que una decisión final para este tema sería complicada.

Sin embargo, el fallo del Tribunal de Apelación en contra de la sentencia en primera instancia que reconocía el derecho de los buques de pesca extranjeros a faenar en aguas británicas, dejaba sin efecto esta sentencia. Alfonso Barra, corresponsal de *Abc* en Londres, anunciaba que esta situación legal iba a afectar a un número considerable de empresas españolas (23.3.89). Según el dictamen emitido por el Tribunal de Apelaciones, el juez que dictó la suspensión temporal de la ley británica “no tuvo en cuenta las consecuencias constitucionales de su decisión” (*Diario 16*, 23.3.89).

La reacción del comisario español, Manuel Marín, no se hizo esperar. Marín amenazó al Gobierno de Margaret Thatcher con acudir al Tribunal Europeo de Justicia, si éste no cambiaba de opinión.

A partir del 1 de abril, los pesqueros españoles bajo bandera británica dejaban de faenar por entrar en vigor la nueva Ley de Marina Mercante. No obstante, la Asociación Nacional de Armadores Españoles acordó esperar la decisión del Tribunal de la Cámara de los Lores, o Tribunal Supremo inglés, antes de acatar la nueva legislación.

Los diarios anuncian en sus tiradas que, con la paralización de estos barcos, el precio del pescado “puede empezar a subir”; se trataba, además de una paralización que iba a incidir sobre 1.500 trabajadores e, indirectamente, en otros 6.000 empleos.

Los pescadores españoles que faenaban en Gran Bretaña estaban inscritos en la Seguridad Social española, por lo que dependían a todos los efectos de la Administración de nuestro país. Armadores y sindicatos solicitaron al Gobierno español que arbitrara medidas de ayuda para estos trabajadores. Ambos agentes sociales aclararon en rueda de prensa, que la decisión del Reino Unido no fue provocada por motivos económicos, sino que se trataba de una decisión política derivada de los acuerdos de la CE sobre reducción de flotas pesqueras en los países comunitarios³².

Por su parte, la trascendencia del conflicto provocó una reacción inmediata del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, que solicitó por cauces diplomáticos a Gran Bretaña, la no exclusión del Registro de los armadores españoles. Fuentes de la Oficina de Información Diplomática señalaron que se trataba de “un conflicto de interpretación que debe ser resuelto en el marco de la Comunidad o por los órganos jurisdiccionales de la misma” y por lo tanto, debía posponerse la aplicación de la Ley en lo que se refería a la nueva forma de registro (*Diario 16*, 3.4.89).

8.2.3 Consejo Informal en La Toja (10 y 11 de abril)

La reunión que se celebró en La Toja se clausuró sin que el Gobierno Español consiguiese el apoyo explícito de otros países para presionar al Reino Unido a que desistiera implantar la ley restrictiva de la marina mercante.

El ministro español, Carlos Romero, sin ánimo de entrar en polémica con sus colegas comunitarios, prefirió no hacer alusión directa al contencioso. La prensa no reflejó del mismo modo la actitud española. Por ejemplo, *El País* resaltó el silencio que el ministro español mantuvo ante los periodistas sobre el citado conflicto. Según este diario, las protestas que protagonizaron el Gobierno gallego, los armadores y los sindicatos no tuvieron, por otra parte, repercusión alguna en la reunión ministerial.⁴⁷

Por su parte, el diario económico *Cinco Días*⁴⁸ destacó como aspecto más relevante del conflicto británico, la solicitud de indemnizaciones por parte de los representantes españoles para afrontar los costes de los barcos afectados.

España iba a recibir ayuda comunitaria para la modernización de sus barcos, bajo la siguiente condición: los planes nacionales de reestructuración debían reducir su capacidad pesquera en un 3%.

En el transcurso de este Consejo, las delegaciones de Dinamarca, Alemania Federal y Holanda apoyaron la iniciativa británica. El secretario parlamentario británico, Donald Thompson, reclamó el derecho que asistía a su Gobierno para proteger las cuotas de capturas.

En el diario *Abc* se refleja claramente una actitud contra la expansión pesquera española, por parte de los países del Norte de la CE (*Abc*, 12.4.89).

La prensa extranjera, y en concreto la de nuestro país vecino, Portugal, se hace eco de la decepción de los pescadores españoles. Eran cuantiosas las inversiones que éstos abordaron y según el *Diario de Noticias*, esta situación de

⁴⁶ *El País*, 31.3.89.

⁴⁷ *El País*, 12.4.89.

⁴⁸ *Cinco Días*, 12.4.89

abandono para los armadores españoles iba a permitir que los ingleses compraran a precio de saldo (17.4.89)

8.2.4 Ayudas para modernizar la flota pesquera. Nuevas cuotas pesqueras

Todos los periódicos informaron sobre la ayuda que la CE concedió al sector pesquero para nuevas construcciones y modernización de la flota. En los de corte regional se recoge, sobre todo, esta información. Es significativa la vigencia de los comités de seguimiento³⁵ para supervisar la aplicación de los planes de información y publicidad, así como otros aspectos de la realización de los proyectos.

Con el propósito de facilitar esta tarea, la Comisión aprobó una decisión del 31 de mayo de 1994 sobre las actividades de información y publicidad que deben llevar a cabo los Estados miembros en relación con los Fondos Estructurales y el Instrumento de Financiación de Orientación de la Pesca (IFOP)³⁶.

Los titulares de los periódicos anunciaron la cuantía de estas ayudas, y destacaron que España era, comparativamente, el primer país beneficiado:

“La CEE reanuda la concesión de ayudas para modernizar la flota pesquera” (*El País* 27.4.89).

“La CE concedió 9.707 millones para 143 proyectos pesqueros españoles” (*Cinco Días*, 27.4.89).

“España, mayor receptora de subvenciones comunitarias” (*Expansión*, 27.4.89).

³⁵ Los comités de seguimiento están formados por todos los organismos y personas que contribuyen a que los programas culminen con éxito. Véase *GUÍA PRÁCTICA sobre las normas de información y publicidad para las actividades de los fondos estructurales y el IFOP*. Ed. Comisión Europea. Luxemburgo, 1995.

³⁶ *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*. N° L 152/39 (18.6.94).

“La CE concede 2.500 millones para la flota pesquera española” (*La Gaceta*, 27.4.89).

El Comité Permanente de Estructuras de la CE acordó reanudar la concesión de subvenciones para la construcción de barcos pesqueros en la CE. Las peticiones sobre construcción de barcos, bloqueadas desde hacía un año, pudieron ser atendidas con la Decisión de abril de 1989, dentro del Plan de Orientación Plurianual.

Las Ayudas se concedían para un total de 143 proyectos, que sumaban una inversión total de más de 9.000 millones de pesetas. La CE aportaba 2.500 millones para financiar la reestructuración de la flota pesquera española. En opinión del secretario general de Pesca, José Loira, estas subvenciones permitían a nuestros barcos que fueran cada vez más seguros y operativos⁵¹.

En cuanto a la construcción de las embarcaciones, en España se aprobaron 34 proyectos; para su modernización, se aprobaron 94 proyectos y un total de 20 proyectos para el sector de acuicultura.

Por otra parte, la Asociación Gallega de Armadores de Buques de Pesca de Bacalao (AGARBA) solicitó a las administraciones española y comunitaria que presionaran a escala internacional, para que las flotas de terceros países asumieran también las fuertes limitaciones impuestas en la zona regulada por la Organización Pesquera del Atlántico Norte.

Dicha Asociación aducía la pérdida de disponibilidad de pesca de la flota bacaladera porque su cuota estaba fijada unilateralmente por Noruega en una cantidad insuficiente para satisfacer las necesidades de la flota comunitaria⁵². Es cierto que los científicos noruegos venían recomendando, desde el año 1987, el

⁵¹ *Expansión*, 27.4.89.

descenso de capturas en el caladero de Svalbard, al considerar en peligro el stock de pesca (una opinión que, sin embargo, no era compartida por los técnicos comunitarios).

A primeros de mayo, se acrecentaba el estupor de los bacaladeros. Una vez más se tomaban medidas de reducción de capturas sin contar con la opinión del sector. Ante el anuncio de una rebaja en las capturas dentro de las aguas de los caladeros canadienses, la situación de la flota bacaladera se agravaba hasta límites imprevisibles.³⁹

Mientras tanto, España y Francia presentaban ante el Tribunal de Justicia Europeo sendos alegatos, para así lograr la anulación del Reglamento relativo al control de las capturas de pesca en aguas de terceros países, y que obligaba a los Estados miembros a notificar a la Comisión las capturas efectuadas en aguas de los países africanos con los que la CE había firmado acuerdos. Para España y Francia, la Comisión había rebasado sus competencias, según el diario *La Economía*.⁴⁰

8.2.5 Advertencia de la Comisión al Reino Unido

En términos generales, la prensa española demostró un gran interés hacia el conflicto que en su día suscitó la Ley sobre Empresas Pesqueras. Así, los titulares de los diarios nacionales más representativos anunciaban: “La Corte de Justicia de la CE decidirá sobre los armadores españoles en el Reino Unido” (*El País*, 5.5.89); “La Comisión da un ultimátum al Reino Unido para que modifique la Shipping Act” (*El País*, 12.5.89); “La Comisión insta a Gran Bretaña a que modifique su Ley de marina mercante” (*Expansión*, 12.5.89); “La CE procede contra Gran Bretaña por la Ley de Empresas Pesqueras” (*La Vanguardia*, 12.5.89).

³⁸ *Expansión*, 20.4.89.

³⁹ *Expansión*, 4.5.89.

También saltaba a las páginas de los periódicos una noticia que afectaba directamente a los armadores españoles. La Cámara de los Lores que estudiaba el recurso de los armadores españoles, remitiría después este caso a la Corte de Justicia de la CE.

Sin embargo, esta situación no resultó ser del agrado de los armadores españoles, porque, con esa medida, sus barcos podrían permanecer bloqueados en puerto durante más de un año.

Las referencias del diario *El País* apuntaban a una sentencia por la que los tribunales británicos “se lavan las manos”. Esto suponía dejar el problema sin resolver hasta una decisión de la Corte de Luxemburgo. Por este motivo, los armadores sólo confiaban en una respuesta del Colegio de Comisarios de la CE. La Comisión podía acelerar el proceso y llevar el caso por el procedimiento de urgencia a Luxemburgo (*El País*, 5.5.89), y, así, la Corte Suprema podría dejar en suspenso la aplicación de la normativa británica. De este modo los barcos podrían faenar hasta que se dictara una sentencia definitiva.

Abc, con un seguimiento más limitado del conflicto, resumía los acontecimientos que habían venido produciéndose desde el mes de marzo. Argumentaba la iniciativa de Bruselas en relación con la Ley británica y recogía las protestas reiteradas de los pescadores ingleses (15.5.89).

En Londres, *The Financial Times* (22.5.89) analizaba el verdadero alcance de este conflicto: adelantándose a la Comisión europea, La Cámara Alta británica, remitía al Tribunal de Luxemburgo el caso de los 95 barcos de pesca. De esta lectura extraemos la siguiente conclusión: el Parlamento británico, al

⁵⁴ *La Economía*, 4.5.89.

recurrir al Tribunal de Justicia, dejaba sin sentido la amenaza de la Comisión de llevar el caso a Luxemburgo.

Las llamadas cuotas *hopping* suponían un enfrentamiento para los ingleses con un alcance mayor que “la sola supervivencia de un puñado de pescadores”. Se cuestionaba el funcionamiento de la política comunitaria y la primacía de la ley europea sobre la nacional; se trataba de una batalla legal cuya explicación residía en que el Acta Mercantil de Navegación del Reino Unido contravenía 4 artículos del Tratado de Roma. Entre ellos, el que hacía referencia al libre establecimiento de los miembros por toda la Comunidad

Desde la Administración española, Carlos Romero tachaba de “masoquista” la actitud de “algunos segmentos pequeños de la opinión pública española” ante la amenaza de una posible denuncia de la Comisión por incumplimiento del número de capturas. El ministro español se refería a los temores del sector armador pesquero.

Desde el órgano Ejecutivo comunitario se instaba al Consejo de Ministros a que tomara una decisión sobre el límite de capturas, en la reunión que iba a mantener el 21 de junio⁴¹.

⁴¹ La Comisión propuso al Consejo la institución de un comité permanente de estadísticas pesqueras, para que la recopilación de datos sobre el valor y cantidad de los desembarcos de productos pesqueros se armonizara en todos los países miembros. La otra solución invitaba a los ministros de pesca a enviar a Bruselas los datos provisionales de los desembarcos de cada especie, en los dos meses siguientes a la pesca. Los datos definitivos se remitirían a los 6 meses (*La Economía*, 15.6.89).

8.3 Conclusiones del capítulo

- La negociación de los precios agrarios acaparan la atención de toda la prensa. Los diarios económicos analizan sectores más concretos de la política agraria. En *Abc* ese interés por el calendario agrícola se traduce en un número considerable de artículos firmados por expertos en la materia.
- El sector hortofrutícola y las estructuras agrarias que afectan a los frutos secos son abordados de forma rigurosa en los diarios catalanas, sobre todo, en *La Vanguardia*.
- Las dificultades que nuestro ministro de Agricultura encuentra en el desarrollo de las negociaciones sobre los precios agrarios quedan reflejadas de forma moderada en la prensa. *Abc*, sobre todo, concede especial relieve a las discusiones mantenidas, para alcanzar un acuerdo, entre Carlos Romero y el comisario Mac Sharry .
- La prensa de información general y la regional conectan con las protestas de los trabajadores del campo y asociaciones agrarias que, en numerosas ocasiones, eclipsaron el protagonismo de los representantes comunitarios.
- Una vez acordado el calendario de precios (con inusitada celeridad) todos los diarios centran más el interés en los elogios que llegan de distintos ámbitos sociales e institucionales próximos al Gobierno socialista que en las críticas que proceden del sector agrario.
- Los partidos de la oposición y las asociaciones agrarias revelan que los precios consensuados no reflejan la realidad del mercado y no afectan por igual a los grandes y a los pequeños productores.

- Priman los intereses locales respecto a algunos logros de la Presidencia española en política agraria. Por ejemplo, *Cinco Días* informa sobre los efectos reales del nuevo Reglamento que favorece las inversiones en las pequeñas explotaciones de ganado porcino. El Reglamento incidía positivamente en aquella parte del territorio nacional aislado sanitariamente a causa de la peste porcina africana.
- La CE pasa por un proceso de reestructuración del sector pesquero. Sobre las asignaciones presupuestarias en materia de construcción y modernización del sector, el diario *El País* subraya, en tono de denuncia, el deficiente presupuesto asignado a nuestro país.
- Las cuotas legisladas por la Comisión son motivo de fricción entre los Estados miembros. Por ejemplo, el conflicto sobre el reparto de caladeros comenzó con la URSS, aunque el alcance del mismo no tuvo amplia cobertura informativa.
- El capítulo más importante, sin duda, se centró en el conflicto que mantuvieron el Gobierno británico y los armadores españoles tras aplicarse la Ley 'Merchant Shipping Act'. Este debate se intensifica en la prensa británica y española.
- Destacamos, asimismo, que la situación legal de los armadores españoles copa la atención de los periódicos. El contencioso genera un alarmismo general por la repercusión en los precios del mercado (*Diario 16* acusa ese impacto social del conflicto).
- Los dirigentes españoles evitaron el enfrentamiento directo con Gran Bretaña en la reunión que mantuvieron los ministros de Pesca en la isla de La Toja. *El País* denuncia el silencio sobre el conflicto de nuestro ministro de

Agricultura. Menos severo con la actitud de nuestros representantes, *Cinco Días* insiste más en las indemnizaciones de los pescadores.

- Cuando a finales de abril la Comisión reanuda la concesión de ayudas para modernizar la flota de los pesqueros españoles, la prensa nacional y los diarios económicos (*El País*, *Cinco Días*, *La Gaceta*..) coinciden en anunciar la cuantía de las ayudas, así como en destacar que España “era la mayor receptora de subvenciones de la CE” (*Expansión*, 27.4.89)
- Con motivo de la aplicación del Shipping Act, la Comisión mantiene una actitud firme frente a Gran Bretaña según se refleja en los titulares de los diarios españoles. Con estos incidentes sobre la mesa, se cuestiona el verdadero alcance de la política comunitaria y la primacía de la ley europea.

CAPÍTULO IX

Transportes, Industria y Energía y Fondos Estructurales

9. 1 Política de transportes

9.1.1 Objetivos y evolución de la política común de transportes

Los dos objetivos básicos de la política común de transportes no habían variado sustancialmente desde su reconocimiento en el Tratado de Roma de 1957. El primero, consistía en ordenar el sector como actividad productiva; el segundo de los objetivos, perseguía eliminar los obstáculos para la creación de un Mercado Común de los transportes. Sin embargo, el transporte a escala continental continuaba bloqueado por cuotas, restricciones y limitaciones para el acceso al mercado, con el consiguiente incremento de los costes del comercio y el bloqueo de la integración económica europea.

La evolución de esta política ha atravesado diversas fases. La primera (1957-1965) conocida por etapa de fundamentación teórica, pretende unificar el mercado europeo sobre la base de grandes principios: libre competencia, libertad de elección de medios de transporte por el usuario, independencia comercial y

financiera de las firmas y coordinación de las infraestructuras entre los Estados miembros.

En la segunda etapa (1965-1972) el Consejo declara su intención de liberalizar el transporte de forma gradual. ¿De qué forma?, tratando de armonizar aspectos tales como la fiscalidad, reglamentándose las ayudas públicas al sector. También se abordarían las obligaciones⁵⁶ vinculadas al transporte ferroviario.

La tercera fase (1972-1984) estuvo dominada por el estancamiento; y la cuarta (1984-1989), experimentó la revitalización de esta política, con un enfoque global.

9.1.2 Las Prioridades de Van Miert

Bajo las directrices que se determinaron en la Cumbre de Rodas (diciembre 1988), el Comisario de Transportes, Karel Van Miert, se propuso organizar un calendario de prioridades en estrecha colaboración con la Presidencia española. El Comisario europeo informó de este 'paquete' al Parlamento europeo y recalcó su empeño -en línea con su antecesor Clinton Davis- por otorgar el mayor interés a la seguridad en el transporte.

En esta Presidencia que España ostentó por primera vez, se aprobaron más de una decena de medidas importantes para la liberalización de los transportes en la CE. Los ministros del ramo celebraron una reunión informal en Murcia en el mes de febrero, los días 12 y 13 y dos Consejos formales en Bruselas (14 de marzo) y Luxemburgo (5 de junio).

Otras de las prioridades que Van Miert fijó en su calendario se centraban en el sector ferroviario: unificación del ancho de vía de acuerdo con el estándar

européico, impulso a los trenes de alta velocidad o la conexión de las redes centrales con las regiones periféricas.

De igual modo, la Comisión optó por desarrollar el transporte marítimo y aéreo frente a terceros países. En términos generales, en la coordinación de su programa, nuestra primera Presidencia pretendía el impulso de la flota comunitaria y la consolidación de mejores infraestructuras en las regiones menos desarrolladas y periféricas de la Comunidad. En sus páginas, *El Independiente*⁵⁷ prestaba atención a este punto al informar sobre el desbloqueo que nuestros representantes proyectaban de un instrumento de financiación para las infraestructuras.

9.1.3 Los ministros de Transportes en La Manga (12 y 13 de febrero)

La Presidencia española pretendía establecer un 'Registro' para abanderar a las compañías navieras comunitarias. Asimismo, la adopción de medidas fiscales, sociales y técnicas fueron el centro de interés de los representantes europeos para reducir la diferencia de costes entre las empresas navieras europeas y sus principales competidoras.

En la reunión que los ministros mantuvieron en La Manga, además de esos temas, se debatieron los recortes de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y la supresión de los gravámenes sobre la venta de buques. La agenda del Consejo debatió también la saturación del espacio aéreo y la posibilidad de coordinar las actuaciones nacionales en la materia. En la reunión se perfiló la creación de un centro único de control de tráfico aéreo, cuya gestión podía corresponder de forma rotativa a cada Estado miembro⁵⁸.

⁵⁶ Estas obligaciones están recogidas en el Reglamento 1191/69; son las que se asumen guiadas por intereses que van más allá del estrictamente comercial (MONOGRAFICO de la revista *Política Exterior* "Transportes", junio, 1992).

⁵⁷ *El Independiente*, 3.2.89.

⁵⁸ *La Vanguardia*, 14.2.89.

Por otra parte, el ministro español de Transportes, Turismo y Comunicaciones, José Barrionuevo, avanzó a los periodistas que la financiación de los planes ferroviarios podía abordarse con participación del capital privado; aunque señaló, al respecto, que el comisario europeo del ramo, Karel Van Miert mostraba buena disposición respecto a las ayudas ferroviarias.

El ministro Barrionuevo también anunció que en el próximo Consejo del 14 de marzo se debatiría la inversión en zonas excluidas de los fondos FEDER (Fondos Europeos para el Desarrollo Regional). Esta inversión en el ferrocarril preocupaba, sobre todo, a España y Portugal ya que ambos países decidieron, en su política de transportes, implantar el ancho de vía europeo. Los países más reticentes al apoyo económico comunitario en infraestructuras -por el gasto que para el Presupuesto comunitario suponía- eran el Reino Unido y Holanda

De lo analizado en La Manga se consideran como aspectos más destacados en la prensa, las ayudas ferroviarias y la creación de un registro comunitario. Así, por ejemplo, el 14 de febrero *La Vanguardia* resaltaba la prioridad que la CE concedía a las inversiones en infraestructuras ferroviarias y el diario económico *Expansión* titulaba: “Las navieras comunitarias serán abanderadas por un registro propio”.

9.1.4 Armonización del transporte por carretera

La mejora de la infraestructura del transporte por carretera fue objeto de atención en las informaciones y comentarios de los medios de comunicación. El país en esas fechas se preparaba para una masiva llegada de visitantes extranjeros ante tres acontecimientos que se esperaban multitudinarios: Los Juegos Olímpicos en Barcelona, la Exposición Universal en Sevilla y el V Centenario del Descubrimiento de América.

La seguridad en las carreteras de la Comunidad fue motivo de interés para España. Se presentó una propuesta (una vez aprobada por el Comité de Representantes Permanente) consistente en la creación de un grupo de 'alto nivel' para el estudio de temas relacionados con la seguridad vial.

Las propuestas del Comité estaban relacionadas con la reducción de la tasa de alcoholemia, la profundidad de los dibujos de los neumáticos, reducción de la velocidad, la obligatoriedad en el uso de los cinturones de seguridad, así como una armonización de las normas para la obtención del permiso de conducir (*La Vanguardia*, 28.3.89).

En un nuevo paso hacia la armonización del transporte por carretera, los ministros comunitarios acordaron en la sesión del 14 de marzo las normas de acceso a la profesión de transportista de viajeros y mercancías.

El acuerdo logrado tenía un cariz político, al tiempo que preveía la aplicación "uniforme" de dos directivas ya existentes. A su vez, este acuerdo introdujo reglas más severas en cuanto a las condiciones mínimas a cumplir por el transportista. La directiva afectaba a todos los conductores de camiones y autobuses de la Comunidad, excepto a los de vehículos ligeros o de menos de nueve plazas.

El entonces Director General de Transportes Terrestres de España, Manuel Panadero, señaló que en la práctica, las reglas acordadas en este Consejo iban a suponer una perturbación importante para los transportistas españoles, ya que la mayoría eran propietarios de sus propios vehículos. Las severas reglas comunitarias fijaban que el transportista era solvente con 150 ecus por tonelada ó con 3.000 ecus por vehículo.

Cabe añadir que ese intento de armonización de las dimensiones y pesos de los vehículos despertó en Londres una fuerte polémica. El ministro de Transportes británico tenía intención de impedir que camiones de gran tonelaje utilizaran las carreteras británicas a partir de 1990.

Por otra parte, el Parlamento Europeo adoptaba el 23 de mayo un dictamen favorable a la propuesta de Directiva relativa a la tasa máxima de alcoholemia en los conductores. La Asamblea comunitaria recomendaba que la tasa única de 0,5 mg/ml debía entrar en vigor el 1 de enero de 1991.

Ese mismo día, el Parlamento Europeo también dictaminó favorablemente una propuesta de Directiva referida a la imputación de los costes de infraestructura del transporte a determinados vehículos utilitarios.

Se aplicaba a los transportistas los costes de infraestructura. Así, el Parlamento recomendó que una parte de los ingresos fiscales, se destinaran a la creación de un fondo de infraestructuras para el desarrollo del transporte.

9.1.5 Consejo de Ministros de Transportes (5 de junio)

El 5 de junio el Consejo aprobaba la propuesta de directiva acordada en la reunión de los ministros de Transporte el 14 marzo, en la que se modificaban los contenidos de tres normativas comunitarias relativas al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros.

Los ministros también modificaron la Directiva que afectaba al reconocimiento mutuo de títulos, certificados y otros documentos del transportista de mercancías o viajeros⁵⁹

⁵⁹ Directiva 74/561, de 12 de noviembre de 1974; directiva 74/562 de 12 de noviembre de 1974; directiva 77/796 de 12 de diciembre de 1977.

El proceso liberalizador de la CE, asimismo, tenía que ampliarse al denominado “cabotaje”: se trataba de que un transportista comunitario realizara transportes domésticos en el interior de otros Estados miembros. Esta actividad estaba reservada por todos los Gobiernos a sus propias empresas.

En este Consejo, la Presidencia española retiró la propuesta sobre el “cabotaje terrestre”⁶⁰, dejando que la Presidencia francesa adoptara en diciembre el Reglamento definitivo. Este Reglamento comunitario además de fijar las condiciones para permitir a los transportistas de cualquier país comunitario realizar transportes nacionales, ampliaba la libre prestación de servicios para no residentes al transporte por carretera de mercancías

9.1.6 El tren de alta velocidad.

El declive del ferrocarril, debido a la competencia de la carretera, acarrió una falta de transparencia entre las compañías ferroviarias y los Estados. Fue la Presidencia francesa en el segundo semestre ⁶¹ quien impulsó el inicio de una verdadera política común del transporte comunitario. Como consecuencia del Plan presentado por la Comisión, se aprobó la Directiva 91/440 (1991) que debía conducir hacia la paulatina integración de las redes y la flexibilización de los monopolios nacionales.

Para poner en funcionamiento una auténtica red europea integrada se procedió a una armonización técnica que afectara directamente al conjunto de las infraestructuras. En dicha red jugaba un papel estelar el Tren de Alta Velocidad (TAV).

⁶⁰ El 21 de diciembre de 1989 el Consejo aprobó el Reglamento 4059/89 por el que se establecen las condiciones para que los transportistas no residentes puedan prestar servicios de transportes por carretera dentro de los Estados miembros. MONOGRAFICO “Transportes” de la revista *Política Exterior*, “Transportes”, junio 1992

⁶¹ La Comisión presentó al Consejo un Plan de conjunto para mejorar la situación de los ferrocarriles en noviembre de 1989. Ibid. “Hacia la liberalización del transporte europeo”, p. 7.

En el reportaje “Metro Europa, estación 2015” (publicado en el diario *El País*⁶²) se recoge un valioso informe elaborado por los presidentes de las compañías ferroviarias de 14 países europeos, en el que se detallaban todas y cada una de las ventajas de la construcción de una red de ferrocarril de Alta Velocidad en Europa.

De llevarse a cabo dicho Plan, a cada europeo le correspondería “una aportación al proyecto de unas 1.300 pesetas al año”. Las posturas respecto a la financiación se presentaban variadas: desde los que pensaban que el coste de infraestructura debería ir a cargo del Estado, hasta quienes abogaban por la iniciativa privada o por fórmulas mixtas.

En algunos medios se lanzaron voces opuestas al impacto de la “dependencia tecnológica” que suponía el desarrollo de trazados de líneas de alta velocidad. *El País* en un artículo de Miguel Angel Ortega Guerrero, secretario general de la Federación de Grupos de Defensa de la Naturaleza (CODA) reivindicaba “el respeto al medio ambiente” ante la “irresponsable” decisión del Gobierno acerca del “contrato del siglo de Renfe”. Las prisas del Gobierno de cara al año 1992 no podían justificar los destrozos que el trazado de las nuevas líneas estaba causando en un número importante de espacios naturales.

Los intereses nacionales parecen estar subordinados al desarrollo industrial del país vecino. La anunciada venta de las empresas de material ferroviario del INI a la empresa francesa Alstom, implicaba la posterior repatriación de buena parte de esos beneficios a Francia. Desde algunos círculos, esta operación se definía como “un claro síntoma de descuido de los intereses españoles por parte del Gobierno que preside Felipe González” (*El País*, 16.3.89).

⁶² *El País*, 12.2.89

Abc dedicaba, por su parte, un amplio reportaje (“Europa apuesta por el tren del futuro”) al enfoque de este medio de transporte en el contexto del Mercado Único Europeo. El progresivo desmantelamiento de las fronteras, iba a traer una mayor demanda de transportes rápidos y eficaces. En la Europa occidental, franceses, italianos y alemanes comenzaron a imitar el ejemplo de los ‘trenes bala’ japoneses”. Estos trenes, con una velocidad entre los 250 y los 300 km/hora, enlazaban las principales capitales europeas en la mitad de tiempo.

En este desafío, España no pretendía estar ausente. Con una inversión de 2,5 billones de pesetas, el llamado Plan de Transporte Ferroviario (PTF) tenía como fin la modernización de la red para “coger a tiempo el tren de alta velocidad”. Pero, sin ninguna duda, Francia era el país pionero en Europa en trenes de alta velocidad.

Buena parte de sus proyectos pendientes iban a consolidarse en 1995, señalaba el diario *Abc* (24.4.89). El TGV era la auténtica estrella de los ferrocarriles franceses; este tren, de avanzada línea aerodinámica, incorporaba elementos más propios de la aviación que del ferrocarril.

Entre los cambios más importantes, ya se anunciaba que el aislamiento histórico de Gran Bretaña por tierra iba a quedar resuelto en 1993, cuando el túnel entrara en servicio bajo el Canal de la Mancha.

En Alemania la alta tecnología no podía tampoco estar ausente en la futura red de alta velocidad. Este país ostentaba el récord absoluto de velocidad ferroviaria con 407 km/hora, conseguidos en 1988 entre Fulda y Würzburg por el tren eléctrico Intercity Experimental. El Plan de Infraestructura Federal, preveía la creación de 4.500 kilómetros de líneas de alta velocidad. por último, en 1970

Italia comenzó su proyecto al contar con una red ferroviaria de alta velocidad conocida por “Direttissima”⁶³.

Sin embargo, las empresas ferroviarias españolas no se sentían competitivas en la CE. El diario económico *Cinco Días* denunciaba la “dispersión industrial” en que se hallaba sumido el sector. Para el director general de la Confederación de Empresas de Material Ferroviario, Julián Ruiz Fernández, el grado de competitividad de las empresas ferroviarias españolas “no era el óptimo”, y presentaba a veces un “balance negativo”⁶⁴. El motivo de esta falta de competitividad se debía a los altos costes salariales y a la dispersa organización industrial. Estas afirmaciones las realizó Ruiz Fernández en las Jornadas que se celebraron sobre la Introducción del Ancho de Vía Internacional en el Ferrocarril Español⁶⁵.

Por otra parte, en la Cumbre franco-alemana de París (que se clausuró el 20 de abril) se obtuvo la firma de varias declaraciones conjuntas en relación con el transporte ferroviario. Sobre este punto, subrayamos del diario *Expansión* el siguiente titular: “Francia y la RFA llegan a un acuerdo para poner en marcha dos líneas de TAV”. Helmut Kohl y François Mitterrand abordaron la unión de sus respectivos países por medio de trenes de alta velocidad y mostraron su esperanza en que la CEE tomara parte activa en el segundo proyecto ferroviario, de dimensión netamente europea⁶⁶.

En las conversaciones, ambos países trataron la unión de sus fronteras por medio de trenes de alta velocidad, mediante la construcción de una vía rápida París-Estrasburgo-Bonn y otra París-Bruselas-Amsterdam.

⁶³ *Abc*, 24.4.89.

⁶⁴ *Cinco Días*, 28.4.89.

⁶⁵ España ocupaba el cuarto lugar en Europa por número de empresas constructoras de material ferroviario (*Cinco Días*, 28.4.89)

⁶⁶ *Expansión*, 21.4.89.

Por otra parte, según las fuentes del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, el proyecto de financiación de la línea de alta velocidad entre Madrid-Barcelona y la frontera francesa podría estar finalizado en 1989. Sobre la financiación de esta línea, adelantaba *Cinco Días* el 4 de mayo, la siguiente noticia: “España ha conseguido que el proyecto Madrid-Barcelona-Frontera haya sido considerado ‘elegible para ser financiado’ con los 90 millones de ecus acordados en diciembre por la CE para proyectos ferroviarios”.

El objetivo del Ministerio de Transportes era constituir una sociedad mixta, capaz de realizar la inversión de la obra y cuya participación en la explotación tendría que negociarse con Renfe. No obstante, la Presidencia española dejó pendiente la discusión de este proyecto para el próximo Consejo de Ministros de Transportes programado para junio.

Por encima de todo, la Comisión pretendía acabar con los graves déficits de explotación que soportaban las administraciones ferroviarias estatales. La totalidad de las redes de ferrocarril, integradas en la Comunidad, tenían que ser privatizadas y explotadas .

Con la introducción de los principios de la concurrencia en el ferrocarril, se encaraba una profunda transformación de las actuales administraciones ferroviarias; además, con la nuevas directrices marcadas desde Bruselas, la creación de una red europea de alta velocidad se podía gestionar desde la empresa privada con capital mixto ⁶⁷.

9.1.8 Liberalización del transporte aéreo

En 1988 las estadísticas anunciaban un aumento anual del 20% del transporte aéreo. Frente a esta demanda, la consecución de un mercado interior en el sector y la liberalización del mismo, se convierten en objetivos prioritarios

La Comisión, a dos meses de concluir la primera Presidencia española proyectaba desembarazarse de las numerosas reglas sobre cuotas de capacidad. También estudió reducir la normativa sobre tarifas, eliminar las exenciones por categorías a las reglas de competencia (a partir de 1992) y garantizar que dichas reglas de competencia no fueran inoperantes a causa de la normativa legal de los Estados.

Como apuntamos, el órgano Ejecutivo comunitario quería la completa liberalización del transporte aéreo comunitario para el 1 de Enero de 1993. El vicepresidente de la Comisión León Brittan declaraba: “La nacionalidad y la geografía deben excluirse de los transportes comunitarios, las líneas aéreas son lo suficientemente sólidas para sobrevivir sin la protección y la ayuda gubernamentales” (*La Economía*, 3.5.89).

En su última reunión, antes de las elecciones, el Parlamento Europeo organizó un debate sobre la armonización de los 22 sistemas de control de tráfico aéreo que existían en Europa.

Por iniciativa del eurodiputado demócrata griego, Giorgio Anastasopoulos, desde el Parlamento se propuso que todos los países de la CE entraran a formar parte de la organización llamada “Eurocontrol”. Aunque España no era miembro de este Organismo, mostró gran interés en solucionar sus problemas de control aéreo en la víspera estival, ya que era uno de los países más afectados por los atascos aéreos.

La Vanguardia en su editorial titulado “Iberia toma posiciones” descifró la situación de las principales compañías aéreas europeas ante las previsiones de los expertos que anunciaban un incremento notable de la competencia. Las

⁶⁷ *Cinco Días*, 10.4.89.

compañías aéreas europeas comenzaban a tomar posiciones de cara al Mercado Unico Europeo. La liberalización de los transportes traía consigo “aires de crisis” para las empresas aéreas menos competitivas. La misma liberalización preveía su concentración⁶⁸.

La singularidad del proceso que conllevaba la liberalización del transporte aéreo residía en las peculiaridades históricas del transporte aéreo como industria⁶⁹. Habían sido necesarios algunos años y varias sentencias firmes del Tribunal de Justicia Europeo para que se aceptara que, en su tratamiento legal, el transporte aéreo no era muy diferente a la construcción o a la industria química.

Las líneas generales de este proceso liberalizador en Europa, añade el editorial, “pasa por una privatización de las compañías estatales”; de este modo, los beneficios para el usuario se traducirían en una disminución de las tarifas regulares más altas y en un aumento del número de vuelos directos entre ciudades europeas.

Sin embargo, el factor negativo de esta liberalización en el transporte se encontraba en la congestión del espacio aéreo y en la saturación de los aeropuertos principales. Era previsible que el carácter mundial del transporte aéreo tendiera a la conformación de auténticas compañías multinacionales capaces de cubrir todo el mundo.

9.1.9 Fusión para Iberia y problemas en el transporte aéreo regional

La propuesta lanzada por el presidente de Iberia, Narcís Andreu, proponiendo una unión entre Iberia, la compañía alemana Lufhansa y la francesa

⁶⁸ *La Vanguardia*, 1.6.89

⁶⁹ Por ejemplo, el ingeniero aeronáutico Arturo Benido debate este asunto en el editorial que *La Economía* publica el día 3 de mayo (“Liberalización del transporte aéreo en la Europa Comunitaria”)

Air France no era el primer movimiento en este terreno. Con importantes mercados internos, las tres compañías ya colaboraron en ambiciosos proyectos.

Así, por ejemplo, el editorial de *La Vanguardia* (“Iberia toma posiciones”) hace referencia a las llamadas “zonas neutrales” (servicios comunes que pueden contribuir a mejorar el nivel de ocupación y abaratar los importantes costes de mantenimiento de las flotas). Para *La Vanguardia*, la fusión propuesta por Andreu resultaba ser “la mejor de las combinaciones”⁷⁰.

La mayor preocupación del presidente de Iberia estaba en adivinar el futuro de la aviación europea después del 1 de enero de 1993. Andreu estaba convencido de que en el plazo de 5 o 10 años “sólo existirán dos o tres compañías aéreas globales”.

Con la fusión se constituía la compañía aérea de mayores dimensiones del mundo, con un mercado de 160 millones de personas y un potencial de 70 millones de pasajeros/año (es decir, un 60% del mercado europeo).

El Ministro de Industria, Claudio Aranzadi, era partidario de la modificación de la actual estructura accionarial de la compañía Iberia ligada a los planes de cooperación con otras empresas europeas.

Iniciada la toma de posiciones de las grandes compañías aéreas europeas, el siguiente paso era la creación de los ‘megacarrier’; resultaba menos difícil un intercambio de acciones que una fusión de compañías.

La compañía British Airways aparecía como el gran competidor en el futuro europeo. *El País* titulaba con fecha 6 de junio: “Acuerdo hispano-británico para liberalizar el transporte aéreo regional de la CE”. España y el Reino Unido

⁷⁰ *La Vanguardia*, 1.6.89.

acordaron desbloquear la liberalización del transporte aéreo regional en la Comunidad, que el Estatuto del aeropuerto de Gibraltar impedía sacar adelante. El compromiso bilateral se firmó durante la visita que efectuó a Londres el Director General de Europa, Fermín Celada.

El proceso de concentración a través de fusiones y adquisiciones se había realizado anteriormente en Estados Unidos, donde las compañías aéreas habían quedado limitadas a cinco. A finales de 1987 los Doce dieron luz verde a la primera fase de la desregulación de la aviación comercial en Europa.

Aunque el Gobierno español fue favorable al impulso de los aeropuertos de segunda clase, tampoco descartaba que la inclusión de Gibraltar en la directiva significara un reconocimiento implícito de la soberanía británica sobre la colonia.

Así, y después de varias negociaciones, España y el Reino Unido llegaron a un compromiso ante la negativa del Gobierno gibraltareño de otorgar un “trato aduanero especial” a los pasajeros que transitaran por el aeropuerto del Peñón con destino a la Península (*El País*, 6.6.89).

En el último Consejo de Ministros de transportes del 6 de Junio se concretó una cláusula por la cual no se tenía que aplicar la directiva de liberalización del transporte aéreo regional al aeropuerto de Gibraltar hasta que el acuerdo bilateral hispano-británico no entrara en vigor.

Con el fin de intentar remediar la saturación del tráfico aéreo, también se planteó en Luxemburgo la creación de un centro único de control europeo. Entre las medidas adoptadas, los ministros hicieron un llamamiento para la integración en “Eurocontrol” de España, Italia y Dinamarca⁷¹.

⁷¹ *El País*, 6.6.89

La caótica situación del transporte aéreo podía mejorar con la adopción de un sistema de control centralizado. El tercer paquete de medidas destinadas a liberalizar el sector no se aprobaría antes del verano de 1992. La Comisión trabajaba en ese proyecto, en estrecha colaboración con “Eurocontrol” y la Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC).

9.1.10 Crisis en el sector naviero

En el periodo que analizamos, una tercera parte de los intercambios entre países comunitarios, y el 90% de su comercio con el resto del mundo se realizaba por mar. Sin embargo, el tonelaje de la flota comunitaria se había reducido un 50% entre 1980 y 1988, debido fundamentalmente a la prolongada recesión del comercio mundial, a la pérdida de la ventaja comparativa que este sector disfrutaba antaño y a las prácticas proteccionistas de terceros países.

Por esta, la Comunidad perseguía esencialmente la libertad de servicios y acceso al tráfico transoceánico para todos los operadores comunitarios, y la libre prestación al tráfico existente en el interior de los Estados miembros (cabotaje marítimo). Otro motivo de interés residió en la lucha contra las prácticas tarifarias desleales.

Con una flota mercante que ocupaba el sexto lugar de Europa, España era uno de los países más afectados por la caída del mercado de fletes, con una pérdida de la mitad de su capacidad en 1984. La CE pretendía recuperar la rentabilidad de un sector que había perdido en los últimos años la mitad de su tonelaje y el 45% del empleo.

Así, con el proyecto de una nueva directiva, la Comisión deseaba sentar las condiciones que permitieran competir a la marina mercante en 1992 (cuando el transporte marítimo estuviese totalmente liberalizado). Con anterioridad, el Consejo aprobó (1986) los Reglamentos 4055/86, 4056/86, 4057/86 y 4058/86

relativos a la libre prestación de servicios y competencia, prácticas arancelarias desleales y acceso al tráfico transoceánico marítimo.

Como acabamos de apuntar, nuestro país era uno de los más afectados: De 1984 a 1988 su flota había pasado de 6,3 millones de toneladas a 3,3 millones. Se habían perdido miles de puestos de trabajo y la deuda de las empresas con el BCI (Banco de Crédito Industrial) ascendía aproximadamente a unos 15.000 millones de pesetas.

De igual modo, también se pensó en un Registro y de un Pabellón comunitario, similares a los de los Estados miembros. Los buques así matriculados disfrutarían de ciertas ventajas, especialmente en el cabotaje. Cuando toco el turno a la Presidencia española, no hubo unanimidad entre los Doce para crear un “registro europeo”. Algunos países, entre los que se encontraba España, opinaban que era más fácil adaptar las legislaciones nacionales que imponer un régimen uniforme para todos.⁷²

En lo que sí estaban de acuerdo los ministros comunitarios del Transporte era en calificar de “muy crítica” la situación de la flota mercante europea frente a los fletes, mucho más baratos, del Japón y Corea del Sur.

En el Consejo de Ministros de Transportes que se celebró en La Manga (febrero), se estudiaron las medidas sociales, fiscales y técnicas para reducir los costes del sector. Fue en este Consejo Informal, donde los ministros mostraron su conformidad para la futura creación de un registro que abanderara a las compañías navieras comunitarias.

A primeros de mayo se suscribió un acuerdo entre la Administración, los empresarios y los sindicatos para poner en marcha distintas medidas contra la

⁷² *Diario 16*, 17.2.89.

crisis. Según fuentes del Ministerio de Transportes, las actuaciones iban dirigidas a la reforma de la legislación del sector y las enseñanzas profesionales, a la seguridad marítima y a los planes de viabilidad que presentaron las navieras. El acuerdo propiciaba el desarrollo de las “medidas positivas” que se debatían en la CE para el apoyo a la flota comunitaria. Se trataba, en definitiva, de contrarrestar la fuerte competencia de los buques que navegaban con “banderas de conveniencia” (*Expansión*, 4.5.89).

9.1.11 Un nuevo Registro comunitario

El último día de mayo la Comisión daba un primer paso importante hacia la realización del mercado único marítimo, al adoptar la propuesta del Comisario Karel Van Miert para crear un “Registro comunitario”.

El órgano Ejecutivo europeo confirmaba también la apertura del cabotaje a los navíos con bandera comunitaria de “menos de 6.000 toneladas de registro bruto” (*La Economía*, 1.6.89).

A partir de ese momento, los barcos de la CE iban a llevar, junto al propio de cada Estado miembro, el pabellón comunitario de doce estrellas. En rueda de prensa, el comisario anunciaba que el nuevo registro se denominaría “Euros”.

Los propietarios del buque, todos los oficiales y la mitad de la tripulación debían “ser ciudadanos de algunos de los países miembros de la CE” y los navíos tenían que acreditar “normas técnicas y de seguridad muy elevadas”. El acceso al cabotaje (tráfico marítimo en las costas) se reservaba al pabellón de los Doce según manifestaciones del comisario de Transportes Van Miert.⁷³

Desde el sector naviero la respuesta a las soluciones que planteaba la Comisión fue inmediata. La Asociación de Navieros Españoles (ANAVE)

manifestó su oposición al paquete de medidas sobre tráfico marítimo aprobadas por la Comisión para su paso al Consejo del día 5 de junio. El director general de ANAVE, Fernando Casas Blanco, las calificó de “grave amenaza para la supervivencia de la flota mercante española (...).Son totalmente ineficaces para lograr los objetivos fijados inicialmente de equilibrar la desventaja que sufrimos con unos mayores costes sociales y con el tratamiento fiscal y técnico al que debemos someternos” (*Cinco Días*, 3.6.89)

En relación con la liberalización del cabotaje, los navieros españoles denunciaron la eliminación de los períodos transitorios. España tenía que hacer frente a esta liberalización sin pasar por la mejora de la competitividad en el sector.

También esta Asociación mostraba su disconformidad con el establecimiento de un Registro comunitario. Casas Blanco criticó duramente esta medida, y confirmó (*Cinco Días*) que un doble registro no mejoraba las condiciones de explotación, y que en la práctica “es una forma de suprimir de forma inmediata la reserva de tráficos de cabotaje” (*Cinco Días*, 3.6.89).

Desde esta Asociación se echaba en falta por parte del Gobierno español, medidas urgentes de cara a la reestructuración del sector y, en este sentido, fueron numerosas las presiones de ANAVE ante el Ministerio de Transportes ⁷⁴.

Así, tras el Consejo de Ministros de Transportes de la CE debatido en junio, los Doce acordaron un plan de ayudas de CE para el sector marítimo, y decidieron crear un grupo de trabajo que analizara el conjunto de medidas para la mejora de la competitividad.

⁷³ *La Economía*, 1.6.89

⁷⁴ En países como Francia, Italia y Holanda, el Estado devuelve a las compañías la totalidad o parte de las cargas sociales abonadas por éstas. En otros, como el Reino Unido y Bélgica, el Gobierno establecía la extraterritorialidad del propio pabellón creando un registro especial.

Veamos lo que publicaba la prensa. *El País*: “Los Ministros de Transportes acuerdan la creación de un pabellón marítimo de la CE”. (6.6.89) En este proyecto⁷⁵ sobre libre prestación de servicios, la creación de un pabellón comunitario y la inscripción de buques en el futuro “registro Euros” sería opcional para los barcos de menos de 6000 toneladas, según indicó el responsable de la política comunitaria de transportes Karel van Miert.

Una vez concluido el Consejo de Ministros de Pesca, José Barrionuevo no dudó en reconocer ante la opinión pública que el “plan de ayudas” para el sector marítimo constituía “un primer paso” para el futuro desarrollo de la flota comunitaria (*El País*, 6.6.89)

⁷⁵ Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación del principio de la libre prestación de servicios a los transportes marítimos en el interior de los Estados miembros.

9.2 Industria y Energía.

9.2.1 El sector energético e industrial ante el Mercado Único

Uno de los principales planteamientos prioritarios de la Presidencia española fue promover el proceso de colaboración industrial entre empresas europeas. Afectaba muy directamente a la cooperación tecnológica, la competencia, los avances en una normativa común para sociedades o el apoyo a sectores como la microelectrónica.

Desde el Ministerio de Industria y Energía se pretendía también avanzar en el mercado común de la Energía; y esto implicaba la realización de estudios sobre aspectos tan importantes como la transparencia de precios y costes. En una entrevista, el ministro de Industria y Energía, Claudio Aranzadi, declaró que en el sector energético las iniciativas debían “ser adoptadas después de un cuidadoso análisis técnico”⁷⁶.

El 2 de febrero, el ministro Aranzadi presentaba en Bruselas, ante la Comisión de Asuntos Económicos y de Política Industrial del Parlamento Europeo los objetivos básicos de la Presidencia española. El reforzamiento de la política de las pequeñas y medianas empresas que se venía aplicando en la Comunidad y el desarrollo de la cooperación industrial constituían los ejes básicos de la política industrial durante este periodo presidencial.⁷⁷

La nueva política diseñada, de cara a 1992, iba a afectar de una u otra forma a la industria española. El Ministerio de Industria, a través del Centro de Desarrollo Industrial, la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología

⁷⁶ *Diario 16*, 26.2.89.

y la Dirección General de Nuevas Tecnologías anunciaba una inversión de más de 20.000 millones de pesetas en la promoción tecnológica de las industrias españolas.

La entrada de España en la CE en 1986 coincidió con una recuperación económica de la demanda industrial. En un conjunto muy amplio de sectores las importaciones crecieron de forma rápida, resultando un saldo del comercio exterior crecientemente negativo⁷⁸.

Así, diversos actos puntuales relacionados con la industria se recogieron en distintos medios periodísticos. En la clausura de las “Jornadas sobre calidad industrial de la Europa del 92”, el director general de Nuevas Tecnologías, José Luis Bozal, expuso que, junto a los planes sectoriales, la Ley de Incentivos y de Desarrollo Industrial actuaba con la pretensión de promocionar las inversiones industriales en las regiones menos favorecidas⁷⁹.

El nuevo diseño de la estrategia industrial no podía basarse sólo en la potenciación de los sectores tecnológicamente más avanzados. La demanda industrial evolucionaba favorablemente en sectores como la informática, electrónica, química..., en detrimento de aquellos sectores caracterizados por una demanda débil: siderurgia, textil, calzado, etc.

Aunque en términos de costes laborales, la industria española llevaba ventaja sobre la CE. Pero su competitividad no podía basarse en el supuesto de que sus costes laborales permanecieran a un nivel inferior a los de la Comunidad y, además, la importancia de las grandes empresas en la industria española

⁷⁷ *El País*, 3.2.89.

⁷⁸ “La industria española en el horizonte de 1992” *La Economía*, 4.4.890

⁷⁹ El Centro de Desarrollo Tecnológico y el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa funcionaban, igualmente, con finalidades inversoras en las regiones con mayores desequilibrios.

ocupaba “las escalas inferiores, junto con Italia, Portugal e Irlanda, del ranking de los países de la CE” (*La Economía*, 4.4.89).

En nuestro análisis se han extraído artículos significativos, entrevistas e informaciones publicados antes de celebrarse el primer Consejo de Industria del periodo presidencial español, donde se detecta la evolución de algunos sectores.

Las informaciones de política industrial y energética aparecen con más asiduidad en las secciones de economía y su contenido, aunque se relaciona directamente con la política comunitaria, tiene una vertiente nacional. Por ejemplo, cuando *Abc* habla de la “era comercial” de los derechos de patentes y propiedad intelectual, su enfoque tiende a medir las consecuencias que para nuestro país puede acarrear la armonización interna con los reglamentos sobre licencia de patentes que impulsa la CE.

Los primeros conflictos saltan a la prensa en el mes de enero, cuando la Asociación Europea de Industrias Textiles y Confección señalaba que la CE podría aceptar una eventual desaparición del Acuerdo Multifibras (AMF). La queja de los productores textiles se debía a que las industrias europeas, con tecnologías más avanzadas que las de EEUU y Japón, perdían cuotas de mercado en los países de la CE a causa de la competencia desleal ejercida por ciertos países en vías de desarrollo. La Asociación señaló entonces que, mientras no existiera una auténtica reciprocidad, preferían mantener como norma el acuerdo Multifibras⁸⁰.

⁸⁰ El sector textil-confección empleaba en 1989 3 millones de personas en la CEE y disponía de una cifra de negocios de 145.000 millones de ECU (159.500 dólares).

9.2.2 El gaseoducto del Magreb

Por otra parte, los obstáculos en el sector petrolero ante el Mercado Único procedían del enfrentamiento entre los intereses nacionales, empresariales y comunitarios. Como sector estratégico en la economía de los países miembros, caracterizado por la gran intervención estatal, cualquier propuesta de la Comisión afectaba de forma marcada y diferente a cada uno de los países de la CE⁸¹

Otro acontecimiento de gran transcendencia se centró en el pacto para la construcción del gasoducto entre Argelia, Marruecos y Europa. Según el editorial publicado en *Diario 16* (“El gas de la oportunidad”), no sólo era impensable que España estuviera ajena a ese proceso, sino que resultaba evidente que su participación activa en el proyecto del gaseoducto, le iba a otorgar “un puesto ventajoso en una carrera de acercamiento al Magreb” (*Diario 16*, 22.2.89).

Todo confirmaba que la CE a medio y largo plazo precisaría de una diversificación de fuentes energéticas y, de ahí, la importancia que rodeaba al proyecto. Para España, además, existía otra consideración de peso histórico a la hora de valorar la repercusión del pacto: la oportunidad de solución del contencioso saharauí, que la nueva andadura argelino-marroquí planteaba⁸².

9.2.3 La industria automovilística

Uno de los sectores que por su carácter internacionalista se vería directamente afectado por la implantación del Mercado Único era el automovilístico. Las diferentes políticas administrativas permitían prácticas comerciales calificadas de “poco comunitarias”.

⁸¹ *Cinco Días*, 7.1.89. “Petróleo: Obstáculos ante la integración”.

⁸² *Diario 16*, 22.2.89.

En este campo, se había hecho público un estudio elaborado por centros técnicos y regionales procedentes de seis países comunitarios⁸³, en el que se comparaba el precio de 210 modelos de coches. También, en el documento se advertía que el valor de éstos en España superaba en un 20% y hasta en un 40% al del resto de los países comunitarios. El Estudio sobre el mercado automovilístico describía la situación por la que atravesaba el sector y también, el papel de la Comisión frente a las trabas fiscales impuestas por varios países.

Para el director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Camiones, Tractores y sus Motores (ANFAC), Enrique Fernández Laguillo, el mercado europeo del automóvil estaba todavía lejos de ser único y transparente. Por ello, la adaptación española debería realizarse en “paralelo”, progresando acompasadamente “en los aspectos negativos, como el incremento de las importaciones, y en los positivos, como la reducción del IVA” (“Un mercado contaminado” *El País*, 5.3.89)

La Comunidad Europea era el primer productor mundial de vehículos, con 13 millones de unidades. Según datos de Commerzbank, entidad financiera de la RFA, la CE ocupaba el primer lugar en la producción mundial de automóviles con los 13 millones de unidades fabricados durante 1988, seguida por EEUU con 12 millones de unidades y de Japón (9 millones).

Durante el año anterior la producción española de automóviles había ascendido a 1.866.464 vehículos, cifra que representaba el 13,8% de la producción total comunitaria. El estudio llevado a cabo por los técnicos del Commerzbank indicaba entre sus conclusiones más relevantes, que el Mercado

⁸³ En el que por parte española participaron la Agencia Regional del Consumo de Asturias y el Instituto Catalán del Consumo.

Único Europeo plantearía un doble reto a las compañías europeas: el descenso de los costes de producción y la necesaria modernización de las industrias⁸⁴.

La nueva legislación que promulgó el Parlamento Europeo, reguladora del escape de gases de los motores de vehículos utilitarios, trascendió a las páginas de los diarios por su gran impacto en la industria automovilística. Los utilitarios fabricados en Francia, Italia, España y en gran parte de Gran Bretaña no estaban provistos de los filtros catalíticos necesarios para reducir la contaminación, como recomendaban las estrictas reglas ecológicas vigentes en EE.UU y Japón. Cuando el Parlamento decidió adoptar con urgencia las reglas obligatorias para la fabricación de utilitarios, surgió una gran batalla de procedimiento en los complejos mecanismos institucionales de la CE⁸⁵.

La medida afectaba a corto plazo a la industria del automóvil en España. Por una parte, eran cuatro, los Estados miembros que estaban en contra de la decisión del Parlamento: España, Reino Unido, Francia e Italia. La adaptación de su industria automovilística se estaba realizando progresivamente.

En el otro extremo, estaban los países partidarios de las nuevas reglas: Holanda, Alemania Federal, Grecia y Dinamarca, bien porque sus coches ya se fabricaban con ese filtro o bien porque carecían de una sólida industria automovilística.

Al terminar la Presidencia española, la prensa se hizo eco de algunas innovaciones directamente relacionadas con la apertura al mercado automovilístico japonés. Como la Comisión se pronunció a favor de la supresión de los cupos nacionales a las importaciones japonesas, se abrió el primer debate importante sobre el futuro de este sector y sobre el acceso de los japoneses al Mercado Único.

⁸⁴ *La Vanguardia*, 29.3.89.

Desde el mismo instante en que Bruselas defendió dicha postura, se solicitó a España, Francia, Portugal, Gran Bretaña e Irlanda la supresión de los cupos a la importación japonesa. De efectuarse esta medida, los dos ajustes necesarios para la apertura del mercado automovilístico iban a quedar definidos, primero, en un régimen de transición para los países que aplicaban cuotas y, en segundo lugar, en el compromiso japonés a la hora de limitar sus ventas durante cinco o seis años⁸⁶.

Conviene destacar, en el caso de España que su ingreso en la CE ocasionó una entrada masiva de automóviles importados. El hecho de que nuestros coches fueran un 20% más caros, se debía a la elevada fiscalidad -un 33% de IVA frente al 14% de Alemania-. En lo que sí coincidían los políticos comunitarios era en la determinación de las barreras que impedían el libre mercado automovilístico: los aranceles, el IVA y la maquinaria burocrática.. Por este motivo desde la Comisión⁸⁷ se aclamaba una estrategia liberal en la industria del automovil.

Los constructores estaban dispuestos a aceptar el principio de una política comercial liberal en el marco del GATT y también defenderían la desaparición progresiva de las restricciones a Japón para 1992. El boletín informativo de la Comisión Europea, *Newsletter*, publicó la nueva normativa para la importación de vehículos nuevos y de segunda mano. En este sentido, ningún Estado podía oponerse a la homologación de un coche a la vez homologado y existente en otro Estado⁸⁸.

Cabe añadir que, en el sector del automóvil, se abordaron dos casos singulares que afectaban a las marcas italiana y francesa, Alfa Romeo y Renault.

⁸⁵ *Abc*, 17.4.89.

⁸⁶ *La Economía*, 1.6.89.

⁸⁷ Los comisarios defensores de esta estrategia liberal fueron Martin Bangemann y Frans Andriessen (*La Economía*, 1.6.89)

⁸⁸ *La Vanguardia*, 12.6.89

La Comisión denunció como ilegales las ayudas del Estado (con 615.000 liras) antes de la compra de esta firma por la empresa Fiat.

Cuando Bruselas notificó a la compañía Fiat la inmediata devolución de las subvenciones estatales, esta firma negó su responsabilidad directa en la falta de fondos de Alfa Romero y aseguró que Finmeccanica⁸⁹ era la responsable de todas las deudas contraídas por Alfa Romero. Se trataba de una de las mayores cantidades reclamadas por la Comisión, y el comisario de la Competencia, Leon Brittan, adoptó la decisión después de dos intensos años de investigación.

En el caso francés, las ayudas del Estado eran para Renault; el ministro de Industria, Roger Fauroux, quiso convencer a la Comisión para que autorizara un préstamo de 240.000 millones de ptas. Se destacó informativamente la petición del comisario Leon Brittan, que hablaba de crear un órgano de seguimiento en el seno de la empresa para conocer exactamente el Plan de Reestructuración de Renault⁹⁰.

9.2.4 El Programa *Sprint* y la reestructuración de la siderurgia

Los responsables de Industria de los Doce, bajo la Presidencia de Claudio Aranzadi comenzaron sus trabajos con la discusión del Programa Estratégico para la Innovación y la Transferencia de Tecnología (SPRINT) e iniciaron el debate con la puesta en marcha de su fase principal.

En el Consejo de ministros de Industria y Energía (6 de marzo) se asignó a este Programa una dotación de 90 millones de ecus; de los cuales, unos 50 millones irían a proyectos para la infraestructura de servicios para la información -principalmente en regiones atrasadas o en declive industrial-. El resto, se

⁸⁹ La empresa Finmeccanica traspasó en 1987 Alfa Romeo a Fiat, después de rechazar una oferta de la firma estadounidense Ford (*La Economía*, 27.5.89)

⁹⁰ *Cinco Días*, 30.5.89.

destinaría a programas específicos de transferencia de innovaciones entre los Estados miembros.

Por otra parte, en la misma sesión se aprobaron las ayudas en favor de los trabajadores afectados por la reestructuración de la siderurgia. El programa contó con 150 millones de ECUS para el periodo 88-90; de estos 150 millones, 110 serían aportados por las reservas internas de la CECA y los 40 millones restantes debían ser transferidos del Presupuesto general comunitario. De hecho, para la concesión de estas ayudas, se solicitó un informe detallado al Tribunal de Cuentas sobre el estado real de las reservas de la CECA.

Como otros sectores, éste había procedido a una readaptación de sus estrategias⁹¹. El ministro Aranzadi así lo confirmaba cuando declaraba a la prensa que se procedía a esa readaptación con estructuras más flexibles, por medio de la “externalización de algunas actividades empresariales”. Los mismos empresarios europeos mostraban su optimismo frente al futuro, y aunque las nuevas tecnologías irrumpían con fuerza, esta circunstancia no suponía una condena a los sectores industriales tradicionales.

Ocurría que en los últimos años la producción siderúrgica europea había alcanzado cotas superiores a las demandadas por la industria. Esta era una de las razones por lo que algunos Estados se vieron obligados a subvencionar a la industria, para evitar el futuro cierre de instalaciones.

El 8 de marzo, la Comisión definía el Programa de Previsiones del Sector del Acero para el segundo trimestre de 1989⁹². Por lo que al empleo se refiere, la

⁹¹ Informe sobre la Industria de la C.E.E. Ministerio de Industria y Energía. Madrid, 1989.

⁹² En 1989 la Comisión prevé una producción de acero bruto de 35 millones de toneladas; un consumo aparente de 31,5 millones de toneladas; exportaciones de 6 millones de toneladas, e importaciones de 2,5 millones de toneladas

tendencia a la reducción del personal observada en 1988 debería continuar, si bien, a un ritmo considerablemente más lento.

Los objetivos de la Comisión estipulaban la creación de un nuevo mercado del acero, mucho más liberalizado y, en general, desde sus planteamientos se tendía a consolidar una industria siderúrgica menos reglamentaria de cara a 1995. A tal fin, se reunió en San Sebastián el Comité Ejecutivo de Investigación de la CECA, con el único objetivo de examinar el desarrollo de este mercado. Habitualmente este Comité se encargaba de estudiar los proyectos licitadores de subvenciones; también, efectuaba un seguimiento de aquellos programas que ya habían sido aceptados, para averiguar si cumplían las cláusulas establecidas⁹³.

Tras lo anteriormente expuesto, puede reseñarse en este epígrafe el escaso relieve informativo de la industria minera. El 17 de mayo la Comisión enviaba al Consejo un Memorándum sobre la minería en la CE. Se aconseja profundizar y ampliar la acción comunitaria en este campo. La propuesta de relanzamiento de la minería incluía, en primer lugar, que la producción minera sólo cubría el 25% de las necesidades de mercado y, además, reseñaba los principales problemas de la minería: falta de conocimientos sobre los recursos, inseguridad jurídica en cuanto a los derechos ulteriores de explotación y escasez de incentivos fiscales.

En lo que respecta a la industria del carbón, la Dirección General de la Energía de la CE diseñó el Programa "Rechar" con la finalidad de llegar a reducir la producción de carbón en la CE⁹⁴. En el Informe se anunciaba que sólo eran rentables 100 millones de toneladas de carbón, por lo que un total de 200.000 mineros podían perder su puesto de trabajo. En el marco diseñado por dicho Programa, España era el país más afectado de las cinco naciones productoras debido a una deficiente reconversión del sector carbonero.

⁹³ *La Economía*, 3.6.89.

En el Programa “Rechar” se fijaban una serie de líneas de actuación que en el plazo de 5 años, iban a modernizar y racionalizar el sector, con la siguiente disminución de las ayudas estatales.

En realidad, el papel de la economía minera sufrió una modificación profunda con el ingreso de Grecia, España y Portugal (países que gozaban de buenas perspectivas de futuro). Sin embargo, este nuevo perfil contrastaba con la situación de otros Estados miembros donde se preveía un “declive” del sector. Parecía estar condenado a desempeñar un papel marginal en el abastecimiento de la CE.

9.2.5 Reunión en San Sebastián de los ministros de Industria

En San Sebastián acudieron los responsables de Industria de la CE para trabajar en campos tan dispares como la transferencia tecnológica, la TV de Alta Definición, la política energética y el apoyo a la mediana y pequeña empresa (*Abc*, 3.4.89).

Esta reunión sirvió de preparación ante el próximo Consejo de Ministros de Industria previsto para el mes de mayo. Los ministros trataron de fomentar, entre otros temas, los planes nacionales de investigación. Entonces la Comisión ofreció su apoyo a los programas *Esprit* o *Race* en el campo de la tecnología de la información y la comunicación.

Al encuentro en la capital donostiarra acudieron, junto a los doce ministros comunitarios, tres vicepresidentes de la Comisión Europea: Martín Bangemann, responsable de Asuntos Industriales, Mercado Interior y Relaciones con el Parlamento; Leon Brittan, responsable de la política de la Competencia e Instituciones financieras; Filippo María Pandolfi, responsable de Ciencia, Investigación y Desarrollo, Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, así como

⁹⁴ *Cinco Días*, 9.6.89.

el comisario Antonio Cardoso e Cunha, responsable de Pymes, Energía, Comercio y Turismo y Economía Social.

Según el informe elaborado por la Comisión, figuraba entre los objetivos más básicos de la reunión el fortalecimiento de la tecnología. En dicho contexto, la CE contaba con el Programa Marco para la Investigación (1987-1991)⁹⁵.

El otro gran campo de actuación se refería a las pequeñas y medianas empresas y, para una información más eficaz de las mismas, la Comisión preparaba la ampliación del proyecto "Infocentros CE".

En esta ocasión, los diarios reproducen las declaraciones del ministro de Industria, Claudio Aranzadi, apuntando los objetivos que se iban a abordar en el Consejo Informal de San Sebastián. En *Abc* y *La Gaceta* (7 de marzo), el ministro declaró su "optimismo" ante el Mercado Único. En este Consejo Informal se iban a tratar temas como la cooperación industrial entre empresas europeas, el apoyo a determinados sectores estratégicos y la política de la pequeña y mediana empresa en Europa.

Las consecuencias para la industria que iban a derivarse de este encuentro son analizadas por otros diarios. En *Expansión* (7.4.89), se informó detalladamente de todo lo que rodeaba al mundo empresarial y sus titulares recordaron el "riesgo" que suponía las grandes fusiones para la empresa pública. *La Economía*, por el contrario, recoge unas declaraciones de Aranzadi en las que defiende las concentraciones de empresas.

La Vanguardia también revisa el mundo empresarial y en el siguiente titular, vemos que destaca el programa de los responsables comunitarios: "Los

⁹⁵ El programa marco, adoptado en septiembre de 1987, con un 90% de programas remitidos al Consejo y la mitad adoptados (*Abc*, 3.4.89).

Doce debaten en San Sebastián las normas comunitarias para las fusiones de empresas” (*La Vanguardia*, 7.4.89).

Por último, la especial atención que dedica *Diario 16* al encuentro de San Sebastián incluye unas declaraciones del ministro de Industria, en las que reconoce el importante papel de la industria en el País Vasco: “Euskadi es una zona de larga tradición industrial y lógicamente, era un sitio muy adecuado para la celebración de un Consejo de Ministros de Industria”.⁹⁶

9.2.6 Ayudas para las empresas MTM y ATEINSA

El Ejecutivo comunitario autorizó la concesión de ayudas estatales por valor de 25.000 millones a las empresas La Maquinista Terrestre y Marítima (MTM) y ATEINSA. La Comisión dio luz verde a la prestación de estas ayudas por parte del Gobierno porque el Plan de Reestructuración de las citadas empresas era válido en sus planteamientos. Cabe añadir además que, para mayor tranquilidad de la Comisión, tras la adjudicación de los Trenes de Alta Velocidad a la compañía Alsthom, ésta anunció su compromiso de hacerse cargo de MTM y ATEINSA, una vez saldadas sus deudas.

Diario 16 dejó constancia del informe favorable que presentó el comisario de la Competencia, Leon Brittan, en el que se argumentaba que la operación estaba “conforme con las normas comunitarias sobre competencia”⁹⁷. Algunos medios fueron más lejos; *El País* calificó de “contrato del siglo” la venta programada de Ateinsa y MTM. Los beneficios de este contrato servirían para suministrar material ferroviario a Renfe y para la construcción del Tren de Alta Velocidad en España⁹⁸.

⁹⁶ *Diario 16*, 9.4.89.

⁹⁷ *Diario 16*, 27.4.89.

⁹⁸ *El País*, 27.4.89.

En el panorama industrial español irrumpía una novedad importante que afectaba directamente a las exportaciones industriales a los países de la CE y de la EFTA : desde el 1 de julio las mercancías iban a poder aplicar el arancel cero. La medida supondría un ahorro para las empresas españolas de 76.000 millones de pesetas.

No dudó la prensa económica en abordar el tema y, por ejemplo, en *La Economía*, Cristina Buhigas justifica que la decisión se tomó por la “mala marcha de la balanza española con el resto de la Comunidad”. Con este sistema denominado de “preferencia arancelaria” ningún país tercero podía dar a un Estado comunitario un trato mejor que al resto de los Doce.

En este sentido hay que señalar que España terminaba su periodo transitorio para la unión aduanera el 1 de enero de 1993 y con la desaparición de los aranceles industriales, sólo las exportaciones pesqueras y agrícolas tenían que continuar pagando aranceles.

9.2.7 Transparencia en los precios energéticos

La mayor atención se centró en el sector energético y la política que defendía la “transparencia de los precios”. Efectivamente, asistimos a un amplio despliegue informativo en el que se evaluaban aspectos tan importantes como el futuro mercado interior de la energía, su papel fundamental como sector, los objetivos del Consejo Europeo y los costes de la política energética⁹⁹.

Sin duda, el acceso a las energías primarias no se realizaba en condiciones de igualdad para las empresas de los distintos países (obligatoriedad de consumos autóctonos, ayudas estatales a determinados combustibles..). Así, la electricidad constituía un ejemplo básico de divergencia entre los países comunitarios. Por

⁹⁹ Véase el “Especial energía” que el diario *YA* publicó el 28 de mayo.

este motivo uno de los objetivos principales de nuestra Presidencia era el de iniciar el proceso de construcción del Mercado Común Energético.

En el mundo empresarial se barajaban diversas hipótesis sobre el tema. Eleuterio Gómez, responsable de Fenosa, opinaba que la causa de las diferencias en los costes venía de la existencia de fuertes monopolios que “limitaban la libertad en el campo de los combustibles nucleares para su aprovechamiento en centrales eléctricas” (*Ya*, 28.5.89).

Por otra parte, otros motivos de encarecimientos diferenciales se centraban en las exigencias de seguridad y medio ambiente, así como en la fiscalidad.

Fernando Ybarra, presidente de la Compañía Sevillana de Electricidad, S.A., resumía en un artículo¹⁰⁰ los principales objetivos presentados al Consejo Europeo por la Comisión de Energía, y que podían resumirse en la disminución del coste de acceso a la electricidad, la mayor seguridad de abastecimiento e incremento de los intercambios y la diversificación de los combustibles y protección del medio ambiente, además de la cohesión social y económica.

En este Proyecto comunitario se trataba de aproximar a productores y consumidores con el fin de sentar las bases de una estricta competencia. Lograr la transparencia total de los precios de la electricidad practicados en los países de la CE se convertía en una importante meta.

Sobre esta cuestión, el presidente de la Compañía Sevillana de Electricidad dejaba claro que la transparencia de los precios sólo sería real cuando las políticas de reconocimiento de costes llegaran a homogeneizarse. Ybarra constataba en su artículo que, sin unos criterios similares en materia de costes, en el caso de la

¹⁰⁰ “Especial energía” (*Ya*, 28.5.89)

electricidad, asistiríamos a un manifiesto incumplimiento de las reglas de la libre competencia a que aspiraba el Acta Única.

9.2.8 El Plan Energético Nacional y el comercio transfronterizo de la electricidad

Durante este periodo, la política Energética vivía una etapa de especial tranquilidad desde el momento en que eran mínimas las tensiones externas capaces de modificar las líneas básicas establecidas en 1983. El Gobierno socialista marcó 5 grandes objetivos de política energética en el llamado Plan Energético Nacional 1983-1992, que resumimos en los siguientes puntos:

- Mejora de la utilización y producción de la energía.
- Mayor grado de autoabastecimiento, diversificación y seguridad en el suministro.
- Impulso de las energías renovables.
- Disminución de la dependencia del petróleo, potenciación del gas y aumento de la competitividad de los combustibles sólidos.

En 1989 estas líneas básicas del PEN comenzaron a desarrollarse aunque, en cierto modo, siempre existía la amenaza de un fuerte consumo eléctrico capaz de deformar las previsiones efectuadas desde el Gobierno.

Por otra parte, el comisario europeo de Energía, Antonio Cardoso, ante el Comité Nacional Suizo de Energía, quiso defender la liberalización progresiva del comercio transfronterizo de electricidad para garantizar un mayor grado de competitividad. El programa que proyectaba la Comisión exigía el reconocimiento conjunto de la CE del derecho de tránsito sobre las redes de transporte eléctrico de alta tensión¹⁰¹. En una segunda etapa, el objetivo

¹⁰¹ *Expansión*, 7.6.89.

consistiría en perseguir la optimización de las inversiones de producción hasta generalizar la obligación del transporte a terceros.

Es significativo reseñar que el comercio de electricidad entre los Doce representaba del 3 al 4 por ciento del consumo total. Todo, pese a que en Europa existían regiones con capacidades excedentarias pero que estaban infrautilizadas por la obstaculación del comercio intracomunitario. Por este motivo, la prensa recogió el conflicto con Francia motivado por la suspensión de la declaración de utilidad pública para el tramo galo de la línea¹⁰².

Para España, disponer de la conexión significaba poder recurrir a las compras de electricidad francesa y así, poder hacer frente a posibles emergencias. Hacía ya 15 años que se habían iniciado las negociaciones para la puesta en marcha de la interconexión y como resultado de las conversaciones, se presentó un Anteproyecto para el inicio de las obras.

Es curioso comprobar que en países como Francia, Italia, Irlanda, Portugal y Grecia se daba la propiedad individual de la red de alto voltaje, mientras que en el resto de las naciones de la CE, la propiedad era de carácter regional múltiple. Los sistemas europeos constituían monopolios de concesión, y la distribución de la electricidad a los consumidores corría a cargo de empresas públicas.

De igual modo hemos extraído algunos datos que nos revelan que una tercera parte de las energías primarias de la Comunidad se utilizaba en la producción de electricidad (un 16% del consumo energético final). Además, dentro de los países comunitarios, las estructuras de producción, distribución y transmisión de dicha energía, así como las formas de propiedad, eran de naturaleza muy variada. En el caso español, se contaba con compañías eléctricas

¹⁰² *Expansión*, 7.6.89

de propiedad no estatal, si bien su funcionamiento lo regulaban legislaciones muy estrictas.¹⁰³

9.2.9 Portugal denuncia irregularidades en el abastecimiento eléctrico.

Uno de los asuntos en el campo energético con amplia difusión en la prensa nacional fue el contencioso mantenido con Portugal por el paso de energía eléctrica a través de España a Portugal, procedente de Francia. El contencioso volvía a reabrirse con las duras acusaciones lanzadas desde Lisboa. Portugal denunció que España inventaba obstáculos técnicos para impedir el normal abastecimiento eléctrico de Portugal.

El debate sobre la creación de un Mercado Común de la Energía cobró mayores expectativas con la propuesta española elevada en el Consejo de Ministros de Energía celebrado en Bruselas, el 11 de mayo. Para la delegación española, la transparencia en los precios no podía limitarse al conocimiento y a su publicidad. La solución planteada pasaba por la creación de un sistema capaz de reservar la confidencialidad, extender dicha transparencia a las estructuras de costes y, por consiguiente, a la formación de precios y tarifas¹⁰⁴.

Francia era el principal país interesado en impulsar los intercambios eléctricos, pero a su vez, era el más reacio a establecer una estructura transparente de los costes energéticos.

Al finalizar el Consejo de Energía, el comisario del ramo, Antonio Cardoso, no dudó en afirmar que el “tren del Mercado Interior de la Energía” ya se encontraba en marcha, gracias al impulso político de los ministros (*La Economía*, 13.4.89). Desde el órgano Ejecutivo comunitario se buscaba el

¹⁰³ Las diez primeras compañías eléctricas españolas, Endesa, Hidrola, Iberduero, Unión Fenosa, Sevillana, Fecsa, Enher, Hidrocantábrico, ERZ y Viesgo facturaban, en 1989, 1,4 billones de pesetas (*Actualidad económica*, 22.5.89).

consenso de los distintos puntos de vista entre los ministros sobre transparencia de precios energéticos e intercambios. El texto del Consejo significó un primer paso en la resolución del contencioso, aunque los portugueses votaran en contra. Con esta determinación de Portugal no se logró alcanzar un consenso en el terreno de la libre circulación de la energía ¹⁰⁵.

El contencioso mantenido con Portugal centró la atención de los medios informativos. Portugal denunció los obstáculos técnicos que España imponía en su normal abastecimiento de energía eléctrica. Esta fricción entre Madrid y Lisboa se producía justamente en un momento delicado de las relaciones bilaterales entre ambos países.

Al abordarse este asunto en el Consejo de Energía del día 11, lo más inaceptable para Portugal se tradujo en el aumento de las tasas de la empresa Redesa. El Secretario de Estado para la Energía portugués, Ribeiro da Silva, acusó a España de “reabrir el conflicto energético”, porque ordenó triplicar las tasas que la empresa Redesa venía cobrando a Portugal (*Abc*, 18.4.89). *Expansión*, al respecto, informa que fue en el consejo de administración de la empresa eléctrica, donde se fijó el aumento de peaje, cuando franceses y portugueses firmaron un acuerdo por el que Francia vendería electricidad a Portugal a razón de 300 megavatios diarios durante 10 años a partir de 1993 ¹⁰⁶.

Como réplica a esta iniciativa Redesa presentó una propuesta alternativa sobre la utilización de la red eléctrica española. Así, *Diario 16* publicaba el siguiente titular: “España presentará tres opciones a Portugal y Francia para solucionar la guerra de energía” (14.5.89). Del contenido se desprende que los nuevos planteamientos de la empresa española contemplaban tres alternativas. La

¹⁰⁴ *Diario 16*, 12.5.89.

¹⁰⁵ *El País*, 12.5.89.

¹⁰⁶ *Expansión*, 11.5.89.

primera, consistía en la firma de un acuerdo bilateal entre España y Portugal, por el que nuestro país suministraba electricidad a la empresa lusa EDP.

La segunda alternativa, se refería al acuerdo mediante el cual España vendería electricidad a Portugal y a su vez, el suministro sería compensado por compras a la empresa francesa “Electricite de France”.

Por último, la opción tercera suponía el suministro directo de Francia a Portugal mediante unas líneas exclusivas de transporte, y Redesa sólo se limitaría a la aportación de la red.

Sin embargo, no hubo acuerdo entre las partes. El Gobierno francés sí aceptaba la segunda alternativa, pero Portugal era reticente al citado planteamiento, porque implicaba pérdida de soberanía ante la imposibilidad de disponer de unas líneas de transporte exclusivas. El conflicto, sin duda, tenía mucho que ver con el rechazo de España al libre tránsito (“common carrier”) dentro del mercado único de la energía, y el Estado portugués quería reducir su dependencia en el abastecimiento energético.

En el caso de que Portugal rechazase un convenio de compra directa de electricidad, se negociaría un Protocolo tripartito y asimétrico a largo plazo, con unos precios equivalentes a los ofertados por Francia en condiciones de mercado¹⁰⁷.

El 30 de mayo titulaba *Cinco Días*: “Los intercambios de electricidad con Portugal se instrumentarán mediante un acuerdo tripartito”. El Presidente de Red Eléctrica Española reveló que las negociaciones se hallaban en un punto bastante

¹⁰⁷ Había que evitar que España asumiera sólo el papel de transportista porque con ello no se conseguiría uno de los objetivos básicos marcados por nuestra Presidencia: La transparencia de los precios energéticos en la CE (*Expansión*, 23.5.89).

avanzado para que, con esa fórmula tripartita, se optimizaran los rendimientos energéticos sin necesidad de incrementar el precio de la electricidad a Portugal¹⁰⁸.

Fue *Expansión* el diario que más criticó la apatía del Gobierno: “A falta de decisiones políticas del Gobierno: España no bajará el precio de transporte de energía a Portugal”¹⁰⁹.

A primeros de junio, el Forum Energético se reunió en Barcelona para debatir la viabilidad del Mercado Único de la Energía. Europa continuaba siendo vulnerable, por su gran dependencia de las importaciones y por un aumento progresivo de la demanda. En este sentido, entre los objetivos previstos cobraba especial relevancia la disminución del coste de acceso a la energía, que representaba entre un 25% y 30% de los costes de producción de la industria europea.

En el Forum Energético se debatieron las diferencias en el modo de gravar las energías y el problema derivado del transporte energético de gas y electricidad. Los representantes que acudieron a esta reunión, no sólo aclamaron la necesidad de favorecer el tránsito energético por la CE, sino que también plantearon la posibilidad de mantener un elevado nivel de seguridad, tanto en el suministro como en el transporte.

Al término de esta reunión, la mayoría de los ponentes llegaron a la conclusión de que el sector eléctrico español no estaba preparado para afrontar a corto o medio plazo el Mercado Único. Los directivos de las principales compañías eléctricas españolas veían que la consecución de un Mercado Único

¹⁰⁸ El Protocolo de intercambio de energía eléctrica que sirvió de referencia al acuerdo, mantuvo su vigencia hasta el año 1988. En este Protocolo se daban una serie de condiciones técnicas y de precios, pero no se valoraban, por otra parte, los costes fijos de producción y la planificación de las necesidades de consumo (*Cinco Días*, 30.5.89).

¹⁰⁹ El presidente de la empresa eléctrica Redesa, Jorge Fabra, defendía acuerdos individuales entre Francia, Portugal y España (*Expansión*, 30.5.89).

de la Energía podía convertirse en algo “utópico”¹¹⁰, por las dificultades que presentaba su integración.

Para el director general de “Unesa”, Pedro Rivero, el acuerdo político para unificar el mercado europeo se tomó en un momento de crisis energética y, por lo tanto había “voluntarismo político” en los plazos fijados¹¹¹. El presidente de “Iberduero”, Manuel Gómez de Pablos, aseguró entonces que el futuro mercado común representaba la aspiración de las empresas a entregar energía “de la mejor calidad, al menor precio allá donde se requiera”¹¹², afirmando que “todos tendremos que ir aceptando que el sector eléctrico es una realidad compartida a escala europea”.

La nacionalización de la red eléctrica española de alta tensión (primera operación realizada por el Gobierno socialista en este sentido) fue uno de los principales factores en la reestructuración de esta industria en España bajo condiciones de competitividad. REDESA explotaba una red de transporte de electricidad de 14.500 km¹¹³, al mismo tiempo, liberaba a las compañías de los importantes costes que conllevaba el mantenimiento de las líneas de transporte de energía¹¹⁴. El sistema eléctrico español realizó intercambios de energía eléctrica con Portugal por 600 millones de kilovatios/hora, según los datos facilitados por Red Eléctrica.

A pesar de estar suspendido el Protocolo firmado entre las autoridades responsables de este sector, los intercambios de energía eléctrica entre Francia, España y Portugal continuaban realizándose (*La Economía*, 5.6.89). Tampoco hay que olvidar que la mediación del Rey, tras su visita a Portugal en el mes de

¹¹⁰ *Expansión*, 9.6.89.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Nuevo Lunes*, 12.6.89.

¹¹³ *Ver Cinco Días*, 30.5.89.

¹¹⁴ El sistema eléctrico español realizó intercambios de energía con Portugal por 600 millones de kilovatios/hora, según datos de la empresa RED ELECTRICA, encargada de la optimización y control del sistema eléctrico español.

mayo, fue determinante para desbloquear el denominado “conflicto ibérico de la electricidad” (*Abc*, 7.6.89).

9.2.10 Otras fuentes energéticas en el panorama comunitario

En el sector petrolífero, el marco jurídico de la política energética trataba de adecuarse a las exigencias comunitarias. Las multinacionales del sector se introducían lentamente en nuestro país, en función del calendario que fijaba el Acta Única de Adhesión de España al Mercado Común.

La clave en la liberalización del sector podemos hallarla en el transporte de productos petrolíferos. Las multinacionales firmaron acuerdos con la principal accionista de la empresa española Campsa : Repsol.

En 1988 se liberalizó el comercio de gasolinas y gasóleos de automoción, y en enero de 1989, el de los aceites de base y lubricantes de automoción.

La importante dependencia del crudo intentó reducirse mediante la sustitución de productos petrolíferos por gas natural. El gas natural representaba en la Comunidad Europea el 18,7% del consumo energético primario. Su aprovisionamiento se situaba en el 65% de las necesidades. La unión de la red española con la europea mediante un gaseoducto aseguraba la estabilidad y seguridad del sistema gasista¹¹⁵

Entre las acciones encaminadas a mejorar la estabilidad y la seguridad del sistema gasista, se encontraba la unión de la red española con la europea mediante la construcción de un gaseoducto por la empresa ENAGAS. Con este proyecto, iniciado en 1985, se duplicaba la infraestructura de este mercado.

¹¹⁵ *La Economía* 5.6.89

En España, el Ministerio de Industria y Energía presentó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos el segundo Plan de Energías Renovables (PER) para el período 1989/1995. El Plan perseguía que los residuos forestales y agrícolas, los residuos sólidos urbanos, minihidráulica, etc. alcanzaran, en 1995, el 4,4% de la energía primaria en España.

Según el presidente de ENAGAS, Juan Badosa, fue a partir de la segunda crisis del petróleo cuando se desarrollaron fuentes energéticas alternativas como la energía nuclear y el gas natural. El máximo responsable de la compañía ENAGAS expuso entonces como objetivos importantes de la nueva política energética, “reducir la dependencia del petróleo que en 1978 aportaba el 70% de las necesidades españolas de energía” (*La Economía*, 5.6.89).

Por último, Europa apostó por la energía nuclear como mejor solución. Después del accidente de Chernobyl se avanzó en varios campos de la colaboración entre países, tratamiento de emergencias, aspectos medioambientales y médicos. En los programas de la CE se venía contemplando una presencia reforzada de la energía nuclear¹¹⁶.

En relación con esta fuente energética *Abc* tachaba de “ambigua” la actitud del Ministerio de Industria y Energía, al mostrar una actitud poco transparente ante la orden de clausura de algunas centrales nucleares contemplada por la Comisión. Luis Miralles, asesor de dicho ministerio, eludió toda respuesta a los periodistas. El Programa para el cierre de algunas instalaciones nucleares tenía una duración de cinco años. Se creó el 1 de enero de 1989 con una financiación de 31,5 millones de ecus (4.000 millones de pesetas). En su contenido básico pretendía fomentar la investigación y desarrollo en la descontaminación a efectos de cierre, técnicas de desmantelamiento, tratamientos de determinados materiales de desecho, etc. Además, en él se determinarían “las

directrices generales de diseño y funcionamiento de instalaciones nucleares” (*Abc*, 5,5,89).

9.2. 11 Recorte a las subvenciones de la empresa ENASA

Por lo que se refería a la Empresa Nacional de Autocamiones, casi todos los periódicos informaron sobre la decisión de recortar las subvenciones a la misma en unos 23.000 millones.

Veamos algunos ejemplos. El diario *La Economía* no resalta este recorte legislado en Bruselas, pero sin embargo, sí destaca la continuidad del plan de viabilidad de ENASA. *Diario 16* (4.5.89) insiste en la compatibilidad de las ayudas del INI, y *El País* destaca la actuación del ministro Aranzadi a la hora de negociar las subvenciones. Por último, *YA* hace hincapié expresamente, como *Diario 16*, en el recorte a las ayudas del Estado (“La CE desautoriza al INI a 23.000 millones de pesetas”). De lo anterior se deduce que existen divergencias respecto a la financiación de ENASA, ya que el interés se centra, bien en la continuidad del plan de viabilidad, en la actuación de nuestros representantes o bien en el recorte de las ayudas del INI a la citada empresa.

9.2.12 Apoyo a las PYMES en el sector industrial

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se mostró sensible ante la pérdida de competitividad exterior. Según el informe elaborado por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP), las grandes decisiones de la política económica española continuaban olvidando “con demasiada frecuencia” a las pequeñas y medianas empresas. La trascendencia de los resultados de dicho Informe, adquieren especial relieve si tenemos en cuenta que las PYMES, en este periodo,

¹¹⁶ El presidente de la Sociedad Nuclear Española, Manuel Acero, opinaba que la energía nuclear ofrecía una respuesta favorable a las demandas energéticas de los últimos 15 años. Fuente: *La Economía*, 5.6.89.

representaban el 99,9% de las empresas españolas y sus trabajadores representaban el 86% del total nacional ¹¹⁷.

Los aspectos negativos de nuestra industria podían resumirse en varios puntos: un nivel tecnológico inferior, una estructura productiva en la que imperan los sectores tradicionales, la escasa implantación en los mercados exteriores y un tamaño medio excesivamente pequeño de nuestras empresas industriales.

La cooperación empresarial resultaba ser la fórmula que permitía a las PYMES hacer frente al mercado único sin renunciar a su propio control. Las diferentes normas y sistemas de certificación técnica y homologaciones eran la principal barrera técnica a la libre circulación de mercancías en la Comunidad. Los fabricantes, para poder certificar su producto, debían tener un control de calidad contrastado y cumplir la normativa de carácter técnico que directamente le afectara ¹¹⁸.

El Ministerio de Industria y Energía venía desarrollando un conjunto de medidas para potenciar su política de apoyo a las PYMES ante el reto del mercado único europeo en 1993. En este sentido, fue decisivo el impulso recibido por el Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI), con un coste presupuestario que alcanzaba los 1.950 millones de pesetas.

El objetivo del Departamento de Industria no era otro que el de apoyar aquellas estrategias y procesos de concentración empresarial, con el fin de mejorar la competitividad a través de grupos empresariales capaces de competir en un mercado europeo integrado ¹¹⁹.

¹¹⁷ *La Gaceta*, 13-14.5.89.

¹¹⁸ Pequeñas y Medianas Empresas en la Europa del 93: Oportunidades para las PYMES españolas. Serie *Política Exterior*. Dir. Darío Valcárcel. De. Estudios de Política Exterior. Madrid, 1991.

¹¹⁹ España en Europa: un futuro industrial. De. Ministerio de Industria y Energía. Madrid, 1987.

La presidenta del IMPI, Beatriz Muñoz-Seca, respondió al informe de CEDEFOP y argumentó que la estrategia a desarrollar por el IMPI se fundamentaba en tres ejes de actuación, basados en el aumento de la información del empresario, la cooperación y la fusión entre empresas españolas y la promoción del diseño y la gestión industrial. De este modo, una vez realizado el diagnóstico de diseño y de gestión, el IMPI se convertiría en vehículo de las ayudas de la Secretaría General de Promoción Industrial y Tecnológica¹²⁰.

Tal y como reflejaron algunos diarios la patronal lanzó su propia ofensiva en defensa de la industria ante el Mercado Unico. Durante el transcurso de la presentación de un informe del Instituto de Estudios Económicos sobre los posibles efectos de la unidad de mercado, Carlos Ferrer, como vicepresidente de UNICE, manifestó que una política que propiciaba la subida de la peseta y de los tipos de interés, además de basarse en los aumentos de los impuestos y aceptar subidas salariales descontroladas, no era la más adecuada para prepararse a la fuerte competencia que se avecinaba a partir de 1993¹²¹.

Para la CEOE, España no podía quedar relegada a ser “la reserva de los servicios y de la agricultura”, sino que debía potenciar su industria “desde la competencia” (*La Gaceta*, 14.5.89). Por otro lado, otro aspecto que hay que tener en cuenta para entender la situación del momento, radicaba en que la industria y la economía española se habían beneficiado del dumping social por los menores costes laborales que atraían al capital extranjero. Así, el escepticismo sobre las posibilidades de nuestra industria para atraer inversiones rentables se había trocado y España disponía de un periodo de adaptación hasta finales de 1992.

¹²⁰ *Cinco Días*, 13.5.89.

¹²¹ *La Gaceta*, 14.5.89.

9.2.13 Los Euro Infocentros y normativa sobre “Marcas”

Los Euro Infocentros estaban conectados a las bases de datos de la CE y funcionaban como cámaras de comercio, organizaciones de desarrollo regional y organizaciones profesionales. A partir del 1 de julio, las actuales 39 delegaciones de este tipo iban a ampliarse en 148 más, en coherencia con la política de la Comisión tendente a impulsar la ampliación de la red europea de centros de información para las empresas.

España iba a ser uno de los países más beneficiados por este proyecto con 21 centros, detrás de la RFA (26), Francia (25) e Italia (24). Es preciso subrayar que dichos centros, que comenzaron a funcionar en 1987 bajo el impulso del comisario español Abel Matutes, tenían el cometido de informar sobre las posibilidades de mercado y colaboración que las PYMES podían obtener dentro de la CE.

La potenciación de esta red de información ya existente se debía, según Antonio Cardoso, responsable entonces de esta política, a la prioridad de “poner a disposición de los empresarios europeos un servicio útil y creíble, capaz de ayudarles a sacar mejor todas las ventajas de la dimensión del mercado comunitario” (*El País*, 5.6.89).

Por otra parte, entre los días 12 y 28 de junio se había celebrado en Madrid la Conferencia Diplomática sobre Marcas, que debatiría un sistema de registro europeo. A la Conferencia asistieron cerca de 200 delegaciones nacionales y de organismos intergubernamentales e independientes. La reunión era de extrema importancia por el respaldo político para las aspiraciones españolas de instalar en Madrid la Oficina de Marcas Comunitarias. El director de Registro de Marcas y Patentes Español, Julio Delicado, desveló unos datos bastante significativos al afirmar que, durante el año anterior, los industriales españoles tan sólo habían

inscrito en el Registro Europeo un total de 180 patentes (Europa había patentado cerca de 50.000).

Con esta Conferencia se esperaba acelerar el futuro sistema de “marca comunitaria”, diseñado ya en sus aspectos más relevantes y que sería válida para el titular en todo el territorio comunitario. Hasta la creación de este sistema, el depósito internacional de marcas era la única vía de registro en la mayoría de países miembros de la CE.

La aprobación de la primera Directiva del Consejo de la Comunidad Europea (del 21 de diciembre de 1988) obligaba a los países miembros a adoptar los principios de registro y protección de marcas antes de finalizar el año 1.991. El abogado holandés Marinus Vromans, matizaba al respecto que la adopción de esta Directiva daba más prioridad a la armonización de los sistemas de marcas nacionales dentro de la CE que a la irrupción de la marca europea.

La prensa de interés general y la económica divulgan el contenido de la Conferencia sobre Marcas celebrada en Madrid: “La conferencia de marcas discutirá en Madrid un sistema de registro europeo”(Abc, 9.6.89); “Los empresarios desconocen la importancia de registrar patentes”. El 17% de las marcas que se registran en España son nacionales mientras que las extranjeras representan el 83% de las inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial. Las declaraciones del Subsecretario de Industria y Energía resaltaban la importancia de las marcas para la política comercial de cualquier empresa. El registro, a su vez, suponía un indicador esencial para medir el grado de desarrollo industrial y tecnológico de un país (Ya, 9.6.89).

En *Cinco Días*, como en el diario *Ya*, se insiste básicamente en las declaraciones del subsecretario de Industria cuando directamente alude al incremento experimentado en el registro de marcas y patentes en España, que se

había duplicado en los últimos cuatro años, pasando (en 1984) de 36 marcas y 10.000 patentes a 76.000 marcas y 20.000 solicitudes de patentes en 1988” (9.6.89).

El diario *Expansión* enfatiza los escasos registros que se dan en España : “Sólo el 17% de las patentes que se registran en España son nacionales”. Existía un escaso interés de las compañías españolas por registrar sus patentes y marcas porque perjudicaba seriamente cualquier esfuerzo de internacionalización y de comercialización de sus productos (9.6.89).

9.3 Fondos estructurales comunitarios

9.3.1 Presupuesto de los Fondos Estructurales.

En la Cumbre de Bruselas (febrero de 1988) se determinó, en el Presupuesto para 1990, reducir los gastos agrícolas y aumentar las asignaciones de los Fondos Estructurales de un 20% a un 23%.

La CE concedió a nuestro país -entre 1986 y 1988- cerca de 450.000 millones de pesetas para el desarrollo regional. Estos fondos procedían del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo, y suponían más del doble de lo que España aportaba al Presupuesto comunitario. No debemos olvidar tampoco que unos 6000 millones de pesetas, se obtuvieron con cargo a otro fondo comunitario: el Fondo de Orientación para el Desarrollo Agrario (FEOGA).

Sin embargo, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, tras considerar insuficiente la duplicación de las ayudas para el año 2000, solicitó un aumento de hasta un tercio del total del gasto anual¹²². En su opinión la intensificación de la lucha contra el fraude podía contribuir a liberar los recursos necesarios para hacer frente a un nuevo aumento de los créditos comunitarios¹²³. Podemos afirmar que en la propuesta presentada por Borrell ante la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo se instaba a la CE al replanteamiento de su política presupuestaria.

En la valoración que nos ocupa, es unánime la difusión en los diarios españoles de un dato muy significativo, procedente del Ministerio de Trabajo: el importante incremento interanual de las ayudas procedentes del FEDER y del Fondo Social Europeo durante 1987.

¹²² *Cinco Días*, 20.4.89.

¹²³ *La Economía*, 20.4.89.

En un seminario sobre “Política Regional en la Europa de los 90”, el ministro Carlos Solchaga reclamó a la Comisión una segunda reforma de los fondos estructurales en previsión del futuro Mercado Único Europeo, porque estos fondos sólo representaban el 0,3% del PIB.

En este mismo seminario, el comisario de Política Regional, Bruce Millan, se manifestó a favor de un incremento de los Fondos Estructurales a partir del año 1993, y según recogía el diario *Expansión*, reprochó al ministro Solchaga que las ayudas estructurales debían ir acompañadas de una política de la competencia “coherente”. Además, para Bruce Millan -*Cinco Días*- la CE no podía dejar las ayudas exclusivamente “en manos de los países miembros”, como tampoco podía aceptar dejar que las fuerzas del mercado actuaran libremente”.

El profesor John Kay (de la London Business School), por su parte, no dudó en manifestar su escepticismo frente a los efectos del Mercado Único: “El 92 no es más que una campaña de marketing para restaurar los intereses políticos de la CE” (*Expansión*, 31.5.89).

9.3.2 Los fondos FEDER Y FSE

La política comunitaria preveía un gasto de 60.000 millones de dólares para llegar conseguir el equilibrio de las regiones desfavorecidas con las más prósperas. En la fase que analizamos, la Administración española decidió, por imperativo comunitario, que el 90% de los fondos FEDER destinados a las regiones españolas, fueran a parar a aquellas zonas de renta per cápita inferior a la media europea.

Felipe González subrayó entonces el riesgo que suponía mantener los Fondos del FEDER en su antigua concepción, ya que se patentaba una división clara de dos Europas: una rica, al norte, y otra pobre, al sur¹²⁴.

Según un Informe presentado en el Parlamento Europeo por la Comisión de Política Regional, España no utilizaba adecuadamente las ayudas del FEDER por una razón importante: se habían invertido la mayor parte de éstas en proyectos de competencia central y no en programas de las Comunidades Autónomas. Los diputados de Estrasburgo alegaron en su documento diversas consideraciones sobre cuales deben ser las prioridades de la política de desarrollo en España en los próximos años.

En dicho Informe, el socialista Jannis Sakellariou evaluaba como aspectos menos acertados en relación con el FEDER “el escaso esfuerzo por España para cumplir la recomendación comunitaria de dedicar hasta un 30% a proyectos productivos, así como la vinculación de las ayudas FEDER con el Fondo Español de Compensación Interterritorial, fondos de distinta naturaleza y objetivos” (*Abc*, 14.4.89).

El Ministerio de Hacienda, por su parte, estaba elaborando una nueva ley del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), ya que en 1989 terminaba el periodo de vigencia de la Ley del FCI que hasta el momento había permanecido en vigor.

En esta nueva etapa, se trataba de iniciar el acercamiento y coordinación del FCI con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). El Gobierno adaptaría el reparto de la compensación autonómica al FEDER y el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, elevó una propuesta al Senado para corregir el

¹²⁴ “Ayudas más realistas”. *La Gaceta*, 31.3.89.

fondo compensatorio autonómico, en la que se determinaba una modificación de las variables relacionadas con el saldo migratorio y la tasa de paro¹²⁵.

Con motivo del ajuste del FCI a la nueva normativa aprobada por Bruselas para los fondos FEDER, hubo una reunión el 9 de mayo, convocada por José Borrell, con los representantes de las CC.AA. Durante la reunión, fueron cuatro las alternativas planteadas después de la variación del sistema de distribución del FEDER¹²⁶. Borrell declararía a la prensa que no se llegó a alcanzar ningún acuerdo.

La Administración central iba a ser la encargada de gestionar el 65% de los 165.000 millones comunitarios. El 35% restante iba a ser administrado por las CC.AA más pobres, incluidas en los programas comunitarios *Objetivo 1* y *Objetivo 2*. Con esta distribución se violaba el acuerdo de financiación de las comunidades autonómicas, que establece que éstas recibirán y gestionarán los fondos FEDER hasta un importe equivalente al 30% de su Fondo de Compensación Territorial¹²⁷.

El diario *Expansión* también critica la existencia de deficiencias en la financiación de algunas autonomías en pasados Ejercicios, así como las dificultades de coordinación entre la Administración Central y las CC.AA. en relación con la gestión de las ayudas. También se especifica que la política de incentivos regionales del Gobierno socialista no disponía de fondos suficientes para impulsar la inversión en las regiones más desfavorecidas (*Expansión*, 14.4.89).

¹²⁵ *En Cinco Días* (28.4.89) recogemos como dato significativo el reparto que en ese año se efectuó del Fondo, y que provocó pérdidas de hasta 2.000 millones de ptas en varias comunidades autónomas debido a la variable del saldo migratorio.

¹²⁶ La nueva distribución de los fondos FEDER comunitarios preveía un 90% de los mismos para las regiones más atrasadas (Objetivo 1) y un 10% para las más desarrolladas (Objetivo 2) (*El País*, 10.4.89).

¹²⁷ Fuente: La Secretaría General de Planificación y Presupuestos. (*La Economía*, 11.5.89).

En cuanto al Fondo Social Europeo (FSE), los periódicos reproducen el trato ventajoso de Cataluña en el reparto presupuestario de dicho fondo social (*La Economía* de día 7 de junio, titulaba: “11.321 millones en ayudas del FSE para Cataluña”). La Comunidad catalana recogía el 14,4% del total destinado a España en ese año, siendo Barcelona la ciudad más beneficiada de esta Comunidad.

En los periódicos se informa de las ayudas a las empresas procedentes del Fondo Social Europeo para crear empleo y que, durante los últimos años, llegaron a superar el billón de pesetas. Sin embargo, a pesar del fuerte incremento presupuestario experimentado por el FSE, los Estados miembros devolvieron aproximadamente el 40% de las ayudas recibidas. En ocasiones no se llevaban los programas a cabo, y a veces, los gastos no se justificaban debidamente.

9.3.3 El Plan de Desarrollo Regional de España y el Plan de Reconversión Regional.

Era necesaria la elaboración del Plan de Desarrollo Regional de España (PDR) para el acceso de España a los Fondos Estructurales comunitarios. Por tal motivo la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobaba el 17 de marzo las bases del Plan regional.

El secretario general de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Economía y Hacienda, Antonio Zabalza, cree en la planificación regional para abordar con eficacia los problemas regionales. Antonio Zabalza efectuó un recuento de dos de los programas más destacados: se refirió a la producción de bienes públicos de carácter económico y a la producción de bienes públicos de carácter social. El primero de los programas, se refería a los fondos destinados a carreteras, infraestructuras de recursos hidráulicos y transporte ferroviario y el segundo, a las inversiones centradas en el área urbanística, la educación y la vivienda.

Finalmente, en el diario *Expansión* se subraya que las regiones en declive industrial se acogieron al Plan de Reversión Regional cuya aprobación estaba prevista para el mes de junio de 1989. Este Plan instrumentaría las fórmulas de cofinanciación necesarias para que las ciudades con un gran crecimiento económico registraran una disminución de sus bolsas de pobreza¹²⁸.

¹²⁸ *La Economía*, 31.5.89.

9.4 Conclusiones del capítulo

- La cobertura informativa sobre el proceso liberalizador del transporte en Europa alcanza niveles mayores en el diario *El País* y *La Vanguardia*.
- La prensa no adopta el mismo criterio en el reparto de las noticias y reportajes sobre la política comunitaria de transportes. Asimismo, los artículos y editoriales son escasos y la influencia de la prensa es mínima cuando hablamos de una política integradora del transporte en Europa.
- La CE participa activamente del segundo proyecto ferroviario de alta velocidad en Europa.
- Las empresas aéreas menos competitivas pueden entrar en un periodo de crisis. El Parlamento Europeo encara este problema y persuade a los Estados para que formen parte de *Eurocontrol*, organismo creado para solucionar los problemas derivados de la armonización legislativa del transporte aéreo.
- Resulta indudable la reducción de la competitividad en el sector naviero, según se extrae de nuestro análisis. La denuncia de las asociaciones navieras apuntan, sobre todo, a los desequilibrios en los costes sociales y al tratamiento fiscal y técnico. No obstante, se avanza en la consolidación de un registro europeo que abandere a las compañías navieras.
- Asuntos como la seguridad vial, la reducción de la tasa de alcoholemia y la armonización de las normas de acceso a la profesión de transportistas reciben un tratamiento puramente informativo. Estas medidas que se discuten en el foro comunitario registran en la prensa nacional un escaso índice de opinión

- La CE persigue una profunda transformación de las actuales administraciones ferroviarias.
- Es más profundo el tratamiento que los diarios económicos dedican a la reforma de la industria y al sector energético.
- Las secciones de “Economía” recogen, básicamente, las noticias sobre industria y la energía.
- Fuerte intervención estatal en la política energética porque se enfrentan intereses nacionales, empresariales y comunitarios.
- Amplio eco informativo en torno a las innovaciones en la industria automovilística. Cobra gran relevancia el papel de la Comisión ante las trabas fiscales impuestas por varios países.
- El contencioso abierto entre España y Portugal por el aumento de tasas en el paso de la energía eléctrica es enfocado por la prensa nacional con criterios más bien localistas, exentos de un discurso integrador europeo. Y ello pese a que Portugal reclamaba más transparencia en los precios energéticos y en los intercambios intracomunitarios de electricidad.
- El despliegue informativo de los diarios económicos se acentúa cuando se debate el futuro de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
- Es la prensa económica, por lo general, la que introduce más matices en torno a los fondos de ayuda comunitaria. La prensa de carácter nacional también secunda esta información, aunque de forma más generalizada.

- Por lo general, es la prensa económica quien introduce más matices en torno a los fondos de ayuda comunitaria, aunque el resto de los diarios de difusión nacional, sobre todo *El País*, *Abc*, y *La Vanguardia*, secundan esta información, pero de forma más generalizada
- En materia presupuestaria, las autoridades españolas denuncian que son insuficientes las asignaciones de la CE . De nuestro estudio deducimos que el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, son los portavoces de la Administración socialista que más insisten sobre la necesidad de incrementar las partidas de los fondos estructurales.
- Respecto a nuestro país, las autoridades comunitarias anuncian cierta falta de coherencia en materia de Competencia, según se desprende de las declaraciones del comisario de Política Regional, Bruces Millan, aparecidas en la prensa.
- Todos los diarios coinciden en publicar el anuncio oficial del Ministerio de Trabajo que hace referencia al importante incremento interanual de las ayudas procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (FSE) durante 1987..
- La Presidencia española reclamó ante las autoridades comunitarias una segunda reforma de los Fondos Estructurales, en previsión del futuro Mercado Único Europeo.
- En el Parlamento Europeo se denunció el “escaso esfuerzo” de España para llevar a cabo proyectos productivos, así como la vinculación de las ayudas FEDER con fondos de distinta naturaleza y objetivos (Fondos de

Compensación Interterritorial, FCI). Amplio análisis del diario conservador *Abc* sobre este apartado.

- Los comentarios sobre asuntos locales relativos al desarrollo regional se entremezclan frecuentemente con aquellos que directamente atañen a los fondos estructurales.
- En cuanto al Fondo Social Europeo, la prensa nacional subraya el trato ventajoso de Cataluña en el reparto presupuestario

CAPÍTULO X:

La política exterior comunitaria

1. La dimensión exterior de la Comunidad

El aumento de las relaciones internacionales en el ámbito de la CE aportó nuevas dimensiones al modelo tradicional que venía imperando. El nacimiento de la cooperación europea en materia de política exterior se oficializaba con el Informe de Copenhague de 1973. Sus directrices resultaban ser para muchos analistas la verdadera carta fundacional de la CPE.

Desde el Parlamento Europeo se impulsó la “comunitarización” de la política exterior¹. Cabe señalar a este respecto que el poder de los distintos Estados miembros se ejercía dentro de un modelo de gestión vinculado a las Comunidades Europeas y con el último objetivo de alcanzar la Unión Europea.

En este contexto, merecen ser destacados los principales logros que fueron aprobados en los Consejos de Asuntos Generales durante la Presidencia española. También fueron significativos los avances en las relaciones políticas con diversas áreas geográficas. La información al respecto, recogida de la muestra que nos

¹Robles Carrillo, Margarita A.: “El Control de la Política Exterior por el Parlamento Europeo”. Cuadernos de Estudios Europeos. Editorial Civitas. Madrid, 1994.

sirve de estudio, ha sido suficiente para configurar y resumir los principales acontecimientos de la Presidencia en política exterior.

Conforman el citado mapa de actuación comunitaria en este semestre una serie de logros, fruto de las negociaciones y de los acuerdos mantenidos entre la CE y otros países e instituciones internacionales. Cabe citar, por ejemplo, la reunión ministerial CEE-EFTA de marzo y, si nos referimos a Latinoamérica, fueron importantes para la prensa las reuniones celebradas en San Pedro de Sula o en Granada (donde participaron los ministros del Grupo de Río en la reunión de ministros de Asuntos Generales).

En cuanto a los países del Este, en un ambiente de apertura que vislumbraba el futuro cambio del mapa europeo que se iba a producir, se iniciaron las negociaciones con la URSS, Polonia y Bulgaria. La política de cooperación se desarrolló igualmente en el área mediterránea y, por citar algún que otro acontecimiento en el marco de las relaciones exteriores, fueron muy importantes los pasos iniciales que la CE proyectó para la pacificación de la zona de Oriente Próximo.

2. El proceso de paz en Oriente Medio

España deseaba en este mandato impulsar el proceso de paz en Oriente Medio mediante la celebración de una Conferencia Internacional de Paz. Los trabajos para establecer la paz entre Israel y Palestina comenzaron con una gira por Oriente Medio en el mes de febrero.

Este viaje se inscribía en el “programa informativo sobre Oriente Medio” y los protagonistas de este periplo eran los ministros de Asuntos Exteriores de España, Francia y Grecia. No cabe duda de que los contactos de la *troika*

constituida por estos tres países deseaban encontrar el modo de impulsar la celebración de esa Conferencia de Paz entre árabes e israelíes.

Los antecedentes de esta política se remontaban a la Cumbre de Rodas, en cuyo seno se aprobó una resolución para que el presidente del Consejo de Ministros de turno, contactara con las partes implicadas en el conflicto de Oriente Medio, y de este modo poder revitalizar la participación de la CE en el proceso de paz.

Este ambicioso proyecto de cooperación política exterior que se inició en Ammán, acaparó los titulares de los diarios más influyentes. El día 12 de febrero, *La Vanguardia* y el diario *Ya* recogían en sus páginas la entrevista del ministro de Asuntos Exteriores Francisco Fernández Ordóñez con Hussein de Jordania, en la que el mandatario árabe llegó a declarar que el futuro de los palestinos debía ser negociado con la OLP.

La *troika* siguió su gira por El Cairo para reunirse con el presidente Mubarak y, a continuación se desplazó a Siria donde mantuvo una entrevista con el Presidente Hafez El Assad. Aunque Siria no mostró reticencias sobre la participación europea en los esfuerzos para pacificar Oriente Próximo, este país puso serios inconvenientes para la celebración de una conferencia de paz.

El ministro de Asuntos Exteriores sirio, Farouk Shara, reivindicó la retirada de Israel de los territorios ocupados, incluidos los altos del Golán, "o al menos, -afirmaba el representante sirio- que haga un anuncio claro e inequívoco de sus intenciones de retirarse" *El País* (14.2.89).

Quizá el impulso de la CE obligó a EEUU a flexibilizar su postura de apoyo incondicional a Israel, entrando en la dinámica de los países partidarios de la negociación directa entre la OLP e Israel. En este contexto, fue muy importante la labor del presidente egipcio Mubarak que viajó a Washington para reavivar el proceso de paz.

También el primer ministro de Israel se reunió con la Administración Bush, y tras la visita del Presidente egipcio, acudió Hussein de Jordania a entrevistarse con el presidente de los Estados Unidos.

La Comunidad Europea, una vez reconocido el Estado Palestino en noviembre, no adoptó una política unánime sobre este conflicto. Las decisiones no siempre coincidían porque algunos Gobiernos se negaban a entablar conversaciones con Arafat.

3. Consejo de Cooperación Política de la CE en Madrid

El 14 de febrero se reunía en Madrid el Consejo de Cooperación Política de la CE. El escaso interés que suscitó en la prensa se debió casi seguramente a la decisión de no elaborar una “declaración formal” de los representantes comunitarios sobre Oriente Próximo.

La *troika* formada por Ordóñez, Papoulias y Dumas se limitó a transmitir las distintas posiciones detectadas en la gira que efectuaron. Por otra parte, *Diario 16* recogía las declaraciones del secretario del Foreign Office británico, Geoffrey Howe, en las que se denunciaba el condicionamiento al que se veían sometidas las iniciativas comunitarias sobre Oriente medio, y que no era otro que el imponían las directrices de EE.UU e Israel (*Diario 16*: “El Reino Unido enfriará hoy el optimismo de la ‘troika’ de la CE sobre Oriente Medio”, 14.2.89).

Las reunión de la *troika* contenía una amplia agenda para tratar los temas relacionados con Oriente Medio, Afganistán, Armas Químicas y la situación política de Polonia. En esta asamblea se llegó al acuerdo -a instancias del Reino Unido y la RFA- de informar a los EEUU sobre los resultados del viaje, antes de elaborar una declaración sobre el conflicto.

En el ambiente reinaba la cooperación política de los Doce. Asimismo, Fernández Ordóñez informó al secretario de Estado americano, James Baker, de las gestiones de la *troika* en relación con Oriente Medio.

Finalmente, se proclamaron tres “Declaraciones” cuyos contenidos hacían referencia a la retirada soviética de Afganistán, al código de conducta contra el apartheid de las 247 empresas comunitarias con filiales en Suráfrica y a la situación polaca.

4. ‘Guerra de las hormonas’: negociación con EEUU.

El contencioso surgió tras el acuerdo de Bruselas para prohibir la importación de carne hormonada. Por la preocupación que suscitaba en España, y sobre todo en algunas regiones, los diarios catalanes insisten de forma más categórica en la reunión que los EEUU y la CE iban a mantener a finales de febrero para buscar una solución² al conflicto conocido por “guerra de las hormonas”.

Desde Washington se impulsó la creación de un grupo de trabajo compuesto por personalidades relevantes para poder resolver en el plazo de 75 días el contencioso. Tanto Carla Hill, asesora del presidente George Bush para Asuntos de Comercio Exterior, como Frans Andriessen, responsable de Asuntos

Exteriores y Política Comercial de la Comisión Europea, expresaron su confianza en este grupo de trabajo.

Pero, finalmente ¿Qué consecuencias iban a poder extraerse al término de estas negociaciones en Washington? ¿Se iban a detener las represalias comerciales, en respuesta a las medidas adoptadas por EEUU? Las pérdidas económicas de la CE supondrían un total de 100 millones de dólares

El propio vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Andriessen, informó a los ministros de Exteriores sobre las conversaciones previas, y sobre la constitución del nuevo Grupo de trabajo creado para consensuar las distintas posiciones que originaron el conflicto y que todavía se mantenían.

El Consejo de Asuntos Generales³ (20 de febrero) confirmaba sus posiciones de enero, invitando a la Comisión a que coordinara su política con los acuerdos suscritos por el GATT. Se invitaba al Gobierno americano a suspender la aplicación de dichas medidas.

Posteriormente, en el mes de mayo, parecía vislumbrarse un acuerdo parcial entre la CE y EEUU, que debía ser aprobado por los ministros de Asuntos Exteriores en la reunión del 22 de mayo en Bruselas. Se advierte una preocupación general por recoger ese acercamiento entre la CE y la primera potencia. Estados Unidos no quería impedir la veta de los productos que voluntariamente aceptaran cumplir los requisitos impuestos de la CE, y algunos matizaban que el acuerdo suponía un reconocimiento tácito de la legislación aplicada por la CE.

² *El Periódico* titula: "Reunión entre la CE y EEUU para resolver la guerra de las hormonas" (17.2.89). *La Vanguardia*, por su parte destacaba en titulares: "EEUU y la CE acuerdan crear un grupo de trabajo que resuelva la guerra de las hormonas" (20.2.89)

³ En el Consejo de Ministros del día 20 de febrero, también se aprobó el Reglamento relativo a las exportaciones de determinados productos químicos (nº 428/89). Las autoridades españolas se esforzaron por limitar la exportación de los productos destinados a la fabricación de armas químicas (*Cinco Días*, 20.2.89).

Son los diarios económicos los que más insisten en que la razón aducida por los Estados europeos para impedir las importaciones de carne es sólo un pretexto en la disputa de los mercados internacionales, ya que todavía no se había demostrado que esta carne hormonada fuese perjudicial para la salud⁴.

La CE, además, publicó un Informe en el que se citaban hasta casi 40 medidas proteccionistas estadounidenses. Por otra parte, el principal factor de queja de los EEUU radicaba en la larga lista de prácticas proteccionistas implantados por la CE (sobre todo en relación con las subvenciones agrícolas) que impedían colocar los productos americanos en el mercado comunitario.

La causa del conflicto tiene su origen en el año 1987, cuando el déficit norteamericano superaba los 2,2 billones de pesetas. En Washington todavía creían que el bloque comunitario no hacía más que restarle mercados –a pesar del compromiso de reducir las subvenciones agrícolas- y desde Europa, se denunciaba el ‘plan de créditos blandos’ a la exportación agrícola del Gobierno americano.

5. Guerra diplomática entre Irán y la CE.

Pero la incidencia de los aspectos comerciales pasaron a un segundo plano cuando estalló el gran escándalo suscitado por el veto integrista a la novela titulada “Versículos satánicos”.

Sobre este asunto, leemos en *La Vanguardia*, un titular bastante significativo, “Jomeiny dice que no habrá perdón para el autor de ‘Versos satánicos’ aunque éste se arrepienta” (20.2.89).

El Reino Unido solicitó inicialmente el apoyo de los restantes miembros comunitarios. Por otra parte, en medios diplomáticos españoles e italianos no entusiasmaba la idea de llamar a consulta a todos los representantes diplomáticos de la CE. Para la mayoría de los observadores, Teherán participaba de una clara diferenciación entre los dirigentes moderados y los radicales, partidarios –estos últimos– de rigurosos dogmas religiosos.

Los ministros de Asuntos Exteriores decidieron llamar a consulta a los representantes diplomáticos de sus países en la ciudad de Teherán para sancionar políticamente la condena a muerte del escritor Salman Rushdie. Con esta condena se suspendían las visitas comunitarias de “alto nivel” en Irán.

La declaración de los Doce⁵ en la Cumbre final de Madrid, condenaba esta incitación al asesinato por ser una “inaceptable violación de los más elementales principios y obligaciones entre Estados soberanos”.

La continuidad de las relaciones de Irán con la CE sólo sería posible si aquel país confirmaba su respeto hacia las obligaciones internacionales renunciando al uso de la violencia”⁶.

Jomeiny responde con la misma moneda, y llama a consulta a sus embajadores instalados en Europa. El diario catalán *La Vanguardia* señala el apoyo de la Administración Bush a la actitud comunitaria frente a Irán, y desde sus páginas denuncia que las amenazas contra el autor de *Versos Satánicos* suponen “una profunda ofensa a las normas de conducta civilizadas” (22.2.89).

⁴ *La Gaceta*, 5.5.89.

⁵ “Balance de la Presidencia Española de la CPE”. Ministerio de Asuntos Exteriores, Enero-Junio 1989.

⁶ *El Periódico*, 21.2.89.

Como indicador general, apreciamos que tanto en el plano nacional como internacional, la advertencia a Jomeini tuvo un amplio eco informativo. Desde el editorial publicado en *La Vanguardia* (22.2.89) se valora el alcance de la reacción surgida en Europa ante la amenaza iraní. “El uso que hace Jomeiny del poder político ha obligado a los Doce a repudiar la condena y hacer frente a la amenaza”.

En el mismo sentido, el diario *Abc* (editorial, “Advertencia a Jomeini”) aseguraba que el desvío de la política iraní hacía estallar el escándalo “Rusdhie”. Algunas declaraciones resultaron ser muy polémicas. El representante en España de la agencia iraní de prensa declaró a varias emisoras españolas que, como musulmán, tenía la obligación religiosa de acabar con la vida de Rusdhie⁷.

En el plano institucional, el apoyo del ministro de Educación y Ciencia, Javier Solana, fue rotundo. Garantizó la protección del Gobierno español a los editores españoles que se atrevieran a publicar “Versos Satánicos”. Estas palabras dirigidas al mundo editorial las pronunció en una conferencia de Bruselas, a la que acudió con la finalidad de presentar un Programa de Investigación y Desarrollo.

Del mismo modo, algunos escritores alemanes decidieron editar la polémica obra, enfrentándose radicalmente al chantaje intelectual del ayatollat. Fue el director de la editorial *Kippenheuer und Wistch* (Colonia), quien puso como condición necesaria para la publicación del libro, que un grupo de escritores alemanes figurasen como editores responsables⁸.

La iniciativa pro-Rushdie encabezada por Gunter Grass contaba con el apoyo de más de una veintena de autores; además, el Gobierno de Bonn en

⁷ *Abc*, 22.2.89

⁸ *El país*, 22.2.89,

aquellos días anunció la suspensión del 'Tratado Cultural Germano-Iraní', firmado en el mes de noviembre.

En España, Seix Barral aplazaba la publicación de versos satánicos hasta que la situación se aclarara. Para esta firma, el alcance de estos hechos escapaban al ámbito editorial.

El 22 de febrero la prensa informó de la respuesta contundente de Irán (retirada de sus embajadores de los países comunitarios). También se hizo eco de las declaraciones del primer ministro iraní⁹: "la maniobra de la CE no afectaría a su país, que se sostendría sin apoyo de ninguna potencia extranjera".

Por lo que respecta a Jomeini, el líder iraní pronunció un discurso a través de Radio Teherán reafirmando las bases de la revolución: "La flecha ya ha sido lanzada"; era su sentencia que advertía a la opinión mundial que la amenaza de un embargo económico no iba a impedir el cumplimiento del "decreto de Alá".

En este clima antiiraní, algunos medios como el semanario *El Independiente*, apuntaron algo nuevo. El caso Rusdhie pudo haber sido instrumentalizado por algunos sectores, con la finalidad de extender el racismo antiárabe¹⁰.

En el conflicto suscitado por el escritor británico, Moscú cobró un importante papel mediador, después de que Shevardnadze, ministro de Asuntos Exteriores soviético, visitara Teherán.

Los comentaristas políticos barajaron dos hipótesis sobre la mediación de la URSS. De un lado, observaban que no querían contrariar sus relaciones con

⁹ *Abc*, 22.2.89.

¹⁰ *El Independiente*, 24.2.89.

Occidente; pero por otro lado, se tachaba a la URSS de oportunista, por querer granjearse el favor de Jomeini, aprovechando la crisis abierta entre Irán y Occidente. Así, la URSS acrecentaba su poder en Oriente Medio¹¹.

Pese a que el Foreign Office quiso apaciguar los ánimos, tras esta larga cadena de provocaciones, el Parlamento iraní no dudó en aprobar la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales con Gran Bretaña.

Sin embargo, también advertimos que en algunos medios (*La Vanguardia*) no se reconoce el papel mediador de la URSS en el conflicto. “Shevardnadze no mediará entre Irán y la Comunidad” (estas afirmaciones responden al viaje del ministro de Asuntos Exteriores español a la Unión Soviética)¹².

6. La Conferencia de San Pedro Sula.

En la Conferencia de San José V, en la ciudad de San Pedro Sula, el comisario español para las relaciones con Iberoamérica, Abel Matutes, declaraba a los medios de información que el tema más candente de la reunión se iba a centrar en la reactivación del proceso de integración económica centroamericana.

La totalidad de los diarios nacionales informaron de la inauguración de esta “V Cumbre” de Cancilleres centroamericanos y comunitarios el día 27 de febrero; así, unas veces los titulares hablan del impulso económico a Centroamérica y en otras ocasiones matizan que las ayudas se supeditarán al proceso de paz¹³.

¹¹ Véase el contenido de la carta del Ayatolá Jomeini dirigida a Gorbachov, y que publica el diario *El País* en su edición del 1 de marzo.

¹² *La Vanguardia*, 4.3.89.

¹³ (“Ordóñez, optimista ante el futuro de Centroamérica”, *Abc*, 27.2.89; “La CE, dispuesta a aumentar su ayuda a Centroamérica”, *El País*, 27.2.89; “Hoy comienza en Honduras la conferencia ministerial Comunidad Europea-Centroamérica”, *La Vanguardia*, 27.2.89; “La CE triplicará la ayuda a

Días antes, desde el Palacio de Santa Cruz, hubo que justificar algunas ausencias en la Cumbre de los ministros europeos. Una gran parte de los representantes ministeriales no acudieron a San Pedro Sula por asistir al funeral del emperador japonés Hirohito, en la ciudad de Tokio.

La ayuda ofrecida por los Estados europeos para proyectos de desarrollo encontró la reticencia del Reino Unido, Holanda e Irlanda, partidarios de medidas de cooperación más ambiguas¹⁴. Al mismo tiempo que se potenciaba el mercado común centroamericano, existía un compromiso de velar por la paz en la región.

En realidad, este encuentro no llegó a ser muy efectivo en la recuperación de la economía de Centroamérica, a pesar de que la Presidencia española planteó entre sus objetivos prioritarios, extender la cooperación entre Europa y Latinoamérica.

Sin embargo, se puede afirmar que la reunión sí fue importante por el reconocimiento real del proyecto global de cooperación que desde Comunidad europea se impulsaba por primera vez.

Abc, por ejemplo, en su editorial del día 28, duda que dicha cooperación se quede sólo “en aguas de borrajas”. Sin duda, constituía un impedimento crucial en las relaciones con la CE, la difícil situación política por la que atravesaba el continente Centroamericano.

En El Salvador, se arbitraron medidas urgentes para neutralizar a los rebeldes nicaragüenses; Nicaragua seguía siendo foco de subversión, y Ordóñez

Centroamérica, aunque la supedita a que haya paz”. Entre los económicos, ese mismo día, *Expansión* y *Cinco Días* titulaban: “Latinoamérica dará un nuevo impulso a sus relaciones con la CE” y “La CE intenta reactivar la integración centroamericana en San José V”.

¹⁴ *La Vanguardia*, 25.2.89.

se vio obligado a mediar con la Administración americana. Para el diario *Abc* (28.2.89), la voz de Europa “debía ser reforzada por los EE.UU.”; y sin embargo, *Diario 16* (28.2.89) parecía invocar la independencia de Europa en Centroamérica, como manifestó el ministro español de Asuntos Exteriores.

Pero veamos qué publicaban otros diarios extranjeros sobre estos acuerdos. El *Frankfurter Allgemeine Zeitung* hablaba de los 195 millones de dólares, como línea de financiación tradicional, y de los 235 millones de dólares, como cantidad que debía aprobar el Parlamento Europeo. El *General Anzeiger* cifraba en 700 millones la ayuda económica de la CE a Centroamérica en los próximos 2 años (2.3.89).

Al mismo tiempo, tanto Fernández Ordóñez, como el ministro costarricense denuncian que los apoyos económicos de la CE eran siempre pequeños¹⁵. Sin embargo desde los foros internacionales se constataba la consolidación del diálogo y la cooperación política en esa región.

7. Viaje de Fernández Ordóñez a Washington

El Gobierno socialista encomendó a Fernández Ordóñez la difícil tarea de negociar con la Administración Bush diversos asuntos que especialmente afectaban a Oriente Medio, Centroamérica y a la llamada “guerra comercial” establecida en los mercados.

Las informaciones sobre el controvertido viaje subrayan algunos puntos ambiguos de la política del ministro. Según manifestaba el corresponsal en Washington Jose María Carrascal “las ideas que adelantó y las iniciativas que sostuvo, no sólo divergen, sino que en algunos casos chocan con la política que

¹⁵ *Diario 16*, 1.3.89.

está siguiendo Washington”¹⁶. Para algunos resultaba innecesario ese viaje porque, según su opinión, no existían asuntos urgentes que tratar.

También se barajó la posibilidad de establecer una fecha para un eventual viaje de Felipe González a los EE.UU. Sin embargo, no tardó en desmentirse oficialmente esta noticia. *Abc* interpretó al respecto que la cancelación del viaje del Presidente fue un desprecio de la diplomacia americana. “Bush da largas a González para su encuentro en EE.UU” (*Abc*, 13.3.89).

Por el contrario, desde el Palacio de Santa Cruz, los motivos de la cancelación eran otros, que únicamente tenían que ver con el calendario presidencial. Según *El País*¹⁷ el encuentro de Ordóñez con el secretario de Estado norteamericano, James Baker, fue calificado de “directo” y “sincero”, a pesar de las divergencias sobre Centroamérica de ambos dirigentes. La Casa Blanca acababa de solicitar ayuda humanitaria para la Contra, y la CE, en contrapartida, intentaba disipar los recelos de Washington hacia el ‘Plan de Paz’ acordado en El Salvador.

Sorprendentemente, después de la entrevista de Ordóñez y el Presidente americano, aquel reconoció ante los periodistas que era “aceptable” que los EE.UU prorrogaran un año más la ayuda a la Contra. En esta ocasión, el ministro español de Exteriores se mostró cauto, a la hora de valorar si esta ayuda violaba los acuerdos de paz alcanzados en El Salvador: “Es demasiado pronto para emitir un juicio, y es algo que exige una consulta a los Doce” (*El País*, 15.3.89).

En relación con el viaje a Washington, vemos que la prensa inserta dos interpretaciones diferentes. Por ejemplo, *Abc* insiste en el “desaire” de Bush a

¹⁶ *Abc*, 17.3.89.

¹⁷ *El País*, 15.3.89.

González; *El País*, no parece dar relieve a esa idea, y sí a las negociaciones de paz en Centroamérica.

8. La Ronda de Uruguay y las reformas agrícolas

Las informaciones que hablan del encuentro previo entre los mandatarios comunitarios, F. Andriessen y Marc Sharry, y la secretaria de Comercio norteamericana, K. Hills, exponen la existencia de los intentos de negociación programados en el sector agrario, de cara a la reunión que se iba a celebrar en Ginebra, el 5 de abril.

Cabe añadir, que las subvenciones agrícolas constituían el apartado más polémico de esta Ronda. Se registraban, ante la opinión mundial, dos corrientes claves en las negociaciones: la liberalización comercial y la intervención en las subvenciones agrícolas.

Ya anteriormente, en Montreal, se había fijado el “punto medio” de esa Ronda de Uruguay y los once Acuerdos firmados, se mantuvieron en reserva hasta que el Comité de Negociaciones Comerciales se dispusiera a encontrar una solución (en abril) en los 4 sectores todavía bloqueados: textil, agrícola, propiedad intelectual y cláusula de salvaguardia..).

Cinco Días recoge las declaraciones del consejero agrícola de la Embajada americana, Edward Nichols. Éste expresaba abiertamente que si bien, la Administración americana moderó sus iniciales llamamientos en favor de la completa eliminación de las subvenciones agrícolas, la CE, por su parte, no se había comprometido a “reducir su sistema de gravámenes y subvenciones agrícolas de protección” (*Cinco Días*, 13.3.89).

Con un marcado carácter económico, aparecen en la prensa rectora las informaciones que hacen referencia a la Cumbre del GATT; por lo general no se advierten contenidos muy críticos respecto al desarrollo de las negociaciones entre los países del GATT.

Algunos medios, como *Abc* y *Expansión*, destacan en sus titulares el “optimismo” del secretario general del GATT, Arthur Dunkel: “El acuerdo sobre agricultura es la llave para el éxito final del GATT. Moderado optimismo al comenzar la reunión” (*Abc*, 6.4.89); “Dunkel, optimista sobre la consecución de acuerdos en el encuentro del GATT” (*Expansión*, 6.4.89). Por el contrario, otros diarios hablan de “pesimismo” en el ambiente: “Continúa el pesimismo en el GATT sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo” (*La Gaceta*, 6.4.89).

En la inauguración de las conversaciones, Dunkel recordó a los participantes del GATT los cuatro objetivos pendientes en la discusión (textil, agrícola, propiedad intelectual y cláusula de salvaguardia), y que se hallaban bloqueados desde la Conferencia de Montreal. El secretario general se mostró especialmente explícito en los asuntos agrícolas

La situación comercial era tensa porque aunque EEUU renunció fijar una fecha para la supresión de los subsidios agrícolas, las discrepancias con la CE se mantenían por desacuerdos respecto a los instrumentos de ayuda. En Francia, por citar un ejemplo, la oposición a la reducción de los subsidios fue unánime. Los agricultores franceses intentaron salvaguardar de raíz la política agraria comunitaria.

El otro asunto importante a debatir en la reunión, el textil, giraría en torno a la supresión o no, del Acuerdo Multifibras. Las críticas al documento presentado por Dunkel en relación con esta industria vinieron de la delegación española. Fernando Gómez Avilés llegó a calificar de “desequilibrado” dicho

proyecto, según publicaba *La Gaceta*¹⁸. La CE, desde su foro de opinión, consideraba improcedente la derogación del Acuerdo Multifibras, que protegía a sus economías de las prácticas comerciales desleales¹⁹.

El 8 de abril, los delegados de más de 100 naciones consiguieron desbloquear la Ronda de Uruguay, que permanecía estancada desde el último cónclave de Montreal. Hugo Paemen, jefe de la delegación comunitaria, declaró que se habían sentado las bases para iniciar una “negociación real”²⁰. Pese a todo, *El País* hablaba de un “éxito relativo” en materia agrícola y, desde sus páginas se aludía a la escasa atención del GATT respecto a uno de los mecanismos más importantes de los subsidios comunitarios: las restituciones a la exportación.

En el caso del periódico *Abc*, se detecta un especial interés por regular de forma eficaz estas materias a través de los mecanismos que comporta el GATT, con la finalidad de liberalizar el comercio de productos agropecuarios y de controlar su tráfico en el mercado²¹.

El columnista de *Abc*, Jovellanos, opina que a largo plazo la CE efectuaría una reducción concertada de las subvenciones y una reforma de las medidas proteccionistas. Para este autor, la Administración Bush se movía bajo la pretensión de “alcanzar un acuerdo a largo plazo con el compromiso de eliminar las ayudas directas e indirectas” (“El GATT” *Abc*, 9.4.89).

Es obligado constatar que los seis meses de Presidencia confirieron a España no sólo una “tribuna de privilegio”²², sino también un notable protagonismo en las negociaciones multilaterales de la Ronda de Uruguay.

¹⁸ *La Gaceta*, 6.4.89.

¹⁹ *Cinco Días*, 7.4.89.

²⁰ *El País*, 9.4.89

²¹ *Abc*, 9.4.89

²² Véase el artículo de Gómez Avilés “Comienza la fase decisiva de la Ronda de Uruguay” (*Cinco Días*, 5.7.89)

9. Convenio de Lomé y el Informe Poseidóm

Fue Brazzaville (República Popular del Congo) el lugar elegido para convocar la 2ª Sesión Ministerial para las negociaciones ACP-CEE, con motivo de la renovación del Convenio de Lomé (16 y 17 de febrero). Presidieron dicha reunión el presidente en funciones del Consejo, Fernández Ordóñez y el Primer Ministro de las islas Fiji, sir Ratu Mara. El comisario español Manuel Marín representaba a la Comisión como Vicepresidente.

La publicación de ámbito comunitario, *Boletín CE*²³, muestra un perfil muy significativo de los debates que permitieron consolidar los trabajos preparatorios de los 8 Grupos que fueron creados en 1988.

Por otra parte, el “Informe Poseidóm” captó el interés periodístico, porque de su desarrollo -y bajo ciertas condiciones- iba a depender en un futuro la posible solución de los problemas que existían en Canarias.

El “Informe Poseidóm”, presentado como Proyecto ante los organismos comunitarios, se refería a aquellos problemas, que por su lejanía e insularidad, afectaban a los territorios franceses de ultramar en la CE. Un escenario, que presentaba ciertos paralelismos con la situación de Canarias, como muy bien apuntaban el consejero del Comité Económico y Social de la CE, Rodolfo Machado (Tenerife), en representación de la Confederación Española de Organizaciones empresariales, y el presidente del Instituto Tinerfeño de Expansión Económica, Juan Antonio Núñez..

Al elaborar el citado Informe quedó plasmada en su filosofía, la idea de que la Comisión “no podía hacer abstracción de las consecuencias de carácter general en otras regiones comunitarias distintas de los Dominios de Ultramar”²⁴.

²³ Bol. CE 2-1989, p. 50.

10. El “Plan Brady” y la deuda del Tercer Mundo.

La Presidencia española incorporó en la agenda del Consejo de Economía, previsto para el 13 de marzo, todo lo relativo a la deuda de los países menos desarrollados. Aunque los ministros comunitarios no tomaron decisiones inmediatas, sí se pronunciaron a favor del nuevo planteamiento propugnado por las reformas económicas del denominado “Plan Brady”.

El secretario del Tesoro norteamericano especuló con la posibilidad de que el FMI y el Banco Mundial iniciaran una serie de actuaciones para reducir voluntariamente la deuda de las naciones más pobres. Las expectativas se centraron en las reuniones que estos dos Organismos internacionales iban a programar para el día 3 de abril, en Washington²⁵. Por otra parte, un estudio elaborado por el FMI indicaba que las reservas monetarias de las naciones latinoamericanas y caribeñas disminuyeron durante 1988 en 2.600 millones de Derechos Especiales de Giro²⁶.

Los ministros de Economía ratificaron que eran ineludibles y necesarias las reformas económicas en los países endeudados. De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la Comunidad se decantaba por el incremento de los recursos financieros a disposición del FMI y por el planteamiento económico de Nicholas Brady.

En su columna habitual, Darío Valcárcel (*Abc*), opinaba sobre la mediación de España a la hora de dar una solución a la deuda iberoamericana. Los 50 billones de pesetas que Iberoamérica debía a Occidente reclamaba una salida viable “para esas pobres naciones que se debaten entre la miseria y la malversación”(*Abc*, 14.3.89).

²⁴ *El Independiente*, 24.2.89.

²⁵ *Diario 16*, 14.3.89.

11. EFTA y CE: Llamamiento a una cooperación reforzada

Cuando en enero Jacques Delors pronunció su discurso de presentación de la nueva Comisión, en el Parlamento de Estrasburgo, manifestó su deseo de establecer nuevos lazos de unión entre la CEE y la EFTA.

El 15 de marzo, los Jefes de Gobierno de los seis países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio acordaban, en Oslo, una cooperación más estrecha con la CE mediante la creación de un organismo administrativo y de decisión común con la Comunidad.

El Documento, surgido en dicha reunión, fue presentado en Bruselas una semana después por los ministros de Asuntos Exteriores para establecer las prioridades inmediatas en las relaciones y estudiar nuevas reglas de cooperación. En el citado comunicado, los miembros de la EFTA deseaban textualmente, según informa *Expansión*, “un reforzamiento de sus relaciones particulares con la CEE sobre la base de derechos y obligaciones recíprocas” (16.3.89).

Los países miembros de la EFTA mostraron sus diferencias internas sobre el Mercado Único de 1992. Así, la estrategia de Austria, pasaba por el deseo de presentar en un breve plazo su candidatura de adhesión a la CE. En el *Die Welt* alemán se subrayaba este deseo. “Austria desea solicitar en junio su adhesión a la CE” (16.3.89). La adhesión sería debatida en el mes de abril en el Parlamento austriaco, después de verse culminado el proceso de consultas internas necesarias para presentar su candidatura a la adhesión. Sin embargo, podemos leer en las páginas del diario alemán que el ministro de Asuntos Exteriores austriaco, Alois Mock, no confiaba en el “montaje institucional” que rodeaba a las negociaciones EFTA-CEE.

²⁶ *El Independiente*, 17.3.89.

Suecia y Noruega apostaban, a diferencia de Austria, por aumentar las competencias de la EFTA con la creación de una unión aduanera entre las dos organizaciones, y Finlandia y Suiza parecían oponerse, sin embargo, a una ampliación de cometidos de la Asociación. La Primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, llegó a opinar en una entrevista que la Cumbre de Oslo era un test, en el que entraba la valoración de los aspectos más precarios de la Asociación. “Estamos estudiando -comentó- hasta qué punto coinciden los intereses de las dos Organizaciones, de tal manera que podamos lograr un plan para un espacio europeo más grande de dieciocho países” (*Revista Tribuna*, marzo).

El comunicado firmado en Oslo no llegó a recoger el deseo expresado por Suecia de alcanzar la unión aduanera entre la EFTA y la CE. Parecía, por otra parte, más conveniente establecer un poder de decisión en la EFTA, con un claro compromiso político, capaz de mejorar la libre circulación de mercancías. Los resultados de la Cumbre traducían un aumento del interés en la realización del principio de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales.

En el Consejo de ministros de Exteriores reunido en Bruselas (20 de marzo), concluida la Cumbre de la EFTA, Fernández Ordóñez aseguraba que se dio un nuevo impulso político a un proceso que ya estaba en marcha. Así, leemos en *Abc* “Los seis países de la EFTA piden acceso al Mercado Interior comunitario de 1992. Bruselas señala que las ventajas tienen un precio” (21.3.89).

Jacques Delors es la figura que más aparece en la prensa protagonizando un claro rechazo a la ampliación antes de 1993. *Diario 16* y *Le Monde* recuerdan esta actitud del Presidente de la Comisión, que criticó con dureza la neutralidad que defendían Austria y Suiza. El titular de *Diario 16*, acompañado de una fotografía de

Jacques Delors, anunciaba: “Las diferencias políticas siguen impidiendo el acercamiento entre la CE y los países de la EFTA” (21.3.89). En el caso de *Le Monde*, un día después, leemos, “Jacques Delors excluye toda nueva adhesión a la Comunidad antes de 1993”.

Por el contrario, el impulso integrador y europeísta de *La Vanguardia* apostaba por una lectura menos crítica hacia “una futura” ampliación, más partidaria de la consolidación de un gran espacio europeo. El rotativo catalán anunciaba para finales de año la celebración de una nueva reunión ministerial de la CE y EFTA para concretar algunos modelos de cooperación.

12. Escalada de presión sobre Ceaucescu.

El secretario del Foreign Office inglés denunció ante la CE las reiteradas violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo en Rumanía. Los Doce parecían dispuestos a tomar medidas políticas. Una carta abierta del ministerio británico al dirigente Nicolae Ceaucescu, instaba al Gobierno rumano a cesar la persecución contra seis intelectuales críticos con su presidente. Tras la condena del Parlamento Europeo y después de las declaraciones del comisario europeo Frans Adrianssen, este turbio asunto sería llevado a debate en el Consejo de Ministros de Exteriores del día 20.

Así, el Parlamento Europeo tuvo que ser informado por testimonios de numerosos exiliados que denunciaron el alarmante índice de mortalidad infantil y la destrucción de pueblos enteros bajo la dictadura de Ceausescu. En consecuencia, desde Estrasburgo se pedía a los *Doce* practicar una política muy firme, para exigir al régimen rumano el respeto a los derechos humanos, reexaminando sus relaciones bilaterales²⁷.

El País (21.3.89) en crónica de Ignacio Cembrero, informó del encuentro que preparó el número dos de la diplomacia española, Fernando Perpiñá, y el Embajador de Rumanía en Madrid, con el fin de expresarle su preocupación por los disidentes y la violación de los acuerdos de Helsinki.

Francia, por su parte, había suspendido la Comisión Mixta franco-rumana prevista para finales de ese mes. Por último, y además de lo expuesto, la Comisión Europea acordaba, entre sus medidas de rechazo al régimen, suspender la negociación comercial que tenía pendiente con Rumanía.

13. Retorno de los Embajadores a Teherán y el caso de Andorra

Pero más interés captó en los medios el desenlace del conflicto con Teherán, iniciado tras la publicación del libro "Versos Satánicos". "Los países de la CE deciden autorizar el retorno de sus embajadores a Irán" (*El País*, 21.3.89); "La CEE da 'luz verde' a la vuelta de embajadores a Irán" (*Abc*, 21.3.89); "Luz verde de la CE para que sus embajadores retirados por el caso de Rushdie vuelvan a Teherán" (*La Vanguardia*, 21.3.89). Considerando estos titulares, se desprende que se la CE apostó por una normalización de las relaciones con Teherán.

Aunque España todavía no decidió el retorno de su Embajador a Irán, Italia, Grecia e Irlanda fueron los países que ejercieron mayor presión en la normalización de las relaciones políticas con Teherán. La solidaridad de España con Inglaterra en el conflicto se confirmó, desde el foro europeo, el ministro español de Exteriores²⁸.

²⁷ *Diario 16*, 20.3.89.

²⁸ *The Financial Times* (21.3.89) insiste en el apoyo español a la causa británica, y *The Guardian* (21.3.89) informa que el regreso de los Embajadores a Irán, se decidió en un encuentro mantenido por altos funcionarios de Exteriores en Madrid

El caso andorrano no ofrece mucho interés a nivel comunitario, por lo general, porque las negociaciones en torno a la unión aduanera acababan de iniciarse. La intención de instaurar un régimen comunitario entre la CE y Andorra, se contiene en ese acuerdo, en forma de “canje de cartas con Andorra”.

Por la repercusión económica que este acuerdo suponía para Cataluña, en *La Vanguardia* se aborda esta cuestión, con mucha más expectación; así, leemos en el diario, que Andorra iba a ser tratada (como país tercero) conforme al art. 113 del Tratado de Roma, claro está, con profundas excepciones (21.3.89).

Algunos políticos españoles, como el Embajador permanente de España en Bruselas, Carlos Westendorp, indicaron que Andorra no podía seguir viviendo “de la diferencia de precios con España y Francia” (*La Vanguardia*, 12.3.89). Lo que sí es cierto, es que el comerciante catalán iba a ser el más afectado por esta medida. El Gobierno español, de hecho, no descartó su protección, desde el punto de vista comercial. Por otro lado, las excepciones que pudiera suscitarse, en el citado acuerdo, resultaban ser más inquietantes para el comercio andorrano.

Desde el punto de vista social y comercial, el cambio parecía necesario con la adhesión de España a la CE. En reiteradas ocasiones, el Cap del Govern de Andorra, Josep Pintat, había manifestado que era voluntad del Gobierno armonizar la actividad comercial y económica a las normas comunitarias, cumpliendo plenamente su responsabilidad²⁹

14. Arafat es designado Presidente del Estado Palestino

El proceso de Paz en Oriente Medio estaba abocado a la negociación directa entre la OLP e Israel, mientras que los EE.UUU empezaban a flexibilizar su apoyo incondicional al Estado judío. Yasir Arafat es designado Presidente del

Estado Palestino en Túnez. A ello contribuiría la importante labor del presidente egipcio, Mubarak, quien viajaría a Washington con la finalidad de reavivar el proceso de paz. En esta ronda de negociaciones, el primer ministro de Israel se reuniría con la Administración Bush y tras la visita del Presidente egipcio, sería Hussein quien acudiera a los EEUU³⁰.

Pero, ¿Cuál había sido hasta el momento el papel de la CE desde el reconocimiento (el pasado mes de noviembre) del Estado Palestino?. Los contenidos informativos que analizamos, nos demuestran que no existe unanimidad respecto a la política comunitaria en la zona. Es cierto que, sólo un año antes, algunos Estados miembros se negaron, por indecisión en los planteamientos políticos, a entablar conversaciones con Arafat.

En mayo, el líder palestino viajó a París, y el Primer ministro israelí era recibido por González en Madrid (24 de mayo). Ambas visitas suponían el reconocimiento internacional de un avance en el proceso de paz.

La importancia del viaje de Arafat se justifica desde el momento en que, en París, confirmó que la "Carta de la OLP" estaba obsoleta (en esta Carta se negaba el derecho a existir al Estado de Israel). Sin embargo, Arafat sabía que él no era el único dirigente que tenía que hacer concesiones, y esperaba una respuesta de Shanmir, ante unas acusaciones de éste, que le calificaban de "embustero".

En el diario *El País* (4.5.89) se destacan las concesiones aportadas por Arafat, de cara a una futura Conferencia de paz. Para el líder palestino, el reconocimiento de Israel formaba parte de esa línea estratégica, que nadie podía

²⁹ *La Vanguardia*, 22.3.89.

³⁰ Mubarak y Hussein abogaban por la celebración de una Conferencia Internacional auspiciada por Naciones Unidas. La solución del problema palestino pasaría por una confederación jordano-palestina (*El País*, 1.4.89)

modificar. La carta de la OLP sólo podía ser modificada por una mayoría de 2/3 del Parlamento palestino.

Para este fin, el líder palestino proyectó crear una “delegación árabe”, con Egipto a la cabeza, para poder iniciar las negociaciones en Francia. Los países participantes serían Egipto, Siria, Jordania, Líbano y Palestina, y el mérito de esta iniciativa, en un 90%, fue atribuido por el presidente Mitterrand³¹ a Yasir Arafat.

Por otra parte, y al margen de la OLP, el grupo palestino “Fatah-Mando Provisional”, calificaba de capitulación esta nueva concepción de la política. El nuevo paso de Arafat, al calificar de “caduca” la Carta Nacional Palestina, no podía dejar indiferente a la sociedad de Israel. De hecho, los sondeos publicados indicaban que más del 50% de los consultados, era favorable a la negociación con la OLP. Hasta los ministros laboristas veían cercana la negociación.

Para compensar su negativa a negociar con los representantes de la OLP, el mandatario israelí planteó en Washington la convocatoria de Elecciones en Gaza y Cisjordania. Los expertos opinaban que ésta propuesta, sin embargo, podía forzar a Shamir a negociar con la OLP. No obstante, después de comprobar las últimas informaciones sobre el conflicto aparecidas en este periodo, el problema palestino parecía entrar en una fase de transición.

15. Declaración sobre Polonia

El 6 de abril los Doce hicieron pública en Madrid y en Bruselas la declaración sobre Polonia, tras las elecciones legislativas celebradas en este país³². En relación con este área geográfica, la Comisión Trilateral (Estados Unidos-

³¹ *El País*, 4.5.89.

³² Ver en Anexo II, contenido de la declaración sobre Polonia.

Canadá, Europa Occidental y Japón) recomendaba a Occidente su ayuda para las reformas que estaban desencadenándose en el Este.

En su edición del 12 de abril, *Cinco Días* titulaba a tres columnas: “La Trilateral pide financiación para el éxito de la “Perestroika”. La Comisión Trilateral instaba a la CE para que intensificara las relaciones de Bruselas el Este; siempre que allí, se respetaran los derechos humanos y políticos. El informe elaborado por esta Comisión señalaba que Occidente debía financiar el cambio que se estaba produciendo en el bloque soviético, cada vez más cercano al mercado libre.

Giscard d’Estaing recomendaría examinar este asunto en la Cumbre de Madrid, prevista para el mes de junio. Kissinger, por su parte, también solicitaba esa participación abierta de Occidente. En el diario *The Washintong Post* se anuncia en titulares: “Dando marcha atrás a Yalta. Existe la posibilidad de una nueva Europa Oriental independiente”. Para este diario, el control de las armas “ya no puede seguir soportando todo el peso de las relaciones Este-Oeste. Además, el artículo revela otro aspecto relevante de la política exterior: con una “Europa unida” se obtiene una cohesión de las “muchas y separadas negociaciones sobre control de armas, comercio y derechos humanos” (16.4.89).

16. Consejo Informal en Granada.

La CE y los cancilleres latinoamericanos se citaron en Granada (14 y 15 de abril) con varios objetivos a debatir: la deuda de América Latina y las relaciones con el Este. Unos días antes, el presidente español, Felipe González, pidió ante el Parlamento Europeo “soluciones financieras y políticas” en la resolución de la deuda exterior.

Resultaba evidente la transcendencia del Consejo, con la presencia de Jacques Delors. Asistieron, además, los 12 ministros de Asuntos Exteriores y el comisario Abel Matutes. En la representación americana, figuraban los cancilleres del Grupo de Río. El debate relacionado con las finanzas estaba garantizado con la visita del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias.

Hemos de añadir, sin embargo, que el deseo de querer llegar a un consenso, contrastaba con la rigidez en la política de visados del Ministerio del Interior. La crítica más feroz sobre este punto la recoge un editorial publicado en *La Gaceta*, el 17 de abril ("Se perdió en Granada").

En Granada se discutieron también otros aspectos de la política de cooperación de la CE, como el protagonizado por las relaciones Este-Oeste, tendentes a estimular la liberalización de los países de la Europa Oriental. Sin embargo, los países comunitarios mantuvieron en su agenda una oposición férrea a Rumanía, por la violación de los derechos humanos de su Gobierno, y el incumplimiento de lo acordado en la Conferencia para la seguridad y la cooperación en Europa.

El enfoque de Granada fue diferente según leemos en los titulares de los diarios; mientras *Ya* y *La Economía* insisten en la mejora de las relaciones Este-Oeste, *La Gaceta de los Negocios*, antepone la reducción de la deuda y el impulso de la economía latinoamericana al resto de la Agenda. Así, y queriendo llegar más al fondo de este cuestión, leemos en *La Gaceta* la siguiente declaración del Presidente de la Comisión, Jacques Delors: "No se pueden arreglar los graves problemas económicos y financieros con una simple declaración"³³. A pesar de la voluntad de ayuda de los presentes, se pusieron de manifiesto profundas divergencias en la reunión, en cuanto a la forma de reducir la deuda. Delors

³³ *La Gaceta*, 17.4.89

afirmaba al respecto: “Hay que ponerse de acuerdo para reducir la deuda y tratar seriamente los ajustes de las economías”. Se ofrecía, desde la Comisión una solución concreta que implicaba directamente al Fondo Monetario en la financiación de proyectos a corto plazo.

No faltaron tampoco otro tipo de respuestas para combatir la deuda, como la que expuso el comisario Abel Matutes en la reunión, y que abogaba por la reducción de la deuda de Latinoamérica con la diversificación de sus producciones para que, de esta forma, fuera posible aumentar el número de sus exportaciones.

Por otra parte, Roland Dumas, ministro de Exteriores de Francia, llegó a proponer en Granada la celebración de una Conferencia Internacional en la Presidencia comunitaria francesa, del segundo semestre. No era la primera vez que Francia se mostraba insolidaria con las iniciativas de la Presidencia española, restando protagonismo a su programa comunitario. En este caso concreto, ambas naciones rivalizaban por mostrar un mayor interés en las relaciones de la CE con América Latina.

La Cumbre de Granada para Gran Bretaña y Alemania cobraba más interés en lo referente a la deuda latinoamericana. ¿Por qué eran reacios a introducir el Plan Brady en el debate del Consejo?. Según publicaba el *Financial Times*, el citado Plan “podría implicar que los contribuyentes de la Comunidad pagaran por préstamos de los bancos estadounidenses”³⁴.

The Independent, en otra dirección, incluye prioritariamente el mensaje de la CE a EEUU para pedir más apoyo a las reformas de Gorbachov (12.4.89).

³⁴ *Financial Times*, 17.4.89

En el caso de Italia, *La Repubblica* titula “sobre la deuda, un paso hacia adelante. Acuerdo en Granada entre Europa y América Latina”. La actitud positiva del periódico italiano respecto a los resultados de la Cumbre se confirma con esta frase de Andreotti, “ahora existe la convicción de que hay que pasar de la teoría a la política activa”. El dirigente italiano anunció después de la reunión, la conveniencia de legislar una normativa que aliviase los intereses de la deuda.

Al igual que en Gran Bretaña, en Alemania, el diario *Die Welt* insiste en el rechazo a conceder ayudas a los bancos privados como arma de lucha para acabar con la deuda. Pero otras corrientes de opinión, como la defendida por el *Sueddeutsche Zeitung*, hablan de una legislación para que los bancos puedan efectuar reducciones fiscales sobre los impagados.

Es preciso señalar que España jugó, en esta ocasión, un papel decisivo en el encuentro de la CE con Iberoamérica. El diario alemán *Allgemeine Zeitung* titulaba: “España mostró su ambición europea, y su compromiso con los países iberoamericanos en la preparación de este encuentro” (17.4.89).

17. La amenaza comercial de EEUU

En mayo la Comisión hizo público un Informe anual sobre las restricciones comerciales aplicadas por EEUU. El 30 de abril EEUU divulgó una lista de 34 naciones acusadas de proteger su comercio con barreras proteccionistas, y de no respetar las normas internacionales sobre industria.

La lista de naciones incluía países como Brasil, Chile, Colombia, México y Venezuela y, dentro de la CE a España, Portugal, República Federal Alemana, Bélgica, Italia y Francia. El Informe comunitario citaba un total de 42 reglamentos y prácticas comerciales estadounidenses que impedían o dificultaban las exportaciones comunitarias (restricciones cuantitativas, subsidios a la

exportación, primas compensatorias y diversas políticas fiscales). También se criticaba la Ley de Comercio aprobada por la administración norteamericana en 1988. Esta Ley permitía a Estados Unidos la adopción de acciones unilaterales contra las prácticas de comercio desleales. Una disposición que, sin contar con la autorización del GATT, resultaba ser ilegal ³⁵.

La prensa, por lo general, fue más bien crítica respecto a Washington. El diario *YA* señalaba que el presidente de la Comisión y responsable de los Asuntos Exteriores, Frans Andriessen, manifestó su disconformidad por el incumplimiento de la Administración norteamericana de los compromisos adquiridos en el seno del GATT (*Ya*, 4.5.89). Sobre el mismo asunto *La Economía* titulaba: “EEUU incapaz de cumplir los acuerdos comerciales”. Según *La Gaceta*, se trataba de garantizar que los fallos americanos en la aplicación de la legislación comercial internacional se corrigieran, y que las disposiciones potencialmente negativas de la legislación comercial se enmendaran ³⁶. *Expansión* (4.5.89) en su titular expone claramente la acusación directa de la Comunidad a los EEUU: “La CEE acusa a los Estados Unidos de comercio desleal”.

18. Garantía del proceso electoral en Panamá

España, en representación de la CE, se encargó de coordinar una Declaración en la que hacía un llamamiento al Gobierno panameño para que aceptara la voluntad soberana del pueblo expresada el 7 de mayo. La Declaración recoge: “Los Doce condenan expresamente la anulación de las elecciones por las autoridades panameñas, lo que supone la no aceptación de la voluntad soberana del pueblo panameño” (*El País*, 12.5.89)

³⁵ *La Gaceta*, 4.5.89.

³⁶ *La economía*, 4.5.89

Antes de los comicios panameños el Gobierno español había hecho gestiones con las autoridades de aquel país para garantizar el proceso electoral. El ministro de Asuntos Exteriores español, reconocía la existencia de “anormalidades graves tanto en el proceso electoral como en las operaciones de escrutinio” (*La Vanguardia* 11.5.89). Fernández Ordóñez expuso a la prensa: “tengo que lamentar que no haya sido así (garantía electoral) al tener que ser anuladas por la Junta Electoral Panameña”.

El diario *El País* informó puntualmente de la reunión que mantuvieron los representantes de la CE y del Grupo de los Ocho para adoptar medidas contra Panamá (sanciones económicas, expulsión de Organismos Internacionales etc.). Los representantes europeos determinaron la expulsión del Partido Revolucionario Democrático de la Internacional Socialista. México, por su parte, era reticente a la expulsión de Panamá del Grupo de los Ocho³⁷. Los Gobiernos de Venezuela y Perú sí consideraron esta postura.

En Gran Bretaña, Margaret Thatcher hablaba de pedir la dimisión del Jefe de las fuerzas de Defensa de Panamá, general Manuel Antonio Noriega. El Ministro de Asuntos Exteriores de la RFA llegó a denunciar este fraude electoral como un “atentado contra la democracia”.

Los ministros de Exteriores del Grupo de los Ocho, en una declaración conjunta realizada en Bogotá, afirmaron: “Panamá se aleja cada día más de la Comunidad latinoamericana” (*El País*, 12.5.89). Finalmente, el debate continuaría en Madrid el 16 de mayo, en el encuentro de la *Troika* comunitaria con una delegación norteamericana para analizar, entre otros temas, el conflicto panameño.

³⁷ México se manifiesta coherente a su tradicional política exterior de no injerencia en asuntos internos.

18. Acuerdo de Cooperación con la URSS (22 de mayo)

Un precedente importante del Acuerdo Comercial entre la CE y la URSS, alcanzado en mayo, fue la reunión de importantes personalidades de la vida política y empresarial que se celebró en La Toja. Esta ciudad gallega fue escenario del debate sobre la evolución interna de las naciones del Este, las relaciones entre EEUU y la URSS, la situación general de la CE y los problemas derivados por el deterioro del medio ambiente.

A este debate acudieron importantes personalidades de la vida política y empresarial: los reyes de España y Holanda, el presidente de la OTAN John Galvin; Felipe González, Mariano Rubio, Miguel Boyer; Oscar Fanjul, presidente de Repsol; Henry Kissinger; los financieros Nelson y David Rockefeller; el presidente de la Fiat, Giovanni Agnelli; el magnate de la prensa británica, Rupert Murdoch.

Cuando se celebró el Consejo de Asuntos Generales (22/23 de mayo), los diarios más influyentes recogieron en titulares el Acuerdo comercial al que se llegaba con la Unión Soviética. Se avecinaba un nuevo acontecimiento político y social que suscitaba cierta inquietud entre los dirigentes occidentales: el cambio que se estaba fraguando en el Este.

La Vanguardia (23.5.89): “La CE negociará un amplio acuerdo comercial con el Gobierno de la URSS”.

El Periódico (23.5.89): “La CEE prepara un acuerdo de cooperación con la URSS”.

El País (23.5.89): “La CE ofrece a Moscú un acuerdo de cooperación de 10 años de vigencia”.

Abc (23.5.89): “La CE comenzará la negociación del acuerdo comercial con la URSS antes de fin de año”.

Entre los medios de difusión económica, las cabeceras anunciaban también la futura firma del Acuerdo: “La CE firmará el acuerdo comercial con la URSS antes de fin de año” (*La Gaceta*, 23.5.89); “Bruselas estudia la firma de acuerdos comerciales con la URSS y Polonia” (*Expansión*, 23.5.89). “La CE negociará un acuerdo con la URSS por 10 años” (*La Economía*, 23.5.89).

La principal novedad del logro alcanzado radicaba en la colaboración en materia de energía nuclear. El mismo Ordóñez declaró, sobre este punto, que la convergencia de opiniones marcaría un “hito histórico en la CE” (*El País* 23.5.95). El Acuerdo con la URSS además estaba abierto a la cooperación en materia de comercio, ciencia y tecnología, transportes, turismo, servicios, materias primas y medio ambiente. Su vigencia era de 10 años (similar a la de los pactos rubricados por la CE con Hungría y Checoslovaquia).

El diario *Expansión* aporta una información más exhaustiva del saldo final de estas negociaciones Este-Oeste. La balanza parecía inclinarse en favor de la URSS, ya que el comercio de la RFA mantenía un excedente de 1.400 millones de dólares con los soviéticos³⁸.

En el mismo Consejo de Asuntos Generales se habló también de las conversaciones comerciales con Polonia. Fue el comisario de Relaciones Comerciales, Frans Andriessen, quien propuso que sobre estas conversaciones con Polonia se alcanzara un acuerdo comunitario.

Al hilo de este asunto, la “Unión de las Confederaciones de la Industria y los Patronos de Europa” elevó a la Comisión un documento con los problemas de los empresarios occidentales en la Europa del Este. Estos industriales exigían en

³⁸ *Expansión*, 23.5.89

sus peticiones ser integrados dentro de las comisiones mixtas, para vigilar el funcionamiento de los acuerdos.

Sobre el contencioso CE-EEUU, los Doce aprobaron asimismo un sistema de certificación de origen para flexibilizar las sanciones al mercado norteamericano (afectado por la directiva contra la carne hormonada). Así, *El País* titulaba: “La CE aprueba un sistema de certificación en origen que suaviza “la guerra de las hormonas” con EEUU”. El presidente del Consejo, Francisco Fernández Ordóñez confirmó este compromiso de solución a las quejas de EEUU. Por su parte, el comisario Frans Andriessen enumeró los logros obtenidos en su reciente viaje a EEUU, y pudo constatar que “el clima” había mejorado (*El País* 23.5.89).

19. La disposición comercial “*Super 301*”

EEUU amenazaba a la CE con implantar una ley, la “Trade Act”, después de las trabas impuestas a la venta de soja de sus agricultores. La prensa ya anunciaba que a finales de mayo la Administración norteamericana iba a publicar la lista definitiva de los países que venían utilizando ‘prácticas desleales’ en su comercio.

Ante esta provocación, la CE solicitó la supresión de las respuestas unilaterales, con lo que invocó a sus socios americanos el arbitrio que imponía el GATT en el comercio internacional. El comisario Andriessen adelantó que si EEUU anunciaba unas medidas incompatibles con el GATT, la CE se reservaría todos los derechos y, si fuera necesario, presentaría una “denuncia oficial ante el GATT” (*La Economía* 24.5.89).

El diario *La Economía* habla de “prudencia” en los litigios de la CE con EEUU. Así, las delegaciones de Gran Bretaña y la RFA recomendaban una posición “firme” pero “prudente” (*La Economía* 24.5.89)

A pesar de esta guerra comercial, en los EEUU algunos sectores sí confiaban en una mayor expansión del comercio ante la futura Unión Europea. Robert Mosbacher, secretario de Comercio de este país, declara en el diario francés *Le Figaro* (en alusión a la fecha de 1992): “Es una formidable ocasión para que los hombres de negocios americanos tengan un mercado más amplio” (*Cinco Días* 27.5.89).

Estados Unidos aplicaba por primera vez el artículo más duro de la Ley de Comercio aprobada en 1988. Japón, India y Brasil quedaban sujetos, desde el principio, a las disposiciones de esta Ley. En *Cinco Días* leemos: “Washington inicia una guerra en sus relaciones comerciales con Japón, Brasil y la India”.

La CE, fuera de esta lista, recibía con satisfacción esta medida, aunque cuatro países comunitarios, entre ellos España, quedaban “bajo vigilancia”. Las naciones expuestas a la adopción de sanciones conminaron a la Administración Bush a no adoptar medidas con carácter unilateral, contrarias al espíritu del GATT.

En el lado americano, la responsable del Comercio Exterior, Carla Hill, acusaba a Japón, Brasil y la India de “prácticas comerciales desleales”. En un plazo de 18 meses estos países debían poner término a dichos usos, ante las inminentes represalias económicas de Washington. La interpretación que el correspondiente. Es cierto que los senadores y miembros de la Cámara de Representantes se sintieron presionados por sus electores, que veían en peligro sus puestos de trabajo por las prácticas restrictivas del Japón. El mismo Dan Quayle declaraba que era, ante todo, “una decisión política” (*El País* 27.5.89).

Las Embajadas en Washington, de los tres países sancionados no aceptaron de buen grado la disposición conocida por “Súper 301 de la Ley de Comercio de 1988”³⁹. El ministro indio de Comercio, Dinesh Singh Dubbed, reaccionó contra las amenazas norteamericanas, afirmando que EEUU “no está en posición de pedir a otros levantar barreras sin hacerlo él”. Brasil alegó que su máxima preocupación radicaba en reducir la deuda exterior que alcanzaba unos 120.000 millones de dólares.

La Gaceta dedica un editorial para analizar el desequilibrio existente en las relaciones comerciales de los Estados Unidos y Japón: “EEUU contra Japón”⁴⁰, según el cual, George Bush veía en el archipiélago asiático un gran obstáculo para las exportaciones norteamericanas. En 1988 el saldo comercial fue favorable a Japón en 55.400 millones de dólares. Por esta razón, interpreta el editorial, Estados Unidos optaría por medidas de presión que forzaran la apertura de los mercados extranjeros a sus productos al margen de las negociaciones para el desarme arancelario llevadas a cabo en el seno del GATT.

Si Japón había experimentado esa falta de moderación de la política norteamericana, ¿cómo se explica que, tras los últimos conflictos con la CE, los Doce no figurasen en la lista negra de países seleccionados por EEUU? El motivo no podía ser otro que el temor a “ofender a los europeos”, cuando sólo faltaban unos días para que Bush visitara el viejo continente.

³⁹ La disposición Súper 31 incluía la prohibición de ventas de ordenadores norteamericanos a ningún organismo oficial japonés, nulo acceso de la industria de satélites de EEUU al mercado japonés y restricciones técnicas que impidieran la venta de productos forestales norteamericanos en Japón (*El País*, 27.5.89).

⁴⁰ *La Gaceta*, 27-28.5.89.

20. El Manifiesto de los conservadores británicos

A finales de mayo saltaba a la prensa una noticia que afectaba directamente a la composición del Parlamento Europeo. Desde Estrasburgo se supo que los socios españoles de los conservadores británicos del Parlamento Europeo se preparaban para unirse a otro grupo, el Grupo Cristiano-demócrata. La razón no era otra que la reciente línea que M. Thatcher había adoptado sobre Europa. Así, por ejemplo, *The Independent* destacaba: “La política de la Thatcher puede costar a los Tories sus euroaliados” (24.5.89).

El ministro alemán occidental de Asuntos Exteriores, Hans Dietrich Genscher, también confirmaba esta opinión. En una entrevista al mismo diario londinense, se mostraba en desacuerdo con los intentos de Thatcher de obstruir el progreso hacia la Unidad de Europa: “en todas las áreas políticas hay quienes adoptan una actitud dinámica y progresista, y hay quienes dudan y, temerosos, dan un salto atrás” (*El País* 30.5.95).

Por tanto, a raíz de este futuro cambio parlamentario, los conservadores británicos lanzaron un Manifiesto para la defensa de sus intereses en Europa. Con este Documento se abrió un profundo debate sobre la concepción del futuro de la Europa Unida.

21. La OCDE critica la política comercial de EEUU.

En la reunión de los 24 países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico se denunció la amenaza de los EEUU al elaborar una la “lista negra” de países, que podían ser objeto de sanciones comerciales: “Fernández Ordóñez condena en la asamblea de la OCDE la política

comercial de EEUU” (*El País*, 2.6.89). “Fernández Ordóñez denuncia en París las prácticas proteccionistas de los Estados Unidos” (*Ya*, 2.6.89). “EEUU excluyó a la CE de la ‘lista negra’ y evitó la guerra comercial” (*El Independiente*, 2.6.89).

Un papel más activo de la implicación de la OCDE se observa, el mismo día, en los siguientes titulares de *La Gaceta de los Negocios* y *Diario 16*: “Estados Unidos evita que la OCDE condene su política comercial”, “La OCDE insta a Estados Unidos a negociar, en lugar de imponer nuevas sanciones comerciales”.

Es cierto, que la exclusión de la Comunidad Europea de la citada “lista negra” evitó el desencadenamiento de una auténtica guerra comercial. Así pues, en la Asamblea se denunciaron las prácticas unilaterales de carácter proteccionista por parte de algún país. Según el ministro de Exteriores español, existía cierta contradicción “entre los discursos a favor del multilateralismo por parte de algún país, y la adopción de medidas unilaterales de carácter proteccionista que sólo pueden tener consecuencias negativas para el comercio internacional” (*El País* 2.6.89).

No hay que olvidar tampoco que otro de los puntos claves de la Asamblea de París fue la discusión del llamado Plan Brady sobre la deuda del Tercer Mundo. El Reino Unido, la RFA y Holanda mantenían sus reservas respecto a dicho Plan, pero pese a sus reticencias, el comunicado final de esta reunión incluía la aceptación de los esquemas de Brady. Se expresó abiertamente el apoyo a “la estrategia de la negociación caso por caso” y la OCDE calificó favorablemente las recientes decisiones sobre la deuda del FMI y del Banco Mundial (*El País*, 2.6.89).

22. La Asamblea de las Regiones de Europa y el Seminario Interministerial hispano-francés.

Lo más significativo de la Asamblea de las Regiones de Europa fue la defensa que hizo Pujol de los poderes regionales frente a los locales.

Como Vicepresidente de la Asamblea, Jordi Pujol, acompañado por el italiano Carlo Bernini, acudió al Palacio de La Moncloa para discutir con González la distribución de los Fondos Regionales y la participación de las regiones en el desarrollo del Mercado Único. El diario *La Vanguardia* resume con este titular el espíritu reinante de la Asamblea: "Pujol pide más comprensión entre Estados y Regiones"(2.6.89) . La prensa catalana destaca este importante papel mediador del Presidente de la Generalitat de Cataluña.

Cuando se celebró el seminario hispano-francés en París (3 de junio) se evocaron una serie de coincidencias en los temas comunitarios, que repercutían de forma muy favorable en el relevo presidencial de Francia.

Todo apuntaba a que se iba a mantener un ritmo idéntico durante la Presidencia francesa. Fernández Ordóñez y Roland Dumas confirmaron algunos puntos de unión, sobre todo en política exterior, ante el inminente Consejo Europeo del 26 y 27 de junio. En *La Vanguardia* leemos: "Francia mantendrá el "impulso y tensión" de España en la política exterior de la CE" (3.6.89).

Los ministros de Asuntos Exteriores conversaron sobre los avances de la *Troika* en Oriente Medio, y el inicio de una más sólida participación de la CE en el proceso de paz centroamericano. Aunque hay que reseñar, por otra parte, que las discusiones sobre la cooperación transfronteriza coordinadas por el ministro

de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, no alcanzaron el interés deseado entre los dirigentes franceses.

En otros asuntos de cooperación internacional, se dejó oír la voz del ministro Corcuera, en los aspectos relacionados con la inmigración (exigencia de visados para la entrada en Europa, relevo en la Presidencia del Grupo de Trevi, tráfico de drogas, etc.).

De igual modo, fueron tratados los grandes asuntos de la construcción europea de forma muy similar (armonización fiscal indirecta y Unión Monetaria). El mismo Delors manifestaba días antes, que el principal objetivo de Francia durante su mandato pretendía formalizar un “compromiso solemne” a propósito de la Unión Monetaria⁴¹. Sin embargo, algunos políticos interpretaron de “excesivas” las iniciativas surgidas en el país vecino. Por su parte, González salía al paso de estos rumores negando que tuviera “un problema de celos” respecto al país galo⁴². El mismo Ordóñez reconocía que no iban a ser resueltos por nosotros temas que, como la unión monetaria llevaban 30 años esperando⁴³. La prensa, por lo general, destacó del seminario, la coordinación y eficacia de los dos países.

23. La represión estudiantil en China

Las noticias sobre la revuelta de Pekín captaron, por su gravedad, la preocupación de los mandatarios europeos. La brutal represión de la plaza de Tiananmen, significó entre los expertos políticos, el final de la era Deng Xiaoping.

Occidente no tardó en reaccionar ante esta brutal represión. La CE tenía prevista, para el 5 de junio, una reunión con el ministro chino de Comercio

⁴¹ *El País*, 4.6.89.

⁴² *El País*, 4.6.89.

Exterior, Zheng Tuobin, y tras conocer los sucesos se cancelaron todas las negociaciones. Los directores generales de los ministerios de Asuntos Exteriores de los Doce decidieron discutir la posibilidad de secundar las sanciones de los EEUU contra el régimen chino⁴⁴. Además, se esperaba que, en la próxima reunión comunitaria de Luxemburgo, se dictaran medidas contra el Gobierno de Pekín.

El Comité Político de Cooperación analizó en Madrid las medidas de represalia que podían adoptar los Estados comunitarios ante la gravedad de los hechos. Otras fuentes no descartaron la interrupción de visitas a alto nivel, y la OID desaconsejó a los ciudadanos españoles viajar a China en ese momento.

El País nos daba a conocer lo más importante del comunicado dictado por la CE: “..más de un millar de civiles no armados han sido abatidos en las calles de Pekín. Otros miles han resultado gravemente heridos. Esta represión sangrienta ha sido condenada por la opinión pública de todo el mundo. La Comisión recuerda que las relaciones de cooperación entre China y la CE corren el peligro de resultar gravemente afectadas si el Gobierno chino emprende un camino que pueda comprometer la política de apertura y de reforma seguida hasta el momento”⁴⁵.

Sobre el futuro de Hong Kong, el Gobierno británico afrontó numerosas presiones para interrumpir las negociaciones con China sobre la Colonia. Según se firmó en el Acuerdo de 1984, China se haría cargo de Hong Kong en 1997, preservando el régimen democrático y el sistema económico capitalista. “Trataremos de encontrar la mejor solución, pero es un problema difícil -

⁴³ *La Vanguardia*, 3.6.89.

⁴⁴ China cuadruplicó su comercio con la CE desde 1978, con un excedente de 1200 millones de ecus en 1988 (*La Vanguardia*, 6.6.89)

⁴⁵ Esta declaración sirvió de precedente a la que dictó el Consejo Europeo en Madrid a finales de junio. Se incluyeron medidas como la interrupción de contactos bilaterales ministeriales y de alto nivel y el aplazamiento de nuevos proyectos de cooperación.

manifestaba el ministro de Asuntos Exteriores británico Geoffrey Howe porque de acuerdo con la ley, Hong Kong debe revertir a China, en cualquier condición, antes de finales de siglo”(Diario 16, 6.6.89)..

24. La Convención de Lomé

La Comunidad Europea y los 66 países de Africa, Caribe y el Pacífico integrados en la Convención de Lomé, iniciaron en la capital belga, la tercera reunión para la renegociación del tratado de cooperación que expiraba ese año. Esta Convención regulaba las relaciones preferenciales de 66 países de África, Caribe y Pacífico con los 12 países comunitarios.

Los 78 ministros de Asuntos Exteriores y la Comisión Europea (representada por Manuel Marín) se inclinaban por conseguir un consenso respecto a la financiación de los ajustes estructurales en los ACP. En *Cinco Días* aparecen unas declaraciones del Primer ministro de Fiji, Ratu Kamisese Mara, aludiendo al empeoramiento del comercio con estos países a raíz de algunas medidas adoptadas por la CE: “Nos hemos dado cuenta de que el libre acceso establecido en el Tratado de Lomé no es una condición suficiente para un buen comercio con la CE”⁴⁶

Los dos puntos más conflictivos de la etapa final de la negociación en la IV Convención de Lomé se referían al volumen de financiación y a los criterios por los que se prestaba la ayuda comunitaria. Mientras que la CE se resistía a fijar porcentajes y cantidades que aumentaban sus actuales compromisos, los ACP pedían que se duplicara la ayuda al desarrollo, que hasta entonces era de 8.500 millones de ECU.

⁴⁶ *Cinco Días*, 3.6.89.

El comisario responsable de la política de Cooperación de la Comunidad, Manuel Marín, mostraba su pesimismo: “No esperamos grandes progresos de esta reunión” (*El País* 4.,6.89). Las recientes medidas adoptadas por la CE, relativas a los productos tropicales, arroz y azúcar, habían empeorado el comercio con estos países.

Sin embargo, se habían obtenido importantes progresos en materia de derechos humanos y en lo relacionado con desechos industriales tóxicos, pero faltaba por concretar aspectos tan puntuales como la mejora del régimen de comercio o las ayudas a las materias primas básicas de los países ACP. Otro punto de controversia era la aceptación de la República Dominicana en la ACP, que junto a Haití, pidieron el ingreso en este Organismo. Los países ACP fueron reacios a la incorporación de estas dos Repúblicas porque podían convertirse en la ‘puerta de entrada’ de toda Centroamérica, y quedaba todavía por examinar las consecuencias de su adhesión en lo referente a la producción de azúcar.

Cuando concluyó la reunión de Lomé, el presidente de esta Conferencia Ministerial en representación de la CE, Luis Yáñez, afirmaba que no había sido posible ir más adelante porque las dos partes prefirieron “mantener reservas sobre los puntos esenciales hasta el último momento” (*El País* 6.6.89). Finalmente, aunque no se resolvieron asuntos como el montante financiero del próximo Convenio Lomé IV y las nuevas concesiones comerciales a incluir en éste, los ministros sí pudieron aprobar formalmente una serie de textos para su introducción en el futuro Convenio.

25. González prepara la Cumbre de Madrid.

Cuando Felipe González viajó a Bruselas con motivo de la reunión conmemorativa del 40 Aniversario de la OTAN, aprovechó su estancia en la capital belga para preparar la Cumbre de Madrid. En declaraciones a la prensa,

González habló del proceso electoral del 15 de junio y acusó a sus rivales políticos de “no tener opiniones sobre Europa” (*La Vanguardia*, 31.5.89). El Presidente español adelantó en este viaje algunos de los temas definitorios en el proceso de construcción europea -como la dimensión social y la unión monetaria-. Sin embargo, no se prodigó en el análisis de los problemas internos de España.

Durante la estancia de Felipe González en Alemania, tuvo una entrevista con Helmut Kohl (22 de mayo). También, el Presidente español viajó a Portugal, París, Cerdeña, Londres y Dublin. Era una intensa gira en la que trataba de conseguir una posición unánime de la CE sobre la deuda latinoamericana (esta reivindicación española tuvo una fuerte acogida en las cabeceras de los diarios más importantes) . De igual modo, en las reuniones que mantuvo con Mitterrand y De Mita, negoció puntos de encuentro en la política monetaria y social. El mismo Presidente español, aseguraba durante su estancia en París, que el éxito del Consejo de Madrid dependería de la “capacidad de los *Doce* para ir hasta el final en el proceso de unión monetaria”⁴⁷.

No pasamos por alto, el índice elevado de noticias que hacen referencia a las declaraciones de Felipe González sobre el terrorismo de ETA, aunque el motivo del viaje fuera la próxima Cumbre: “Mitterrand reconoce ante González que parte de la cúpula de ETA está en Francia” (*Ya*, 9.6.89). “Felipe González reitera en Francia que no habrá nuevas negociaciones con ETA” (*Abc*, 9.6.89).

De entre los diarios más relevantes, el mensaje europeísta de González en alusión a un compromiso monetario entre los Estados miembros, sólo fue recogido por *El País*: “González desea que la CE profundice su unión económica y monetaria”⁴⁸. Finalmente, queda añadir en este epígrafe, que el viaje fue

⁴⁷ *Ya*, 9.6.89.

⁴⁸ El corresponsal de El País, Ignacio Cembrero, recuerda las declaraciones de González en la entrevista que publicó Le Figaro, “L’avenir de l’Espagne dépend de son intégration à l’Europe” (8-6-89) donde González aseguraba que “no habrá nunca negociación con ETA. No habrá ninguna posibilidad de reanudar el diálogo..”

criticado duramente por algunos políticos, que veían en él claras intenciones electoralistas ante los comicios de junio. *Diario 16* constata esta supuesta intencionalidad del Presidente, cuando las informaciones del viaje del Presidente aparecen en la sección con el epígrafe: “Campaña Electoral”.

26. Conclusiones del capítulo

- La prensa constata un gran avance en el campo de la cooperación política durante la Presidencia española, con un aumento del protagonismo del ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, apodado por algunos el “ministro viajero”.
- La gira en Oriente Medio de la *troika* comunitaria se recoge en la prensa y, los diarios más analíticos, presentan esta misión diplomática como un ambicioso proyecto de cooperación política exterior. No existe unanimidad de criterios entre los países de la CE cuando se habla del conflicto de Oriente Medio.
- El escándalo suscitado por la novela “Versículos satánicos” provocó una guerra diplomática entre la CE e Irán, con un amplio despliegue informativo. El “chantaje intelectual” del Ayatollat, despertó la indignación de los intelectuales occidentales. Una vez más, el semanario *El Independiente* apunta un dato novedoso sobre este conflicto: con toda probabilidad, el “caso Rushdie” fue instrumentalizado para extender el “racismo antiárabe”.
- En la reunión de San José V (San Pedro Sula) la línea editorial general destaca que era la primera vez que la CE, impulsada por la Presidencia española, presentaba a los países centroamericanos un proyecto global de cooperación. Por tanto, el objetivo de los europeos se centró en promover el comercio interregional, aunque supeditando las ayudas económicas a la permanencia de cierta estabilidad política en la Región.

- En las negociaciones para la cooperación política entre la CE y EE.UU, subsiste la idea de una “Europa fortaleza” en la Administración norteamericana.
- Se establecen nuevos lazos de unión entre la CEE y la EFTA. El 15 de marzo se firma un acuerdo de colaboración de cara al mercado único. Algunos diarios destacan de este apartado el impulso dado al “gran espacio europeo”, y sólo *Diario 16* se atreve a reconocer en titulares, que las diferencias políticas entre la CE y los países de la EFTA seguían impidiendo su acercamiento.
- Desde el Parlamento Europeo y la Comisión son reiteradas las denuncias contra las violaciones de los derechos humanos que venían produciéndose en Rumanía. Las instituciones europeas participan directamente en la condena del régimen de Ceaucescu.
- Existe una falta de unanimidad en la valoración del proceso de paz de Oriente Medio por parte de los Estados europeos. Sin embargo, dos visitas suponen el reconocimiento internacional del avance en la solución del conflicto: por un lado, el viaje a París del líder palestino (donde se confirmó que la Carta de la OLP estaba ya obsoleta); y en segundo término, la recepción del Primer ministro israelí (24 de mayo) por el Presidente González. En los sondeos, un 50% de los consultados, eran favorables a la negociación con la OLP.
- La CE intensifica sus relaciones con Polonia (Declaración sobre Polonia, 6 de abril). Existe una corriente de opinión en los medios favorable a la Perestroika.
- En Granada (Consejo Informal, 14 y 15 de abril) en la discusión sobre la reducción de la deuda de Iberoamérica, surgieron profundas divergencias en cuanto a la forma de solucionar el problema. La prensa española e italiana

mostró un perfil más abierto en la búsqueda de fórmulas para reducir la deuda. Los diarios ingleses y alemanes, por el contrario, son más reticentes con las medidas que defiende la Presidencia española (*Die Welt*). No obstante, hay un reconocimiento expreso del diario alemán *Allgemeine Zeitung* sobre el decisivo papel de España en el acercamiento entre la CE e Iberoamérica.

- De las restricciones comerciales impuestas por EEUU se informa en todos los diarios. Las reacciones de carácter oficial contra la Ley de Comercio acaparan la atención de las páginas internacionales. Uno de los motivos que más preocupan a la Comunidad Europea es el incumplimiento por EE.UU de los compromisos adquiridos en el GATT. Todos los diarios económicos dedican abundante información a este capítulo.
- Condena comunitaria al Gobierno panameño por el boicot de las Elecciones. Los titulares destacan que, por iniciativa española, los Doce se pronunciaron contra el fraude electoral que sufrió este país. Los representantes de la CE y del Grupo de los Ocho mantuvieron una reunión para adoptar medidas contra Panamá.
- Los periódicos enfocan en términos muy similares el acuerdo de cooperación con la URSS y la CE. Los Doce tienden la mano a la Unión Soviética para lograr un acuerdo comercial antes de fin de año.
- Las subvenciones agrícolas es el apartado más espinoso en las negociaciones de los países del GATT. Según se advierte en algunos comentarios, el peso de las conversaciones se centró -principalmente- en la reforma de la Política Agraria Comunitaria. Las noticias hablan del “éxito final” de la reunión, pero también de “falta de concreción” de la propuesta global que, finalmente, fue aceptada.

- Cuando se firma el acuerdo entre CE-EEUU en la denominada “guerra de las hormonas” todos los periódicos informan de ello. Sin embargo, las causas reales del contencioso comercial también nos revelan que, la CE y EE.UU mantienen una “batalla de imagen” en el escenario de los mercados internacionales.
- La coordinación de las ayudas que la Comunidad concede a los países ACP (Africa, Caribe y Pacífico) cuenta con una limitada difusión periodística a nivel nacional.
- Las informaciones sobre la gira de Felipe González por varios países comunitarios también abordan aspectos ajenos a los temas que se van a debatir en la Cumbre de Madrid. Sobre todo aquellos que se relacionan con el terrorismo de ETA (*Abc, Ya*). Sobre este viaje *Diario 16* destaca su carácter “electoralista”.

CAPÍTULO XI:

Elecciones al Parlamento Europeo (1989)

1. El Parlamento Europeo

Por primera vez en la historia, los electores de los Doce países comunitarios iban a elegir un Parlamento que, aunque necesitaba reforzar sus instituciones, representaba la voluntad popular en la edificación de Europa. Con las Elecciones al Parlamento Europeo estaba en juego la homologación de nuestra sistema de partidos políticos con los sistemas de partidos de la CE.

Los candidatos todavía no podían optar por un sistema único, porque la integración europea no había avanzado lo suficiente. Según Jordi Solé Tura se trataba de “decidir qué fuerzas políticas van a dirigir la Europa comunitaria entre ahora y 1993”. Y esa elección pasaba, necesariamente, por la necesidad de homologar los partidos políticos, para favorecer la construcción de Europa (*El País*, 13.6.89).

Decididamente, los días anteriores a las Elecciones constituirían un foro de discusión para dirimir qué modelo político y social iba a consolidar Europa: si un proyecto neoliberal o un modelo de desarrollo social, de igualdad y lucha contra los desequilibrios territoriales. Lo que también era evidente es que sólo tendrían capacidad de influir las opciones políticas de alcance europeo, y en las Elecciones al Parlamento Europeo de junio se iban a consolidar o no los grupos políticos que hasta entonces formaban parte de la Cámara.

En los distintos países europeos la tónica general era considerar estos comicios como una especie de primarias, para futuras consultas nacionales. Es cierto que, políticamente, Europa era un pretexto para dirimir los conflictos internos.

Pero ¿Cómo funcionaba el Parlamento Europeo en 1989 antes de las elecciones? En el seno de las comisiones, se preparaba el trabajo parlamentario y sus integrantes discutían los informes y dictámenes para después ser sometidos a pleno. Asimismo, los grupos políticos organizaban su trabajo durante la semana que precedía al pleno e intentaban aproximar los puntos de vista de las distintas delegaciones. Habitualmente el Parlamento Europeo se reunía una vez a la semana y en sesión plenaria, con un orden del día fijado por la Mesa y los presidentes de los grupos políticos.

Las relaciones de la Presidencia Española del Consejo con el Parlamento Europeo estuvieron presididas, en todo momento, por el decidido apoyo institucional a la Asamblea. Podemos destacar como ejemplos ilustrativos de cooperación la intervención del Presidente, el 12 de abril, las comparecencias específicas del ministro de Asuntos Exteriores y una serie de reuniones europarlamentarias celebradas en España (Madrid, Toledo, Valencia y Tenerife).

En cierto modo, la tercera legislatura, elegida por sufragio universal, podría influenciar en la consolidación de reformas importantes, indispensables para debates más amplios en torno a las decisiones del Consejo (*El País*, 5-4-89).

De cara a la reforma institucional, el presidente del PE, Lord Plumb, afirmó que ese asunto se abordaría en la Cumbre de Madrid o en la de Estrasburgo, ya durante la Presidencia francesa⁸⁶. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, no sabía si en Madrid se iba a abordar la reforma institucional del Parlamento Europeo.

2. El voto de los residentes en la CE

A mediados de marzo, el Parlamento Europeo adoptó a mediados de marzo una propuesta de directiva de la Comisión Europea que permitía la participación en los comicios, de aquellos ciudadanos residentes (al menos 5 años) en un Estado miembro del que no eran originarios.

El diario *El País*(4.4.89), puso especial énfasis en el comportamiento electoral de algunos Estados comunitarios. Por ejemplo, la situación de Dinamarca, Holanda e Irlanda era la siguiente: los extranjeros podían no sólo votar en los comicios locales, sino incluso podían ser elegidos. En Bélgica, el ministerio del Interior, no dudó en aceptar la futura votación de británicos e irlandeses en junio, porque los ciudadanos de ambas islas eran los únicos de la CE que no podían ejercer este derecho en su país por medio del correo, por delegación o en su consulado.

Pero este Proyecto de directiva comunitaria contó con ciertas reservas por parte de algunos países. La alcaldesa liberal de Luxemburgo, Lydie Wurth Polfer

⁸⁶ Ya, 17.4.89.

recordó ante el Parlamento Europeo que en su país el porcentaje de extranjeros alcanzaba el 26% y, aunque hizo gala de la solidaridad de Luxemburgo, no pasó por alto que esa situación podía resquebrajarse con la concesión de este derecho al voto de los residentes (comportamientos xenófobos y extremistas).

En la RFA, por otra parte, los democristianos se englobaban entre los 500 eurodiputados que votaron contra la directiva. Una ciudad, Hamburgo, legalizó el principio de reciprocidad a la hora de votar. Este principio atentaba contra la Ley Fundamental alemana, ya que se autoriza la participación, en las elecciones municipales de mayo de 1990, a todos aquellos ciudadanos procedentes de los seis países que también concedían ese derecho a los alemanes residentes.

3. Doce coaliciones electorales

El 3 de abril se iniciaba el plazo de inscripción de candidaturas de los partidos políticos que se presentaban a las elecciones europeas. A partir de entonces, los diarios recogen la historia más reciente de nuestro país sobre las elecciones al Parlamento Europeo y dan cobertura informativa del grado de participación de los 28 partidos.

Según los datos que facilitó la Junta Electoral Central eran doce la coaliciones que concurrían a las elecciones europeas. Así, el Bloque Nacionalista Galego, estaba formado por la Unión do Poble Galego y la Asamblea Nacional Popular Galega. El Partido Socialista de los Trabajadores, llegó a un acuerdo con el partido de los Obreros Revolucionarios. La Federación de partidos regionales, estaba integrada por Unión Valenciana, EU, Partido Riojano Progresista, Partido Regionalista de Cantabria, UPM y PRM.

El Partido Comunista de los Pueblos de España, que se presentó junto al Partiyt dels Comunistes de Catalunya. Asimismo, se presentó CiU, la coalición formada por Convergencia Democrática de Catalunya y Unió Democrática de Catalunya. En la Coalición nacionalista se integraban el PNV, Agrupación Independientes Canarias, Coalición Galega y Partido nacionalista de Castilla y León.

Los ecologistas, representados por Lista Verde (Los Verdes Alternativos de Madrid, Partido Ecologista de Euskadi, Alternativa Ecologista de Galicia y Los Verdes). Y el grupo Izquierda de los Pueblos, formada por Euskadiko Eskerra, Esquerda Galega, Unitat del Poble Valenciá, Entesa dels Naacionalista D'esquerra, Partit Socialista de Mallorca, partit Socialista de Menorca, Unión Aragonesista y Asamblea Canaria.

La coalición de Izquierda Unida, estaba constituida por el Partido Comunista de España, Partido de Acción Socialista, Izquierda Republicana, Federación de partidos de Izquierda Canaria Unida y Partido Socialista Unificado de Cataluña.

Por Europa de los Pueblos, se presentaban Eusko Alkartasuna, Esquerra Republicana de Cataluña y Partido Galeguista y, finalmente, Alianza por la República, integrada por el Partido Obrero Socialista Internacionalista y por Alianza de la Democracia Socialista, y Coalición Socialdemócrata, constituida por el Partido Socialdemócrata de Cataluña y por Estat Catalá.

4. Precampaña electoral

A un mes de las Elecciones, los diarios desplegaron amplia información sobre los candidatos de primera línea. Por ejemplo, *La Vanguardia* publicó una serie de artículos sobre el alcance político de las elecciones europeas, firmados por algunos de los candidatos al Parlamento de Estrasburgo.

Del contenido de los programas políticos que defienden los candidatos, surgirán debates en los medios de comunicación para que el ciudadano conozca la realidad institucional de la CE y el verdadero sentido de estas elecciones. Así, el ex-ministro español de Asuntos Exteriores u candidato a las listas socialistas, Fernando Morán, escribe un artículo donde expone que las elecciones al Parlamento Europeo podían servir, en algunos países, para medir “el grado de aceptación o rechazo de las políticas de los gobiernos en el poder”⁸⁷.

Según se desprende de su artículo, pese a la similitud de los programas para la construcción europea, se encuentran dos lecturas diferentes: la más conservadora, que ignora las diferencias tanto fiscales como sociales; y la otra, que apoya la tesis de una integración económica equilibrada por una integración política. Manifiestamente, esta actitud era la que compartían los partidos socialistas de la CE y era a la que se había adherido el PSOE.

En claro reconocimiento al papel democrático de la Cámara de Estrasburgo (porque representa directamente a los ciudadanos de la CE), el candidato socialista tampoco quiso omitir el déficit democrático de esta institución, ya que “sus

⁸⁷ “Una ocasión para la clarificación” (*La Vanguardia*, 14.5.89)

competencias legislativas y de control distan mucho de las de los parlamentos nacionales”.

Otra lectura de la campaña electoral, permite al candidato socialista establecer una línea divisoria entre la integración económica y política. “Se trata de crear una cultura política europea capaz de compensar el déficit democrático de las instituciones” (*La Vanguardia*, 14.5.89).

La valoración del componente nacionalista queda reflejada en el discurso de otro candidato al PE, Carlos Garaikotxea⁸⁸, que eleva el protagonismo de los nacionalistas y reconoce que son los impulsores de la “Europa de las Naciones”. Consciente de la compatibilidad de sus aspiraciones con la idea de una unidad política europea, también habla de los riesgos del Mercado Único sobre las regiones europeas (sobre todo los que se derivan de la fuerte competencia en este mercado y que pueden llegar a acarrear un auténtico dumping social).

Pero en *La Vanguardia* también se exponen las bases del proyecto popular. El candidato por el PP a las elecciones del PE se compromete, públicamente, a consolidar el Mercado Único a través de “la armonización fiscal, la moneda europea respaldada por un Banco emisor europeo, la existencia de una política exterior común...”⁸⁹. Pero el carácter especial de estas elecciones para el PP se atribuye, fundamentalmente, a una razón: es la primera cita electoral tras su refundación en el Congreso del pasado mes de enero.

⁸⁸ “*La Europa que queremos*” (*La Vanguardia*, 14.5.89)

⁸⁹ “*Un gran proyecto popular para Europa*” (*La Vanguardia*, 14.5.89)

Por último, y para concluir con esta serie de artículos firmados, Carles Gasóliba también explica⁹⁰ la contribución de CiU de cara a estas elecciones. Tras recordar la importante tarea de su partido en el proceso de integración a las Comunidades Europeas, señalaba que la presencia de CiU en el PE era decisiva “para asegurar que la unidad europea que se busca lo sea efectivamente en base a la diversidad cultural y lingüística que la enriquece y define” con el fin de que “se integre , respete e incluya nuestra personalidad, nuestra lengua y nuestra cultura”.

La oposición de los populares basada en los perjuicios derivados de la mala negociación para la firma del Tratado de Adhesión de España a la CE fue repetidamente publicada en diversos medios⁹¹ (*La Economía*, *Cinco Días*, ..). Aunque también la respuesta del Gobierno a esa acusación, del mismo modo, encuentra salida en la información del diario *El País*⁹² (“renegociar el Tratado de Adhesión de España a la CE es un disparate sin sentido”, declaraba Morán en un mitin de Valencia”). También el candidato popular admitía ante la opinión pública, que “se iba a jugar” en la Elecciones europeas de junio la posibilidad de liderar al PP en las Generales. Por ello, en *La Vanguardia* se valora la importancia de unos resultados electorales para el PP, de forma implícita iban a influir en la posibilidad de que su partido le designara candidato a la presidencia del Gobierno.

4. El déficit democrático del Parlamento Europeo

En su columna “La Ventana indiscreta”,⁹³ el periodista José Luis Gutiérrez hablaba del desinterés visible del ciudadano español. Una apatía que, según el periodista, arrancaba del enrarecimiento político interno del felipismo, unido a la

⁹⁰ *La Vanguardia*, 14.5.89)

⁹¹ Con fecha de 12 de mayo de 1989.

⁹² (*El país*, 12.5.89)

⁹³ *Diario 16*, 16.5.89.

imagen de un Parlamento comunitario visto como “Cámara de meras resonancias políticas, despojada de poderes reales en favor de otras instituciones comunitarias como son la Comisión y el Consejo de Ministros”.

Sin embargo, Gutiérrez señalaba también que desde la entrada en vigor del Acta Unica, el Parlamento europeo había adquirido una relevancia mayor (aprobación de los presupuestos comunitarios, cooperación en la elaboración de normas y directivas que desarrollan el mercado interior), y este hecho “debería estar presente en las próximas elecciones europeas, aunque las turbulencias de la política interna desdibujen y diluyan tal debate”.

Al día siguiente en la misma columna, Antonio Gutiérrez escribía sobre el déficit democrático de las instituciones comunitarias. Aunque la CE no es un Estado, sus decisiones en los organismos competentes afectaban de lleno a los ciudadanos comunitarios. Sin embargo las tomas de decisión en el seno de la CE, distaban mucho de ser democráticas, porque las toma el Consejo y escapan a cualquier control, y recomienda una salida al déficit institucional: “A esta situación tan defectuosa democráticamente es a la que hay que dar solución, y ésta solamente pasa por la potenciación, la reforma y la asunción de poderes reales y efectivos por parte de una de las instituciones comunitarias: El Parlamento Europeo” (*Diario 16*, 17.5.89).

5. Comienza la Campaña

A punto de iniciarse la Campaña (25 de mayo) el CDS anuncia que esta dispuesto a demandar al Instituto Nacional de Estadística (INE) por mantener su negativa a remitir a los partidos políticos las listas completas del censo. Según su denuncia, en el censo enviado por el INE al CDS no figuraban los datos completos

(nombre y dirección) de numerosos electores, lo que suponía “una grave discriminación respecto al PSOE, a quien sí le han remitido estos datos”.

Por otra parte, la protesta se extendió también hacia el director de RTVE Luis Solana, debido a que desde el CDS se considera discriminatorio el debate Morán-Oreja respecto al resto de las fuerzas políticas con representación en el Parlamento nacional y en el europeo (*Diario 16*, 23.5.89).

Todos los partidos políticos ultimaban los preparativos. La mayoría de los líderes tenían previsto iniciarla en Madrid. Junto con toda su Ejecutiva, Alfonso Guerra abriría la campaña socialista en Madrid; “Con fuerza en Europa” era el lema socialista. En el acto de presentación, el secretario de organización del PSOE, José María Benegas, reprocha a sus contrincantes: “los candidatos que tienen poco que decir sobre Europa hablan más de las mociones” (*Abc*, 23.5.89).

En relación con los espacios gratuitos de TVE, se adelantaron numerosas noticias sobre las intervenciones previstas, algunas de las cuales fueron, desde el principio, motivo de polémica. La Comisión de Radio y Televisión acordó el veto de PSOE, PP y CDS a la participación de HB en los espacios gratuitos de TVE. Asimismo, uno de los puntos más conflictivos fue decidir qué partidos iban a intervenir el último día de campaña en el espacio gratuito de Televisión Española.

Desde su actividad como presidente de la CE en la gira europea que Felipe González inició en Bonn, la prensa también se hizo eco del apoyo indirecto del Presidente a su partido en esta campaña: “González, que viajó a Bonn, participará en la campaña desde la presidencia del CE” (*Ya*, 23.5.89).

En cuanto a la actividad de los partidos a la hora de apoyar a sus candidatos, vemos como en el primer mitin del PSOE, se dio un espaldarazo incondicional a Barranco y Leguina, después de las mociones de censura a que fueron sometidos. *La Vanguardia* (26.5.89): “El PSOE y el Gobierno expresan su apoyo a Leguina y Barranco en el primer mitin de la campaña europea”. El mismo día titulaba *El País*: “El primer mitin del PSOE se convierte en un acto de apoyo a Barranco y Leguina”. Y también, con ocasión de ese primer mitin, *Abc* reproducía el mensaje de Alfonso Guerra: “A Juanito le quieren quitar la alcaldía por ser hijo de albañil”. Son ejemplos evidentes del el excesivo “localismo” que presentaban las noticias referidas a las elecciones europeas.

Podemos afirmar que, a excepción de Morán, más centrado en el programa europeo, los líderes del PSOE enfocaron su discurso en propagar las razones que habían llevado al centro-derecha a presentar mociones en los ayuntamientos.

Sobre los titulares publicados durante este inicio de campaña, podemos reflexionar en torno las claves más importantes de los grupos políticos que concurrían a esta elecciones:

Diario 16 (27.5.89): “Puerta afirma que el PSOE sustituirá a Morán por Barón”. *YA* (28.5.89): “Caso asegura que el PSOE va a perder votos porque ya no es socialista”. El antetítulo de esta misma noticia adelantaba: “Suárez afirma que los pactos con el Partido Popular son legítimos”. El diario *YA* también recogía otras declaraciones de políticos como Anguita: “No estamos dispuestos a sacarles las castañas del fuego a los socialistas”. En este mismo diario, y con la misma fecha, Fraga afirmaba en Oviedo: “el socialismo en Europa está agotado”, con el siguiente antetítulo: “Oreja, en Zaragoza, retó a Guerra al debate en TV porque ‘es el que lleva’ la campaña”.

El País (27.5.89): “Indignación del centro-derecha por las descalificaciones de Guerra en la apertura de la campaña europea”. La respuesta socialista también se incluía en el antetítulo de esta misma noticia: “Rosa Conde no cree que las palabras del vicepresidente “lesionen la vida democrática”. Otro de los titulares que se extraen en la misma página informaba de unas declaraciones del vicepresidente Alfonso Guerra: “Nosotros, los descamisados; Oreja, un párvulo”.

6. Dos ‘europeísmos’

Como apuntaba el experto comunitario Aguilera de Prat⁹⁴ los proyectos europeístas se veían retrasados por “la contraposición clásica y esquematizada en las consignas de la Europa de los mercaderes o de los trabajadores y de los estados o de los pueblos, respectivamente”. Si bien, el autor reconoce que la elección popular directa del Parlamento Europeo suscita inicialmente grandes esperanzas, también acaba afirmando que no puede existir coherencia en la CE, dada la ausencia de un “régimen electoral uniforme”.

En este sentido, Aguilera asegura que priman más las motivaciones internas en las confrontaciones partidistas, y no en vano afirma que la mayoría de las campañas sirven de ocasión para el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición. La necesaria reforma política de las instituciones requería la propuesta de un “programa concreto de medidas federalistas” que, para Aguilera de Prat, sólo las fuerzas de la izquierda transformadora, con su intervención, eran capaces de impulsar.

7. Controversias sobre la integración del PP en el Grupo Popular Europeo

Tuvo amplia difusión periodística en el inicio de campaña, la integración del PP en el Grupo parlamentario Popular. Este Grupo, constituido por democristianos, invitaba a los populares que resultaran elegidos 15 de junio a integrarse en el PPE, en calidad de independientes. Así lo anunció en rueda de prensa su Presidente, el alemán Egon Klepsch, en la ciudad de Barcelona.

Y aunque el punto de vista de Egon Klepsch chocaba con otros mandatarios como el luxemburgués Jacques Santer y el Presidente de la IDC, Flaminio Piccoli, para aquel, el programa europeo del PP tenía “confluencias importantes” con el PPE. De hecho, para el Presidente de este Grupo, el pasado político de Manuel Fraga no le resultaba molesto.

Pero existían reticencias, y éstas fueron manifestadas por los dirigentes democristianos europeos. Tal y como recoge el titular de *La Vanguardia* (26.5.89): “La familia democristiana europea está dividida ante la posible incorporación del partido de Fraga”. Sin embargo, en su antetítulo se reseñaba: “El buró del Grupo Popular del Parlamento Europeo da el visto bueno a la entrada del PP”. Había que esperar a la decisión del nuevo Grupo parlamentario del PPE, que iba a constituirse tras las elecciones (ya en la sesión del mes de julio).

La prensa británica, la más afectada por esta incorporación al PPE, reflejó la “deserción” de los españoles: “Deja a los parlamentarios europeos de la Thatcher en

⁹⁴ Ver artículo “Dos europeísmos” (*El País*, 24.5.89)

la estacada”⁹⁵. Por otra parte, el diario regional *El Periódico* publicaba unas declaraciones de Fraga afirmando que el “divorcio anglo-español era inevitable”, una vez que Alianza Popular decidió cambiar su nombre y poner a demócratas cristianos en sus listas electorales encabezadas por Marcelino Oreja, un democristiano (*El Periódico*, 25.5.89).

8. Influencia de los sondeos durante la Campaña

Le Nouvel Observateur publicó un sondeo exclusivo (realizado entre el 13 de marzo y el 10 de abril) entre un muestreo de 11.678 ciudadanos comunitarios en el que se predecía que la ascensión de los Verdes iba a ser muy notable en Francia e Italia. También indicaba que dentro de la izquierda, el grupo socialista seguiría siendo el más importante, y la extrema derecha reducía su representación en el Parlamento.

Otro sondeo, el llamado Eurobarómetro (dirigido por la European Elections Study) indicaba también las tendencias de los europeos sobre la votación. Los datos, recogidos por institutos especializados en los diferentes países y publicados por un “pool” europeo del que formaba parte el periódico italiano *Corriere della Sera*, indicaban que los ciudadanos europeos tendían a sobrevalorar la importancia del Parlamento, sin conocer realmente sus poderes reales. Generalmente atribuían las funciones del propio parlamento nacional a las funciones del PE. Se advertía, en consecuencia, una clara desinformación entre el electorado.

En el citado sondeo, Dinamarca fue el país que respondió más correctamente a la pregunta sobre el poder vinculante de las leyes europeas y los italianos se manifestaron muy optimistas en cuanto a las funciones parlamentarias.

⁹⁵ *Financial Times*, 26.5.89.

A un mes de las elecciones, *Diario 16* reflejó los resultados de la encuesta Gallup-Internacional en la CE; el sondeo revelaba una considerable tendencia abstencionista en toda Europa. El mayor incremento electoral era para los grupos ecologistas. En España, según estas encuestas, el PSOE perdería tres escaños, y uno el Partido Popular (*Diario 16*, 19.5.89).

El Parlamento estaría más decantado hacia la izquierda por el auge de los ecologistas según las encuestas publicadas por *El Periódico* (19.5.89), y cuyo material de trabajo se coordinó desde París por Hermann Schmitt, de la Universidad de Manheim. Se incluían varios gráficos con las previsiones en la ocupación de escaños de los doce países, los principales problemas de los europeos, etc.

El 28 de mayo lanza una encuesta *El País* en la que se anuncia que el PSOE perdería tres escaños, y que los partidos de centro-derecha tampoco iban a ascender. Por lo que respecta al índice de participación, los datos de Demoscopia reflejan que sería superior al 50%, a la vista de las manifestaciones de los encuestados (*El País*, 28.5.89).

9. Papel resolutorio del Parlamento Europeo

Ante una incierta unidad europea, la construcción de Europa pasaba por la creación de un verdadero Parlamento multinacional. Sin embargo, la pugna electoral del 15 de junio se había convertido en una confrontación rica en ataques personales, de escaso nivel intelectual y con un alcance político que superaba las pretensiones del resto de las naciones comunitarias.

Estas elecciones se convocaban cuando en distintos ayuntamientos y comunidades se estaba entablando un duro debate. En contra de lo que opinaba Felipe González, las elecciones al Parlamento Europeo aparecían como unas primarias destinadas a medir la capacidad de pacto de los grandes partidos políticos.

Durante los primeros días de junio las encuestas registran un aire de derrota, ya que se cuestionaba la capacidad real del Parlamento Europeo sobre las decisiones del Consejo de Ministros. Si bien después del Acta Unica, el Parlamento Europeo había aumentado su capacidad de codecisión legislativa, muchos se preguntaron si desconocían el papel resolutorio del Parlamento.

Sobre el verdadero sentido político que tenía la Cámara de Estrasburgo, el diario *El País* publicó un artículo (“Los españoles y las europeas”) de Fernando Schwartz, en el que se planteaban algunas cuestiones. ¿Qué soluciones esperaban los españoles del Parlamento Europeo y qué cuestiones estaban en juego?. Existía la posibilidad de que los comicios sirvieran como termómetro de la popularidad de cada partido y de cada líder. Las elecciones, a su vez, determinarían el anticipo o no de las Legislativas: “tras dichos comicios quedará claro cuál ha sido el desgaste del PSOE en siete años de Gobierno”. Para el autor, lo realmente grave es que los responsables políticos no saben exponer las funciones concretas de las instituciones comunitarias, y el Parlamento tenía la difícil tarea de diseñar la “Europa política del futuro”. El porcentaje de abstención iba a “medir el fracaso de este mensaje”(*El País*, 2.6.89).

El tema europeo estaba en el fondo pero la disputa era absolutamente nacional. Las primeras figuras políticas aparecían vinculadas a las políticas nacionales, las transferencias de soberanía eran limitadas y se concedía escaso relieve al papel que desarrollan las cumbres europeas. El presidente de Europa Press,

José Mario Armero, opinaba que al Parlamento le faltaba algo fundamental: “respaldar a un Gobierno europeo” (*Diario 16*, 9.6.89).

Los italianos, firmes partidarios de conceder al Parlamento comunitario los más amplios poderes, exhibían unas campañas electorales que no degeneraban en el juego de descalificaciones al que solían entregarse muchos políticos de otros países. Desde el nacimiento de la Comunidad, democristianos y socialdemócratas habían venido colaborando en el impulso de los organismos comunitarios. “Por lo vivido a diario, los italianos saben que Europa no puede ser exclusiva de ningún grupo político determinado”, y (...) “la compenetración con ese estilo de europeidad es más fácil captarla en Italia” (*La Vanguardia*, 4.6.89).

10. Críticas entre los adversarios políticos

José Cavero anunciaba otra forma de preparar los comicios desde el Gobierno: el anuncio de una ampliación de la cobertura de la asistencia sanitaria del Insalud...”¿qué mejor modo de reclamar la atención, que el anuncio de que contratar con carácter fijo a un trabajador de menos de 30 años supondrá para el empresario un ingreso de casi un millón de pesetas?...” (*La Vanguardia*, 2.6.89)

Escribía José Cavero en *La Vanguardia*⁹⁶ que se venía observando desde el Gobierno, “con singular atención” las campañas que realizaba el PP y el CDS. Estas campañas “invitan a los socialistas a pensar que la confusión y la controversia interna sigue siendo característica muy fundamental en la campaña de ambos grupos” .

Ya en el mes de junio proliferaron las críticas entre los adversarios políticos. El candidato socialista Fernando Morán, por ejemplo, declaraba que el actual clima político no afectaba a los comicios: “Tengo fe en un electorado que ha sido siempre juicioso y razonable y ha votado teniendo en cuenta lo que está en juego, en este caso la elección de 60 representantes españoles en el Parlamento Europeo” (*El País*, 1.6.89).

Marcelino Oreja, por su parte, criticaba ante los medios periodísticos que la campaña electoral se estaba centrando muy poco en los temas europeos. Este hecho quizá se debía al alto nivel de abstención que predecían las encuestas.

Un día antes de las votaciones, el concejal popular llamaba al voto de los electores. En su opinión, las tres semanas últimas habían estado presididas por las descalificaciones y los insultos, y también lanzó una dura crítica por la falta de interés del PSOE a la hora de contestar el cuestionario sobre la Europa Social que preparó la Confederación Europea de Sindicatos (*El País*, 14.6.89).

En apoyo a su candidato, Adolfo Suárez, presidente del Centro Democrático y Social, insistía desde Barcelona en reivindicar para su partido un espacio político del centro progresista.

Durante la campaña, Adolfo Suárez negó rotundamente que hubiera un “pacto de no agresión” entre el CDS y el PP y prueba de ellos, fue su remisión a la Junta Electoral Central de un escrito para que Televisión Española se abstuviera de transmitir la celebración de debates bilaterales entre candidatos. Se trataba, para el CDS, de eliminar la discriminación del resto de las candidaturas, y de conseguir la celebración de debates televisivos abiertos y plurales (*El País*, 1.6.89).

⁹⁶ *La Vanguardia*, 2.6.89.

Pero, ¿Cuál era la nota distintiva del programa electoral del partido centrista según su candidato Ramón Caso?. La permanente tensión que destila entre el propósito decidido de avanzar hacia la unión europea y la defensa de los grandes intereses nacionales. Para Caso el europeísmo de González y del PSOE respondía sólo a un planteamiento de carácter “retórico”(El País, 14.6.89).

El CDS, en los 20 días de campaña, habló más de la actualidad política, relegando a un segundo plano su programación teórica. Las preguntas de los periodistas siempre estaban relacionadas con los pactos municipales y autonómicos. El CDS se vio obligado a desmentir en numerosas ocasiones, las acusaciones que le hacían desde otros partidos de que no acudiría en solitario a las próximas Elecciones de junio (El País, 7.6.89). Los centristas convocaron 25 conferencias de prensa, 28 mítines e hicieron un recorrido aproximado de 19.414 kilómetros.:

En el ámbito de los partidos nacionalistas, los dirigentes de CiU optaron por endurecer sus críticas contra los socialistas catalanes en plena campaña. Miguel Roca, aclamaba más diputados para Europa⁹⁷.

Por su parte, el dirigente democristiano Josep Durán Lleida, cuestionó la legitimidad moral y política de los socialistas para lanzar cualquier tipo de acusación contra otras fuerzas políticas por la utilización del catalán en las instituciones europeas, cuando el PSOE y el Gobierno central impedían el uso del catalán en el Parlamento español (La Vanguardia, 1.6.89).

En lo que respecta a Izquierda Unida, la coalición pretendía mejorar los resultados de 1987 y pasar de tres eurodiputados (Fernando Pérez Royo, Antonio

⁹⁷ La Vanguardia, 1.6.89.

Gutiérrez Díaz Alonso Puerta) a cinco o seis . A sus dirigentes les resultaba incluso difícil explicar al electorado de Badajoz o de Andalucía el complejo funcionamiento de la Institución Parlamentaria europea.

Con el lema “No olvides el 14-D” los comunistas invocaron una campaña sin ataques directos al PSOE, pero recordando en todo momento a sus simpatizantes “quién” provocó la huelga general. Para Fernando Pérez Royo, el candidato de IU al PE, el “espacio social” era uno de los aspectos más importantes del programa electoral de su partido. Ni qué decir tiene que para los comunistas, la convocatoria de junio iba a influir decisivamente en el mapa político de nuestro país⁹⁸.

11. Una campaña “aldeana”

La preocupación de los políticos se acrecentaba porque los sondeos indicaban un alto porcentaje de abstención (más de un 50 por ciento). Cataluña parecía ser la región más animada en cuanto a participación, pero la polémica suscitada en torno a la oficialidad del catalán en el PE, llegó a alterar el tranquilo desarrollo de la campaña en esta región. Convergencia acusaba a los socialistas de haber boicoteado en Estrasburgo el “Informe Donnez”⁹⁹.

Por su parte, Felipe González (entrevista publicada en *Le Figaro*, 10.6.89) negaba el término de “primarias” y en este sentido añadía: “En todos los países europeos, sin excepción, estas elecciones europeas se consideran como un test (...)En España, la derecha está reorganizándose. Intenta concluir un pacto con el centro. Es normal que la oposición busque sondear a la opinión pública”. Sin embargo, Felipe González confiaba en el voto europeo del electorado español, “los

⁹⁸ *El País*, 14.6.89.

⁹⁹ *Diario 16*, 3.6.89.

españoles saben bien que su porvenir depende en gran parte de la integración europea”.

Fernando Morán también llegó a analizar el verdadero alcance legislativo del Parlamento europeo. En una entrevista publicada en *Abc* el 4 de junio dijo que aunque la Cámara de Estrasburgo asumió más competencias con el Acta Única y sus procedimientos de cooperación habían aumentado, lo cierto es que carece de “la capacidad plena legislativa”, por lo que se le atribuye un déficit de representación que reclama la reforma de las instituciones.

Asimismo Javier Pradera¹⁰⁰, consciente de que esta campaña está dominada por la actualidad política nacional, definía estos comicios como “preparatorios” de las próximas elecciones legislativas. Coincide con otros expertos en afirmar que mientras el Parlamento Europeo no dispusiera de auténticas competencias legislativas y la suficiente capacidad para controlar al Ejecutivo, la “mediación indirecta” de los 12 Estados nacionales continuará siendo el vehículo adecuado para que los ciudadanos puedan llegar a influir sobre las decisiones comunitarias. Y consecuentemente, estas débiles expectativas del Parlamento Europeo explican el relativo desinterés de los electores según las encuestas.

Pilar Urbano, de igual modo remarcó el carácter localista de nuestra campaña. Mientras en Francia se hablaba de Europa, aquí la “euroteórica de Morán, Oreja y Punset no llega a arraigar en el público” (...) “parece que sólo preferimos el discurso “arremangao” que ignora lo que España se juega en Europa a partir del 1 de enero de 1993” (*Ya*, 8.6.89). Pilar Urbano pretende averiguar, por otra parte, el motivo por el que nuestros líderes ocultan el papel real de España en Europa.

¹⁰⁰ Ver artículo “El espejo de la madrastra”. *El País*, 4.6.89.

La lectura realizada sobre el alcance de estas elecciones en el plano político, nos lleva a valorar que en esos momentos nos encontramos ante un reajuste de las fuerzas políticas, cuya dimensión conviene medir. Los acuerdos entre centro y derecha determinaban en cierta medida una alternativa real al socialismo, y sólo a través de las urnas, podía valorarse la capacidad de los populares para desplazar al PSOE¹⁰¹. Sin embargo, el candidato del PP, Marcelino Oreja, invoca la necesidad de salir de un “cierto provincianismo, entendido como una localización excesiva del problema”¹⁰², y por lo menos, teóricamente, en sus declaraciones se decanta por el debate sobre los temas de Europa.

Estaba en juego la estabilización del sistema de partidos y esa circunstancia dependía, sobre todo, del grado de homologación con el resto de los sistemas partidistas de la CE. Jordi Solé Turá profundiza en el desarrollo de la integración europea. Respecto a los sistemas electorales, el avance no había sido muy significativo. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebraban con circunscripciones nacionales o estatales y con sistemas electorales diferentes. Sin embargo, señalaba Solé Turá en su artículo, los comicios servirían para determinar “qué fuerzas políticas van a dirigir la Europa comunitaria entre ahora y 1993” (*El País*, 13.6.89).

Otro punto polémico fue la ubicación de nuestros partidos en los grandes grupos europeos que formaban la Cámara. Por ejemplo, los diputados de CiU se integraban en la coalición liberal, caracterizada al mismo tiempo, por su hostilidad hacia los movimientos nacionalistas. Durante la Presidencia española, el Grupo liberal no reconoció el nivel de oficialidad de la lengua catalana que los nacionalistas venían reivindicando.

¹⁰¹ Ver editorial “La abstención, un peligro”. *Abc*, 12.6.89

¹⁰² *El Nuevo Lunes*, 12.6.89.

Para el diario francés (*Le Monde*, 10.6.89), como en la mayoría del resto de los países de la CE, los grandes temas son objeto de “un relativo consenso, al menos entre los partidos principales”. También el diario francés analiza el giro hacia el centro que adoptaba el Partido Popular y el aislamiento del Grupo conservador parlamentario, así como la aparente despreocupación del Gobierno socialista de Felipe González ante el crispado clima social, previo a las Elecciones.

“Cualquiera que piense que una campaña electoral al PE tiene que ser seria, debería venir a España donde la batalla para conseguir votos está siendo conducida con fuerte retórica y con acusaciones de soborno y amenazas de muerte”. Son los comentarios de un periodista de *The Guardian* (9.6.89) que opinaba sobre el sentido de la campaña electoral en nuestro país. La otra idea que lanza el diario británico se refiere al gran número “votos de protesta” que van a contabilizarse por el alto índice de desempleo y la acusada indignación del electorado hacia los políticos .

The Independent, por su parte, titulaba: “Los españoles sacan a relucir lo sucio y las bombas”. En alusión a la posible abstención el día de las votaciones, Tim MrGirk resaltaba en su crónica que el porcentaje de asistencia a los colegios electorales caería por debajo del 50% y que este resultado parecía que tenía más relación con la política doméstica que con Europa (*The Independent*, 12.6.89).

Pero no sólo España asistía a una campaña “aldeana”, según interpreta *Diario 16*, también en Alemania la campaña se centró en torno a Hekmut Kohl; en Italia se cuestionó el futuro de Craxi y en Francia las fuerzas de centro-derecha concentraron todo su interés en reagrupar a la oposición¹⁰³ .

¹⁰³ *Diario 16*, 14.6.89.

Los alemanes sabían poco del mercado interior, y tenían una disposición, por lo general, poco favorable hacia el PE. Las encuestas indicaban que los germanos no deseaban un cambio de línea de la política comunitaria¹⁰⁴. Y en Francia, al igual que en España, las administraciones habían animado al voto, organizando campañas institucionales para fomentar la participación.

Finalmente, y a pesar de las críticas persistentes en los medios de comunicación que definían el localismo de esta campaña, *El País*¹⁰⁵ insiste de forma más contundente en el relieve de las instituciones comunitarias, que van extendiendo progresivamente su poder de influencia entre los ciudadanos: el 70% y el 80% de la normativa económica y social incide muy directamente en los intereses de la población europea.

12. El mensaje de las encuestas

Los datos de la encuesta que publicaba *La Vanguardia*¹⁰⁶ el día 4 de junio, anunciaban que el PSOE obtendría, con diferencia, el mayor número de escaños al Parlamento Europeo. La encuesta también pronosticaba una tendencia al alza del CDS, CiU, y el mantenimiento del PP, así como un alto nivel de participación en las urnas, entre el 50% y el 60%.

En cuanto al descenso del PSOE en el número de votaciones, vemos que la causa puede ser la reorganización de la derecha. Por otra parte, el 74 por ciento de los ciudadanos encuestados atribuían este descenso al incumplimiento de promesas electorales; el 37 por ciento al conflicto sindical; mientras que el 17 por ciento lo justificaba en la estructuración del centro derecha español.

¹⁰⁴ *Die Welt* (8.6.89) titulaba : "Poco interés de los alemanes por las elecciones europeas".

¹⁰⁵ *El País*, 14.6.89.

Los datos aportados por el Instituto Opina presentan estos comicios como un “verdadero test” del estado de fuerzas entre los diferentes partidos. En cuanto a la popularidad de los candidatos, los resultados muestran al político Santiago Carrillo como el candidato más conocido, y sin embargo, el mayor grado de identificación de los electores se daba con Fernando Morán y Marcelino Oreja. Observamos, por el contrario, que el cabeza de lista del CDS, José Ramón Caso, goza de escasa popularidad. José Cavero ¹⁰⁷ asegura, en el diario *La Vanguardia*, que los resultados de la encuesta también influyeron en una presencia más fuerte de González y Guerra durante la campaña.

Por tanto, en la sede del PSOE todavía “nada estaba perdido” y las esperanzas se centraron en la semana que quedaba de campaña. Había que convencer a los votantes indecisos. F.L. de Pablo opina, de igual modo, que la semana que precede a las elecciones resulta ser “clave”. La Junta Electoral Central tenía todavía que pronunciarse sobre la transmisión de los debates programados en la televisión. Para el autor, las imágenes televisivas de mítines y demás intervenciones, así como la emisión de los debates, movilizaban a muchos votantes (YA, 5.6.89)

El diario YA también divulgó otro sondeo ¹⁰⁸ (“Intención de voto a una semana de las elecciones europeas”) El Instituto de Investigación y Desarrollo Gruppo, S.A. dio a conocer que el PSOE podría perder entre 4 y 5 escaños respecto a los 28 obtenidos en 1987, el PP avanza ligeramente e IU también .

Por otra parte, en vísperas del proceso electoral, otro estudio del Instituto Opina, realizado entre los distintos sectores de población, por comunidades

¹⁰⁶ Fuente del sondeo: Instituto Opina. *La Vanguardia*, 4.6.89.

¹⁰⁷ *La Vanguardia*, 5.6.89.

autónomas y en función de la opción política declarada por los propios encuestados, incluía las distintas opiniones de los ciudadanos sobre el pacto suscrito entre el PP y el CDS (“El PP acepta mejor que el CDS el pacto entre ambas fuerzas”). De la lectura de los datos se desprende que los españoles se “definen políticamente de centro-izquierda en su mayoría”(La Vanguardia, 8.6.89)

Cabe añadir, igualmente, que los sondeos elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) confirmaron¹⁰⁹ el previsible descenso de HB en comparación con las elecciones del 87, sobre todo fuera de *Euskadi*.

El 9 de junio los diarios dedicaron amplia información al papel de las encuestas en el entramado interno de los partidos políticos. Los sondeos que venían realizándose por las distintas empresas para los diversos medios informativos, coincidían en señalar que el PP, ya refundido, seguía igual que cuando era “Alianza Popular”. Para los fraguistas, Oreja “no tiraba” (*Diario 16*, 9.6.89).

Por último, es importante conocer la valoración de las campañas de propaganda y publicidad impulsadas por los partidos. Según el sondeo de Demoscopia¹¹⁰, para el 16% de votantes, la mejor campaña era la del PSOE, el 10% la del PP; el 4% la del CDS, e IU era el partido con más descontentos (2%).

Resumiendo puede afirmarse que habrá una considerable abstención. Estas elecciones serán el testimonio de la opinión pública sobre la situación política interna, y como diagnóstico de un estado de opinión, las elecciones no son suficientemente motivadoras. Además de basar la abstención en estas razones, cabe añadir el papel detentado por nuestros líderes. No pocos medios aconsejaban un

¹⁰⁸ Ya, 8.6.89.

¹⁰⁹ Fuente: *El País*, 8.6.89

cambio de estrategia en la recta final de la campaña. Otros medios informativos apuntaban cierta “tendencia lógica” en las preferencias del electorado y no parecían detectar una fuerte abstención. Según ICP/Research, la abstención podría ser incluso inferior a la de 1987 (*Diario 16*, 9.6.89).

Quizá resulte significativo el hecho de que los candidatos con mejor discurso político europeo, apenas aparecen en los medios de comunicación. Morán, Oreja y Punset habían sido eclipsados por otros políticos que practicaban una “demencial batalla de dicterios y descalificaciones”¹¹¹.

Pero sin duda, asistimos a unos acontecimientos políticos lamentables derivados, en gran parte, del descontento social que existía desde el 14-D. Aunque, en este caso, los partidos de la oposición no lograron desbancar al PSOE porque no consiguieron conectar con el electorado más disconforme.

13. Suspensión de los debates anunciados en RTVE

Por lo que se refiere a la retransmisión de los debates entre candidatos a las Elecciones en TVE, su director general, Luis Solana, propuso a la Junta Electoral Central transmitir tres debates para los distintos partidos políticos.

La propuesta de Solana fue enviada 7 horas después de que los 5 catedráticos y 8 magistrados que formaban la Junta Electoral Central decidieran por unanimidad que no había ningún inconveniente en realizar los debates. La Junta se reunió en el Congreso, una vez que el CDS denunciara un debate anunciado entre el PSOE y el PP (*El País*, 6.6.89).

¹¹⁰ El País, 9.6.89.

¹¹¹ *Diario 16*, 9.6.89.

En el análisis sobre la repercusión e incidencia de los debates televisados, José Caverio (“El cierre de campaña”) no duda de “cierta habilidad” política en el reparto de la programación. Con la ausencia de HB, casi se satisfacen plenamente los deseos de los partidos con representación en el PE. Por el contrario, -viene a recordar Caverio- los aspirantes a la obtención de un escaño: Carrillo, Ruiz Mateos Blas Piñar, entre otros, no recibirán esa invitación para participar en los “supermitines televisivos” (*La Vanguardia*, 7.6.89).

Con la suspensión de los debates en televisión por la denuncia presentada por Caso (CDS), *La Vanguardia* interpreta que la medida suponía el “hundimiento de un debate (entre el socialista Morán y el democristiano Oreja) que constituía una auténtica novedad y que podía servir de interesante punto de referencia”(8.6.89).

Sin duda, el “mano a mano” de los principales candidatos resultaba ilustrativo y de gran interés para el electorado. *El País* informa ampliamente sobre el tema y el mismo día titulaba: “Solana suspende los debates políticos de TVE por no tener “cobertura” de la Junta Electoral”. Realmente, Luis Solana justificó esta decisión porque el dirigente centrista le amenazó con presentarse en el debate de Morán y Oreja, si su partido no era invitado. El CDS consideraba que TVE estaba contribuyendo, con su planteamiento, a una apariencia de bipartidismo.

Por otra parte, los populares consideraron esta amenaza de Caso “injustificable”, y el PSOE, a través de Guerra, también culpó de la suspensión de los debates al CDS¹¹². La nota que difundió la Dirección General de TVE decía que

¹¹² El anuncio del CDS estaba fundamentado en la anterior resolución de la Junta Electoral sobre los coloquios, que señalaba que se realizarían “sin detrimento del derecho de acceso a los debates de las candidaturas que cuenten con representación parlamentaria y que deseen participar en los mismos” (Fuente: *El País*, 8-6-89)

no tenía “cobertura suficiente por parte de la Junta Electoral Central para realizar los debates que tiene previstos” (*El País*, 8.6.89).

Sobre esta decisión de RTVE un editorial de *El País* confirmaba que el temor de Luis Solana “le hizo renunciar a iniciativas de evidente interés informativo como las que se prodigan sin mayores problemas en los medios privados”. El editorial subraya¹¹³ que la Junta Electoral optó por “lavarse las manos”. Como ya criticaron otros medios, para la televisión pública “lo de menos son los derechos de los usuarios de los servicios públicos” (*El País*, 8.6.89)

14. Elecciones al Parlamento Europeo (15 de junio)

Según los últimos sondeos en los doce países comunitarios, el predominio de la izquierda acabaría con la tradicional hegemonía del centro-derecha. Cerca de unos 18, 242 millones de europeos protagonizaron el segundo test electoral del mundo (sólo superado por la India) los días 15 y 18 de junio.

Eran unas Elecciones que revelaban un cambio de opinión profundo sectores del electorado, de confirmarse el previsto salto hacia delante de los Verdes. El futuro modelo de Europa iba a depender, no sólo de la mayoría dominante en el Parlamento Europeo, sino también de los parlamentos y gobiernos nacionales. Si bien, algunos criticaron esta intromisión de la política interna, por considerar que Europa se había quedado al margen, la convocatoria al Parlamento de la CE permitía a políticos y sociólogos estructurar teorías sobre la influencia de los partidos¹¹⁴. El mismo Felipe González, en el cierre de la campaña, pidió a su audiencia que fueran a votar para

¹¹³ Ver editorial “Círculo Vicioso” (*El País*, 8.6.89).

¹¹⁴ Editorial “Por Europa”. *La Economía*, 15.6.89.

refrendar el esfuerzo de su Gobierno¹¹⁵. Es un ejemplo más de la exagerada equivocidad a la que se sometía este proceso electoral.

Una votación reflexiva y útil y no tanto una votación contra una opción es el mensaje que lanzan algunos editoriales de difusión nacional. Por su parte, *La Vanguardia* hace un recuento exhaustivo de las claves más importantes de cada uno de los partidos más representativos.

En primer lugar, el partido socialista vio como “claves” las dos intervenciones en actos electorales de Felipe González. El presidente solicitó el “respaldo mayoritario” del electorado para el Parlamento de Estrasburgo y para la acción del Ejecutivo.

Por otra parte, el tono de Alfonso Guerra, que trató de evitar una fuerte abstención, contribuyó a fijar el voto socialista. Fernando Morán, sin embargo, rehuyó los ataques personales y adoptó un estilo más bien explicativo y alejado de la confrontación política.

Los líderes populares, por su parte, aprovecharon la Campaña electoral para criticar la actuación de la Primera Presidencia comunitaria, que Fraga definió como “la más cara, la más publicitaria y la más fracasada”. Tuvo gran divulgación el programa popular (con anexos específicos para cada región) y, con la refundición del Partido y el acercamiento de Adolfo Suárez, vendieron una imagen de “alternativa” de Gobierno para los años 90.

En cambio, para el CDS su principal objetivo se basó en contrarrestar las críticas a su pretendida derechización, por haber pactado con el PP en cuatro

¹¹⁵ *Ya*, 15.6.89.

Ayuntamientos y 2 Comunidades Autónomas. Y como ya afirmamos más arriba, la gran baza del CDS radicó en la sistemática crítica de la televisión estatal (ese mensaje de derechización del CDS fue cotidianamente difundido en la selección informativa de TVE).

Izquierda Unida se situó al margen del transfugismo político y de los escándalos, y criticó la política social del Gobierno. Entre sus reivindicaciones, propuso la reforma de los Tratados de la CE, una política de seguridad y una política exterior común, así como la concesión de más competencias al PE en los asuntos de desarme..

Finalmente, CiU, basó su campaña en la polarización con los socialistas (mal funcionamiento de los servicios públicos españoles, subordinación del PSC al PSOE y una fuerte insensibilidad social). Otro referente importante de su campaña fue la defensa del catalán.

España votaba por primera vez con los países de la CE, y los resultados oficiales no podían hacerse públicos hasta el domingo. El ministro del Interior, José Luis Corcuera, aseguró que los partidos políticos tendrían conocimiento de los resultados, aunque éstos, a su vez, se comprometieron a mantener el secreto de los datos.

Durante la jornada del día 15 Televisión Española emitió un programa monográfico con la previsión de los resultados, basado en un sondeo encargado a la empresa Metra-6 por TVE. La cobertura informativa de las votaciones se inició a las ocho de la mañana, ofreciendo en directo la apertura de los colegios electorales. Por último, la portavoz del Gobierno, Rosa Conde, instaló la oficina de información en

el Pabellón de la Casa de Campo de Madrid. Desde esta oficina se emitieron los primeros datos sobre la participación y el desarrollo de la jornada.

15. Previsiones electorales intracomunitarias

En realidad, los comicios electorales supusieron una valoración del poder político de los doce Gobiernos. No sólo en Grecia, Luxemburgo e Irlanda, que celebraban las Elecciones Legislativas ese mismo día, sino también en Alemania, España y Holanda, la consulta se contemplaba como un anticipo de las elecciones generales. Esta fecha era una ocasión única para observar el equilibrio de fuerzas políticas y las tendencias que iban a prosperar.

Pero, veamos cual fue la repercusión electoral en Europa según el dossier publicado en *Abc* ("*Elecciones Europeas*", 15.6.89). En Italia, toda la campaña electoral giró en torno a esta dura prueba entre comunistas y socialistas.

En Grecia, las Elecciones al PE pasaron a un discreto plano, por coincidir con las Elecciones generales. Desde Portugal, en crónica ("Una prueba de fuego para el primer ministro Cavaco Silva") se anunciaba el "desasosiego" de los socialdemócratas después de los últimos escándalos financieros. Por este motivo, las elecciones europeas podrían ser el primer aviso de un cambio en la intención de voto de los portugueses.

No olvidemos que la campaña francesa, fundamentalmente, se polarizó en dos temas: el papel que Francia ocuparía a final de siglo, y el auge de los ecologistas y la extrema derecha y los británicos parecían dispuestos a recibir con "notable apatía" el resultado de las urnas.

Los daneses esperaban con apatía el resultado de las elecciones. En la campaña no se dieron grandes desacuerdos entre los partidos en las cuestiones europeas. Asimismo, en Alemania el electorado relacionaba directamente la permanencia del Gobierno Kohl con el escrutinio de junio.

Además, los sondeos en Bélgica pronosticaban un ligero retroceso de los partidos integrantes de la coalición gubernamental de centro-izquierda, y en Holanda los comicios se enfocaron como la “primera vuelta” de las generales, que iban a celebrarse el 6 de septiembre.

Finalmente, el resumen consultado en las páginas de *Abc* nos revela que los irlandeses, hicieron coincidir el día 15 las elecciones legislativas y europeas y en Luxemburgo se pronosticó el descenso de los partidos mayoritarios en beneficio de los partidos alternativos, que abanderaban los problemas ecológicos y de igualdad social.

16. Resultados electorales

Los resultados definitivos no se publicaron oficialmente hasta el día 18, una vez que se pronunciaron el resto de los países miembros comunitarios. Todos los diarios dedicaron informaciones y editoriales a este acontecimiento.

A toda página, *El País*, por ejemplo, extrae dos conclusiones: por un lado, “la incapacidad del centro derecha para articular una alternativa” que hiciera sombra al partido del Gobierno; y por otro, “la tendencia a la fragmentación” del sistema de partidos. Esta fragmentación estuvo ocasionada por la entrada de varias formaciones minoritarias, como la encabezada por Ruiz Mateos.

En su editorial del día 16, *Abc* señala que los españoles habían confiado su representación mayoritaria en el Parlamento de Estrasburgo a los diputados socialistas, seguidos de los populares, que habían bajado de forma considerable debido a los votos desviados a Ruíz Mateos. El citado rotativo se refería a los resultados que indicaban un preocupante retroceso del CDS.

Abc también criticó que el voto a Ruiz-Mateos era “un voto de hostilidad al Gobierno, de reivindicación frente al atropello de que le hizo objeto la Administración socialista”. De igual modo, se subraya la importancia que para el PSOE tiene el control de la televisión pública “desde sus intereses partidistas, Felipe González acertó al suprimir el debate televisivo entre Morán y Oreja” (“Sin variaciones” *Abc*, 16.6.89).

La interpretación del diario *Ya* también coincide en los aspectos más básicos, con el resto de los diarios analizados. Es decir, informaba del “castigo” que habían sufrido los tres principales partidos nacionales, y al mismo tiempo de la victoria de las candidaturas consideradas menores, regionalistas y personales, y a su vez recogía que fue considerable el aumento de la abstención (de un 45%, unos seis puntos más que en los últimos 2 años). Para este diario, no resultaba improbable que las elecciones generales se anticiparan (“Más cerca de elecciones anticipadas”, *Ya*, 16.6.89).

En relación con la abstención, según *La Vanguardia*(16.6.89), en España había sido menor que en el resto de los países europeos que votaron el día 15. Eso sí, sin olvidar que Cataluña quedó por debajo de la media española y que únicamente el alto porcentaje de participación española fue superado por Irlanda.

Sin perjuicio de otras opiniones, algunos expertos detectan también que la campaña electoral no llegó a aclarar las verdaderas intenciones de los candidatos sobre el reparto de poderes en la futura Comunidad Europea. Sin embargo, podemos corroborar que de los resultados sí se desprende que hubo una ampliación del abanico parlamentario hacia la izquierda y hacia la extrema derecha¹¹⁶ (con importantes pérdidas en los partidos del centro izquierda y de centro derecha); que fue evidente el triunfo de Ruiz Mateos (700.000 votos) y el contratiempo sufrido por Marcelino Oreja y, por último, que el PSOE aseguró con esta victoria su continuidad hegemónica.

No podría concluir este apartado, sin considerar la valoración que la prensa extranjera hizo de los resultados. El diario londinense *Financial Times*¹¹⁷ analizó con profundidad la primera derrota de la Sra. Thatcher. El día 16 de junio un sondeo de la BBC atribuía a los laboristas 51 escaños, 25 más que el gobierno conservador. La participación electoral fue de un 35%. Los laboristas presentaron los comicios como un referéndum de los 10 años de Thatcherismo, y contaban además con el dato favorable de los últimos sondeos.

Otro dato relevante de la Campaña, fue el resurgimiento de los Verdes. El movimiento verde contaba con 17 partidos y había crecido en sofisticación política durante los últimos años.

Por otra parte, en los numerosos artículos recopilados entre la prensa americana, la atención se centró principalmente en Gran Bretaña, en el ascenso de los verdes y en la posible alteración que esto supondría dentro del panorama político¹¹⁸.

¹¹⁶ *La Gaceta de los Negocios*, 16.6.89.

¹¹⁷ Ver art. "Más que un retroceso". *Financial Times* 20,6,89.

¹¹⁸ *The New York Times*, 22.5.89

La izquierda europea, con el Partido Laborista a la cabeza, ambicionaba el proyecto de ampliar la legislación social y de medio ambiente, según el rotativo *The Washington Post* (22.5.89) . Se obtiene, pues, un perfil nuevo de la Asamblea de Estrasburgo, con socialistas, comunistas y partidos verdes controlando más de la mitad de los escaños.

18. Financiación electoral

A diferencia de lo ocurrido en las últimas Elecciones Generales españolas celebradas en junio de 1986, los grandes bancos no consiguieron ponerse de acuerdo para crear un fondo común que financiara a los partidos para los comicios del 15 de junio. No resultó fructífera la intermediación de Rafael Termes porque al asumir la conocida fórmula del “fondo común”, el primer banco del país correría con más de una tercera parte del riesgo total.

Consecuentemente los partidos políticos oficialmente acudieron a solicitar sus créditos banco por banco. Se calculaba que eran necesarios, aproximadamente, unos 7.000 millones para la financiación de la campaña.

En declaraciones del coordinador de la campaña socialista, Guillermo Galeote, el gasto total del Gobierno en estas Elecciones al Parlamento Europeo ascendió a 1.125 millones¹¹⁹. Estos gastos suponían 318 millones menos de los permitidos por Ley electoral, distribuidos de la siguiente forma: el 33% destinado a publicidad, el 23% a los diferentes actos; el 14% a la realización de un mailing de 19 millones de cartas; el 21% a los gastos de las federaciones, y el 9% a los del comité electoral.

19. Conclusiones del capítulo

- Según pronostica el diario *El País*, la tercera legislatura elegida en sufragio universal influirá en la consolidación de reformas importantes, indispensables para debates más amplios en torno a las decisiones del Consejo.
- El Parlamento europeo adoptó una propuesta de directiva de la Comisión, que permitía la participación en las elecciones a la Cámara de todos aquellos ciudadanos residentes, al menos 5 años, en un Estado miembro del que no eran originarios. La prensa trasladó las reservas de algunos países (Luxemburgo, RFA).
- Cuando el 3 de abril se inicia el plazo de inscripción de las candidaturas a las elecciones europeas, todos los diarios dedican amplia cobertura informativa al grado de participación de los veintiocho partidos políticos que concurren a los comicios.
- *La Vanguardia*, durante la pre-campaña, publica un *dossier* de varios artículos firmados por los candidatos con más renombre, sobre el alcance político de las elecciones europeas y el contenido de los programas políticos. *El País*, un día antes de los comicios, también publicó otra serie de artículos firmados por los principales líderes.
- El déficit democrático de las instituciones comunitarias sólo podrá ser combatido con la potenciación, la reforma y la asunción de poderes reales y efectivos por parte del Parlamento Europeo. No obstante, extraemos del rotativo *El País*, que

¹¹⁹ *Diario 16*, 23.5.89.

la mediación indirecta de los 12 Estados nacionales continuará siendo el vehículo adecuado para que los ciudadanos puedan llegar a influir sobre las decisiones comunitarias. Esto explica el relativo desinterés de los electores a la hora de votar. *Abc*, sin embargo, atribuye esta apatía electoral al “enrarecimiento” político interno del felipismo.

- Los españoles viven una campaña en la que el tema europeo sirve de telón de fondo, pero la disputa es absolutamente nacional (carácter localista). El enfrentamiento verbal entre los candidatos rivales de los partidos políticos acaba en las más burdas descalificaciones, dejando a un lado el planteamiento europeísta. La prensa dedica un amplio espacio a difundir las confrontaciones partidistas de las coaliciones electorales que surgen y se consolidan durante la campaña.
- Toda la prensa se hace eco, en especial los diarios catalanes, de la futura incorporación del PP al Grupo Parlamentario Popular, según el anuncio que su Presidente, el alemán Egon Klepsch, hizo en Barcelona. Sin embargo, en este punto aparecen las divisiones entre los democristianos europeos.
- Los comicios sirven como termómetro de la popularidad de cada partido y de cada líder, aunque cabe plantearse qué soluciones esperan los españoles del Parlamento Europeo. Los responsables políticos no supieron exponer las funciones concretas de esta Cámara.
- También se apunta, que existe confusión y controversia interna en las campañas del PP y CDS. Felipe González argumenta en *Le Figaro*, que la derecha se encuentra en un proceso de reorganización por lo que intenta concluir un pacto con el centro.

- El periodista José Cavero aclara que una forma de reclamar la atención por los socialistas consiste en adoptar desde el Gobierno políticas sociales con fines partidistas: ampliación de la cobertura de la asistencia sanitaria, ingresos a la empresa por contratación fija.
- En el caso de España, existen dos concepciones diferenciadas respecto a la construcción europea, pese a se da cierta similitud en la formulación de los programas.
- Uno de los asuntos más controvertidos de la campaña fue la denuncia abierta del CDS a RTVE para que se suspendieran los debates programados entre Fernando Morán y Marcelino Oreja.
- Las declaraciones de Felipe González durante su gira por Europa con motivo de la próxima Cumbre, fueron calificadas de “electoralistas”.
- En la prensa se exponen y se debaten las claves de los partidos políticos más representativos.
- Una vez conocidos los resultados electorales, el partido socialista se confirmó en el poder, los populares obtuvieron menos votos porque muchos se desviaron hacia el candidato Ruiz Mateos. Por otra parte, existe una interpretación global que confirma que los electores han castigado a los partidos nacionales. Sin embargo, las candidaturas regionalistas y personales elevan el porcentaje de sus votos.

- Se perfila un abanico parlamentario que tiende hacia la izquierda, y también hacia la extrema derecha y en donde se percibe un descenso de los partidos de centro izquierda y centro derecha.
- A diferencia de lo que ocurrió en las Elecciones Generales españolas de 1986, los grandes bancos no se pusieron de acuerdo para crear un fondo común que financiara a los partidos en estos comicios. Por lo tanto, los partidos acudieron a solicitar sus créditos banco por banco

CAPITULO XII:

Balance de la primera Presidencia de España en la CE

1. Una Presidencia “honorable”

Algunos estados miembros acogieron nuestro mandato con cierta cautela y escepticismo, después de conocer la labor desempeñada por otros países “segundones”. Pero una vez finalizado el semestre español y, contra todo pronóstico, el balance resultó ser satisfactorio para la mayoría de los diarios europeos. Con algunas excepciones. Por ejemplo, el rotativo económico *La Economía* (28.6.89) subrayaba que la presidencia ejercida por España fue “mediocre” y pasó “sin pena ni gloria”. No había lugar para el triunfalismo proclamado por González, según este diario. No obstante, el primer examen europeo de España se aprobaba con buena nota. Felipe González opinaba, “creo que hemos sustituido nuestra falta de experiencia, con un entusiasmo y una seriedad que Europa necesitaba” (*Cambio 16*, 3.7.89).

Encontramos, además, que los comentaristas coinciden a la hora de valorar el alto grado de funcionalidad de la presidencia española, y el notable éxito en la apertura de vías de cooperación política y en las relaciones exteriores. Aunque el inicio del turno español coincidió con el comienzo de las actividades de la nueva Comisión, con un cambio de miembros y de reparto de carteras, y con las Elecciones al Parlamento de Europa, según todas las delegaciones, España logró dirigir los destinos de Europa con sobrada eficacia.

La conflictividad social impidió a Felipe González dedicarse por entero a la labor de presidir la CE. Fue, por consiguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez, el que con su infatigable trabajo y dedicación abordó los asuntos de cooperación política más importantes. Sobre todo en los cuatro primeros meses. Destacó por su mediación en la “troika” comunitaria en el conflicto de Oriente Medio. También por la firma de un acuerdo parcial con EEUU en la “guerra de las hormonas” y por su firme condena a la persecución del escritor Rushdie y a la represión de los estudiantes chinos.

Por otro lado, nuestros dirigentes obligados a competir con Alemania y Francia, no pasaron por alto “cierto malestar” ante el boicot de Bruselas sobre algunas decisiones. *El País* denunciaba el 7 de mayo la existencia de esas “zancadillas comunitarias” que frenaban cualquier iniciativa por “un simple desacuerdo sobre las prioridades”. En asuntos como la libre circulación de personas, el derecho de residencia o la Europa de los Ciudadanos, el conflicto estaba servido y los resultados no fueron concluyentes. En el caso de Gran Bretaña, los controles fronterizos eran una cuestión que afectaba a su soberanía nacional.

Por lo que se refiere a la deuda Latinoamericana, los esfuerzos de Fernández Ordóñez resultaron vanos, en lo que se refiere a la contribución económica de las instituciones comunitarias (*Expansión*, 5.7.89).

Cuando se pronosticaban escasos logros en la gestión española, Felipe González reaccionó a tiempo y, días antes de celebrarse la Cumbre de Madrid, inició una gira por Europa que le ayudó a salvar –con la ayuda de Kohl y de Ciriaco de Mita– el prestigio de nuestra Presidencia. En el diario *Abc* se podía leer que ésta se estaba “consumiendo sin pena ni gloria” (28.5.89).

Mientras tanto, el presidente del Partido Popular Europeo, Jacques Santer, y el presidente del Grupo democristiano, Egon Klepsch, criticaban abiertamente en el último pleno de la Cámara (Barcelona), los resultados finales de la primera Presidencia española⁷¹.

También el sindicato de UGT habla del “fracaso” de la gestión de Felipe González⁷². El PSOE no contestó al cuestionario sobre la construcción europea elaborado por el sindicato ugetista. Su secretario confederal, José María Zufiaur, denunció una política de “imagen y espectáculo” (...) y señalaba que se había “agrandado el foso entre la construcción europea de los aspectos económicos y de los sociales”.

En el periodo electoral para las elecciones al Parlamento Europeo, Marcelino Oreja, cabeza de lista del Partido Popular a las Elecciones europeas, criticó que “la Presidencia española en la Comunidad Europea no ha desatascado temas importantes, que se resolverán con el periodo de mandato francés (...) Para la

⁷¹ *La Vanguardia*, 19.5.89.

⁷² *Diario 16*, 7.6.89.

presidencia francesa quedan remansados los grandes temas de cohesión social, ya que la Presidencia española ha pasado sin pena ni gloria” (*Abc*, 28.5.89).

Más benevolentes fueron otros políticos, como el primer ministro belga, Wilfried Martens, que prefirió esperar hasta el final para valorar los resultados: “el momento crucial de una Presidencia es la Cumbre de Jefes de Gobierno”⁷³. Jacques Delors reconoce que España no quiso imponer, a toda costa, una solución de los temas para poder “apuntarse un tanto”, cuando esa solución requería tiempo. Según manifestaba Delors, “España ha aceptado realizar una labor más ingrata, en vez de forzar cosas que no están aún maduras”.

El comisario español Manuel Marín, encargado de Cooperación y Desarrollo y de la Cartera de Pesca de la CE, opinaba satisfactoriamente de la labor política de nuestros representantes, y declara a *Diario 16*⁷⁴ que durante los tres años que el Gobierno lleva en esta guerra se ha conseguido para mí lo esencial, una Presidencia donde “no se ha notado que era la primera vez”.

2. La Europa fiscal y la liberalización del transporte.

La armonización fiscal comunitaria concluyó con una fase de búsqueda de alternativas. El 1 de julio, entraba en vigor la directiva sobre libertad de movimientos de capitales y al concluir la Presidencia no se sabía cual iba a ser su tratamiento fiscal. El Secretario de Estado para las CCEE, Pedro Solbes, resumía la propuesta elaborada por la Comisión: “Entre la doble tesis de si es necesario un control fiscal y si lo es también una retención sobre los ingresos de capital, se llega a un esquema híbrido que contempla la posibilidad de retención. Pero este esquema, si

⁷³ *La Vanguardia*, 19.5.89.

⁷⁴ *Diario 16*, 18.6.89.

bien resuelve el problema del impacto de una caída de los ingresos fiscales, no establece un fiscal global como es el deseo de varios países miembros”⁷⁵.

Suspendiendo la retención del 10%, los alemanes dieron un duro golpe a los esfuerzos realizados por la Comisión para armonizar la imposición de la renta de capital. Al finalizar la Presidencia española, la propuesta de directiva que defiende la Comisión y que contempla unas retenciones en la fuente del 10% en lugar del 15% inicial, cuenta con el apoyo de la mayoría de los Estados miembros.

El político catalán Miquel Roca i Junyent explicaba que retrasar esta armonización dificultaba nuestra reforma y aproximaba demasiado en el tiempo la entrada en vigor, el 1 de enero de 1993, del Acta Unica Europea, con el rodaje y puesta en funcionamiento de nuevos mecanismos fiscales cuyo impacto en la economía empresarial siempre era aconsejable que se diluyera en un plazo prudente de tiempo.

Hemos de apuntar, finalmente, otros éxitos de cara al Mercado Único. Fue en el Consejo de 14 de marzo, donde se aprobaron varios acuerdos para la “liberalización de los transportes comunitarios” (acceso a la profesión de transportista, armonización de pesos y medidas...) ⁷⁶

3. Sistema Monetario Europeo y Política social.

El secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Pedro Solbes recordaba la existencia de un debate en relación con la llamada dimensión social,

⁷⁵ *La Vanguardia*, 2.7.89.

⁷⁶ *Diario 16*, 26.6.89.

que había permitido poner de relieve las “diferentes concepciones existentes en algunos puntos esenciales como la Carta Social Europea”(La Vanguardia, 3.7.89).

En cuanto a la Unión Económica y Monetaria, la Cumbre de Madrid suponía para Solbes el verdadero punto de partida de una nueva aventura comunitaria, evidentemente muy compleja, cuya fecha de inicio era el 1 de julio de 1990. El desafío de la Unión Monetaria se mantuvo en suspense hasta el último día. La decisión del Gobierno socialista español de aprobar por sorpresa, unos días antes de la Cumbre de Madrid, la integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo fue una medida, en parte, obligada. Difícilmente podría presentarse González ante el resto de los jefes de Gobierno de la Europa comunitaria con la pretensión de conseguir en Madrid un acuerdo sobre la Unión Monetaria con la peseta cotizando por libre.

La reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Comunidad (Ecofin) había aceptado en S'Agaró, iniciar con urgencia los trabajos para emprender la primera fase contemplada en el denominado Informe Delors. Esta primera fase observaba como aspectos fundamentales, la eliminación de los controles de cambio en Francia e Italia para julio de 1990 y la eventual integración de la libra en el SME.

Pero el problema para la Unión Monetaria no venía tanto por esta primera fase, sino por su continuación en fases posteriores que contemplaban la coordinación de políticas fiscales, la revisión del Tratado de Roma y la creación de un banco central europeo.⁷⁷

Finalmente, tras la Cumbre de junio el aspecto más relevante marcaba un inicio en el proceso de Unión Monetaria: con la fijación de una fecha concreta para

⁷⁷ *Tiempo*, 26.6.89.

el comienzo de la primera fase y con un encargo para preparar las fases siguientes. En Madrid, además, observamos a un Francois Mitterrand que apostaba hasta el final por la Unión Monetaria con inusual insistencia. Para Solbes, el futuro de la Unión Monetaria no se concretaba en un breve plazo (....) “seguramente dentro de veinte años estaremos todavía en la segunda etapa” (*Cinco Días*, 3.7.89).

Por su parte, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón llevó a cabo una evaluación de la Presidencia comunitaria española, argumentando que su presencia se hizo sentir en buen número de normas aprobadas en el horizonte del Acta Unica. Respecto al avance en la Unidad Monetaria, Herrero de Miñón opina que “se ha dado un paso más bien modesto, que abre un tiempo de reflexión para proseguir el camino en función de la convergencia de las políticas económicas y de las circunstancias que motivan esas políticas”. Si nos referimos al campo social, el político señala que “se ha pinchado el globo de una Carta Social carente de cualquier tipo de significado preciso y de capacidad operativa” (*La Vanguardia*, 2.7.89).

Para el experto en temas económicos, Luis Linde, las complicaciones técnicas, institucionales y legales que habría que resolver para la segunda etapa y para poder culminar el proceso son “de tal envergadura” que resulta difícil, incluso, “prever sus interconexiones”. Linde manifiesta que el proceso será muy lento, porque la complejidad técnica y política de la unión monetaria supera a todo lo que hasta ahora ha hecho la CE (*La Vanguardia*, 2.7.89).

Si nos centramos en el avance social, tres directivas sobre seguridad e higiene en el trabajo vieron la luz verde. Si no referimos a los derechos sociales, para los Estados miembros o eran jurídicamente vinculantes o no lo eran, pero no existía un punto intermedio. Para el Reino Unido, la regulación de los derechos sociales

sólo era de competencia nacional, por esa razón hablaban de compromiso político, según el criterio de cada país.

4. Mediación eficaz en la Política Exterior.

Para el diario *Abc* la mejor sorpresa de la Presidencia española de la CE fue la dedicación y capacidad de gestión del Ministro de Asuntos Exteriores. La cooperación política ganó considerablemente en agilidad y las reacciones de Europa en política exterior pasaron a ser rápidas y claras.

Como ya afirmamos anteriormente, Fernández Ordóñez realizó un intenso trabajo de mediación a través de la *troika* comunitaria en el conflicto de Oriente Medio; garantizó la condena unánime de la CE por la incitación de Jomeini al asesinato del escritor Salman Rusdhie; obtuvo la declaración de los *Doce* pidiendo participación de la OLP en el diálogo por la Paz en Oriente Medio; firmó el acuerdo parcial con Estados Unidos en la denominada “guerra de las hormonas” y dirigió el comunicado conjunto que incluía sanciones a la República Popular de China.

Sin embargo, también hay que decir que España no logró en su mandato el acuerdo sobre la deuda iberoamericana y fueron escasas sus iniciativas sobre los problemas surgidos de las relaciones comerciales entre la CE y EEUU y el Japón. En cuanto al Este, a pesar de los avances conseguidos en las presidencias anteriores, no se concretaron suficientemente las relaciones comerciales con estos países. El tratamiento del “bloque Este” estuvo en función de las reformas democráticas que estos países fueron capaces de introducir. No obstante, la política de acercamiento mutuo entre la CE y los países del Este fue la tónica general. Se establecieron negociaciones con Polonia y Bulgaria y se aproximaron las vías de cooperación con la Unión Soviética. Sólo Rumania llegó a romper sus relaciones con la CE, por

ejercer una política de absoluto desprecio hacia los derechos humanos más elementales.

En el transcurso de estos seis meses, el balance de las relaciones de la CE con la EFTA define un mutuo acercamiento en el plano institucional. Los siete países integrantes de la EFTA ⁷⁸ acordaron en la “Declaración de Oslo” (15 de marzo) el compromiso de negociar con la CEE la creación del llamado “espacio económico europeo”.

Finalmente, la prensa también abordó algunas cuestiones relativas al Magreb. Esta región, no percibió importantes cambios que afectaran a su relación con la CE, y sin embargo, las informaciones registran que el comisario español responsable de las relaciones con estos países, Abel Matutes, no caía muy bien en la región ⁷⁹.

5. Política agraria y otros asuntos comunitarios

El mayor número de reglamentos se aprobaron en el sector agrícola, al que se dedicó más del 60% del presupuesto comunitario. Los tres avances más importantes, conseguidos por España, fueron la finalización del paquete de reformas pendientes de la Presidencia griega, la aprobación del paquete de precios agrícolas en tiempo debido y, por ultimo, el lanzamiento de la política forestal. Sin embargo, la prensa refleja que los precios agrarios fueron, por lo general, bastante aceptables para el agricultor centroeuropeo y resultaron más perjudiciales para nuestros trabajadores del campo.

⁷⁸ Islandia, Noruega, Suecia, Suiza, Austria, Finlandia y Liechtenstein

⁷⁹ *Revista España Económica*, Junio 1989.

Si nos detenemos en el balance de otros asuntos comunitarios, la aprobación de más de un 10% del Libro Blanco nos sitúa por encima de la Presidencia alemana que, hasta entonces, sustentaba el récord. Asimismo, la eficaz coordinación del secretario de Estado para las Relaciones con la CE, Pedro Solbes, pudo desbloquear tres años de discusiones sobre la llamada “Europa audiovisual” y se alcanzó una posición común respecto a la Televisión sin Fronteras.

En el recuento de logros, podemos también contabilizar: 27 directivas/reglamentos relacionadas con el Mercado Interior, las directrices de los Mecanismos Complementarios de Intercambio, (MIC), el primer programa forestal de la CE y, en Medio Ambiente, la reducción de los consumos de los llamados CFC (clorofluorocarbonos). No fue posible la creación de una Agencia Europea del Medio Ambiente, pero sí se realizaron importantes avances en investigación y desarrollo.

En cuanto a los temas educativos, lo más destacado del semestre se resume en la aprobación del programa “Lingua”, destinado a mejorar la enseñanza y el conocimiento de las lenguas nacionales de la CE. Y si nos adentramos en el campo de la Sanidad, los diarios destacaron particularmente el arbitrio de la Comunidad Europea a través de un programa de lucha contra el tabaquismo y la prohibición de fumar en lugares públicos.

6. Los resultados de la Cumbre de Madrid (26 y 27 de junio)

La prensa de información general ratifica de una forma más contundente el éxito obtenido en Madrid. Sin resultados espectaculares el objetivo de la unidad monetaria se consolida y Gran Bretaña se embarca en el compromiso que supone la primera fase de la Unión Monetaria.

Algunos diarios económicos -*Cinco Días*, *La Economía*- consideran, sin embargo, que los objetivos marcados por Delors no se alcanzaron en el Consejo Europeo, y que la obstinación de Margaret Thatcher motivó estos resultados: demorar la construcción de la unión monetaria y del espacio social europeo (*Cinco Días*, 28.6.89).

Días antes de celebrarse la Conferencia europea, los titulares de las principales cabeceras constataban cierto temor de nuestro Gobierno a la postura británica. Holanda, Luxemburgo y Portugal también se mostraron cautelosos antes de aceptar las cláusulas del Informe Delors. La prensa europea calificó el encuentro en Madrid de “decisivo”, ya que de su resultado dependería el futuro de Europa. *Le Figaro* traduce su temor sobre si se iba a quedar en “un simple espacio” (26.6.89).

El tema estrella de la reunión fue la Unión Monetaria, circunstancia que obligó al Presidente González a relegar a un segundo plano la defensa del llamado “espacio social”. La expectación se centró en la oferta de Margaret Thatcher sobre el SME. Cuando finalizó la Cumbre, la respuesta de la primer ministra británica adquirió un matiz más flexible de lo esperado, tendiendo en cuenta su trayectoria antieuropeísta. Su imagen es, por otra parte, motivo de contraste en las informaciones analizadas. Por un lado, es profeta de la política de los EEUU. Por otro, consiguió moderar su antieuropeísmo en el Consejo Europeo de Madrid.

En cuanto al papel de los principales protagonistas de la Cumbre, fue Mitterrand el político más avanzado en la lucha por alcanzar la unidad política europea. Felipe González, a su vez, obtuvo la plena confianza del presidente de la Comisión, y Delors no dudó en resaltar el “genio político” del mandatario español. El encontronazo frontal entre Margaret Thatcher y Mitterrand pudo acarrear un

“sonado fracaso”, que se evitó gracias al tesón político de Felipe González y a la veteranía de Andreotti⁸⁰.

Sobre la Carta Social Europea, las posiciones en el Consejo de Madrid no avanzaron. No obstante, se estudió con profundidad el anteproyecto de Carta y resultó unánime la decisión de que debía aprobarse cuanto antes en una “declaración solemne” de los Jefes de Estado y de Gobierno.

Por otra parte, las medidas que afectaban más directamente a la ciudadanía quedaban postergadas: fiscalidad sobre el ahorro, Agencia Europea para el Medio Ambiente, la Europa de los Ciudadanos... Los asistentes también manifestaron su preocupación por la alarmante evasión de los capitales y por el fraude fiscal.

Cabe señalar, por último, que los juicios extraídos de la prensa extranjera atribuyen a Felipe González un importante papel en el “arte del compromiso”. En resumen, estos son algunos de los comentarios. *Le Quotidien de Paris* (28.6.89) afirma que se habían dado “pequeños pasos, pero en la buena dirección”. *Le Soir* (28.6.89) habla del “milagro español”. El *Financial Times* (28.6.89) analiza el escepticismo de Thatcher ante la unión monetaria, y *The Times* (28.6.89) subraya que la primera ministra desea implantar su adaptación personal de la política monetaria. Asimismo destaca la sutileza de González para flexibilizar los rígidos planteamientos británicos y para salvar a España de los intentos de Francia por aumentar su protagonismo. Es importante la reflexión que *La Repubblica* hace sobre el compromiso de Madrid: “supone una transformación de la unidad europea” (28.6.89)

⁸⁰ Revista *Época*, 10.7.89.

7. Valoración de la Presidencia por la prensa extranjera

La prensa europea elogió la actuación de Felipe González y del Gobierno español durante el semestre presidencial. Los funcionarios españoles empezaron a preparar la Presidencia española con dos años de antelación -publica *The Guardian*- y “sus ministros se han dedicado a sus obligaciones hasta tal punto, que la política doméstica ha sido dejada a un lado”⁸¹.

La prensa alemana, al comentar lo más relevante del turno español destacaba que España había contradicho a muchos escépticos que sólo veían en ella un “nuevo lastre costoso para la caja de la Comunidad”⁸². También un editorial del *Die Welt* calificaba de “serio y profesional” el resumen de las conclusiones elaborado por el jefe del Ejecutivo español. Incluso, Margaret Thatcher comentó que el documento elaborado por Felipe González para la Cumbre Europea era una “buena base” para concluir las conversaciones⁸³.

Le Monde, en su editorial “Una apuesta”, valoraba en sus páginas la contribución española a la integración europea⁸⁴. No sólo González en la Cumbre de Madrid, sino también muchos de sus ministros, en reuniones informales y formales de los respectivos departamentos, hicieron progresar la Comunidad de los Doce.

⁸¹ *The Guardian* 28.6.89.

⁸² *General Anzeiger*, 28.6.89.

⁸³ *Die Welt*, 28.6.89.

⁸⁴ *Le Monde*, 29.6.89.

8. Conclusiones del capítulo

- El Gobierno socialista cuando inició su mandato concibió “demasiadas” expectativas, pero ese triunfalismo inicial fue sustituido por una labor más realista. Frente a la “temida inexperiencia” de nuestros políticos, demostramos ser un país plenamente integrado en Europa.
- El avance en los puntos más significativos del proceso unificador fue limitado. La capacidad de alcanzar resultados políticos decisivos dependía, en buena medida, de la fuerza real de cada Estado, de su influencia y del juego de intereses en un momento dado dentro de la CE.
- Resultó ser una Presidencia fructífera y abierta a la cooperación política y a las relaciones exteriores. El turno de España coincidió con la renovación de la Comisión y el Parlamento Europeo, con el consiguiente recorte del periodo de duración de su mandato.
- En Política Exterior las iniciativas europeas han quedado relegadas a las soluciones planteadas por las grandes potencias; sirva de ejemplo, la falta de una política homogénea entre los Estados miembros, que hizo fracasar actuaciones como las ayudas a Hispanoamérica. En definitiva, la experiencia de esta primera Presidencia demostraba la necesidad de potenciar nuestras relaciones en la CE a todos los niveles con una eficaz participación técnica e institucional.
- Nuestros dirigentes no pasaron por alto su malestar ante el boicot de Bruselas a muchas de sus decisiones.

- Los días anteriores a la Cumbre de Madrid, Felipe González supo reaccionar a tiempo, y protagonizó una gira por Europa que le ayudó a salvar el prestigio de nuestra Presidencia comunitaria.
- La prensa internacional dedica amplios espacios para el análisis del Consejo Europeo. Es evidente la afluencia de los juicios valorativos sobre el Presidente español, al que se le atribuía un importante papel en el “arte del compromiso”.
- En la Cumbre de Madrid el desafío de la Unión Monetaria se mantuvo en suspense hasta el último día. Se inicia, así, el proceso de unión monetaria con la fijación de una fecha concreta para el comienzo de la primera fase, el 1 de julio de 1990. Fue decisiva, aunque resultaba por otra parte obligada, la decisión del Ejecutivo socialista de aprobar por sorpresa, unos días antes, la integración de la peseta en el Sistema Monetario Europeo .
- En los resultados de Madrid, las decisiones que incidían más directamente en el ciudadano (fiscalidad del ahorro, investigación...) fueron postergadas. Sin embargo, sí se alertó sobre la evasión de los capitales y el fraude fiscal.
- La prensa recoge unánimemente las críticas de UGT a la gestión del Gobierno socialista, y denuncia que se han agrandado las diferencias entre la construcción europea de los aspectos económicos y de los sociales.
- Jacques Delors reconoce que uno de las grandes virtudes de la Presidencia española radicaba en que no quiso imponer a toda costa una solución de los temas para “apuntarse un tanto”.

- Aunque España demostró buena capacidad de organización, no se han conseguido avances sustanciales en dos de los objetivos más importantes que se planteó al inicio de su mandato: el espacio social europeo y la armonización fiscal.

Conclusiones finales: La prensa ante la Presidencia española de la CE

El Gobierno socialista se esforzó en demostrar que España podía afrontar el reto de presidir, por primera vez y con absoluta dignidad, el Consejo de las Comunidades Europeas. El balance final de la Presidencia española, tras una buena gestión administrativa a lo largo del semestre, resultó ser positivo para nuestros aliados europeos. En términos globales ese es el mensaje extraído de la prensa analizada y aunque todas las expectativas fijadas no llegaron a cumplirse, la voluntad europea de los representantes españoles fue muy decisiva en el avance de la construcción de Mercado Único. En la Cumbre de Madrid, Felipe González supo evitar la ruptura interna de la CE y conseguir un acuerdo de compromiso para activar el camino hacia la unión monetaria.

Cabe señalar, por un lado, que en la línea editorial de los diarios que han sido objeto de nuestro estudio se aprecia una continua interrelación entre las noticias y comentarios que aluden a la Presidencia española y los problemas de índole interno. En otras palabras, los contenidos informativos con tintes localistas coexisten con el protagonismo de Bruselas.

Otro punto a tener en cuenta radica en la dificultad que en ocasiones he encontrado para poder analizar en profundidad el desarrollo de algunas cuestiones derivadas de las relaciones comunitarias. El carácter intrínseco de inmediatez que tiene la prensa enturbia la comprensión de aquellos problemas que requieren una visión panorámica mucho más amplia.

Por otra parte, son importantes los espacios dedicados a los asuntos económicos; una tendencia que limita, en cierto modo, esa idea integradora de Europa que rebasa el espacio económico.

1. Los retos de la primera Presidencia española

En el mes de enero la prensa informó puntualmente y con regularidad de las prioridades y objetivos de la Presidencia española. Así, proliferaron las informaciones y los artículos de miembros del Gobierno que hablaban, entre otras cosas, de “pragmatismo” en la gestión. En este nuevo escenario, los diarios

se centran en el proyecto socialista para Europa y reflejan las ventajas de la integración comunitaria. La prensa extranjera, por su parte, observa con cierto recelo ese “excesivo” entusiasmo de nuestros representantes.

2. Mercado Interior (I): Eliminación de las fronteras físicas y técnicas

En términos comparativos, las informaciones no siempre responden a una visión clara de la supranacionalidad europea. Por otra parte, se establecen distintos criterios para informar sobre las medidas que afectan al Mercado Interior, sobre todo en lo que respecta a la supresión fronteriza. Si en Europa no se discuten los límites a la inmigración de latinoamericanos y magrebíes, la prensa nacional sí denuncia ese nuevo “racismo”. Así, *El País* y *Abc* manifiestan con énfasis las razones históricas que nos ligan a Latinoamérica. El diario *Ya*, dedica más de un editorial a este tema. Paralelamente, se reavivan las desavenencias entre el ministerio del Interior y el de Asuntos Exteriores a causa de la política de visados.

Cabe añadir que en esta Presidencia española se solventaron muchas de las objeciones relacionadas con la eliminación de las barreras físicas. Asimismo, fueron numerosos los reglamentos técnicos aprobados si los comparamos con el año anterior. Los problemas se acentuaron, sin embargo, en el campo de la armonización fiscal y en la construcción de un espacio financiero único.

3. Mercado Interior (II): Armonización de la fiscalidad

La liberalización de los capitales y el desarrollo de la política de armonización fiscal que defiende Bruselas tienen un lugar destacado en la prensa. Sin embargo, la dispersión de los contenidos sobre esta materia induce a cierta confusión y la información referida a la política impositiva no resulta ser en ocasiones transparente. Así, aspectos tan polémicos como la armonización indirecta y la retención fiscal sobre el ahorro reciben a veces un tratamiento ambiguo.

Queda claro, no obstante, que las propuestas del Ejecutivo comunitario sobre retenciones del ahorro no alcanzaron a solucionar todas las diferencias que planteaban los Estados miembros. Por ejemplo, en S'Agaró sólo se logró avanzar en la armonización de los impuestos indirectos flexibilizando las posturas iniciales de la Comisión. Para *El País*, armonizar la fiscalidad constituía uno de los mayores retos de la Presidencia española. Las cabeceras de información económica insisten, por otra parte, en el “difícil camino” de la armonización fiscal. En el caso de *La Vanguardia*, es excepcional el tratamiento informativo de todo lo relacionado con las medidas sobre retención del ahorro que implantó el presidente Kolh en Alemania. Más críticos, los diarios franceses opinaron sobre el caso alemán, que se trataba de una “auténtica provocación”.

Fue de gran importancia para la prensa el conflicto suscitado en el archipiélago canario tras los requerimientos arancelarios de la Comisión. La “rebelión fiscal” de las Islas Canarias abrió una serie de debates en los medios y en la sociedad canaria sin precedentes y se disparó la polémica entre el Gobierno central y el autonómico. Ni siquiera, la mediación de Borrell aclara la respuesta de Madrid en el caso de no prosperar el desarme arancelario requerido por la Comisión. Incluso, en las páginas de opinión, hay quien cuestiona abiertamente el modelo de integración que adoptó España.

4. El ‘espacio social’ europeo

Las tensiones derivadas del Mercado Único necesariamente requerían la adopción de medidas sociales para paliar los efectos negativos de su implantación. Sectores políticos y sindicales contemplaron esta realidad desde distintos ángulos. El empeño de España por impulsar una política social más avanzada se traduce en la agenda de trabajo de la Presidencia: el número de Consejos de Ministros de Asuntos Sociales se vio incrementado, y desde el primer momento la Carta Social pasó a ser una de las prioridades más importantes del Gobierno socialista. Este documento, garante de los derechos sociales fundamentales, captó la máxima atención de los diarios nacionales y relegó a un segundo plano las medidas aprobadas sobre seguridad e higiene en el trabajo.

Aunque nuestros dirigentes se esforzaron por mantener una actitud abierta al diálogo social, la oposición y los sindicatos denunciaron a los medios de comunicación el desinterés del Gobierno por abordar los problemas sociales de nuestro país. Las tensas negociaciones entre los representantes sociales y el Ejecutivo también se reflejan en la totalidad de los diarios. *El País*, por ejemplo, lidera la denuncia de las presiones de los socialistas sobre algunos miembros del Consejo Económico y Social, con motivo de la revelación de algunos datos negativos de la economía de España en uno de sus informes.

Por lo que atañe a una rápida armonización social, es comprensible por otra parte la inquietud que experimentaron algunos Estados europeos, ante el temor de una reducción de sus índices de competitividad. Por ejemplo, los periódicos alemanes advierten del peligro que el *dumping* social puede acarrear a la economía de los más desarrollados. Finalmente, a pesar del notable esfuerzo por aprobar la Carta Social, nuestra Presidencia no vio cumplido su deseo y esa asignatura quedó pendiente después de la Cumbre de Madrid.

5. Medio Ambiente e innovación tecnológica

A medida que los ciudadanos toman más conciencia del impacto medioambiental, la prensa manifiesta una actitud más comprometida con los problemas ecológicos. Los diarios subrayan la importancia de acontecimientos tan importantes como la Cumbre de Londres, diseñada para paliar los daños

contaminantes de los gases CFC. Sus efectos negativos llevan a los gobiernos a adoptar una nueva concepción de las relaciones de producción. *El País* insiste en que hay que incentivar las inversiones públicas, y *Abc* combate desde sus páginas de opinión las iniciativas sobre la fabricación de los productos causantes de la destrucción de la capa de ozono.

Por otra parte, la Presidencia española impulsó por primera vez una serie de actuaciones para salvaguardar el área mediterránea y mejorar la política forestal. Así, las principales conclusiones de Cáceres advirtieron del peligro de la desertización y posteriormente, en el Consejo Europeo de Junio se planteó como novedad la protección de la cubierta vegetal frente a la desertización.

Otro de los asuntos más candentes, con una fuerte presencia en casi todos los diarios, afectaba a la industria automovilística. Se declara una guerra abierta entre los fabricantes y la Comisión cuando Bruselas opta por la instalación de catalizadores de tres vías. Los empresarios del automóvil se mostrarán ante este nuevo reto inseguros y divididos.

Cuando el ministro Javier Solana anunciaba que España quería abrir “una etapa de intensa reflexión europea sobre la investigación” era consciente de que nuestro país necesitaba un desarrollo tecnológico mucho más avanzado. Durante la Presidencia, España participó en diversos programas de investigación (Flair, Mast, Eurotra, Step,...) incluidos en el Programa Marco, entonces vigente. Por otra parte, los diarios presentaron una serie de objetivos comerciales basados en el potencial tecnológico de las PYMES. En este sentido, existe el propósito general en el Gobierno de incrementar las inversiones en I+D para que estas empresas alcancen la estabilidad en el mercado.

6. La política económica y la unión monetaria

Con la declaración del presidente Delors ante el Parlamento Europeo sobre el proyecto de la Unión Económica y Monetaria las instituciones comunitarias y los grupos de presión se agruparon para hacer un llamamiento público a favor de la moneda única. España participó de esa reactivación del Sistema Monetario y anunció que era previsible la integración de la peseta en el ecu. Se abre la controversia en la prensa ante las ventajas y desventajas que supone la entrada de España en el SME, y los artículos y editoriales analizan las repercusiones de la incorporación de la peseta en el sistema monetario europeo. Cuando, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, anunció el ingreso para antes del 1 de julio, e inesperadamente el Consejo de Ministros decidió la entrada de nuestra moneda en el sistema de cambios el 16 de junio, todos los diarios coincidieron en subrayar que esta decisión fue tomada “por sorpresa” y que era una de las más trascendentes de los últimos tiempos en materia de política económica. Este mismo debate también cobraba vigor en Europa y uno de los diarios más influyentes, *Le Monde*, planteó que con la entrada de monedas

débiles como la peseta y el escudo portugués se podría esperar un posible cambio del valor del ecu.

La Cumbre de Madrid marcará un nuevo hito en la trayectoria hacia la unión monetaria europea: El 1 de julio de 1990 se inicia la primera fase del Informe Delors pese a las sucesivas reticencias británicas. Si bien en los diarios existe ese aire triunfalista por el acuerdo, también es cierto que las diferencias no acabarán de limarse después del Consejo Europeo. Margaret Thatcher moderó su intervención, pero nunca mostró su total acuerdo con el contenido del Informe Delors.

En el transcurso del semestre, otros asuntos económicos fueron objeto de tratamiento informativo, tales como la deuda latinoamericana, el “boom” económico por el que atravesaba España o el impulso a las pequeñas y medianas empresas, con nuevos acuerdos de cooperación y subcontratación.

7. Política audiovisual

La Presidencia española, de acuerdo con lo acordado en Hannover y en Rodas, intenta avanzar en la creación de un espacio cultural común. En este escenario, prevalecen los textos que hablan del primer acuerdo común sobre la “Televisión sin Fronteras”, por el que se regula la programación de la televisión europea. A raíz de este principio de acuerdo surgen voces disonantes en Francia, que acusan a la directiva de ser “descafeinada”. Por el contrario, las industrias de publicidad de Alemania no comparten la tesis de “imponer” minutos en la publicidad. Cuando faltaba poco para finalizar la Presidencia, el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Pedro Solbes, reconoce decepcionado, que el bloqueo de la Comisión a la directiva propuesta por España sobre televisión transfronteriza se debió a motivos políticos y a los fuertes intereses comerciales. Ante el fracaso español, se cuestiona si la CE es competente o no para establecer las cuotas de programación y publicidad en el medio televisivo.

Otro de los logros que no alcanzó la repercusión deseada en la prensa, fue la norma europea de Televisión de Alta Definición. La CE propone formalmente el sistema europeo de HDTV (High Definition Televisión) y el 6 de marzo, los ministros de Industria firman una norma común sobre este sistema. La directiva sobre la televisión de alta definición aprobada para desbancar a los japoneses fue finalmente ratificada el 27 de abril.

Por otra parte, mientras la Comisión se esforzaba por eliminar los derechos exclusivos en el campo de las telecomunicaciones, los Estados rechazan cualquier intento de liberalización del sector. El Ejecutivo comunitario recurre por este motivo al artículo 90 del Tratado de Roma, que prohíbe a los Estados tomar medidas contrarias a la competencia y a la libre circulación de bienes y servicios en el marco de las empresas públicas.

8. Política agrícola y pesquera comunitaria

El calendario de precios agrarios para 1989-1990 y su negociación ocupa un lugar preferente en la prensa nacional. Tras el acuerdo firmado sobre los precios agrarios en abril, los diarios son unánimes a la hora de reconocer que no era habitual una convergencia de criterios tan rápida. La satisfacción fue la nota predominante en las capitales europeas, aunque las asociaciones agrarias muestran su desacuerdo por los nuevos precios. *Abc* adopta una actitud muy crítica frente a la política del Departamento de Agricultura y en los diarios económicos los expertos agrícolas contribuyen a crear un clima de debate sobre la política agrícola y la industria agroalimentaria.

En relación con la pesca, el esfuerzo de la Presidencia giró en torno a la mejora de las condiciones de la flota pesquera comunitaria. Fueron muy difundidas las ayudas oficiales de la CE destinadas a modernizar la estructura de los pesqueros españoles; también lo fueron las implicaciones de la ley británica *Merchant Shipping Act* contra los intereses de los armadores españoles. Los titulares reflejan una actitud combativa de Bruselas frente a Gran Bretaña que, por otra parte, contrasta con el silencio de nuestros políticos.

9. Transportes, Industria y Energía y Fondos Estructurales.

El progresivo desmantelamiento de las fronteras suponía al mismo tiempo la demanda de transportes rápidos y eficaces. Así, Francia y Alemania encabezan la lista de los países que utilizan el tren de alta velocidad. A instancias europeas, se persigue una profunda transformación de las administraciones ferroviarias que pretende acabar con los graves déficits de explotación del ferrocarril. En el transporte aéreo, es evidente que se respiran “aires de crisis” de cara a la liberalización prevista para el 1 de enero de 1993. El sector naviero encuentra que los principales motivos de preocupación son el cabotaje y la lucha contra las prácticas tarifarias desleales.

Por lo que respecta a la información sobre la política industrial y energética, alcanza su punto más álgido cuando se produce el contencioso eléctrico de España con Portugal. El país lusitano denuncia ante Bruselas la falta de transparencia en los precios energéticos españoles.

Este análisis de la prensa también demuestra que España fue el país más beneficiado por las ayudas comunitarias. Sin embargo, el Parlamento Europeo acusó a nuestros dirigentes de no incentivar proyectos de carácter productivo. El comisario de política Regional, Brucés Millán, comparte esa misma crítica y acusa al Gobierno español de “falta de coherencia” en su política de la Competencia. Por lo general, existe una mayor cobertura informativa sobre los fondos estructurales en los diarios económicos, especialmente cuando se trata de establecer vínculos entre los desequilibrios regionales de nuestro país y la distribución de los fondos de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo.

10. Política Exterior

En los primeros meses de la Presidencia destacó el protagonismo del ministro de Asuntos Exteriores. Felipe González se vio obligado a delegar en Fernández Ordóñez la responsabilidad de una serie de giras diplomáticas, porque se vio obligado a atender los problemas internos del país. Los viajes a Oriente Medio, sus negociaciones en Centroamérica (reunión “San José V”) y la visita a los Estados Unidos constituyen tres claros ejemplos de ese apretado programa.

Este análisis descubre, asimismo, el acercamiento de los siete países de la EFTA con el fin de obtener fórmulas avanzadas de cooperación ante los cambios del Mercado Único. Sobre el acuerdo del GATT aprobado en Ginebra, algunos diarios hablan de “esperanza” y otros, más realistas, de “excesivo” optimismo. No obstante, la propuesta global obtenida por el GATT sólo sirve para que no se paralicen las conversaciones sobre conflictos comerciales enmarcados en la Ronda Uruguay (1986-1990).

Es importante además señalar que en el Consejo Informal de Granada se materializó la solicitud del presidente González al Parlamento Europeo sobre la financiación de la deuda latinoamericana. Por otra parte, teniendo en cuenta que la prensa extranjera reconoce el compromiso de España con Iberoamérica, resulta paradójico que, al mismo tiempo, los poderes españoles impusieran una política de visados situada al margen de ese compromiso. En este sentido, al informar sobre la reunión de Granada, el diario *La Gaceta* señaló que “se perdió la batalla contra el visado”.

Al igual que en el inicio de la Presidencia, la polémica comercial con los EE.UU se reabre, y con la firma de un acuerdo la CE permite que EEUU exporte carne sin aditivos a cambio de que este país reduzca sus represalias comerciales. Otros asuntos objeto de nuestro estudio fueron los decisivos viajes de González a varios países europeos para preparar la Cumbre, el primer acuerdo comercial de la CE con la URSS, la condena unánime de la brutal represión estudiantil en China y el nuevo impulso comunitario a su política de cooperación con los países ACP (Reunión de Lomé).

11. Elecciones al Parlamento Europeo

Realmente, la Campaña de estos comicios europeos puso más énfasis en los problemas nacionales, según se desprende del pormenorizado análisis efectuado sobre un total de 127 artículos de opinión. *El País*, por ejemplo, al término de la campaña, reconoce que los partidos de la oposición encuentran en la política de alianzas de municipios y comunidades autónomas su principal instrumento para alcanzar el poder. El diario *Ya* opina, sin embargo, que los partidos de la oposición no han sabido sacar ventaja del desgaste gubernamental. *Diario 16*, por su parte, responsabilizará al Gobierno y, en concreto, a Luis Solana de que el gran debate televisivo sobre Europa no llegara a emitirse.

Cuando se conocen los resultados electorales, el PSOE confirma su liderazgo y suben las candidaturas regionales y personales en detrimento de los partidos nacionales. Se registró, además, una ampliación del abanico parlamentario hacia la izquierda y hacia la extrema derecha.

Por otra parte, resulta interesante comprobar la incapacidad del centro-derecha para articular una alternativa política. Fue evidente el contratiempo sufrido por líder popular Marcelino Oreja y, además, el triunfo electoral de Ruíz Mateos (700.000 votos) supuso un duro golpe para la derecha.

12. Balance final de la Presidencia española

En dicho periodo, Felipe González y su equipo de gobierno salvaron satisfactoriamente la asignatura europea. Por lo que se refiere a la prensa, los editoriales otorgan, con alguna excepción, un aprobado general a su mandato. Las opiniones más negativas resaltarán, sin embargo, que la Presidencia española pasó “sin pena ni gloria” y que sus resultados fueron “mediocres”.

Aunque el inmediato turno de la presidencia francesa empañó la actuación de España en la aprobación de determinados acuerdos, y hubo un escaso avance en el terreno social y en la armonización fiscal, resultan evidentes los progresos sobre la unión de la moneda europea alcanzados en Madrid. Después de las tensiones entre Mitterrand y Margaret Thatcher a raíz de sus discrepancias en la discusión monetaria, el papel mediador de Felipe González en la Cumbre de junio logró salvar la integración de Europa. En resumen, al finalizar el semestre, el Gobierno de España cumplía dignamente su cometido aunque en un principio y, por inexperiencia, los objetivos iniciales de su programa resultaron ser demasiado ambiciosos.

ANEXOS

Se incluyen como anexos diversas síntesis de documentos, sumarios, acuerdos, disposiciones, etc. para facilitar algunos datos sobre la primera Presidencia española del Consejo de las Comunidades Europeas.

Anexo I

1. Balance global de la Presidencia española. Disposiciones, Informes y Debates.

1.1 Eliminación de las fronteras físicas.

6 Reglamentos	<ul style="list-style-type: none">- Modificación Reglamento 3/84, régimen circulación intracomunitaria mercancías utilización temporal- Régimen Régimen importación temporal de medios de transporte.- Garantías pago deuda aduanera (posición común)- Contracción y pago derechos importación o de exportación deuda aduanera-Modificación Reglamento 302/68 sobre origen de mercancías- Documento único y tránsito común CE-EFTA
5 Directivas	<ul style="list-style-type: none">- Normas y política sanitaria productos cárnicos procedentes de terceros países.- Animales reproductores de raza pura de las especies ovina y caprina.-Modificación Directiva 66/403 sobre comercialización de patatas.- Comercialización de ovoproductos.- Modificación Direc. 77/93 sobre organismos nocivos en vegetales y productos vegetales (Adopción parcial)
7 Decisiones	<ul style="list-style-type: none">- Contenedores transporte de mercancías bajo precinto aduanero- Régimen equipajes.- Importación temporal mercancías (Convenio ATA)- Convenio aduanero sobre importación temporal vehículos privados y comerciales- Participación CC en negociación enmienda Convenio ATA- Erradicación pleuroneumonía bovina contagiosa en Portugal- Simplificación controles físicos CEE-EFTA
1 Debate	<ul style="list-style-type: none">- Supresión fronteras físicas: libre circulación de personas.

1.2 Eliminación Fronteras Técnicas

1 Reglamento	Definición, designación y presentación de bebidas espirituosas
40 Directivas	<ul style="list-style-type: none"> - Control oficial de productos alimenticios (posición común, el 25.1.89; adopción final, el 14.6) - Productos destinados a una alimentación especial - Etiquetado y presentación de productos alimenticios - Zumos de frutas y otros productos similares. - Productos de cacao y chocolate - Identificación lote productos alimenticios - Agentes emulgentes, estabilizantes, etc, en productos alimenticios (posición común, el 27.2; adopción final, el 14.6) - Seguridad en las máquinas - Compatibilidad electromagnética - Equipos de protección individual (posición común) - Gases emitidos vehículos menos 1.400 litros - Protección lateral de vehículos - Nivel sonoro y dispositivos escape motocicletas - Protección vuelco tractores agrícolas y forestales, vía normal (posición común) - Protección vuelco parte trasera tractores agrícolas y forestales de vía estrecha (posición común) - Protección vuelco parte delantera tractores agrícolas y forestales de vía estrecha (posición común) - Elementos secundarios en los abonos (calcio, sodio, etc) - Oligoelementos en los abonos (posición común) - 4 Directivas relativas a la extensión campo aplicación directivas productos farmacéuticos. - Preacondicionamiento en volumen de ciertos líquidos (posición común) - Modificación Directiva 80/181 sobre unidades de medida (posición común). - 5ª Modificación Directiva 76/768 sobre productos cosméticos (posición común) - 8ª modificación Directiva 76/769 sobre sustancias y preparados peligrosos (comitología posición común). - Televisión sin fronteras (posición común) - 2 Modificaciones directivas profesiones médicas y paramédicas (posición común). - Modificación directiva 71/305 relativa a la adjudicación contratos públicos de obras. - Control de aplicación de los procedimientos adjudicación contratos públicos de obras y suministros (posición común) 11ª Directiva publicidad sucursales 12ª Directiva (sociedades responsabilidad limitada con un solo socio) (posición común) - Publicidad documentos contables entidades de crédito.

- Armonización del concepto de fondos propios.
- Información en las ofertas públicas de valores.
- 2ª Directiva de coordinación bancaria
- Coeficiente de solvencia de las entidades de crédito (posición común)
- Información privilegiada en el mercado de valores mobiliarios (posición común)

3 Decisiones

- Mandato a la Comisión para negociar en nombre de la Comunidad una decisión-recomendación de la OCDE sobre el reconocimiento internacional de las buenas prácticas de laboratorio.
- Mandato Comisión participación Conferencia Internacional de Washington sobre circuitos integrados.
- Mandato Comisión participación Conferencia Internacional Madrid sobre registro internacional de marcas.

Debates orientativos

6 Debates

- Derecho de residencia
- Reglamento Control Concentración Empresas
- Fiscalidad del ahorro
- Régimen fiscal de fusiones, escisiones y aportación de activos de sociedades.
- Régimen fiscal de sociedades matrices y filiales.
- Procedimiento arbitral en materia de doble imposición.

1.3 Eliminación de fronteras fiscales.

Adoptados

- 1 Directiva - 18ª Directiva sobre supresión ciertas derogaciones en el IVA

Debates orientativos

- 1 Debate - Abolición fronteras fiscales.

1.4 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de Asuntos Sociales

Adoptados

- 2 Reglamentos - Adaptaciones técnicas de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 sobre Seguridad Social de los trabajadores migrantes.
- Modificación de los Reglamentos 1408/71 y 574/72 sobre Seguridad Social de los trabajadores migrantes.

4 Directivas	<ul style="list-style-type: none"> - Segunda Directiva Marco sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo . - Lugares de Trabajo (posición común) - Máquinas (posición común) - Equipos de protección individual (posición común)
1 Resolución	- Formación Profesional Permanente
1 Decisión	- Programa de Lucha contra la Pobreza
1 Conclusión	- Empleo de minusválidos de la Comunidad
Debates orientativos	
6 Debates	<ul style="list-style-type: none"> - Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales - Capítulo Social del Programa RENAVAL - Igualdad de trato entre hombres y mujeres - Prestaciones contributivas
2 Informes	<ul style="list-style-type: none"> - Situación de los proyectos CEE en materia de política social. - Estudios comparativos sobre las regulaciones relativas a las condiciones de trabajo en la Comunidad.

1.5 Disposiciones adoptadas y debates en temas de Consejo de Medio Ambiente

7 Directivas	<ul style="list-style-type: none"> - Nuevas Instalaciones de Incineración de Residuos Municipales - Instalaciones existentes de Incineración de Residuos Municipales. - Medidas contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos de motor. - Utilización confinada de Microorganismos modificados genéticamente. - Modificación de la Directiva 80/779/CEE sobre valores límite y valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y partículas en suspensión. - Reducción de la contaminación causada por la industria del dióxido de titanio - Modificación directiva 83/129 sobre importación de pieles de determinadas crías de focas.
1 Documento de Conclusiones	- Sobre reducción de los clorofluocarbonados que empobrecen la capa de ozono.
2 Resoluciones	<ul style="list-style-type: none"> - El efecto invernadero y la Comunidad. - Protección del elefante africano.

1.6 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de I+D

- 21 Decisiones
- 1 Programa BRITE/EURAM sobre tecnologías de manufacturas y materiales avanzados.
 - 1 Programa JOULE sobre energías no nucleares y utilización racional de la energía (AD)
 - 1 Programa Grandes Instalaciones científicas de interés europeo (AD)
 - 1 Programa SPES sobre Ciencias Económicas (AD)
 - 1 Programa ECLAIR sobre investigación agroindustrial y Biotecnología (AD)
 - 1 Programa sobre Desmantelamiento instalaciones nucleares (A+D)
 - 1 Programa sobre Radioprotección (AD)
 - 1 Programa EUROTRA sobre traducción automática avanzada (PC y AD)
 - 1 Programa MAST sobre Ciencia Marina (Pc. Y Ad.)
 - 1 Programa FLAIR sobre tecnología de alimentos (Pc. Y Ad.)
 - 1 Programa VALUE sobre difusión resultados I+D (Pc. Y Ad)
 - 1 Programa MONITOR sobre análisis y evaluación I+D (Pc. Y Ad.)
 - 1 Programa DOSES sobre sistemas expertos en estadísticas (PC y AD).
 - 1 Programa STEP/EPOCH sobre climatología y Medio Ambiente (PC).
 - 1 Programa BRIDGE sobre Biotecnología (PC)
 - 1 Programa sobre Materias Primas y Reciclado (PC)
 - 1 Programa TELEMAT sobre manipulación a distancia en ambientes peligrosos (OC)
 - 2 sobre Acuerdo Cooperación Científica con Islandia (AD)
 - 1 sobre Acuerdo con Japón sobre fusión nuclear (AD)
 - 1 sobre trabajos para terceros del CCI (AD)
- 1 Resolución:
- COST (AD)
- 2 Debates:
- Sobre revisión Programa Marco I+D.

1.7 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de Economía y Finanzas

- | | |
|----------------------------------|--|
| Reglamentos | <ul style="list-style-type: none"> - Reglamento 2891 recaudación recursos CEE, EURATOM - Reglamento 2892 recaudación recursos procedentes IVA - Reglamento Financiero |
| 1 Decisión | - Decisión sobre la adhesión de la peseta y el Escudo en el ECU |
| Directivas (AD. Y Posición común | <ul style="list-style-type: none"> - Segunda Directiva Coordinación Bancaria - 18ª Directiva IVA - Directiva armonización fondos propios entidades crédito - Directiva folleto para oferta pública de los Valores Mobiliarios - Directiva publicidad de los documentos contables sucursales establecidas en un Estado miembro de entidades de crédito y financieras con sede social fuera de dicho Estado miembro. - Directiva armonización definición del PNB a precios mercado |
| 6 Debates | <ul style="list-style-type: none"> - Fiscalidad del Ahorro. - Régimen fiscal, fusiones, escisiones y aportación de activos de sociedades. - Régimen fiscal de sociedades matrices y filiales. - Procedimiento arbitral en materia de Sociedades. - Abolición de fronteras fiscales. - Unión monetaria |

1.8 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de Telecomunicaciones

Adoptados

- | | |
|----------------|---|
| 1 Decisión | - Televisión de Alta Definición |
| 2 Resoluciones | <ul style="list-style-type: none"> - Normalización en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. - Introducción de la Red Digital de Servicios Integrados |

Debates orientativos

- | | |
|-----------|--|
| 2 Debates | <ul style="list-style-type: none"> - Propuesta Directiva Consejo sobre puesta a punto de la Oferta de Red Abierta - Proyecto Directiva Comisión sobre liberalización de los servicios de telecomunicación. |
|-----------|--|

1.9 Disposiciones adoptadas y debates orientativos en temas del Consejo Agricultura y Pesca.

Adoptados

- 126 Reglamentos
- 3 Reforma OCM vacuno y primas
 - 1 Importación vinos, mostos y zumos.
 - 1 Acción excepcional urgencia Portugal
 - 1 Agricultura Luxemburgo
 - 1 Intervención sector cereales
 - 1 Extensificación
 - 1 Transferencia cebada a Italia
 - 1 Ayudas a la Renta
 - 5 SLOM
 - 2 Frutos secos
 - 1 Pequeños Productores Cereales
 - 1 Leguminosas- grano
 - 1 Normas generales ayuda al algodón
 - 1 Set-Aside. Modificación Anexo I
 - 2 Financiación FEOGA
 - 1 Prórroga mantequilla Nueva Zelanda.
 - 1 Desarrollo agricultura Portugal
 - 1 Contingente diafragmas congelados bovino
 - 1 Extensión Reglas OPAS frutas y hortalizas.
 - 1 OCM Frutas y Hortalizas (N. Calidad kiwis+ transformación en alcohol nectarinas y bruñones).
 - 62 Paquete Precios
 - 1 OCM azúcar Portugal
 - 1 Ayuda a la Inversión sector porcino (cláusula 35%)
 - Ayudas semillas cáñamo
 - Definición, Designación y Presentación Bebidas Espirituosas
 - 7 Paquete Forestal
 - 1 2ª Prórroga mantequilla Nueva Zelanda.
 - 1 Adaptación Precio aplicable D.O. vinos de mesa en España.
 - 1 modificando el Reglamento 2511/69 (cítricos)
 - 1 Umbral Intervención Limones
 - 1 Contingente vino Jerez, Málaga, Jumilla, etc.
 - 1 Balance machos jóvenes vacuno
 - 1 Balance vacuno destinado a la industria
 - 1 Importación carne vacuno alta calidad (Hilton-Beef)
 - 3 Ayudas al maíz duro vítreo de alta calidad
 - 1 OCM del arroz
 - 1 Definición determinados productos vínicos.
 - 1 Destilación vinos y subproductos
 - 1 Ayudas a productores de lúpulo, cosecha 1988
 - 1 Ayuda a la producción de lúpulo a agrupaciones de productos.
 - 1 Ayudas a los productores de lúpulo cosecha 1986 y medidas especiales para ciertas zonas de producción
 - 2 Contingentes Arancelarios Comunitarios para novillos y

vacas de determinadas razas de montaña y de determinadas razas alpinas.

- 3 disposiciones especiales relativas a vinos de calidad y vinos espumosos.

- 1 Normas Generales control en el sector vitivinícola.

- 1 Normas Generales relativas a guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces.

- 1 3ª Prórroga mantequilla Nueva Zelanda (hasta 31-VII-89)

10 Directivas

- 1 modificando Directiva 76/895/CEE residuos plaguicidas.

- 1 Policía Sanitaria importaciones productos cárnicos Terceros países

- 1 modificando 77/93/CEE organismos nocivos (semillas).

- 1 Brucelosis Porcina.

- 1 Reproductores raza pura ovina y caprina .

- 1 Productos fitosanitarios (sustancias activas).

- 1 Comercialización de plantas de patata.

- 1 Comercialización ovoproductos.

- 1 modificando Directiva 85/397/CEE (punto de congelación de la leche).

- Modificando la 77/93/CEE organismo nocivos (vegetales y productos vegetales)

9 Decisiones

- 1 Material forestal Austria

- 1 Laboratorios residuos carnes.

- 1 Encuestas vitivinícolas Francia e Italia.

- 1 Equivalencia inspecciones semillas.

- 1 Paquete Forestal

- 1 Pleuroneumonía Bovina Portugal

- Extensión a Portugal de la cesión a precios reducidos productos lácteos.

- 1 Paquete Precios.

- 1 Reconocimiento zonas indemnes de peste porcina clásica.

4 Debates

- Reforma de OCM de carne de ovino y caprino

- Acuerdo de autolimitación entre la CEE y Nueva Zelanda sobre el comercio de carne ovino y caprino.

- Importaciones de mantequilla de Nueva Zelanda en el Reino Unido

- Régimen de ayudas a la reconversión de la producción agrícola.

PESCA

Adoptados

16 Reglamentos

- Normas comunes comercialización pescados frescos o refrigerados

- Modificación de TACS 1989

- Buques bajo pabellón de Suecia.

- Reparto cuotas aguas de Suecia.
 - Rectificando el anterior
 - Contingentes arancelarios productos de la pesca 1989.
 - Repartiendo cuotas de capturas en Groenlandia
 - Barcos de Japón en aguas de Portugal
 - Contingentes de bacalao en Noruega
 - Medidas de conservación en el Mar Báltico.
 - Reparto de cuotas suplementarias en aguas de Suecia.
 - Medidas de conservación en el Antártico.
 - Contingentes de Arenques, filetes de merluza congelados y anguilas.
 - Conclusión de Acuerdo de Pesca CEE/Isla Mauricio.
 - Distribución cuotas de la zona de Noruega y Jan Mayen
 - Normas comunes de comercialización conservas de sardinas.
- 4 Decisiones
- Autorización a Comisión negociación FAO/Océano Indico
 - Aceptando cuotas suplementarias de bacalao en Groenlandia
 - Prorrogando le Acuerdo con EE.UU
 - Autorizando a negociar un acuerdo de pesca con Malta.
- 1 Declaración
- Tomando nota de una Declaración de la Comisión, que permite reanudar las negociaciones pesqueras CEE/URSS.

1.10 Disposiciones adoptadas en temas del Consejo de Transporte

Adoptados

- 3 Reglamentos
- 1 Navegación interior
 - 1 Ayudas transporte combinado
 - 1 SIR (Sistemas Reserva Informatizada) (Pendiente juristas lingüistas).
- 9 Directivas
- 2 Acceso a la profesión transportistas.
 - 1 Reconocimiento mutuo de licencias a transportistas por carretera.
 - 3 Pesos y Dimensiones vehículos comerciales (2 pendientes juristas lingüistas)
 - 1 Vuelos interregionales (Pendiente juristas lingüistas)
 - 1 Profundidad ranura neumáticos (pendiente juristas lingüistas)
 - 1 sobre estadísticas transporte (pendiente juristas lingüistas)
- 2 Decisiones:
- 1 Actividades de terceros países transporte marítimos.
 - 1 Recogida información transportes marítimos.
- 1 Resolución
- 1 Sobre control afluencia espacio aéreo (Pendiente juristas lingüistas)
- 1 Declaración:
- Sobre normalización contenedores (ISO)

- 2 Conclusiones: - Sobre fiscalidad en financiación infraestructuras del transporte
 - Sobre negociaciones países tránsito (pendiente juristas)
- Debates: - Negociaciones tránsito
 - Medidas positivas flotas comunitarias
 - Negociaciones con Africa Central y Occidental.

1.11 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de Industria

Adoptados

- 1 Reglamento - Tarifas ferroviarias carbón y acero.
- 5 Decisiones: - Contribución CECA a medidas sociales siderurgia
 - Programa SPRINT (1989-1993)
 - Mejora del entorno de las empresas, especialmente PYMES
 - Aplicación de los programas de investigación "Carbón".
 - Aplicación de los programas de investigación "Acero".
- 1 Resolución - Desarrollo de la industria minera comunitaria.
- 6 Debates - Aplicación del ECU en CECA
 - Televisión de Alta Definición
 - Reestructuración de FINSIDER
 - Política Comunitaria PYMES
 - Construcción Naval
 - Industria textil.

1.12 Disposiciones adoptadas y debates orientativos en temas del Consejo de Energía.

Adoptados

- 1 Reglamento - Programa THERMIE para el desarrollo tecnológico en materia energética (P.C)
- 1 Decisión - Mejora de la eficacia en el uso de la electricidad
- 1 Recomendación: - Mercado petrolífero e industria del refino: evolución y perspectivas.
- 1 Documento de conclusiones - Seguridad de las centrales nucleares.
- 5 Debates - Mercado interior entre sistemas integrados eléctricos
 - Utilización gas natural en centrales eléctricas
 - Contratos públicos: agua, energía y transportes.
 - Transparencia de precios en el consumo de energía.

- Cooperación entre EE.UUU y EURATOM en materia de salvaguardias nucleares.

1.13 Disposiciones adoptadas y debates orientativos en temas del Consejo de Asuntos Generales

Adoptados

- | | |
|-----------------|---|
| 3 Reglamentos | <ul style="list-style-type: none">- Sobre procedimiento a aplicar a productos originarios países terceros mediterráneos.- Vigilancia comunitaria productos agrícolas de Chipre, Yugoslavia, Egipto, Jordania, Israel, Túnez Siria, Malta y Marruecos.- Sobre Reglamentos interiores comités cooperación económica y comercial. |
| 15 Decisiones | <ul style="list-style-type: none">- Mandato negociación protocolo financiero Chipre-Malta- Mandato negociación Polonia.- Mandato negociación Bulgaria- Mandato negociación con Andorra- Protocolo financiero CEE/Malta (2 Decisiones)- Mandato negociación URSS- Volet exterior CECA- Programa TEDIS- Sobre acuerdo de cooperación CEE/Estados Árabes del Golfo- Participación de la CE en un Convenio Internacional de Turismo (OMT)- Edificio del Consejo |
| 1 Resolución | <ul style="list-style-type: none">- Sobre nuevos programas de cooperación comunitaria en materia de protección civil. |
| 2 Declaraciones | <ul style="list-style-type: none">- Elecciones Parlamento Europeo- Sobre la cooperación con la República árabe del Yemen. |
| 6 Conclusiones | <ul style="list-style-type: none">- Relaciones CE –USA: hormonas- Relaciones CEE – Consejo Europa- Relaciones con Rumania.- Relaciones CEE/países del Este- GATT – Ronda Uruguay |

Debates orientativos

- | | |
|-----------|---|
| 4 Debates | <ul style="list-style-type: none">- DOM- Derecho de voto ciudadanos Estados Miembros en elecciones municipales- Relaciones países EFTA- Relaciones CE/URSS |
|-----------|---|

Reuniones ministeriales

- Consejo de Cooperación con Túnez (febrero)
- Cooper./Asociación - Consejo de Asociación con Mata (marzo)
- Consejo de Cooperación con Marruecos (abril)
- Consejo de Cooperación con Israel (mayo)
- Consejo de Cooperación con Argelia (junio)

Otras reuniones

- V Reunión Ministerial CE –América Central
- Reunión Ministerial EFTA-CEE (marzo)
- De negociación Acuerdo ACP-CEE (2)

Relaciones comerciales

Arancel

- General

7 Reglamentos

- Exportaciones productos químicos
- Mandioca (importación)
- Productos agrícolas ACP y PTOM
- S.P.G. Feria de Berlín
- Nomenclatura arancelaria y estadística. Ronda Uruguay. Productos tropicales.
- Modificación reglamento 2658/87 relativo nomenclatura arancelaria y estadística y A.A.C.
- Modificación Reglamento 339/79 sobre definición productos del Arancel Aduanero Común originario de terceros países.

- Contingentes

13 Reglamentos

- Hígado de pescado y anilina
- Berenjenas y zanahorias
- Cebollas (Egipto)
- Cervezas de Malta (Malta)
- Patatas tempranas y uvas (Chipre)
- Vinos (Marruecos)
- Textiles en T.P.P
- Arenques, filetes merluza y anguilas.
- Vinos (Austria)
- Pulpa albaricoque (Turquía)
- Aumento ferrocromo + 6% carbono
- Hidroperóxido de terobutilo y acetobutirato de celulosa
- Magnetronos de ondas y un producto químico.

3 Decisiones

- Laminados de acero al silicio CECA-España
- Laminados de acero al silicio CECA-Benelux
- Laminados de acero al silicio CECA- República Federal de Alemania.

-Suspensiones

- 8 Reglamentos
- Para determinados productos agrícolas de Malta.
 - Total o parcial: Comunidad de los Diez a las importaciones de España.
 - Temporal: productos industriales
 - Temporal: productos industriales (microelectrónica)
 - Temporal: productos agrícolas
 - Total: Comunidad de los Diez a España y Portugal.
 - Temporal: productos industriales (sector químico)
 - Vigilancia comunitaria para determinados productos de Malta.
- 2 Decisiones
- Total: Comunidad de los Diez productos CECA.
 - Mandato: CEE-EFTA productos CECA.

Comercio Exterior

-Relaciones Exteriores

- 5 Reglamentos
- Austria-CEE. Art. XVIII GATT
 - Finlandia CEE. Art. XVIII GATT
 - Suecia-CEE Art. XVIII GATT
 - Acuerdo CE-Rumania en productos industriales
 - China (textiles)
- 39 Decisiones
- Tailandia (Textiles)
 - India (Textiles)
 - Filipinas (Textiles)
 - Países del Golfo
 - Canadá (bebidas alcohólicas)
 - Checoslovaquia (productos industriales)
 - Túnez (macedonia de frutas)
 - Tácita reconducción acuerdos comerciales terceros países (3)
 - Yugoslavia (acuerdo CECA)
 - EFTA Segundos protocolos (6)
 - EFTA Terceros protocolos (6)
 - EFTA origen (6)
 - Prórroga Convenio Internacional Café
 - Exposición Universal de Sevilla
 - URSS (Textiles). Acuerdo apertura negociaciones.
 - Supresión restricciones cuantitativas a la exportación CEE/EFTA (6)
 - CECA países Comercio Estado
- Antidumping
- 11 Reglamentos
- Sulfato de Cobre (Bulgaria y U. Soviética)
 - Brochas para pintar (China) (2)
 - Fotocopiadoras papel montadas CEE

- Urea (EE.UU y Venezuela)
- Balanzas electrónicas montadas CEE
- Magnetoscopios (Japón y Corea)
- Cintas vídeo (Corea y Hong-Kong)
- Carbonato de sodio (Bulgaria, R.D. Alemania, Polonia y Dinamarca)
- Tableros de fibra originarios de Checoslovaquia, Polonia y URSS.

- 1 Decisión - Magnetoscopios (Corea y Japón)

1.14 Disposiciones adoptadas y debates orientativos en temas del Consejo de Desarrollo

- 1 Decisión - Prórroga de 3 Reglamentos sobre ayuda alimentaria; ejecución programas almacenamientos y sistemas de alerta rápida; y ejecución acciones cofinanciación compra productos alimenticios.
- 1 Resolución - Coordinación comunitaria en materia de apoyo al ajuste estructural en los países ACP.
- 1 Declaración - Sobre utilización de los instrumentos de ayuda.
- 2 Conclusiones - Evaluación de la cooperación
- 2 Debates - Informe de la Comisión sobre 13 años de cooperación al Desarrollo en Iberoamérica y Asia.
- Renovación Convenio ACP-CEE

1. 15 Disposiciones adoptadas y debates en temas del Consejo de Cultura

- 1 Resolución - Promoción del libro y la lectura
- 2 Conclusiones -Cooperación entre bibliotecas basadas en las nuevas tecnologías.
- Aspectos generales de la actuación comunitaria en materia de lectura y difusión de libros en el contesto de la realización del Mercado Interior en 1992.
- 2 Acuerdos - Creación de un Secretariado Europeo en Londres para el mecenazgo de empresas.
- Designación de capitales europeas de la cultura
- 1 Debate - Jornadas europeas sobre temas audiovisuales (EUREKA audiovisual)

1. 16 Disposiciones en temas del Consejo de Justicia

- 1 Convenio - Convenio relativo a la adhesión del Reino de España y la República de Portugal al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil.

1.17 Disposiciones en temas del Consejo de Educación

- 2 Decisiones: - Programa Lingua (posición común)
 - Apertura Comett II a Países EFTA
- 2 Resoluciones: - Escolarización de niños cuyos padres ejerzan profesiones itinerantes.
 - Escolarización de niños gitanos y viajeros
- 3 Debates: - Educación y formación en la perspectiva del Mercado Interior.
 - Orientaciones a medio plazo en materia de educación y formación
 - Adaptación nuevo programa ERASMUS.

1.18 Disposiciones y debates en temas del Consejo de Protección e Información de los Consumidores

- 1 Directiva - Tasas de interés en los créditos al consumo (posición común)
- 1 Conclusión - Sistema Ehlass (Información sobre accidentes en los que intervienen productos de consumo)
- 1 Informe - Educación para el consumo en la enseñanza primaria y secundaria
- Debates orientativos
- 3 Debates - Política de protección de los consumidores
 - Seguridad General de Productos
 - Viajes forfait.

1.19 Disposiciones y debates en temas del Consejo de Sanidad

- 1 Directiva - Etiquetado productos tabaco (posición común)
- 1 Decisión - Convenio NN.UU ante el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

2 Resoluciones	<ul style="list-style-type: none">- Prohibición de fumar en lugares públicos.- Red Europea de datos sobre Toxicomanía
4 Conclusiones	<ul style="list-style-type: none">- Droga y Sida- Mejora recogida de datos Sida
1 Directiva	<ul style="list-style-type: none">- Contenido máximo de alquitrán en cigarrillos. Orientación común.

Fuente: Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Ministerio de Asuntos Exteriores (Enero/Junio 1989)

Anexo II

2. Número total de reuniones celebradas bajo la Presidencia española (1.1.89-21.6.89)

Consejos:	42
(Ver descripción en Anexo 3)	
COREPER	69
Comité especial agricultura	20
Consejos y Seminarios informales en España	17
Reuniones de grupos y comités en Bruselas	1.300
Reuniones de grupos y comités en España	43
Comités políticos:	
- Viena	1
- Madrid	5
Otras reuniones CPE (Sin contar los Grupos)	21
Comité 113 Titulares	5

Anexo III

3. Reuniones ministeriales formales durante la Presidencia española

7 Consejos Agricultura

- Lunes 23/Martes 24 de Enero
- Lunes 13/Martes 14 de Febrero
- Lunes 6/Martes 7 de Marzo
- Lunes 20/Martes 21 de Marzo
- Lunes 17/Martes 18 de Abril
- Lunes 29/Martes 30 de Mayo
- Lunes 19/Martes 20 de Junio

6 Consejos Asuntos Generales

- Lunes 23/Martes 24 de Enero
- Lunes 20/Martes 21 de Febrero
- Lunes 20/Martes 21 de Marzo
- Lunes 24/Martes 25 de Abril
- Lunes 22/Martes 23 de Mayo
- Lunes 12/Martes 13 de Junio (incluye Cooperación Política)

4 Consejos Ecofin

- Lunes 13 de Febrero
- Lunes 13 de Marzo
- Martes 18 de Abril
- Lunes 19 de Junio

5 Consejos Mercado Interior

- Lunes 27 de Febrero
- Lunes 13 de Marzo
- Jueves 6/Viernes 7 de Abril
- Miércoles 3 de Mayo
- Lunes 12/Martes 13 de Junio

2 Consejos Pesca

- Jueves 23 de Febrero
- Miércoles 21 de Junio

2 Consejos Asuntos Sociales

- Jueves 1 de Junio
- Miércoles 5 de Abril

2 Consejos Investigación	- Martes 14 de Marzo - Miércoles 20 de Junio
2 Consejos Industria	- Lunes 6 de Marzo - Martes 21 de Junio
2 Consejos Transportes	- Martes 14 de Marzo - Lunes 5/Martes 6 de Junio
2 Consejos Medio Ambiente	- Jueves 2 de Marzo - Jueves 8 de Junio
1 Consejo Consumidores	- Lunes 10 de Abril
1 Consejo Energía	- Martes 11 de Abril
1 Consejo Telecomunicaciones	- Jueves 27 de Abril
1 Consejo Desarrollo	- Martes 16 de Mayo
1 Consejo Sanidad	- Martes 16 de Mayo
1 Consejo Cultura	- Jueves 18 de Mayo
1 Consejo Educación	- Lunes 22 de mayo

Anexo IV

4. Comparecencias ante el Parlamento español con motivo de la Presidencia española.

Todas las comparecencias a las que se hace referencia a continuación, se hicieron ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Comunidades Europeas.

- 214/000028
Excmo. Sr. D. Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Asuntos Exteriores, a petición propia (28.9.88)
Asunto: Informar sobre las relaciones España-Comunidad Económica Europea (CEE)
Fecha de la comparecencia: 13.10.88.
- 213/000140
Excmo. Sr. D. José Claudio Aranzadi Martínez, ministro de Industria y Energía, a solicitud del G.P. de Coalición Popular (7.9.88).
Asunto: informar sobre las medidas adoptadas por el Gobierno con vistas al mercado eléctrico comunitario consecuente al Acta Única Europea.
Fecha de la comparecencia: 3.11.88
Compareció en su lugar D. Fernando Maravall Herrero, Secretario General de la Energía.
- 212/001163
Ilmo. Sr. D. Julio Blanco Gómez, Director General de la Producción Agraria, a solicitud de la A.P. de la Democracia Cristiana (23.9.88)
Asunto: Informar de la situación resultante después de ser desestimado el recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia de cuotas lácteas.
Fecha de comparecencia: 3.11.88

- 212/001164
Excmo. Sr. D. Pedro Pérez Fernández, Secretario de Estado de Economía, a solicitud de G.P. de Coalición Popular (26.9.88)
Asunto: Explicar el contenido del informe del Gobierno en el que se solicita el adelantamiento en el desmantelamiento arancelario y contingentes, en relación con nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE).
Fecha de comparecencia: 3.11.88
- 212/001644
Excmo. Sr. D. Pedro Solbes Mira, Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, a solicitud del Gobierno (16.11.88).
Asunto: Informar sobre las relaciones actuales de España con la Comunidad Económica Europea (CEE).
Fecha de comparecencia: 30.11.88.
- 212/001601
Ilmo. Sr. D. Jesús Arango Fernández, Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), a solicitud del G.P. de Coalición Popular (17.10.88).
Asunto: Informar de la posición del Gobierno español en relación con la aplicación en España del Programa SET-ASIDE o retirada de tierras agrícolas.
Fecha de comparecencia: 21.12.88
- 214/000038
Excmo. Sr. D. Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Asuntos Exteriores, a petición propia (11.1.89)
Asunto: Informar sobre las prioridades en materia de cooperación política de la Presidencia española del Consejo de la Comunidad Económica Europea.
Fecha de la comparecencia: 1.2.89.
- 213/000167
Excmo. Sr. D. Carlos Solchaga Catalán, Ministro de Economía y Hacienda a solicitud del G.P. Vasco (19.12.88).
Asunto: Informar sobre los retrasos que impiden o dificultan la ejecución del Plan Nacional de interés comunitario (PNIC) en Euskadi.
Fecha de la comparecencia: 22.2.89
Compareció D. José Borrell Fontelles, Secretario de Estado de Hacienda.
- 213/000175 – 213/000179 (Desglosada)
Excmos. Sres. D. Carlos Solchaga Catalán, Ministro de Economía y Hacienda y D. Francisco Fernández Ordóñez, Ministro de Asuntos Exteriores, a solicitud del G.P. de Coalición Popular (1.2.89).
Asunto: Informar sobre política exterior y fiscal en relación con el Archipiélago Canario y sobre las decisiones del Gobierno Autónomo de Canarias en lo relativo al arbitrio insular de entrada de mercancías en las Islas.
Fecha de comparecencia: 22.2.89
Compareció D. José Borrell Fontelles, Secretario de Estado de Hacienda , para informar sobre los temas subrayados.

- 212/001673
Excmo. Sr. D. Pedro Solbes Mira, Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, a solicitud del Gobierno (30.1.89)
Asunto: Informar sobre la Presidencia española del Consejo de la Comunidad Económica Europea.
Fecha de comparecencia: 7.3.89.
- 212/000187
Excmo. Sr. D. Joaquín Almunia Amann, Ministro de Administraciones Públicas, a solicitud del G.P. de Coacción Popular (14.3.89)
Asunto: Informar del estado de la situación respecto a la incorporación de las CC.AA al proceso de toma de decisiones en la Comunidad Económica Europea, mediante convenio o cualquier otro sistema que se arbitre.
Fecha de la comparecencia: 5.4.89.
- 213/000186
Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud del Grupo Parlamentario de Minoría Catalana (8.3.89)
Asunto: Informar sobre los contenidos de la reunión de ministros de Trabajo de la CE, celebrada en Sevilla.
Fecha de comparecencia: 12.4.89.
- 213/000190
Excmo. Sr. D. Manuel Chaves González, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a solicitud del G.P. de Coalición Popular (20.3.89).
Asunto: Informar de lo tratado en el Consejo Europeo de Ministros de Trabajo, del resultado de dicho Consejo y de las posibilidades de llegar a un acuerdo en política social durante la Presidencia española de las Comunidades Europeas.
Fecha de la Comparecencia: 12.4.89.
- 212/001701
Excmo. Sr. D. Apolonio Ruíz Ligerio, Secretario de Estado de Comercio, a solicitud del Grupo Parlamentario de Coalición Popular (22.2.89).
Asunto: Informar sobre la situación de la Balanza Comercial de España, sobre la Ronda del GATT y sobre las previsiones y efectos para España de la guerra comercial entre Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea (CEE).
Fecha de comparecencia: 12.4.89
Por acuerdo de la Comisión y con la aceptación del Grupo Popular de Coalición Popular, queda subsumida en esta comparecencia la parte referida a diversos asuntos relacionados con la Balanza comercial, correspondiente a la solicitud de comparecencia 212/001724.
- 212/001724
Excmo. Sr. D. Pedro Solbes Mira, Secretario de Estado para las Comunidades Europeas, a solicitud del Grupo Parlamentario de Coalición Popular (20.3.89).
Asunto: Informar de la situación de los acuerdos o compromisos alcanzados por la Comunidad Europea y la Asociación Europea de Libre Cambio (EFTA), así como de diversos asuntos relacionados con la Balanza Comercial.
Fecha de la comparecencia: 12.4.89

Por acuerdo de la Comisión, y con la aceptación del Grupo Parlamentario de Coalición Popular, queda subsumida en la comparecencia 212/001701 la parte referida a diversos asuntos relacionados con la Balanza Comercial.

- Excmo. Sr. D. José Luis Corcuera Cuesta, Ministro del Interior, a solicitud del G.P. de Coalición Popular (20.3.89)

Asunto: Informar de los acuerdos alcanzados durante las últimas reuniones de Ministros del Interior de las Comunidades Europeas, Grupo Trevi, y para que informe de los avances respecto a la Europa de los ciudadanos y la libre circulación de personas.

Fecha de la comparecencia: 31.5.89

Anexo V

5. La nueva Comisión de la Comunidad Europea (1.1.89)

- **Jacques Delors** (francés, presidente): Asuntos Monetarios, Servicio del Portavoz y Célula de Prospectiva.
- **Frans Andriessen** (holandés, vicepresidente): Relaciones Exteriores y Política Comercial.
- **Henning Christophersen** (danés, vicepresidente): Asuntos Económicos y Financieros y Coordinación de los Fondos Estructurales.
- **Manuel Marín** (español, vicepresidente): Cooperación y Desarrollo y Pesca.
- **Filippo María Pandolfi** (italiano, vicepresidente): Ciencia, Investigación y Desarrollo, Telecomunicaciones e Innovación.
- **Martin Bangemann** (alemán, vicepresidente): Mercado Interior, Asuntos Industriales y Relaciones con el Parlamento.
- **Leon Brittan** (británico, vicepresidente): Política de la Competencia e Instituciones Financieras.
- **Carlo Ripa di Meana** (italiano): Medio Ambiente, Seguridad Nuclear y Protección Civil.
- **Antonio Cardoso e Cunha** (portugués): Personal, Administración y Traducción; Energía y Euratom, Pymes, Artesanado, Comercio y Turismo y Economía Social.
- **Abel Matutes** (español): Política Mediterránea, Relaciones con América Latina y Norte-Sur.
- **Peter Schmidhuber** (alemán occidental): Presupuesto y Control Financiero.
- **Christiane Scrivener** (francesa): Fiscalidad y Unión Aduanera.
- **Bruce Millan** (británico): Políticas Regionales.

- **Jean Dondelinger** (luxemburgués): Asuntos Audiovisuales y Culturales y Europa de los Ciudadanos.
- **Ray Mac Sharry** (irlandés): Agricultura y Desarrollo Rural.
- **Karel Van Miert** (belga): Transportes, Créditos e Inversiones y Protección de los Consumidores.
- **Vasso Papandreu** (griega): Empleo, Asuntos Sociales y Educación y Formación.

Anexo VI

6. Composición del Parlamento Europeo después de las Elecciones de junio

Grupos parlamentarios	Total	Bélgica	Dinamar.	RFA	Grecia	España	Francia	Irlanda	Italia	Luxembr.	Holanda	Portugal	Reino Unido
Grupo Socialista	180	8	4	31	9	27	22	1	14	2	8	8	46
Grupo del Partido Popular Europeo	121	7	2	32	10	16	6	4	27	3	10	3	1
Grupo Liberal, Democrático, Reformista	49	4	3	4		6	13	2	3	1	4	9	
Grupo de los Demócratas Europeos	34		2										32
Grupo de los verdes	30	3		8		1	8		7		2	1	
Grupo para la Izquierda Unitaria Europea	28		1		1	4			22				
Grupo de la Alianza Democrática Europea	22				1	2	13	6					
Grupo Técnico de Derechas Europeas	17	1		6			10						
Grupo de Coalición de Izquierdas	14				3		7	1				3	
Grupo Arco Iris	13	1	4			2	1	1	3				1
No inscritos	10					2	1		5		1		1
Total	518	24	16	81	24	60	81	15	81	6	25	24	81

Fuentes y Bibliografía

Nota

La selección de la prensa nacional y extranjera (epígrafes 1.1 y 1.2) se ha realizado en función de su representatividad, difusión y territorialidad. El periodo de análisis comprende los seis meses del mandato presidencial de España, que va desde el 1 de enero al 31 de junio de 1989. La prensa nacional incluye 4 cabeceras de información general (*El País*, *Abc*, *Diario 16* y *YA*), 2 regionales (*La Vanguardia* y *El Periódico*), 4 diarios de información económica (*La Gaceta de los Negocios*, *Cinco Días*, *Expansión* y *La Economía*) y, por último el semanario *El Independiente*.

El seguimiento de la prensa extranjera (epígrafe 1.2) responde, básicamente, a un estudio comparativo de la información procedente de Europa. Su consulta ha sido decisiva para conocer la opinión de otros Estados miembros en materias que afectan al desarrollo de nuestra política comunitaria. Completan esta muestra otras revistas y boletines de periodicidad semanal y mensual gracias a las cuales he podido verificar algunas informaciones sobre asuntos puntuales de la Presidencia española.

En segundo término, para la evaluación de los contenidos periodísticos y la observación detallada de los acontecimientos, he escogido los artículos y editoriales más significativos publicados durante el semestre (epígrafe 2). Estos contenidos de opinión constituyen una clara referencia de los diversos enfoques que subyacen en los diarios sobre las grandes líneas de la Presidencia española.

1. Publicaciones periódicas

1.1 Prensa nacional (1 de En.-30 de Juni. 1989)

- *El País*
- *Abc*
- *Diario 16*
- *Ya*
- *La Vanguardia*
- *Expansión*
- *El Periódico de Cataluña*
- *Cinco Días*
- *La Gaceta de los Negocios*
- *La Economía*
- *El Independiente*

1.2 Prensa extranjera (1 En.-30 Jun.)

Corriere della Sera

Die Welt

Die Zeit

Il Sole 24 Ore

Frankfurter Allgemeine Zeitung

Le Soir

Le Figaro

Le Monde

La Repubblica

The Wall Street Journal

Süddeutsche Zeitung

The Guardian

The Journal of Commerce

1.3 Otras publicaciones

- *Actualidad Económica* (22.1.89/ 22.5.89/3.7.89)
- *Boletín CE* (Enero-Junio, 1989)
- *Boletín de las CCEE. Suplemento 2/86*
- *Cambio 16* (30.1.89/ 3.7.89)
- *Revista España Económica 16* (Enero y Abril, 1989)
- *Revista MOPU* (Enero, 1989)
- *Tribuna* (6.3.89/ 26.6.89)
- *Época* (10.7.89)
- *Tiempo* (26.6.89)
- *El Nuevo Lunes* (6 al 12 de marzo de 1989/ 13 al 19 de marzo/10 al 16 de abril)
- *Europe* (10.5.89/23.5.89)

- *Newsweek* (January 9, 1989)
- *The economist* (13.6.89)
- *L'Express* (7.4.89)

2. Análisis de los Medios

2.1 Prioridades de la Presidencia Española de la CE

1.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"La Presidencia comunitaria" (Ed.)
2.1.89	<i>Cinco Días</i>	"Las prioridades del Gobierno" (Ed.)
2.1.89	<i>Diario 16</i>	"Feliz año europeo" (Ed.)
2.1.89	<i>De Morgen</i>	"La presidencia española de la CEE entre guerra comercial y conferencia de paz"
2.1.89	<i>Abc</i>	"La presidencia española de la Comunidad"
2.1.89	<i>Abc</i>	"Objetivo 92"
2.1.89	<i>Abc</i>	"Presidir con el ejemplo"
2.1.89	<i>Abc</i>	"La nueva Europa"
2.1.89	<i>Abc</i>	"La presidencia en Europa"
2.1.89	<i>Abc</i>	"Intoxicación semestral"
2.1.89	<i>El Nuevo Lunes</i>	"La coartada de la presidencia"
3.1.89	<i>He Parool</i>	"González entra en el escenario europeo"
3.1.89	<i>Diario 16</i>	"Europa como espectáculo"
4.1.89	<i>Abc</i>	"Lo mejor"
4.1.89	<i>Cinco Días</i>	"Demasiadas expectativas"
4.1.89	<i>El País</i>	"Búsqueda de soluciones" (Ed.)
5.1.89	<i>Abc</i>	"El año de los desafíos"
5.1.89	<i>Diario 16</i>	"González en la CE: Comienza el espectáculo"
5.1.89	<i>Expansión</i>	"Empacho comunitario"
7.1.89	<i>Ya</i>	"España, a prueba" (Ed.)
8.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"Esta presidencia es un símbolo"
9.1.89	<i>Il Tempo</i>	"España se hace cargo de la Presidencia de la CE"
9.1.89	<i>Il Messagero</i>	"Iniciado el semestre de la Presidencia española"
9.1.89	<i>Trow</i>	"Madrid y París tiran juntos del carro europeo"
16.1.89	<i>Cinco Días</i>	"Tal como nos ven" (Ed.)
16.1.89	<i>Tages Anzeiger</i>	"Lo que Europa hace bien, nos sirve también a nosotros: España preside la CEE con entusiasmo"
18.1.89	<i>Expansión</i>	"Mucho y nada"
18.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"Inspirado por la prudencia"
18.1.89	<i>L'Unità</i>	"En la CEE es el turno de España"
21.1.89	<i>Ya</i>	"Una maleta de proyectos europeos"
11.2.89	<i>Ya</i>	"La Europa extracomunitaria"

2.2 Mercado Interior

18.1.89	<i>YA</i>	"El mercado único"
20.1.89	<i>El Independiente</i>	"Europa, Sociedad Anónima"
21.1.89	<i>El País</i>	"Macciocchi o la aventura de una Europa sin fronteras"
23.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"Los políticos no se importan"
24.1.89	<i>Ya</i>	"1992: Una oportunidad para España"
24.1.89	<i>Ya</i>	"1993: El año Uno de los Estados Unidos Europeos".

24.1.89	Ya	"Para que Europa se mueva"
4.2.89	<i>Frankfurter Allgemeine Zeitung</i>	"A ritmo de pasodoble hacia Europa"
9.2.89	<i>Expansión</i>	"Estatuto de la sociedad europea" (I)
10.2.89	<i>Expansión</i>	"Estatuto de la sociedad europea" (II)
11.2.89	<i>La Vanguardia</i>	"Mercado único en las profesiones liberales"
1.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"La Europa sin fronteras"
7.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"Inmigración ilegal" (Ed.)
9.3.89	<i>Diario 16</i>	"En Sevilla, contra el terrorismo"
13.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"Reservas británicas a la expansión"
14.3.89	<i>Abc</i>	"Entrar en Europa" (Ed.)
14.3.89	<i>El País</i>	"La Europa 'bunker'"
18.3.89	<i>El País</i>	"La Europa de los ciudadanos"
18.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"Europa en el mundo"
20.3.89	<i>Abc</i>	"Nuevo racismo" (ED)
23.3.89	<i>Cinco Días</i>	"La Ley de Sociedades Anónimas, a punto"
23.3.89	<i>El País</i>	"1992 o el equívoco europeo"
23.3.89	Ya	"La Europa desigual" (Ed.)
1.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"Trabas a la libre circulación de capitales"
3.4.89	<i>Cinco Días</i>	"El desencanto de Europa"
3.4.89	<i>La Gaceta</i>	"Europa y sus macro-regiones"
7.4.89	<i>El Independiente</i>	"Los Consejos de Mercado Interior son importantes"
8.4.89	Ya	"Inmigrantes y extranjeros" (Ed.)
29.4.89	<i>The Wall Street Journal</i>	"El mercado del 92"
8.5.89	<i>La Gaceta</i>	"Una respuesta empresarial ante el Mercado Único"
12.5.89	<i>El País</i>	"La muralla europea"
13.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Cooperación"
15.5.89	<i>Diario 16</i>	"El Grupo Trevi y la "Spanish Connection"(Ed.)
15.5.89	<i>Egin</i>	"Deprisa, deprisa"
18.5.89	<i>La economía</i>	"El tratamiento fiscal de las fusiones: Perspectivas ante la CE"
19.5.89	<i>El Periódico</i>	"Pero ¿Existe el ciudadano europeo?"
27.5.89	<i>El País</i>	"Estrategias para la supervivencia"
27.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"La crisis dentro de la crisis"
30.5.89	<i>El País</i>	"Elementos para una estrategia empresarial"
1.6.89	Ya	"Adiós a la madre patria"
6.6.89	<i>El País</i>	"La Europa Policial" (Ed.)
7.6.89	<i>La economía</i>	"Alianzas europeas en el sector seguros"
8.6.89	<i>La Gaceta</i>	¿Qué mercado interior?
8.6.89	Ya	"La frontera, colador o filtro" (Ed.)
14.6.89	<i>El Periódico</i>	Por una Europa de los ciudadanos"
17.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"España y el desarme arancelario"
18.6.89	<i>El País</i>	"Pedro Solbes"

2.3 Armonización fiscal comunitaria.

27.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"Más sobre armonización"
17.2.89	<i>Expansión</i>	"Apoyo fiscal a 1992"
22.2.89	<i>Expansión</i>	"Armonización fiscal europea: mito o realidad"
27.2.89	<i>Abc</i>	"La armonización fiscal comunitaria es vital para la libertad de inversiones"

2.3.89	<i>Frankfurter Allgemeine Zeitung</i>	"De acuerdo con Madrid sobre la armonización fiscal. Haussmann en España"
5.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"Entre el fraude y la corrupción"
13.3.89	<i>El País</i>	"La armonización fiscal, un reto para la presidencia española"
21.4.89	<i>Cinco Días</i>	"Armonización fiscal en la Comunidad Europea (I)"
28.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"Electoralismo del canciller Kohl en la República Federal"(Ed.)
6.5.89	<i>La Economía</i>	"El difícil camino de la armonización fiscal"
23.5.89	<i>Il Sole 24 Ore</i>	"La pelea de los Doce todavía no es crisis"
27.5.89	<i>La Gaceta</i>	"La resaca de S'Agaró"
1.6.89	<i>Cinco Días</i>	"La libre circulación de capitales"
2.6.89	<i>La Economía</i>	"La planificación fiscal internacional"

2.4 "Rebelión" fiscal canaria

1.2.89	<i>Diario 16</i>	"Rebelión canaria"(Ed.)
1.2.89	<i>Ya</i>	"Cuarentena en Canarias"
3.2.89	<i>El Independiente</i>	"El carnaval de Canarias"
11.2.89	<i>Ya</i>	"Castigo a Canarias"(Ed.)
17.2.89	<i>Ya</i>	"¿Molesta Canarias?"
18.2.89	<i>El Periódico</i>	"Canarias"
11.3.89	<i>Cinco Días</i>	"Islas Afortunadas, otra vez"

2.5 Espacio social europeo

7.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"La dimensión social en Europa"
9.3.89	<i>El País</i>	"Frontera y utopía española"
9.3.89	<i>El País</i>	"La dimensión social del mercado interno"
9.3.89	<i>El País</i>	"La Europa social" (Ed.)
9.3.89	<i>El País</i>	"Pacto continental"
3.4.89	<i>Abc</i>	"Pasos hacia la cooperación y convergencia política europea en los tres meses de presidencia española de la comunidad"
7.4.89	<i>L' Express</i>	"Vers la citoyenneté européenne"
27.4.89	<i>La Economía</i>	"Dimensión social del mercado único"
13.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"CE: la potencia de los años noventa"
24.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Del optimismo al desencanto" (Ed.)
24.5.89	<i>La Gaceta</i>	"El edificio es de todos"(Ed.)
7.6.89	<i>Abc</i>	"El 'espacio social'".
10.6.89	<i>Financial Times</i>	"Nubes de tormenta se agrupan sobre la Carta Social"
12.6.89	<i>Cinco Días</i>	"Política social de la CE ante la cumbre de Madrid (y II).
13.6.89	<i>Abc</i>	"La Carta que nunca escribió"
13.6.89	<i>The economist</i>	"Margaret Thatcher, una europea reticente"
15.6.89	<i>La economía</i>	"Llegan los alemanes"
18.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Doble lectura del voto europeo"
18.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"La discutida Carta Social Europea"
18.6.89	<i>Ya</i>	"Los nuevos tiempos nunca mueren"
22.6.89	<i>The Independent</i>	"La perdedora de la Cumbre"
23.6.89	<i>Die Zeit</i>	"Carta de lugares comunes. La equiparación de las normativas sociales puede poner en peligro el mercado interior"

2.6 Medio Ambiente, Investigación y Desarrollo

18.1.89	<i>Diario 16</i>	"Prioridades de investigación y ciencia en Europa"
13.2.89	<i>El País</i>	¿Una Europa de la Ciencia y la tecnología?
24.2.89	<i>Cinco Días</i>	"El medio ambiente en la política de las estructuras agrarias de la CE II)
3.3.89	<i>The Guardian</i>	"Total prohibición de los gases industriales que dañan el ozono en Europa"
5.3.89	<i>Abc</i>	"España y el ozono"
5.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"La destrucción del ozono"
6.3.89	<i>Diario 16</i>	"Salvar la atmósfera" (Ed.)
13.3.89	<i>Diario 16</i>	"Subirse al tren ecológico" (Ed.)
15.3.89	<i>El Periódico</i>	"Los aerosoles y el ozono"
21.3.89	<i>Cinco Días</i>	"El medio ambiente y la calidad de vida (II)"
30.3.89	<i>El País</i>	"Síndrome de invernadero"
27.4.89	<i>La Economía</i>	"Actividad en I+D y competitividad"
12.5.89	<i>El Independiente</i>	"¿Es posible la euroizquierda?"
13.5.89	<i>El País</i>	"Europa verde" (Ed.)
13.5.89	<i>La Economía</i>	"Respeto a la CE" (Ed.)
18.5.89	<i>Diario 16</i>	"Los usos políticos de la ecología"
24.5.89	<i>El País</i>	"La investigación científica y el desarrollo tecnológico"
26.5.89	<i>Cinco Días</i>	"La protección de la capa de ozono"
7.3.89	<i>Abc</i>	"Destrucción del ozono" (Ed.)

2.7 Sistema monetario europeo

17.6.879	<i>La Vanguardia</i>	"La esterlina en el SME, todo un símbolo"
31.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"La peseta y el SME"
1.2.89	<i>Abc</i>	"Una fusión mirando a Europa"
7.2.89	<i>El País</i>	"¿Dónde y para quien?"
28.2.89	<i>Europe</i>	"Obstáculos y maquiavelismos para frenar el proceso hacia la Unión Monetaria Europea"
7.3.89	<i>Cinco Días</i>	"La encrucijada económica" (Ed.)
7.3.89	<i>Diario 16</i>	"Contraindicaciones"
9.3.89	<i>Abc</i>	"Los diez años del SME"
10.3.89	<i>Cinco Días</i>	"Barreras a la moneda Única" (Ed.)
14.3.89	<i>Abc</i>	"España y la deuda "
14.3.89	<i>Cinco Días</i>	"El SME cumple diez años"
14.3.89	<i>La Repubblica</i>	"Los diez años del SME"
17.3.89	<i>El Independiente</i>	"Hacia una Europa liberal"
17.3.89	<i>Financial Times</i>	"Los diez años del SME"
17.3.89	<i>Handelsblatt</i>	"Controversias en el círculo Delors"
20.3.89	<i>Financial Times</i>	"El espectro de la Europa Fortaleza asusta a los banqueros"
1.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"La apuesta del comercio minorista"
3.4.89	<i>Cinco Días</i>	"Una entrada anticipada" (Ed.)
5.4.89	<i>La Economía</i>	"La peseta alegre" (Ed.)
8.4.89	<i>Abc</i>	"La moneda europea en Avila"
10.4.89	<i>La Gaceta</i>	"La importancia del marco"
11.4.89	<i>Cinco Días</i>	"España, cabeza de Europa" (Ed.)

11.4.89	<i>Cinco Días</i>	"Hacia la Unión Monetaria Europea"
12.4.89	<i>Cinco Días</i>	"Acabar con el insider trading" (Ed.)
12.4.89	<i>Cinco Días</i>	El discreto encanto del SME
17.4.89	<i>El País</i>	"Las sorpresas del Informe del Comité Delors"
18.4.89	<i>Financial Times</i>	"La Unión monetaria en la CE"
19.4.89	<i>Die Welt</i>	"Nada de un estado de Europa"
19.4.89	<i>Frankfurter Allgemeine Zeitung</i>	"¿Tercer impulso hacia el objetivo?" (Ed.)
20.4.89	<i>La Economía</i>	"Los Estados Unidos de Europa"
21.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"La Unión Monetaria y la insularidad británica"
24.4.89	<i>La Gaceta</i>	"La integración de España en la SME"
27.4.89	<i>The Economist</i>	"El Informe Delors"
1.5.89	<i>La Gaceta</i>	"El futuro ECU reforzará la prosperidad"
4.5.89	<i>El País</i>	"El nacionalismo cambiante de M. Thatcher"
4.5.89	<i>La Economía</i>	"España, el SME y la Unión Monetaria (I)"
5.5.89	<i>La Economía</i>	"España, el SME y la Unión Monetaria (II)"
5.5.89	<i>Ya</i>	"La Unión Monetaria de Europa" (Ed.)
6.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Alegato a favor del SME" (Ed.)
6.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"El impacto en la CE del Thatcherismo"
7.5.89	<i>El País</i>	"El Informe Delors"
12.5.89	<i>El País</i>	"El Plan Delors portador de nue"
12.5.89	<i>La Gaceta</i>	"¿Es cara la financiación del BEI?"
13.5.89	<i>La Gaceta</i>	"Señales de alerta"
22.5.89	<i>Abc</i>	"Por una Europa segura" (Ed.)
22.5.89	<i>El País</i>	"Economía y soberanía" (Ed.)
22.5.89	<i>El País</i>	"Los británicos y Europa"
22.5.89	<i>La Economía</i>	"S' Agaró-Madrid" (Ed.)
22.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"La cita de S' Agaró"
23.5.89	<i>Il Sole 24 Ore</i>	"Il Sole 24 Ore"
23.5.89	<i>Le Monde</i>	"Los Ministros de Finanzas de los doce aceptan la primera etapa del informe Delors sobre la unión monetaria"
28.5.89	<i>El País</i>	"La Unión Monetaria"
29.5.89	<i>El País</i>	"La respuesta de las empresas"
30.5.89	<i>El País</i>	"Informe no grato" (Ed.)
3.6.89	<i>Frankfurter Allgemeine Zeitung</i>	"Desplazamiento de poder en un espacio monetario"
4.6.89	<i>El País</i>	"La Unión Monetaria y la soberanía" (Ed.)
5.6.89	<i>La Economía</i>	"La integración en el SME y la cotización de la peseta"
7.6.89	<i>Abc</i>	"¿Conviene entrar en el SME?"
7.6.89	<i>Cinco Días</i>	"La integración necesaria"
7.6.89	<i>Expansión</i>	"La peseta y el Sistema Monetario Europeo"
7.6.89	<i>La Gaceta</i>	"La peseta está sola" (Ed.)
8.6.89	<i>Abc</i>	"La peseta europea" (Ed.)
8.6.89	<i>Diario 16</i>	"Déficit de infraestructura" (Ed.)
8.6.89	<i>La Economía</i>	"La peseta corre hacia el SME" (Ed.)
8.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"La peseta y el SME"
9.6.89	<i>El País</i>	"Un anuncio precipitado" (Ed.)
13.6.89	<i>Abc</i>	"La moneda única" (Ed.)
13.6.89	<i>Cinco Días</i>	"Un banco central europeo"
17.6.89	<i>Abc</i>	"La peseta ya está en Europa" (Ed.)
17.6.89	<i>Cinco Días</i>	"La peseta entra en el SME" (Ed.)

17.6.89	<i>El País</i>	"Otro paso hacia Europa" (Ed.)
17.6.89	<i>La Economía</i>	"La peseta en el Sistema Monetario Europeo: una decisión acertada" (Ed.)
17.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Una decisión histórica" (Ed.)
18.6.89	<i>Abc</i>	"La peseta, em el SME"
18.6.89	<i>Diario 16</i>	"La europeseta" (Ed.)
18.6.89	<i>La Gaceta</i>	"Decisión con riesgos" (Ed.)
18.6.89	<i>La Gaceta</i>	"Lo bueno del SME" (Ed.)
19.6.89	<i>Le Monde</i>	"Un acto de fé español" (Ed.)
20.6.89	<i>The Guardian</i>	"La conquista de España" (Ed.)
21.6.89	<i>Frankfurter Allgemeine Zeitung</i>	"Gesto español" (Ed.)

2.8 Europa audiovisual

1.3.89	<i>La Croix</i>	"La televisión europea estancada"
1.3.89	<i>Le quotidien de Paris</i>	"Televisión europea: los Doce sin cadenas"
15.3.89	<i>YA</i>	"Espacio para la Televisión privada" (Ed.)
16.3.89	<i>Frankfurter Allgemeine Zeitung</i>	"Reglamento eurotelevisivo" (Ed.)
18.3.89	<i>Diario 16</i>	"Televisión sin fronteras" (Ed.)
28.3.89	<i>Expansión</i>	La fortaleza televisiva
21.4.89	<i>El Independiente</i>	"La TV está de moda en la Comunidad"
19.5.89	<i>El Independiente</i>	"La tele de las mil rayas"
26.5.89	<i>The Wall Street Journal</i>	"Una televisión europea"

2.9 Política Agraria y Pesca

23.4.789	<i>El País</i>	"Los precios de Europa"
28.1.89	<i>La Vanguardia</i>	"Nuevos acuerdos en la política agraria"
3.2.89	<i>El Independiente</i>	"La reforma de la agricultura"
13.2.89	<i>Cinco Días</i>	"Más allá de la boina"
26.2.89	<i>Abc</i>	"El dilema del agricultor del futuro" (Ed.)
5.3.89	<i>Abc</i>	"Los mercados internacionales de productos agrarios"
6.3.89	<i>Cinco Días</i>	"El verdadero debate"
6.3.89	<i>Cinco Días</i>	"La Europa azul y su presupuesto"
12.3.89	<i>Abc</i>	"El mundo rural"
19.3.89	<i>Abc</i>	"La comercialización del cerdo ibérico. Desastrosa gestión de la Administración"
2.4.89	<i>Abc</i>	"La somatotropina"
5.4.89	<i>Abc</i>	"La reunión del GATT en Ginebra"
6.4.89	<i>Cinco Días</i>	"Exportaciones hortofrutícolas en libertad"
8.4.89	<i>Cinco Días</i>	"El fracaso de los precios agrarios" (Ed.)
9.4.89	<i>Abc</i>	"Romero echa balones fuera"
25.4.89	<i>La Gaceta</i>	"Sobrevivir sin ayudas" (Ed.)
27.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"Pacto de Estado para la agricultura"
28.4.89	<i>La Economía</i>	"Precios agrarios para Europa" (Ed.)
29.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"Acuerdo sobre los precios agrarios"
30.4.89	<i>Abc</i>	"Los precios agrarios para 1989-1990" (

1.5.89	<i>Cinco Días</i>	"La eficacia de las estructuras agrarias (I)"
1.5.89	<i>La Gaceta</i>	"La cenicienta agraria" (Ed.)
3.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Precios y prisas en el sector agrario"
3.5.89	<i>El País</i>	"Precios a tiempo" (Ed.)
7.5.89	<i>Abc</i>	"Política restrictiva de la PAC"
9.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Ayudas a la formación profesional agraria"
11.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Ayudas a las inversiones en explotaciones agrarias"
12.5.89	<i>El Independiente</i>	"¡Pobre Salamanca, en manos de quién está!"
18.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Ayudas económicas a los jóvenes agricultores (II)"
18.5.89	<i>La Economía</i>	"El futuro pasa por la calidad" (Ed.)
18.5.89	<i>La economía</i>	"El futuro pasa por la calidad" (Ed.)
19.5.89	<i>Cinco Días</i>	"El sector del tabaco y el desarrollo regional"
19.5.89	<i>El Independiente</i>	"Días de vino, jamón y huevo"
21.5.89	<i>Abc</i>	"Las dos caras de los actos de Salamanca"
21.5.89	<i>Abc</i>	"Romero, Castellanos y Barcos"
23.5.89	<i>Financial Times</i>	"Pesqueros españoles"
26.5.89	<i>El País</i>	"Unidad para dar respuesta al campo"
27.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Agroalimentación: se avecinan cambios"
28.5.89	<i>Abc</i>	"Una mutación del sector agrario"
2.6.89	<i>Expansión</i>	"Las faenas de Romero"
3.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"El sector del corcho en Cataluña"
4.6.89	<i>Abc</i>	"Desciende la producción ganadera en la CE"
5.7.89	<i>La Economía</i>	"Reflexiones sobre la presidencia agraria"

2.10 Transportes, Industria y Energía

7.1.89	<i>Cinco Días</i>	"Petróleo: obstáculos ante la integración"
28.1.89	<i>Cinco Días</i>	"Los incentivos regionales"
13.2.89	<i>Abc</i>	"Renovar la industria"
22.2.89	<i>Diario 16</i>	"El gas de la oportunidad" (Ed.)
23.2.89	<i>El País</i>	"El futuro de la industria alimentaria española"
23.2.89	<i>Le Figaro</i>	"Eurotunnel: feu vert pour un accord"
6.3.89	<i>Expansión</i>	"Los fondos estructurales CEE: ¿Un maná que se paga?"
16.3.89	<i>El País</i>	"Un tren de escaparate"
18.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"Cataluña contará con más ayudas de la CE"
31.3.89	<i>La Gaceta</i>	"Ayudas más realistas" (Ed.)
31.3.89	<i>Diario 16</i>	"Europa no hará españoles solidarios"
3.4.89	<i>Abc</i>	"Una política industrial para Europa"
3.4.89	<i>Diario 16</i>	"El desarrollo regional" (Ed.)
7.4.89	<i>El Independiente</i>	"Consejo de Ministros de Industria" (Ed.)
17.4.89	<i>Abc</i>	"La guerra del automóvil" (Ed.)
24.4.89	<i>Abc</i>	"Trenes de alta velocidad" (Ed.)
3.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Frío en Washington" (Ed.)
9.5.89	<i>La Economía</i>	"Liberalización del transporte aéreo en la Europa Comunitaria"
10.5.89	<i>Abc</i>	"Nueva energía"
10.5.89	<i>Cinco Días</i>	"Autonomías centralizadas" (Ed.)
16.5.89	<i>Cinco Días</i>	"El desarrollo regional en el horizonte de 1993"
22.5.89	<i>La Gaceta</i>	"La reforma del Fondo de Compensación Interterritorial"

- | | | |
|---------|----------------------|--|
| 26.5.89 | <i>La Gaceta</i> | "El desarrollo regional y su financiación" |
| 1.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Iberia toma posiciones" (Ed.) |

2.11 Política Exterior

- | | | |
|---------|------------------------------|---|
| 2.1.89 | <i>Abc</i> | "Guerra de las hormonas" (Ed.) |
| 5.1.89 | <i>Cinco Días</i> | "La vieja guerra comercial entre EE.UU y la CE" |
| 20.1.89 | <i>El País</i> | "Europa tiene que tomar la iniciativa hacia EEUU y la URSS" |
| 22.1.89 | <i>El País</i> | "Europa está cambiando" |
| 23.1.89 | <i>Expansión</i> | "La exportación hortofrutícola en 1988" |
| 27.1.89 | <i>El Independiente</i> | "Europa, la política del avestruz" |
| 27.1.89 | <i>El Independiente</i> | "Un soñador que no duerme" (Ed.) |
| 28.1.89 | <i>Cinco Días</i> | "Algo más que una visita" (Ed.) |
| 15.2.89 | <i>La Vanguardia</i> | "América Latina vista desde la CE" |
| 22.2.89 | <i>Abc</i> | "Advertencia a Jomeiny" (Ed.) |
| 22.2.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Los Doce, frente a Jomeiny" (Ed.) |
| 22.2.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Ponderada respuesta al imán" |
| 24.2.89 | <i>El Independiente</i> | "Salvar a Rushdie" (Ed.) |
| 24.2.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Suiza desea mantener su posición ante la CE" |
| 28.2.89 | <i>Abc</i> | "La CE y Centroamérica" |
| 28.2.89 | <i>Diario 16</i> | "El derecho a leer a Salman Rushdie" (Ed.) |
| 28.2.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Ahora con mejores auspicios" |
| 28.2.89 | <i>Ya</i> | "Semprúm desafía a Jomeiny" |
| 1.3.89 | <i>El País</i> | "Europa y el conflicto árabe-israelí" |
| 4.3.89 | <i>La Vanguardia</i> | "La hora europea de Gorbachev" (Ed.) |
| 11.3.89 | <i>Diario 16</i> | "Las pateras de la muerte" |
| 13.3.89 | <i>Cinco Días</i> | "Reunión Ronda Uruguay" |
| 15.3.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Tres claves para la diplomacia europea" |
| 17.3.89 | <i>Abc</i> | "El viaje Fernández Ordóñez" |
| 1.4.89 | <i>El País</i> | "Un camino para la paz" |
| 3.4.89 | <i>La Gaceta</i> | "El desafío europeo entre el Este y el Oeste en 1992 (I)" |
| 4.4.89 | <i>La Gaceta</i> | "El desafío europeo entre el Este y el Oeste en 1992 (II)" |
| 6.4.89 | <i>Abc</i> | "Esperanzas en Ginebra" |
| 9.4.89 | <i>Abc</i> | "El GATT" |
| 10.4.89 | <i>Cinco Días</i> | "Excesivo optimismo en el GATT" |
| 17.4.89 | <i>Financial Times</i> | "Los ministros de la CE no se ponen de acuerdo sobre el Plan Brady" |
| 17.4.89 | <i>La Gaceta</i> | "Se perdió en Granada" |
| 4.5.89 | <i>Ya</i> | "La mediación de Europa" |
| 5.5.89 | <i>El Independiente</i> | "Las injusticias de la Presidencia europea" |
| 9.5.89 | " <i>La Economía</i> " | "El problema de la deuda latinoamericana y España" |
| 17.5.89 | <i>Le Quotidien de Paris</i> | "Europa: Las preocupaciones de Mitterrand" |
| 18.5.89 | <i>Corriere de la Sera</i> | "El decimotercer miembro de la CE" |
| 18.5.89 | <i>The Times</i> | "Nosotros europeos" |
| 23.5.89 | <i>Europe</i> | "La batalla de Europa en el Reino Unido" |
| 27.5.89 | <i>La Gaceta</i> | "EEUU contra Japón" |

30.5.89	<i>La Gaceta</i>	"Cuidado con el proteccionismo"
1.6.89	<i>Abc</i>	"La problemática comercial"

2.12 Cumbre en Madrid y Balance de la Presidencia Española

3.2.89	<i>El Independiente</i>	"Presidencia europea" (Ed.)
8.3.89	<i>El País</i>	"Europa y las barreras" (Ed.)
9.3.89	<i>Abc</i>	"Los Reyes en Bruselas" (Ed.)
9.3.89	<i>El Periódico</i>	"Juan Carlos en Bruselas"
10.3.89	<i>El Independiente</i>	"Algunas curiosidades para reflexionar"
28.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"En la mitad del semestre"
31.3.89	<i>La Vanguardia</i>	"González se incorpora al semestre"
1.4.89	<i>Diario 16</i>	"Felipe, viajero por Europa" (Ed.)
5.4.89	<i>La Gaceta</i>	"Excesivos respetos"
8.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"Construcción de Europa: un balance"
26.4.89	<i>Mundo Obrero</i>	"La presidencia española, sin pena ni gloria"
23.5.89	<i>Abc</i>	"Una cierta sensación de vacío"
26.5.89	<i>Abc</i>	"González, noqueado" (Ed.)
26.5.89	<i>El Independiente</i>	"Quiero pero no puedo ..."
28.5.89	<i>Ya</i>	"Bush no visita España" (Ed.)
2.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Un socio digno de confianza"
22.6.89	<i>The Independent</i>	"La perdedora de la Cumbre"
26.6.89	<i>Diario 16</i>	"Una presidencia constructiva"
26.6.89	<i>Die Welt</i>	"Sorteando la Cumbre a la española" (Ed.)
26.6.89	<i>Le Figaro</i>	"Soberbio aislamiento" (Ed.)
26.6.89	<i>Ya</i>	"Cumbre taurina"
28.6.89	<i>Financial Times</i>	"Compromiso en Madrid" (Ed.)
28.6.89	<i>The Times</i>	"Huída de Madrid" (Ed.)
29.6.89	<i>Diario 16</i>	"España y la presidencia de la Comunidad"
2.7.89	<i>La Vanguardia</i>	"Intereses desatendidos"
3.7.89	<i>Tiempo</i>	"Los motivos del lobo"
10.7.89	<i>Época</i>	"Una 'Cumbre' con reparos"
12.7.89	<i>Abc</i>	"Mediocre gestión" (Ed.)

2.13 Elecciones al Parlamento Europeo

7.2.89	<i>Abc</i>	"Equívocos europeístas"
17.3.89	<i>Le Figaro</i>	"Parlamento europeo. Un nuevo derecho de voto para los europeos"
22.3.89	<i>El País</i>	"Un derecho elemental" (Ed.)
27.3.89	<i>Ya</i>	"Primavera electoral"
5.4.89	<i>Abc</i>	"Los trabajadores y sus sindicatos no deben abstenerse"
5.4.89	<i>El País</i>	"Elecciones europeas"
5.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"La 'euroabstención'"
6.4.89	<i>El País</i>	"Votar con la mirada allende la frontera"
7.4.89	<i>Ya</i>	"...y las listas europeas"
10.4.89	<i>Diario 16</i>	"Un programa para el PSOE" (ED)
10.4.89	<i>Ya</i>	"La Europa verde"
11.4.89	<i>La Vanguardia</i>	"Ya huele a campaña electoral"

17.4.89	<i>Abc</i>	"Un nuevo estilo en Francia"
17.4.89	<i>Diario 16</i>	"En dos meses, elecciones"
17.4.89	<i>Diario 16</i>	"Un 15-J erizado de tensiones"
29.4.89	<i>Diario 16</i>	"Pacto de censura y Elecciones europeas"
10.5.89	<i>Diario 16</i>	"¿Elecciones europeas o para andar por casa?" (Ed.)
13.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Pequeño y grande"
14.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"La aportación de Convergència i Unió"
14.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"La apuesta europea"
14.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"La Europa que queremos"
14.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Un proyecto popular para Europa"
14.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Una ocasión para la clarificación"
16.5.89	<i>Diario 16</i>	"CE: La revolución tranquila"
16.5.89	<i>The Independent</i>	"Los manifiestos 'tories' para Europa"
17.5.89	<i>Abc</i>	"Morán"
17.5.89	<i>Diario 16</i>	"La CE y su "déficit democrático"
17.5.89	<i>Ya</i>	"Ilusos fuera"
18.5.89	<i>Abc</i>	"La abstención"
18.5.89	<i>Diario 16</i>	"La visita de Delors y el eurosocialismo" (Ed.)
18.5.89	<i>Financial Times</i>	"El Gobierno español espera agitación de la derecha y de la izquierda antes de las elecciones europeas"
19.5.89	<i>Abc</i>	"Medias de Hierro"
19.5.89	<i>El País</i>	"Otra izquierda, otra Europa"
22.5.89	<i>Ya</i>	"Pulso europeo entre derecha y socialismo"
24.5.89	<i>El País</i>	"Dos europeísmos"
26.5.89	<i>Diario 16</i>	"La campaña del terror" (Ed.)
26.5.89	<i>Diario 16</i>	"Una asamblea constituyente para Europa"
26.5.89	<i>El Independiente</i>	"Europeos, al fin"
26.5.89	<i>El País</i>	"Los interrogantes del CDs"
26.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"La Europa que hay que votar" (Ed.)
26.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Siglas intercaladas"
27.5.89	<i>La Vanguardia</i>	"Elecciones europeas y TV" (Ed.)
27.5.89	<i>The Independent</i>	"El PP abandona a los Tory"
27.5.89	<i>Ya</i>	"Europa, al fondo" (Ed.)
28.5.89	<i>Diario 16</i>	"El último, que apague la luz"
29.5.89	<i>Diario 16</i>	"La Moncloa"
29.5.89	<i>La Economía</i>	"Primera perspectiva ante las elecciones en España al Parlamento Europeo"
29.5.89	<i>Ya</i>	"Un ensayo para las generales"
30.5.89	<i>Abc</i>	"ante el 15 de junio" (Ed.)
30.5.89	<i>Abc</i>	"Un pobre debate"
1.6.89	<i>La Economía</i>	"Los nacionalismos contra Europa"
1.6.89	<i>Ya</i>	"La importancia de un Parlamento"
2.6.89	<i>El País</i>	"Los españoles y las europeas"
2.6.89	<i>La Economía</i>	"Segunda perspectiva ante las elecciones en España al Parlamento Europeo"
2.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Segundo tercio de campaña"
3.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Cataluña y Europa"
3.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"La rivalidad de los partidos"
3.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Razones para votar"
4.6.89	<i>Abc</i>	"Europa"
4.6.89	<i>Abc</i>	"Lo más europeo de estas elecciones"
4.6.89	<i>El País</i>	"El espejo de la madrastra"
4.6.89	<i>La Vanguardia</i>	"Europeidad"

- | | | |
|---------|----------------------------------|---|
| 5.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "La semana decisiva" |
| 5.6.89 | <i>Ya</i> | "Una semana clave para evitar la abstención" |
| 6.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Felipe en el coso y en el mitin" |
| 6.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Gasolina, elecciones, finanzas públicas" (Ed.) |
| 6.6.89 | <i>El País</i> | "La europea Italia" |
| 6.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Patente de catalán" |
| 7.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Solana y sus debates improprios" (Ed.) |
| 7.6.89 | <i>El País</i> | "Europa" |
| 7.6.89 | <i>El Periódico</i> | "El catalán en Europa" |
| 7.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "El gran cierre de campaña" |
| 8.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "El debate que no fue" (Ed.) |
| 8.6.89 | <i>Ya</i> | "Una campaña aldeana" |
| 9.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Europa: Entre el Reino Unido y la 'perestroika'" |
| 9.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "El fin de un sueño" |
| 9.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "España y Europa" |
| 9.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "La hora de las cuentas" |
| 9.6.89 | <i>Ya</i> | "El mensaje de las encuestas" (Ed.) |
| 10.6.89 | <i>Le Monde</i> | "Ante las elecciones al Parlamento de Estrasburgo. Los socialistas españoles llaman a elegir entre la 'Europa de la Sra. Thatcher y la de Felipe González'" |
| 12.6.89 | <i>Abc</i> | "La Abstención, un peligro" (Ed.) |
| 12.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Tendencias electorales" (Ed.) |
| 12.6.89 | <i>The Independent</i> | "Los españoles sacan a relucir lo sucio y las bombas" |
| 12.6.89 | <i>Ya</i> | "El largo proceso europeo" |
| 12.6.89 | <i>Ya</i> | "La fundación de Europa" |
| 12.6.89 | <i>Ya</i> | "El desinterés por Europa" |
| 13.6.89 | <i>El País</i> | "¿Qué vamos a elegir el día 15'" |
| 14.6.89 | <i>Abc</i> | "Los socialistas, magistrales vendedores de palabras y humo" (Ed.) |
| 14.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Olvidar la campaña, pero no el voto" (Ed.) |
| 14.6.89 | <i>Diario 16</i> | "Carrillo y el PSOE" |
| 14.6.89 | <i>El País</i> | "España en Europa: esperanzas y problemas" |
| 14.6.89 | <i>El País</i> | "La alternativa de la izquierda" |
| 14.6.89 | <i>El País</i> | "La presidencia española no quiere la utopía" |
| 14.6.89 | <i>El País</i> | "Por una Europa popular" |
| 14.6.89 | <i>El País</i> | "Votar es libre" (Ed.) |
| 14.6.89 | <i>El País</i> | "Europa: el nuevo horizonte" |
| 14.6.89 | <i>La Gaceta de los Negocios</i> | "Euroconocimientos" (Ed.) |
| 15.6.89 | <i>Abc</i> | "Juventud española y Comunidad Europea" |
| 15.6.89 | <i>Abc</i> | "El deber de votar" (Ed.) |
| 15.6.89 | <i>Abc</i> | Una sola urna |
| 15.6.89 | <i>El País</i> | "Falta coraje" |
| 15.6.89 | <i>La Economía</i> | "Por Europa" |
| 15.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Las elecciones europeas en Italia" |
| 15.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "Forjadores de un espíritu" |
| 15.6.89 | <i>La Vanguardia</i> | "La regiones de Europea" |
| 15.6.89 | <i>Ya</i> | "Hay que votar .." |
| 16.6.89 | <i>El País</i> | "El veredicto" (Ed.) |

3. Bibliografía

- ALONSO OLEA, Manuel y otros: "España y la Unión Europea. Las consecuencias del Tratado de Maastricht". Ed. Plaza y Janés. Barcelona, 1992, p. 30-89.
- ANUARIO *El País* 1990. Ediciones El País, 1990.
- ARETIO, Javier: "Los avances en la integración europea durante los primeros meses de presidencia española". En *Política exterior* Vol. III, n. 10 (1989), p. 176.
- ASPLAZU MONTEYS, Antonio: "Cómo obtener ayudas de la Comunidad Económica Europea". Barcelona (1988).
- AZCONA OLIVERA, José Alberto: "El avance hacia el Mercado interior durante el primer semestre de 1989". En *Información comercial española. Boletín (BICE)* n. ° 2164 (31 jul.-6 ag. 1989).
- *BALANCE* de los principales consejos celebrados durante la Presidencia española. En *Información comercial española. Boletín (BICE)*. N. 2194 (31 jul. -6 ag. 1989).
- BALLESTERO DÍAZ, Fernando: "Presidencia española de la Comunidad: ideas y prioridades". En *Información comercial española. Boletín (BICE)*. N. 2167 (23/29 en. 1989).
- BAREA MATEO, M^a Teresa: "La Presidencia española de las CCEE: Consecuencias para España desde el punto de vista institucional; perspectivas en relación con la consecución del Mercado Interior". En *Noticias CEE*. N. 49 (feb. 1989), p. 41.
- BAREA, M^a Teresa: "La presidencia española de las Comunidades Europeas: un balance tentativo". En *Noticias CEE*. -N. 60 (1990), p. 11.
- BOIXAREU, Angel: "La evolución del derecho privado comunitario durante la Presidencia española". En *Gaceta jurídica de la CEE*. - Serie D, N. 77 (abr. 1990), p. 367.
- BUENO SIDRE, Luis: "La presidencia española de las Comunidades Europeas: consecuencias para España desde el punto de vista institucional. Perspectivas en relación con la consecución del Mercado Interior". En *Noticias CEE*.- N. 48 (en. 1989).
- BUENO SIDRE, Luis: "Balance de la primera presidencia de España en la CEE". En *Noticias CEE*.- N. 62 (marzo 1990).
- COMISIÓN de las Comunidades Europeas. En *Boletín de las Comunidades Europeas. Suplemento* 2/86.

- COMISIÓN: "Acta Única Europea". En *Boletín de las Comunidades Europeas*. Suplemento 2/86. Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 1986, 28 p.
- COMISIÓN. "Infoguide: Guide to sources of information on European Community research". Directorate General Telecommunications, Information Industries and Innovation. Luxemburgo, 1992.
- COMISIÓN de las Comunidades Europeas: "La realización del Mercado Interior". Serie *Documentación Europea*. Dirección General del Sector Audiovisual, Información, Comunicación y Cultura. Bruselas, 1991.
- COMUNIDADES EUROPEAS. Comisión: "L'opinion européenne et les questions énergétiques en 1987". Bruselas, 1988.
- COMUNIDADES EUROPEAS. Parlamento. Dirección general de Estudios: "Una Asamblea en pleno desarrollo: Parlamento Europeo, 1952-1988: 36 años. Luxemburgo, 1988.
- COMUNIDADES EUROPEAS: "La realización del Mercado Interior". Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo 1991.
- COMUNIDADES EUROPEAS: "Condiciones para facilitar la cooperación entre empresas: Situación a 1 de enero de 1992". Luxemburgo, 1992.
- 29 CONGRESO: "Una sola voz para Europa: Asociación de Periodistas Europeos. Madrid-Sevilla del 2 al 7 de noviembre de 1991. Ed. Acción Institucional' 93. Madrid 1993, 160 p.
- CONSEJO Europeo de Madrid y trabajos realizados durante la Presidencia Española. En *Boletín de derecho de las CCEE*. - N. 22 (jul. -ag. 1989), p. 88.
- DIEZ HUDER, Carlos: "Los progresos en las relaciones con los países del Este durante la Presidencia española de la CEE". En *Información comercial española. Boletín (BICE)*. N. 2194 (31 jul. -6 ag. 1989).
- DIEZ MIER, Miguel Ángel: "La Presidencia española en el GATT". En *Boletín ICE* (31 julio al 6 de agosto de 1989).
- ESPAÑA. Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Medio Ambiente. "*Medio ambiente en España*". Madrid, 1989. 591 págs.
- ESPAÑA. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. "Política Social de la Comunidad Europea". Madrid, 1989, 123 págs.

- ESPAÑA. Secretaría de Estado Para las Comunidades Europeas: "Un balance de la Presidencia española del Consejo de las CC.EE: Enero/Junio 1989". Ministerio de Asuntos Exteriores. Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Madrid, 1989.
- ESPAÑA. Ministerio de Asuntos Sociales: "Evaluación de la política comunitaria en materia de igualdad de oportunidades: perspectivas futuras en relación con 1992. Dossier. Seminario Presidencia española, Toledo, 1989.
- ESPAÑA. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: "Política Social Europea", 3 tomos en 4 v. Madrid, 1989.
- ESTEVAN BOLEA, M^a Teresa: "Implicaciones económicas de la Protección Ambiental de la CEE: Repercusiones en España". Informes del Instituto de Estudios de Prospectiva. Secretaría de Estado de Economía. Ministerio de Economía y Hacienda. Ed. Instituto de Estudios de Prospectiva. Madrid, 1991.
- EUROPEAN CONSORTIUM FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT: *Les Européens et l'aide au développement*. París, 1984. 134 págs.
- FERNANDEZ ORDÓÑEZ, Francisco: "Declaración del Consejo sobre el programa de actuación de la Presidencia española". En *Boletín de las Comunidades Europeas*. - N. 1 (1989).
- FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Francisco: "Presentación del programa español ante el Parlamento Europeo". En *Noticias CEE*. N. 50 (marzo 1989).
- FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Francisco: "El discurso de la Presidencia española". En *Política exterior*. -Vol. III, N. 9 (1989), p. 32-39.
- FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, Francisco: "The EC presidency experiences of Spain". En *European affairs*. - N. 3 (1989).
- FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, F. ... (et all): *El Mercado Único : La Europa sin fronteras interiores*. Ed. Acción Institucional' 93. Madrid, 1992.
- FLANAGAN, Robert J.: "Sindicalismo, estabilización económica y política de rentas: la experiencia europea". Ed. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Madrid, 1985.
- FONTAINE, Pascal: "Diez lecciones sobre Europa". *Serie Documentación Europea*. Luxemburgo, 1992.
- FORASTER SERRA, Miguel. "Análisis de la Presidencia Española del Consejo de las Comunidades Europeas". En *Noticias CEE*. N. 62 (marzo 1990), p. 29.
- FUNDESCO. Informes anuales: "Comunicación Social 1989/Tendencias". Madrid, 1989.

- FUNDESCO. Informes anuales: “Comunicación Social 1990/Tendencias”. Madrid, 1990.
- FUNDESCO. Informes anuales: “Los Medios en la Construcción de la Unidad Europea”. Asociación de Periodistas Europeos (Sección Española). Madrid, 1991.
- GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Enrique. “La Presidencia española de la Comunidad Europea”. En *Revista de instituciones europeas*. Vol. 16, N. 3 (sep. -dic. 1989), p. 691.
- GRUPO SANTANDER. “La presidencia española del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea”. En *Boletín de las Comunidades Europeas*. N. 6 (Nov. 1989).
- MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: “Medio Ambiente en España”. Dirección General de Medio Ambiente. Madrid, 1989.
- MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA: “Informe sobre la Industria de la CE”. Madrid, 1989.
- MONOGRÁFICO “Transportes”. En *Política Exterior*. Junio, 1992.
- NIETO SOLIS, José Antonio: “La presidencia española y el sistema de comercio preferencial de la Comunidad. En *Noticias CEE*, n. 54 (jul. 1989).
- PARLAMENTO: “Una Asamblea en Pleno desarrollo: Parlamento Europeo, 1952-1988”. 3ª Edición, Parlamento. Dirección General de Estudios. Luxemburgo, 1988.
- PÉREZ CAMPANERO, Juan: “España y la Unión Europea. Un examen del proceso de integración europea”. Plaza & Janés. Barcelona, 1992.
- La PRESIDENCIA española en la CE: primeros acuerdos. En *Información Comercial Española. Boletín (BICE)*. N. 2171 (20/26 feb. 1989), p. 773/774.
- La PRESIDENCIA española: un impulso hacia el 92. En *Movimiento europeo*, N. 16 (verano 1989).
- PRESIDENCIA española: un balance. En *Información comercial española. Boletín (BICE)*, N. 2194 (31 jul.-6 ag. 1989).
- POLÍTICA social europea. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.
- REFLEXIONES sobre el Medio Ambiente: Simposio celebrado en Madrid los días 27, 28 y 29 de septiembre de 1989 / Manuel Ruiz ... (et al) ; resumen de los debates María Sintés, Jerónimo López. Fundación Friedrich Ebert. Madrid, 1990, p. 243.

- REX GOMEZ DE ROJAS, Helio: "La presidencia española de las Comunidades Europeas: consecuencias para España desde el punto de vista institucional". En *Noticias CEE*, N. 53 (juni. 1989), p. 37.
- REX GÓMEZ DE ROJAS, Helio: "La Presidencia española de la Comunidad: balance y consecuencias". En *Noticias CEE*, n. 62 (marzo 1990), p.37
- RODRÍGUEZ MORENO, Rosa. "Situación de la armonización fiscal ante la Presidencia española del Consejo de las Comunidades Europeas". En *Noticias CEE*, N. 52 (mayo 1989).
- RUESGA, Santos M.: "España ante el mercado Único Europeo y reflexiones desde una perspectiva económica". En *Sistema 114-115/1993*.
- SEIS meses de presidencia española del Consejo . En *Boletín de las Comunidades Europeas*, N. 7/8 (1989), p. 141.
- SECRETARIA DE ESTADO DE COMERCIO (informe basado en los boletines semanales sobre la Presidencia española elaborados por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Economía y Hacienda). En *Información comercial española. Boletín (BICE)*, N. 2194 (31 jul. -6 ag. 1989).
- SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: "Implicaciones Económicas de la Protección Ambiental de la CEE: Repercusiones en España". Ed. Instituto de Estudios de Prospectiva. Madrid, 1991.
- SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS: "Los retos del 93". Ed. Acción Institucional'93. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1992.
- SECRETARIA DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS: "Tratado de la Unión Europea: Textos consolidados de los Tratados Comunitarios. Ed. Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. Madrid 1992. 341 págs.
- SECRETARÍA DE ESTADO PARA LAS COMUNIDADES EUROPEAS: *El Mercado Único*. Ed. Acción Institucional'93. Secretaría de Estado para las CCEE. Madrid, 1992. 338 págs.
- SOLBES MIRA, Pedro: "La Presidencia española del Consejo de la CE". En *Política Exterior*, Vol. III, n. 3 (otoño 1989).
- SOLBES MIRA, Pedro y otros: "La Presidencia española de las Comunidades Europeas". Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1988.
- TRES meses de Presidencia española en las Comunidades Europeas. En *Información Comercial Española. Boletín (BICE)*. N. 2178 (10/16 abr. 1989)

- UNION Europea. Ed. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Luxemburgo 1994.
- VEVER, Bruno: "Objetif 92: le guide pratique du Marché Unique". Paris, 1989.